

Este texto es el resultado del trabajo de tres años de una investigación colectiva, procesada en cuatro equipos de trabajo para analizar la situación del capitalismo contemporáneo entre los años 2001 y 2007, particularmente desde la experiencia argentina.

El objetivo de nuestra actividad es contribuir a la mejor comprensión de la realidad socio económica del capitalismo contemporáneo para su transformación, siendo una tarea que se desarrolla desde la investigación participativa, es decir, con el movimiento popular, no desde afuera.

Esta publicación tiene el objetivo de contribuir a la crítica del capitalismo de nuestra época y en definitiva, hacia la transformación revolucionaria de la sociedad capitalista.

ISBN 978-987-97515-5-8



9 789879 751558

rls

FISYP

Av. Corrientes 1515, 6° B, C.A. de Buenos Aires, Argentina
fisyp@fisyp.org.ar
www.fisyp.org.ar

rls
FISYP

Hegemonía y proceso de acumulación capitalista en Latinoamérica (2001-2007) - Gambina, Rajland, Campione

Hegemonía y proceso de acumulación capitalista en Latinoamérica hoy (2001-2007)

El caso argentino

Compiladores:

Julio C. Gambina
Beatriz Rajland
Daniel Campione

rls
rosa luxemburg stiftung

FISYP
Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas

Hegemonía y proceso de acumulación capitalista en Latinoamérica hoy

(2001-2007)

El caso argentino

Título: Hegemonía y proceso de acumulación capitalista en Latinoamérica hoy (2001-2007)

Subtítulo: El caso argentino

Compiladores: Julio C. Gambina, Beatriz Rajland y Daniel Campione

©FISyP, Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas

Av. Corrientes 1515, 6to "B"

(CP1042AAB) Buenos Aires - Argentina

Tel Fax: 4371-0538

mail: fisyp@fisyp.org.ar

web: www.fisyp.org.ar

Diseño y producción editorial:

José Luis Bournasell

La Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas es una entidad sin fines de lucro, dedicada a la actividad de investigación, docencia y difusión en diversas áreas de Ciencias Sociales.

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, mecánico, óptico, químico, de grabación o de fotocopia, sin el permiso del editor.

Gambina, Julio Cesar

Hegemonía y proceso de acumulación capitalista en Latinoamérica hoy 2001-2011 : el caso argentino . - 1a ed. - Buenos Aires : Fund. Investigaciones Sociales y Políticas - FISyP, 2011.

90 p. ; 21x15 cm.

ISBN 978-987-97515-5-8

1. Teorías Políticas. 2. Capitalismo. I. Título

CDD 320.1

Fecha de catalogación: 29/11/2011

Hegemonía y proceso de acumulación capitalista en Latinoamérica hoy

(2001-2007)

El caso argentino

Compiladores:

Julio C. Gambina

Beatriz Rajland

Daniel Campione





Índice

PRÓLOGO

Julio C. Gambina, Beatriz Rajland y Daniel Campione 9

ESTRUCTURA DE CLASES, MODELO DE ACUMULACIÓN Y POLÍTICAS ECONÓMICAS 17

APUNTES PARA UNA CARACTERIZACIÓN DEL ACTUAL SISTEMA-MUNDO CAPITALISTA EN EL NUEVO MILENIO

Carlos Wladimir Gómez Cárdenas y José Francisco Puello-Socarrás 19

ACUMULACIÓN, POLÍTICAS Y CLASES SOCIALES EN LA ARGENTINA POST-CONVERTIBILIDAD

Gastón Ángel Varesi y Germán Pinazo 35

EL ESTADO COMO RELACIÓN SOCIAL. LA BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS: ARTICULACIÓN DE LO SOCIAL Y LO POLÍTICO 77

CRISIS Y RECOMPOSICIÓN DE LA HEGEMONÍA CAPITALISTA: CONTINUIDADES Y RUPTURAS (AÑOS 2001-2007)

Beatriz Rajland, Daniel Campione, Julio C. Gambina, Marcelo Barrera y Martín Cortés 79

CONCEPCIONES DEL MUNDO, IDENTIDADES Y LÓGICAS COMUNICACIONALES. LA BATALLA DE IDEAS EN LA PERIFERIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE SUBJETIVIDAD 127

LA RECONFIGURACIÓN DE LA HEGEMONÍA CULTURAL: SIGNIFICACIONES EN DISPUTA EN LA ESFERA PÚBLICA, LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN Y EL CAMPO INTELECTUAL (2001-2007)

Adrián Pulleiro, Alejandro Gambina, Carolina Allievi, Micaela Ronconi y Rodolfo Gómez 129

ECONOMÍA POPULAR Y AUTOGESTIÓN (INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA) 211

CAMINOS DE CONSTRUCCIÓN CONTRAHEGEMÓNICA EN EL SIGLO XXI: EXPERIENCIAS DE AUTOGESTIÓN EN ORGANIZACIONES SOCIALES

Gabriela Roffinelli, Santiago Lizuaín y Vanesa Ciolli 213

AUTORES 273



Prólogo

Julio C. Gambina

Beatriz Rajland

Daniel Campione

Presentamos en este texto el resultado del trabajo de tres años de una investigación colectiva, procesada en cuatro equipos de trabajo para analizar la situación del capitalismo contemporáneo entre los años 2001 y 2007, particularmente desde la experiencia argentina.

La tarea ha sido compleja, ya que no es muy común el trabajo realmente colectivo, por la predominancia de las tendencias a la producción intelectual individual.

De ahí, que en nuestro texto también se expresan –anticipamos– tensiones entre la producción individual y el trabajo conjunto. En la edición final de esta presentación privilegiamos una tendencia a eliminar visiones personales –aunque respetando autorías– para concentrar reflexiones que atraviesan las preocupaciones del colectivo de investigadores que trabajó alternadamente en procesos de individuación del conocimiento y en otros de talleres de lectura conjunta, debate, reflexión y producción colectiva.

En estos tres años, hubo bajas e incorporaciones en el equipo, motivadas a veces por las dinámicas propias de la vida de quienes protagonizaron esta experiencia, incluyendo opciones laborales más beneficiosas que absorbían los tiempos disponibles, y en algunas otras oca-

siones por opción política, ya que nuestros proyectos de investigación en la FISyP, así como en el conjunto de las actividades que encaramos, suponen una articulación orgánica y política de compromisos, definida hacia una parte del movimiento popular de la Argentina, que consideramos contribuye a acumular fuerzas hacia una real alternativa de cambios profundos, anti-capitalistas. Y es conocido el debate al respecto, a que está sometido el movimiento en el ciclo político que aspiramos a estudiar, luego de la rebelión popular del 2001.

Insistimos que nuestra investigación está asociada a una concepción institucional que define a la FISyP como una iniciativa intelectual que pretende ser orgánica del movimiento popular, al que se vincula. En ese sentido, el producto del trabajo intelectual interactúa con la difusión y con la realización de los cursos de formación desarrollados por la FISyP en y con el movimiento de trabajadores; de campesinos y agricultores familiares; de estudiantes y de género; ámbitos de defensa de los derechos humanos y las minorías; movimientos sociales y políticos.

El objetivo de nuestra actividad es contribuir a la mejor comprensión de la realidad socio económica del capitalismo contemporáneo para su transformación, siendo una tarea que se desarrolla desde la investigación participativa, es decir, con el movimiento popular, no desde afuera.

La investigación puede adolecer, en todo caso, de los propios límites de nuestra capacidad intelectual, pero también de los límites del propio movimiento popular para constituir alternativa política en la etapa, siendo ello uno de los mayores limitantes para la elaboración de conceptualizaciones útiles, aptas para avanzar en la constitución y conformación de una subjetividad transformadora en la sociedad.

La reflexión antes expresada, se dirige a señalar nuestra convicción sobre lo que ha resultado ser la principal consecuencia de la cultura de la dominación neoliberal: la destrucción, la fragmentación de sujetos concientes hacia la transformación revolucionaria contra el capitalismo. Es una cuestión que en la Argentina se procesó desde el terrorismo de Estado, en la encrucijada de 1975 y 1976, entre el final del gobierno constitucional de cuño peronista y la dictadura cívico-militar genocida.

En rigor, la hipótesis que atraviesa el texto es, que el capitalismo en la Argentina, como parte del capitalismo mundial, expresa modifi-

caciones en el orden socioeconómico, en las relaciones sociales de producción, a partir de mediados de los 70, proceso que se consolida en la década del 90 bajo el signo de una aguda liberalización de la economía –denominada neo-liberalismo– en tanto programa de máxima del gran capital trasnacional concentrado.

La crisis capitalista de los 70 mutará sustancialmente el orden mundial, y se realizará con las especificidades propias de la lucha de clases en cada región y país, por eso nuestro texto se concentra en la reflexión desde la Argentina.

Nuestros grupos de investigación asumieron el desafío de estudiar y reflexionar sobre esos cambios estructurales y de cómo se manifestaron en el período 2001-2007, período que en definitiva define los aspectos esenciales del capitalismo en la Argentina de la primera década del Siglo XXI. La importancia de este punto de partida, la herencia estructural del capitalismo construido bajo la hegemonía neoliberal, se agiganta a partir de la crisis capitalista mundial acaecida desde el 2007 y que a fines del 2011 no tiene visos de culminación.

Es cierto que esta última crisis mundial se presenta por fuera del período de estudio, pero es insoslayable su mención, puesto que son los fenómenos previos los que explican la eclosión de la economía mundial con sus efectos devastadores en las condiciones de vida de los trabajadores y sectores empobrecidos de todo el mundo.

Son los cambios en las relaciones sociales, especialmente en la economía, en el estado y en la sociedad, ocurridos desde 1975/6 y con mayor audacia en los 90 bajo gobiernos constitucionales liderados por los dos partidos más importantes del régimen político argentino, el peronismo (1989/99) y el radicalismo (1999/01), los que adecúan a la Argentina a la división internacional del trabajo, monitoreada por el bloque de poder dominante en los países centrales, las instituciones financieras internacionales y los gobiernos de los países periféricos, que expresan las relaciones de dominación y son a ellas genuflexos. Es el fenómeno que explica el lugar de Argentina y de Sudamérica, como proveedora de materias primas, al sistema mundial.

Desde la aprobación de la producción transgénica en 1996, tiempos de Felipe Solá (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca), Domingo Cavallo (Ministerio de Economía) y Carlos Menem (Presidencia de la Nación), irrumpió la “revolución sojera” (expansión de la frontera

productiva, de 6 millones a 20 millones de hectáreas) que afecta la diversidad productiva y especialmente a la agricultura familiar.

No solo es cuestión de soja, porque también en aquellos tiempos se aprobó el tratado minero entre nuestro país y Chile para explotar la cordillera. El país se está transformando en un gran receptor de inversión externa en alimentación y minería, afectando la tierra y el medio ambiente, contribuyendo a depredar recursos naturales.

El privilegio a la producción agraria transgénica, especialmente de soja, viene acompañado de la mega minería a cielo abierto. Tanto el agro como la minería necesitan del paquete tecnológico en manos del capital externo, surgiendo así una alianza estratégica para la dominación. El modelo productivo vigente ampara estas continuidades en la Argentina y encuentra asociado en la cúpula del poder al capital más concentrado de origen local y externo.

Argentina revolucionó su actividad productiva y junto a otros países de la región se han transformado en los principales productores y exportadores de soja del mundo, con cambios importantes al interior de la estructura económico social del país y de los vecinos. Ese carácter de la producción primaria exportadora permite saldos comerciales fabulosos que sirven para la producción y acumulación de cuantiosas ganancias que en tiempos de crisis alimentan la valorización dificultada en el capitalismo mundial. La región sudamericana es proveedora de fondos, vía remesas de utilidades al exterior, o por pago de intereses y capitales de la deuda. Son fondos provenientes del comercio exterior favorable que limitan en el centro del capitalismo mundial los efectos de la profunda crisis en curso.

Insistimos en que, si bien, la crisis mundial no entra en el periodo de análisis investigativo, no es posible pensar en la “bonanza económica” de Argentina y otros países de la región sin la tendencia de evolución de los precios internacionales de los productos de exportación, sea el cobre en Chile, el petróleo o los hidrocarburos en Venezuela, Ecuador o Bolivia, o la soja como dijimos para los países del MERCOSUR. Y con la soja, la salida de nutrientes de la tierra, el agua, y en definitiva, para todos, la exportación de bienes comunes y recursos naturales.

Pretendemos desde los textos que presentamos dar cuenta de fenómenos complejos, tales como los cambios en la economía, que incluye el análisis de la política económica en el periodo, una cuestión

en debate en el mundo, especialmente con la crisis mundial, que dio por tierra con los devaneos neoliberales de exclusión del Estado en la formulación y orientación de la política.

Pero también nos concentramos en los cambios en el Estado, sobre todo cuando el capitalismo en crisis reclama mayor intervención del Estado para alimentar con fortísimas inyecciones de dinero el salvataje de las empresas en crisis.

Un lugar destacado lo constituye el análisis de los medios de comunicación que con la revolución tecnológica mediática, tanta importancia asumen en la construcción y disputa de los consensos públicos y sociales, como en la manipulación de la conciencia, al tiempo que se transforman en grandes empresas económicas que disputan la valorización del capital.

Las transformaciones estructurales han generado un fuerte impacto entre los trabajadores, generando fenómenos de desempleo y precariedad. Es una situación que renovó el interés de los más empobrecidos por formas de organización económico social para la reproducción de la vida cotidiana, algo que está afuera del interés del capitalismo hegemónico. En razón de ello es que nos abocamos para mejor comprender la realidad a indagar sobre nuevas formas de agrupación del movimiento popular en la vida económica y social, una de las opciones liberadoras que asumen los explotados en el mundo, lo que supone resignificar formas cooperativas de extenso desarrollo en la historia argentina.

Las producciones que incluimos en esta presentación son autónomas unas de otras, –corresponden a los cuatro grupos de investigación a los que hicieramos referencia y están señalizados por el título de los capítulos en el índice–, pero, sin embargo, son parte de una sola temática bajo el nombre común de que da cuenta el título del libro: *Hegemonía y proceso de acumulación capitalista en Latinoamérica hoy (2001-2007). El caso argentino* y mantienen la coherencia de un plan discutido colectivamente, con el que intentamos recorrer un camino compartido de aprendizaje y asimilación de categorías unificadoras del discurso y el análisis, especialmente sobre la “hegemonía”, que atraviesa el razonamiento de cada una de las aportaciones.

Es que además, en el periodo estudiado, si algo aconteció fue el despliegue de una iniciativa política gubernamental para consolidar la hegemonía sobre el régimen político y el sistema capitalista. Los im-

portantes excedentes comerciales y fiscales favorecidos por la coyuntura mundial de precios de exportación en alza y la política económica asentada en el default (2001) y en la devaluación cambiaria (2002) favorecieron un crecimiento económico que lubricó consensos sociales y políticos. El orden económico fortaleció el sesgo primario exportador, con la posibilidad de instalar una política social compensadora, vía transferencia de rentas que actuó en la disputa del consenso electoral, que en definitiva explica la sucesión de tres gobiernos afines en la sintonía continua de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2011 y 2011-2015). Esa hegemonía gubernamental consolida cambios estructurales en la función que cumple el Estado capitalista y otorga continuidad a los cambios institucionales operados en la década del 90, sean las privatizaciones de empresas públicas, las desregulaciones, la apertura de la economía, la liberalización manifestada en el sostenimiento de una institucionalidad subordinada a múltiples tratados bilaterales de inversión y/o de libre comercio, todos confirmados y habilitados con la reforma constitucional de 1994.

Un aspecto a destacar, en un estudio atravesado por la “hegemonía”, es que esta actúa sobre el conjunto de la sociedad. En razón de ello, en la investigación que desarrollamos, se presentan algunas contradicciones en el bloque de clases dominantes y las dificultades en el bloque de clases subalternas para constituirse en sujetos de una alternativa política.

Esa es una preocupación permanente de la FISYP y del espacio socio político en que articula su papel intelectual. Es que el capitalismo es una relación social, que funciona sobre la base de la relación entre clases dominantes y dominadas. Un tema de crucial importancia en tiempos de crisis sistémica del capitalismo mundial, que anima a pensar en perspectivas alternativas, anticapitalistas, incluso socialistas.

La cuestión del sujeto de los cambios nos preocupa y ocupa, desde el conocimiento, desde el saber popular y el propio específico de nuestra función social, como intelectuales involucrados en el proceso emancipador.

Con esta publicación cerramos una primera etapa, que fue posible gracias al apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania que sostuvo el financiamiento del equipo con fondos de la cooperación internacional.

Al mismo tiempo queremos destacar y reconocer el esfuerzo del equipo de investigación, militantes de la FISyP, que aportaron su estudio y conocimiento en un proceso de investigación participativa, interactuando con decenas y cientos de partícipes del movimiento popular a nosotros vinculados.

Finalmente resta señalar el compromiso del activo de la FISyP que contribuyó desde múltiples facetas a la materialización de este objetivo, de investigación para contribuir a la crítica del capitalismo de nuestra época y en definitiva, hacia la transformación revolucionaria de la sociedad capitalista.



***Estructura de clases,
modelo de acumulación
y políticas económicas***



Apuntes para una caracterización del actual sistema-mundo capitalista en el nuevo milenio

*Carlos Wladimir Gómez Cárdenas
José Francisco Puello-Socarrás*

1. ¿En qué hemos cambiado? Caracterización de las condiciones generales y situaciones específicas de la contemporaneidad capitalista

Una caracterización actualizada del sistema-mundo capitalista obliga a tomar en consideración por lo menos dos cuestiones simultáneamente:

Por un lado, identificar las tendencias globales, de carácter general, de mediano y largo plazo que forman parte de la fase de acumulación hoy vigente; por otro lado, los impactos territorialmente diferenciales y específicos de corto plazo que se suceden en el marco de la economía política regional, en este caso, las situaciones periféricas del desarrollo capitalista referidas al contexto de América Latina y el Caribe durante el nuevo milenio.

Esta perspectiva implica la observación del capitalismo contemporáneo como un sistema social-histórico constitutivo de diferentes facetas y dimensiones.

Se trata entonces de una aproximación al fenómeno en tanto realidad *compleja* y *contradictoria* la cual:

a) no puede ser reducida unívoca o mecánicamente a una sola lógica (aunque esto no implica necesariamente que ciertos ejes o elementos que constituyen el sistema capitalista puedan ser en ciertos momentos factores relativamente determinantes, como por ejemplo sucede hoy con la importancia que deriva de las lógicas financiarizadas);

b) tampoco sin contar con la progresiva articulación de distintas realidades y niveles (económicos, políticos, sociales, culturales etc.) en tanto son expresivos de las particularidades capitalistas en la actual fase.

1.1. Tendencias y principales 'novedades' en el capitalismo de época

El capitalismo en general puede ser definido como un sistema histórico de producción y reproducción social que tiene como característica básica la *acumulación incesante de capital*. Sin embargo, a lo largo de su propia evolución es posible identificar diferentes fases de su desarrollo y capturar las condiciones cambiantes que exhiben sus rasgos básicos.

Desde mediados de la década del 60 y hasta el presente, el capitalismo contemporáneo a nivel global ha transitado hacia una 'fase distinta' basada en una nueva economía política caracterizada por:

a. La Crisis Contemporánea del Capitalismo y la respuesta neoliberal

Hay que empezar por subrayar que la tendencia *estructural y de largo plazo* del capitalismo contemporáneo, desde el último cuarto del siglo XX, se desarrolla bajo el cuestionamiento progresivo e integral –aunque no definitivo– del sistema como un todo. Esta situación ha llevado a caracterizar la fase actual capitalista dentro del escenario de *crisis*, la cual estaría hoy por hoy vigente.

Las causas y consecuencias de la actual crisis –retrospectiva y prospectivamente hablando– mantienen un carácter general y de *largo plazo* y se encuentran también constituidas de una multiplicidad interdependiente de factores que, en su conjunto, modelan los ritmos del proceso de acumulación capitalista en distintas escalas globales y locales¹.

¹ Para un análisis de la crisis a nivel global desde una perspectiva compleja y multidimensional desde diversas aproximaciones y enfoques en ciencias sociales, en relación con sus aspectos y problemáticas en América Latina y el Caribe, cfr. Estrada Álvarez (2009).

La crisis *en general* del capitalismo contemporáneo permite identificar así, no sólo la naturaleza multidimensional de la misma sino también la presencia de diferentes tipos de crisis –que convergen simultáneamente desde el período 1973-1975 y hasta el presente–:

- Económica,
- Ecológica y ambiental,
- Biológica,
- Energética,
- Alimentaria,
- Política e ideológica,
- Social.

Desde mediados de la década del setenta y en adelante, la respuesta global del sistema ante los desequilibrios (insistimos, múltiples e interdependientes) ha representado el despliegue renovado de:

- un nuevo proyecto sociopolítico en general,
- un paradigma emergente de
- desarrollo socioeconómico en particular y
- un programa de políticas públicas (económicas y sociales) específico, como estrategia del capitalismo para enfrentar la crisis.

Esta situación –teniendo en cuenta la temporalidad de largo plazo de *esta* crisis– recorre por lo menos las tres últimas décadas y es conocida como la *era neoliberal*.

El neoliberalismo ha implicado la adaptación a un nuevo régimen de acumulación (post-fordista) concebido con base en la reestructuración de las dinámicas de los países centrales del capitalismo que, desde luego, afectan las relaciones con la semi-periferia y periferia capitalistas y, por lo tanto, en líneas generales, conducido hacia la reconfiguración del panorama económico y de las geografías sociales y políticas a nivel local y global. En términos de América Latina y el Caribe supuso el cambio desde el anterior *industrialismo orientado al Estado* (también conocido como Industrialización por Sustitución de Importaciones o ISI) hacia un modelo sustentado en el mercado (Birdsall *et al.* 2010: 6).

En primer lugar, el neoliberalismo ha desplegado una estrategia de acumulación que se eleva como *la* fórmula económico-política en general y, en un segundo momento y complementariamente, un programa de políticas económicas y un plan de políticas públicas que ha sido identificado

comúnmente con la agenda (amplia) de orientaciones fruto del Consenso de Washington, en sus diferentes versiones (Puello-Socarrás 2008).

En ese sentido, *la estabilización económica, la flexibilización, desregulación, liberalización y privatización* de los factores de producción (capital y trabajo) bajo la conducción y sujeción al poder del mercado (en principio con la irrelevancia del Estado) y basado en su “empreendedorismo/empresarialismo (creativo)” son parte de los elementos transversales al neoliberalismo (Puello-Socarrás 2010).²

No obstante y más allá de los elementos que característicamente describen al neoliberalismo, no hay que dejar de lado que fruto de este proceso y de las reestructuraciones hacia “economías competitivas de mercado”, se ha auspiciado la consolidación de las posiciones de los capitales monopólicos a nivel global y local, sólo señalando este caso.³

En América Latina y el Caribe, la época de la hegemonía neoliberal aunque suele coincidir con las décadas de los 80 y 90, su debut en la región tiene varios antecedentes.

En principio y como lo demuestran la mayoría de los casos, la inauguración del neoliberalismo se encuentra fuertemente asociado con las dictaduras militares instaladas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay durante los años 70, tal y como ha sido confirmado recientemente con base en documentos desclasificados de la CIA que datan de esa época a propósito del *Plan Cóndor* —a la postre, uno de los casos más paradigmáticos— y que aplicaría ampliamente para los países latinoamericanos.⁴

En este contexto, sería fundamental remarcar el hecho que:

Con el Terrorismo de Estado se dispone deliberada y sistemáticamente el pasaje del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) al nuevo modelo neoliberal (...) los principales métodos mediante los que se

2 Existe una reciente interpretación *in extenso* del Consenso de Washington, por sus mismos auspiciadores, convocando *retrospectivamente* el neoliberalismo y la crisis capitalista (Birdsall *et al.* 2010).

3 En términos de la *liberalización* animada por la “globalización” (neoliberal), por ejemplo, se evidencia —mejor— una suerte de “liberalismo sin reciprocidad” (Vera Lucía Vieira) —o unilateral— desde los países centrales hacia los periféricos.

4 “Documentos de la CIA fechan inicio de Operación Cóndor dos años antes de su creación oficial”. Disponible en: <www.telesurtv.net>, visita del 12 de junio de 2010.

construyeron las bases del neoliberalismo en nuestro país [Nota: se refiere a la Argentina, un caso paradigmático que se verifica para otros países de la región] fueron tanto la impunidad como el terror sistemáticamente organizado por el Estado (Bayer *et al.* 2010: 114).

Desde este punto de vista, y como proponen incluso analistas defensores del modelo neoliberal, éste tuvo como presupuesto político un arco autoritario, en el cual cabría incluir también las llamadas democracias restringidas (Williamson 2006).

Posteriormente, y a partir de la década del 80 hasta finales del siglo XX, América Latina y el Caribe es escenario del tránsito hacia las economías de 'libre mercado' y, al mismo tiempo, desde los regímenes autoritarios y las dictaduras cívico-militares con la institucionalización de la democracia liberal y el avance de los llamados procesos de "democratización" en diferentes países de la región.

El resultado de ambas transiciones parece mostrar que la institucionalidad emergente basada en el mantenimiento del orden político y en la defensa *in limine* de la estabilidad macroeconómica condujo a que la democracia liberal terminara legitimando, por un lado, la economía de libre-mercado por medio del proceso electoral y, por otro lado, gravosas situaciones de exclusión económica e injusticia social que han motivado últimamente diferentes expresiones '*contra el neoliberalismo*'. Esta cuestión se evidenció con la profundización y generalización de una nueva crisis social y crecientes protestas civiles y populares en este sentido (Silva 2009).

b. Cambios en las estructuras tecnológicas y científicas, y en las modalidades de producción socioeconómica

Los avances en el terreno científico y tecnológico en lo que hoy se denomina la *tercera revolución industrial* (entre los más destacados: la informática, la microelectrónica, la biotecnología, las nanotecnologías y la aeronáutica) han estimulado la reformulación de los paradigmas de producción técnico-económica anteriormente vigentes, las modalidades de revalorización del capital y las configuraciones productivas del pasado.

El *nuevo diagrama* involucra la renovación de las viejas coordenadas capitalistas materializadas en un giro desde la *producción en masa rígidamente estructurada*, característica del sistema fordista desplegado a lo largo del siglo XX, hacia un régimen basado en la *especialización*

flexible como novedad estructural y estratégica dentro del proceso de acumulación dominante que en los inicios del nuevo milenio se encuentra consolidada.

A diferencia de la etapa histórica anterior, comúnmente denominada “capitalismo taylorista-fordista”, asociada con la centralización de las etapas del proceso productivo –temporal y espacialmente– y con normas de consumo masivo, la instalación y predominio del actual régimen de acumulación *post-fordista* privilegia, entre otras cosas: la flexibilidad, la desconcentración y la automatización de los montajes productivos.

El reciente aumento de las demandas globales por nuevos insumos y materias primas ha ocasionado que diferentes espacios donde se sitúan geográficamente estos nuevos recursos estratégicos para el modo de producción capitalista adquieran una nueva significación geoeconómica (Ceceña 1998: 30-31). Estos lugares claves vienen siendo progresivamente sometidos a grandes presiones para insertarlos como territorios (territorialidades y espacialidades sociales) a los cuales el sistema les reserva un rol dentro de la reestructuración de la división internacional del trabajo material e inmaterial (intelectual), con base en las nuevas necesidades de acumulación.⁵

Específicamente, la evolución del sistema sigue incorporando aquellas espacialidades que hasta el momento habían sido débil o marginalmente articuladas dentro del proceso global y, simultáneamente, sustituyendo o profundizando las lógicas de acumulación en aquellos que ya habían sido debidamente incorporados.

Por ello, las novedades registradas en el modelo de producción y reproducción socioeconómico vigente suponen efectos para las relaciones de Trabajo y, puntualmente, en el vector de la *explotación* de la fuerza laboral (Jessop 1999: 14).

5 Los recursos *naturales* (como la biodiversidad, los hídricos, etc.) y *energéticos* (además del petróleo y el carbón, la progresiva importancia que vienen adquiriendo minerales como coltán, cromo, níquel, cobalto, manganeso, titanio, platino, tierras raras, entre muchos otros). En América Latina y el Caribe los megaproyectos regionales como la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Suramericana (IIRSA), el Plan Puebla-Panamá-Putumayo (articulado al *Plan Colombia*), posteriormente denominada Iniciativa Mesoamericana (articulada igualmente al *Plan México*) son ilustrativos de ello (Vega Cantor 1999:200; Jiménez 2010).

Situaciones como las antes descritas inducen al ajuste de los regímenes laborales y salariales contemporáneos en igual (quizás, mayor) magnitud como respuesta a las necesidades emergentes.

Una forma sencilla de ilustrar este tipo de modalidades es la creciente *maquilización* de los procesos productivos centrales que ahora tienen lugar en las áreas periféricas, especialmente.

La producción en maquilas permite asegurar un dispositivo para la segmentación y descentración de las cadenas productivas y, principalmente, facilitar los desplazamientos de ciertos encadenamientos productivos hacia zonas económicas que permitan flexibilizar y abaratar costos de diferentes tipos: tributarios, salariales, laborales, etc., y acrecentar así la “competitividad” de sus productos y fundamentalmente, la extracción de plusvalor y las tasas de ganancia.

Las consecuencias más visibles de lo anterior suelen sintetizarse alrededor de la disminución generalizada de los costos laborales vía flexibilización en la contratación, disminución de costos al despido, mayor flexibilidad en horas de laborales, entre otras tendencias reconocidas a nivel global. Bajo este panorama se han experimentado simultáneamente dos procesos que afectan la nueva composición de la fuerza laboral: la *desproletarización* y la *subproletarización*. Ambos se encuentran fuertemente asociados con las formas de “trabajo precario, tercerizado, subcontratado e informal” y, especialmente en las zonas periféricas, con la pauperización de los trabajadores como regla de normalización en las relaciones Capital-Trabajo (Antunes 1999: 43, 2000: 86-93).

Otra de las particularidades –seguramente la más llamativa– en el tránsito mencionado y que se consolida conforme avanza la evolución del régimen post-fordista es la espectacular centralidad que adquiere el capital financiero en detrimento del capital productivo dentro de la lógica capitalista. En razón a ello, definir el régimen de acumulación como *financiarizado* (Chesnais 2001: 2).

Siguiendo esta observación, los ritmos y las formas de acumulación, las configuraciones productivas y la misma revalorización del capital en la fase actual –y sus respectivas contradicciones– encontrarían su máxima expresión en el dominio financiero y sus mercados.

Esta singularidad contemporánea traería entonces consecuencias inéditas para el marco histórico del capitalismo. No sólo por sus

efectos en términos macroeconómicos sino también macrosociales, en tanto esta fracción –ahora dominante, globalmente hablando– estaría en posición de “comandar las formas y el ritmo de la acumulación” y subsidiariamente afectar los demás campos subordinados o subsumidos a esta lógica, es decir, *financiarizados* (Chenais 2001: 3).⁶

Dentro de esta lógica, América Latina y el Caribe se mantiene como una región destinada –casi exclusivamente– a proveer materias primas y recursos naturales hacia los centros productivos y mano de obra no calificada.

c. Algunas ‘innovaciones’ en la forma-Estado y nuevas lógicas de funcionamiento de sus aparatos.

Las transformaciones contemporáneas en el sistema capitalista que hemos comentado anteriormente implican igualmente innovaciones en la dimensión sociopolítica.

Estos cambios resultan estar directamente relacionados con la manera bajo la cual el Estado existe como garante de los procesos de acumulación y las modalidades por las cuales los cambios tecno-económicos vienen siendo incorporados y, sobre todo, regulados socialmente.

El proceso de la constitución del capital como sistema planetario, definido desde diferentes ópticas: “globalización”, “mundialización”, “internacionalización”, etc. y que en últimas representa el largo y continuado proceso de expansión capitalista, registra por lo menos tres tipos de tendencias.

En primer lugar, la reconfiguración estatal en el post-fordismo supone el tránsito en general desde el *Estado de Bienestar* hacia el *Estado neoliberal* como uno de los signos más distintivos de la llamada por Peemans, “neo-modernización global” (Peemans 1996: 24).

El itinerario hacia esta nueva configuración estatal se distingue no sólo por el abandono dentro del discurso hegemónico de las antiguas preocupaciones por la productividad y la planeación típicas del anterior Estado de Bienestar.

⁶ Ilustremos este asunto tomando el caso de los Estados Unidos. En el país usamericano, el sector financiero durante la primera década del milenio “captó el 41% de todas las ganancias del sector privado estadounidense”. Mientras que en la década de los 90s, seis conglomerados controlaban activos equivalentes al 20% del Producto Nacional Bruto (PNB), esta proporción hoy representa alrededor del 60% del PNB de ese país (Naim 2011).

El Estado neoliberal se destaca ante todo por enfatizar discursivamente y materializar institucionalmente nuevas necesidades de *flexibilidad* y *empresarialidad* como dos rasgos centrales en las nuevas estrategias de acumulación que “ayudan a modelar la reestructuración y reorientación de los estados contemporáneos y producir diferentes regímenes de regulación” (Jessop 1999: 19).

En este contexto –en segundo lugar– se ha propiciado una *nueva alianza* entre el Estado y la empresa.

La empresa entra a *regir* en el “gobierno” de la economía mundial. Desde luego con el apoyo de los Estados locales, un actor que en la especificidad histórica del momento tendría como función “asegurar que ‘sus’ actores claves estratégicos, o sea las empresas ‘locales’ multinacionales, consigan operar la mundialización de la economía nacional”. En esta forma: “el éxito de ‘nuestras’ empresas en el escenario mundial es una condición de éxito y de salvaguardia de la autonomía tecnológica y económica del ‘país’. En síntesis: el Estado actuaría *como* una empresa, defendiendo las ‘partes nacionales’ del capital de ‘sus’ empresas frente a los demás Estados” (Debuyst 1996: 118).

La lógica implícita que orienta la actuación empresarial del Estado se contrapone, desde luego, a los objetivos de ‘bienestar’ de la fase anterior, los subsume y –según se evidencia– los destituye en una nueva relación.

Por último y en tercer término, se registra otra tendencia a recabar la capacidad de determinación de las políticas nacionales de los Estados (Cerny 1995).

La imposibilidad de las estructuras estatales (gubernamentales y civiles, por igual) para sobreponerse ante las exigencias del capitalismo global y la consolidación del orden mundial ha problematizado varios aspectos respecto de las soberanías nacionales en los momentos actuales:

(...) bajo la globalización todos los Estados-nacionales se vuelven periféricos con respecto al poder central –es decir hegemónico– de las corporaciones privadas se requiere precisar el lugar dónde reside su poder mundial y cómo actúan éstas para asegurar una dinámica favorable a la realización de sus intereses. La respuesta está en los sistemas reguladores del comercio mundial de orden supranacional,

que forman una burocracia internacional compuesta por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, las Naciones Unidas y las organizaciones y tratados como el Tratado de Libre Comercio (TLC), la Organización Mundial de Comercio (OMC), la Unión Europea, el Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC), etc. (De Venanzi 2002: 40)

1.2. Neoliberalismo(s) y Crisis capitalista

Teniendo en cuenta las tendencias generales del capitalismo contemporáneo, nos disponemos a sintetizar los términos concretos en que se materializa la acumulación capitalista en lo específico de la época.

Desde luego, esta observación resume los itinerarios que se han materializado en el terreno de la economía política global y regional alrededor de los procesos de *neoliberalización* aunque necesariamente habría que enmarcarlos en los sucesos que se derivan de la crisis capitalista y sus rasgos más característicos.

1.2.1. El neoliberalismo en América Latina en la crisis del nuevo milenio (2001-2007)

Durante la primera década del siglo XXI, nuevos liderazgos sociales y políticos han venido instalando la idea de una “tercera transición” –más allá de la liberalización y la democratización– que enfatizaría los aspectos propios de la democracia social y económica, especialmente, las cuestiones redistributivas pero, sobre todo, un cuestionamiento a los compromisos pactados en el pasado con el neoliberalismo y especialmente frente al *Consenso de Washington*.

Uno de los hechos más significativos en el panorama político reciente lo constituyen las conquistas electorales alcanzadas por parte de diferentes liderazgos, partidos y movimientos políticos y sociales en varios gobiernos latinoamericanos durante la primera década del nuevo milenio.

A pesar de la heterogeneidad (en particular, ideológica) que han exhibido estos ‘nuevos gobiernos’ en su conjunto, todos ellos se caracterizaron por la contestación y el rechazo al paradigma de desarrollo económico prevaleciente y en sintonía con las crecientes demandas

populares y el ciclo de protestas de amplios sectores de la población iniciada en América Latina y el Caribe que se manifestó activamente en contra del neoliberalismo. En términos electorales, esta circunstancia fue considerada un elemento crucial que explicaría no sólo el cambio en las preferencias electorales y el posterior relevo de los Gobiernos sino igualmente la deslegitimación de muchos regímenes, en términos políticos y sobre todo, económicos (Moreira *et alt.* 2008).

La mayoría de los nuevos gobiernos propusieron, por un lado, la reversión del *statu quo* heredado de las reformas pro-mercado de las tres últimas décadas y, por otro lado –y, simultáneamente–, la necesidad de reemplazar el paradigma vigente por alternativas de desarrollo distintas. Estos sucesos fueron interpretados como un claro signo de que la región transitaría hacia una época post-neoliberal.

De hecho, mientras que entre 1980 y el año 2000, al menos 10 gobiernos de la región fueron identificados con el paradigma neoliberal y sus políticas –Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Venezuela–, la primera década del siglo XXI registraba, por el contrario, un giro (por lo menos, retórico) en las orientaciones económicas para el mismo número de gobiernos, los cuales fueron identificados preliminarmente como anti-neoliberales.

En este ambiente ‘en contra’ del neoliberalismo se registran en todo caso varias disyuntivas e interrogantes.

Las ideas neoliberales que habían disfrutado durante las décadas una influencia relativamente incontestable como los referentes en la orientación ideológica de las principales definiciones en el manejo económico latinoamericano, hasta el punto que en los años 90 sus defensores proclamaron la sociedad de mercado y del capitalismo neoliberal como “el fin de la historia” y una fatalidad para la región (Fukuyama 2003, 2008), iniciaron el nuevo siglo bajo el desprestigio.

Discusiones que se creían archivadas en torno a otras alternativas de desarrollo como el ‘Neo-desarrollismo’ (Bresser-Pereira 2007a, 2007b; Leiva 2008) e, incluso, el Socialismo (Borón 2009), han venido resurgiendo en el contexto local, con lo cual los acontecimientos regionales han sido una matriz de sucesos de gran valor para reconstruir detalles cruciales acerca del capitalismo de época.

2. Síntesis de las tendencias generales y específicas. Conclusión preliminar

<p style="text-align: center;">TABLA 1 Diagrama sobre las nuevas formas de acumulación capitalista en el nuevo milenio</p>		
Economías Post-Fordistas Estado Neoliberal Régimen financiarizado.	Tendencias de acumulación y procesos de financiarización.	Acumulación por expropiación y redistribución regresiva del ingreso
Expropiación del ingreso de los trabajadores en detrimento de la capacidad de consumo de la sociedad y a favor de los fondos de acumulación, mediante la flexibilización laboral y la precarización del trabajo.	Flexibilización laboral y de precarización generalizada del trabajo correlato de la actualización tecnológica del modo de producción y la imposición de un régimen de producción flexible.	Articulación creciente del conjunto de la economía y sociedad y el Estado a la lógicas del capital financiero.
Sometimiento de las relaciones sociales y el Estado al proceso de financiarización y la lógicas especulativas.	Deterioro de las condiciones generales de financiación de la reproducción de la fuerza de trabajo: Debilitamiento de los sindicatos, el aumento del riesgo y la incertidumbre en el mercado de trabajo, la presión hacia la informalización y la falacia del autoempleo, el creciente desempleo y el subempleo; crecientes impuestos indirectos	Bancarización del conjunto de la población, en la imposición de una "especie de ciudadanía financiera". "El sistema funciona mientras la población tenga posibilidad de pago; en muchas ocasiones, las condiciones de endeudamiento se reproducen en forma piramidal para sostener las dinámicas desatadas; los fondos de cesantías y los fondos privados de pensiones. A través de ellos se logró convertir el salario (ahorro histórico) de los trabajadores en fuente fundamental de la acumulación capitalista".

Surgimiento y desarrollo de formas ilegales de la acumulación, y un nuevo tipo de excedentes incorporados en los circuitos legales de la acumulación y generación de zonas grises de la acumulación.	Expropiación del ingreso de los trabajadores en detrimento de la capacidad de consumo de la sociedad y a favor de los fondos de acumulación, mediante la flexibilización laboral y la precarización del trabajo.	Expropiación bienes y servicios provistos por el Estado: Organización de la educación, de la salud, de las pensiones, de la provisión de vivienda, del acceso a la cultura y al deporte de acuerdo con lógicas de mercado y progresivamente financierizadas
Despliegue de una nueva geografía regional de la acumulación (explotación de recursos naturales y energéticos, plataformas para la exportación, basada principalmente en el ejercicio de la violencia y el exterminio) a escala transnacional.	La movilización política del capital transnacional y de sus instituciones, con miras a la consolidación de un proyecto político económico neoliberal que debe erigirse en referente a seguir por los países de la región, a través de crecientes flujos de capital, en la forma de inversión extranjera, de recursos de crédito y de ayuda militar.	Sometimiento de las finanzas del Estado (ingresos y gasto público). La deuda pública y gasto público futuro.
Fuente: Con base en Estrada (2010: 15-44).		

Bibliografía

Antunes, Ricardo (2000), “La centralidad del trabajo hoy”, *Papeles de Población*, No. 25 (Toluca: UNAM), Julio-Septiembre 2000.

Antunes, Ricardo (1999), “Las metamorfosis y la centralidad del trabajo, hoy”, en: Castillo, Juan José, *El trabajo del futuro*, Madrid, Editorial Complutense.

Bayer, O., Borón, A., Gambina, J. (2010), *El terrorismo de Estado en Argentina. Apuntes sobre su historia y consecuencias*, Buenos Aires, Instituto Espacio para la Memoria.

Birdsall, N., de la Torre, A. y Valencia, F. (2010), “The Washington Consensus. Assessing damage Brand”, *Policy Research Working Paper* (WPS5316), Washington, World Bank.

Boron, A. (2009), *Socialismo siglo XXI. ¿Hay vida después del neoliberalismo?* Buenos Aires, Luxemburg.

Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2007a), “Estado y mercado en el nuevo desarrollismo, Nueva Sociedad, N° 210, julio-agosto 2007.

Bresser-Pereira, Luiz Carlos (2007b), *Macroeconomia da estagnação*. São Paulo, Editora 34.

Ceceña, Ana Esther (1998), “Proceso de Automatización y creación de los Equivalentes Generales Tecnológicos”, en Ceceña, Ana Esther (coord.), *La tecnología como instrumento de poder*, México, IIEC, Gapa.

Cerny, P. (1995), “La irregular arquitectura de la política”, *Revista Nueva Doctrina*, Buenos Aires, Del Puerto, Tomo 1995/A, traducción de Daniel R. Pastor.

Chenais, Francois (2001), *La théorie du régime d'accumulation financiarisé : contenu, portée et interrogations*. *Forum de la Régulation*, Paris, 11-12 Octubre 2001.

De Venanzi, Augusto (2002), “La teoría corporativa del sistema-mundo” en: *Globalización y corporación: el orden social en el siglo XXI*. Caracas, Anthropos.

Debuyst, Frédéric (1996), “Globalización y política”, en AA.VV., *El nuevo orden global: Dimensiones y perspectivas*, Bogotá, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia.

Estrada Álvarez, Jairo (comp.) (2009), *Crisis capitalista. Economía, política y movimiento*, Bogotá, Espacio Crítico - Centro de Estudios.

Estrada Álvarez, Jairo (2010), “Dinámicas de acumulación y nueva espacialidad capitalista. Ensayo preliminar” en *Derechos del Capital. Dispositivos de protección e incentivos a la acumulación en Colombia*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.

Fukuyama, Francis (ed.) (2008), *Falling behind. Explaining the development gap between Latin America and the United States*, Oxford, Oxford University Press.

Fukuyama, Francis (2003), *El Estado en el Siglo XXI*, Barcelona, Paidós.

Jessop, Bob (1999), *Crisis del Estado de Bienestar. Hacia una nueva teoría del Estado*, Bogotá, Siglo XXI.

Jiménez Martín, Carolina (2010), “La producción del espacio. El espacio de la producción. Una aproximación crítica a la definición de una nueva geografía productiva en la Orinoquía colombiana”. Tesis de doctorado en Estudios Latinoamericanos. México D.F., UNAM.

Leiva, Fernando Ignacio (2008), *Latin American Neostructuralism. The Contradictions of Post-Neoliberal Development*, Minneapolis, University of Minnesota Press.

Moreira, Carlos, Raus, Diego y Gómez Leyton, Juan Carlos (coords.) (2008), *La nueva política en América Latina. Rupturas y continuidades*, Montevideo, Ediciones Trilce.

Naím, Moisés (2011), “EE.UU.: tres puntos ciegos”, en *El Tiempo* del 4 de junio de 2011.

Peemans, Jean Phillipe (1996), “Globalización y desarrollo: algunas perspectivas, reflexiones y preguntas” en: AA.VV., *El nuevo orden global: Dimensiones y perspectivas*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.

Puello-Socarrás, José Francisco (2010), “Del *Homo Œconomicus* al *Homo Redemptoris*. Emprendimiento y Nuevo Neo-liberalismo”, *Otra Economía. Revista Latinoamericana de Economía Social y Solidaria*, Polvorines: RILESS, Vol. 4, No. 6.

Puello-Socarrás, José Francisco (2008), *Nueva Gramática del Neo-liberalismo. Itinerarios teóricos, trayectorias intelectuales, claves ideológicas*. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.

Vega Cantor, Renán (1999), *Neoliberalismo: mito y realidad*. Santa Fé de Bogotá, Colombia.

Williamson, John (2006), “Visiones opuestas acerca de los resultados y las perspectivas económicas de Latinoamérica”, *El Tiempo*, Lecturas Dominicales, 1 de Junio de 2006.



Acumulación, políticas y clases sociales en la Argentina post-convertibilidad

*Gastón Ángel Varesi
Germán Pinazo**

1. Introducción

Entre los años 2002 y 2007 la Argentina ha transitado un período que se ha caracterizado por una serie de novedosas e inéditas dinámicas en lo que refiere a sus principales indicadores económicos. No sólo se han alcanzado records en materia de tasa de empleo, producto bruto interno, producto bruto industrial, exportaciones industriales, peso de las exportaciones en el producto industrial, sino que, lo más llamativo de todo, esto se ha producido de manera casi inmediata tras la peor de las recesiones que recuerde su historia.

Realizar una caracterización político-económica del actual período histórico implica entre otras cosas comprender la naturaleza de estas dinámicas, intentando complejizar el análisis más allá del rotundo “quiebre” que estos indicadores macroeconómicos parecen sugerir. Lo que intentaremos mostrar a lo largo de estas páginas es que, si bien el período en cuestión se caracteriza por una serie de políticas económicas (que han impactado fundamentalmente sobre el universo asalaria-

* Han colaborado durante el transcurso del proceso de investigación: Juan Manuel Zanabria, Juan Fal y Juan Lizuaín.

do, tanto en lo que tiene que ver con la generación de empleo, como con los pisos históricos en materia de poder adquisitivo del salario), éstas no han generado cambios estructurales sobre la matriz productiva (tanto en lo que refiere al perfil de especialización productiva, como al *lugar* de la cúpula empresaria) que se ha venido consolidando durante las últimas tres décadas de neoliberalismo en la Argentina.

La clave entonces será intentar explicar esta aparente contradicción de una matriz productiva que profundiza un perfil exportador ordenado en torno a un reducido número de empresas dedicadas a un también reducido número de actividades altamente productivas, en un contexto de novedosas políticas y desempeños macroeconómicos. Brevemente podemos adelantar que es en la política cambiaria donde debemos ubicar un factor importante de nuestro análisis. Esta fue, en el período que estamos analizando, la contracara de aquella adoptada desde principios de los años 90 al 2001. Si en aquel entonces la sobrevaluación cambiaria fue el instrumento elegido tanto para “controlar” los precios internos como para articular un conjunto diverso de intereses de distintas fracciones del capital (principalmente del capital transnacional, tenedor de títulos públicos, que pudo acceder junto al capital concentrado local a una particular rentabilidad en dólares a partir del control de las empresas públicas privatizadas), en la actualidad, el tipo de cambio “competitivo” (es decir, el mantenimiento deliberado de un peso barato en relación básicamente al dólar) ha servido para estimular ciertos sectores del aparato productivo que son centrales en materia de empleo asalariado, a la vez que para beneficiar a un reducido número de empresarios exportadores. No casualmente el período que estamos analizando es denominado por algunos especialistas como “post-convertibilidad” en clara referencia al quiebre que supuso el actual período en términos de régimen cambiario en relación a la década anterior.

2. Las políticas fundacionales de la post-convertibilidad

El denominado *modelo de acumulación*¹ post-convertibilidad comienza a configurarse a partir de *seis políticas fundacionales*: 1) la deva-

¹ Hablamos de un *modelo de acumulación* para referirnos a un conjunto de regularidades y mutuas implicancias entre las variables económicas, las políticas económicas y un determinado estado de relaciones de fuerza entre las fracciones de clase en un período y espacio

luación; 2) la implementación de retenciones a las exportaciones; 3) la pesificación asimétrica de deudas y depósitos; 4) el “salvataje” al capital financiero; 5) el *default*; 6) el congelamiento y renegociación de tarifas.

La devaluación generó un tipo de cambio internacionalmente competitivo que dio lugar a la dinamización de las exportaciones y, a través de su gravamen mediante retenciones y el aumento de la recaudación tributaria, permitió la recomposición de las cuentas públicas. La recuperación económica trajo aparejado un aumento de la producción manufacturera, impulsada por la dinámica exportadora, y un fenómeno incipiente de sustitución de importaciones producto de la protección que generó la modificación del tipo de cambio al aumentar el costo de las importaciones. Por otra parte, el efecto inflacionario ligado a la devaluación redujo sustancialmente el salario real, y junto al congelamiento relativo de las tarifas de servicios, los elevados precios de los *commodities* y el nuevo tipo de cambio, permitieron a los agentes productivo-exportadores generar elevados márgenes de ganancia y recuperar niveles de actividad económica. Los gobiernos han desarrollado una política activa para mantener el tipo de cambio competitivo y alentar esta vía de expansión económica a partir del crecimiento de las exportaciones.

La política cambiaria tuvo al menos dos impactos fundamentales. Por un lado, mejoró las condiciones de comercio exterior y comenzó una era superavitaria de la balanza comercial. Por otro, dio origen a un proceso inflacionario que generó una fuerte caída del salario real y el costo laboral.

Con respecto al impacto de la política cambiaria sobre el comercio exterior, los gobiernos desde la post-convertibilidad han desarrollado una política activa para mantener el tipo de cambio competitivo y alentar esta vía de recuperación económica a partir del crecimiento de las exportaciones, favoreciendo como estrategia de acumulación la inserción exportadora en el mercado mundial. El crecimiento de las

determinado, en nuestro caso: Argentina 2002-2007. Asimismo, se establecen determinadas relaciones de prelación, es decir, de jerarquía explicativa de determinadas variables y características para comprender las dinámicas propias de un modelo particular: por ejemplo, el destacado papel de la política cambiaria, el proceso inflacionario y el nuevo esquema de precios relativos, la centralidad del capital productivo-exportador, el mantenimiento del doble superávit (comercial y fiscal) y las transferencias de recursos para construir hegemonía como algunas de las claves centrales para desentrañar el problema de estudio planteado.

exportaciones ha alcanzado un 121% durante el período 2002-2007, participando de un fenómeno de carácter regional.

Como señala un informe de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, la importancia que posee la evolución de las exportaciones queda evidenciada en que, desde 2002 a 2007, “su participación en el PBI aumentó un 37.6%, mientras que la participación del consumo privado y público cayó alrededor de un 7%” (FISyP, 2009:4), y por otro lado, por la función que cumple en la configuración del modelo post-convertibilidad, ya que el impulso que ha cobrado esta orientación exportadora ha permitido alcanzar un considerable superávit comercial que junto al superávit fiscal, favorecido vía retenciones a las exportaciones, constituyen los *dos pilares de estabilidad* del modelo.²

Si bien la inflación expresa un aumento generalizado de precios, este incremento se da de forma dispar, expresando cambios en la correlación de fuerzas. El fuerte incremento de los índices de precios se dio en un contexto de alta desocupación y congelamiento relativo de los salarios. De este modo, como señalan Costa, Kicillof y Nahón, “la inflación registrada (del 45%) bastó para reducir los ingresos reales de los trabajadores en un tercio en el período 2001-2003” (2004:83). Este brote inflacionario licuó el salario real con claros impactos sobre el costo laboral real en la industria manufacturera que, según el Ministerio de Trabajo, fue en el primer trimestre de 2003 un 61,7% inferior al de 1993.³ Si bien debemos tener en cuenta que los salarios reales se han ido recuperando a partir de 2003 (principalmente los privados registrados en los sectores más dinámicos de la industria), estos aumentos lejos están de generar un estrangulamiento de la ganancia empresaria, en contextos de incremento de la productividad.

En este contexto, las retenciones se orientaron a limitar el proceso inflacionario procurando desdoblar los precios internos de los externos, constituyendo al mismo tiempo una herramienta de recaudación que permitiera al Estado participar de las rentas y ganancias extraordinarias

2 Estos dos pilares se vinculan tanto a la entrada de divisas e incremento de las Reservas Internacionales que permitieron al Banco Central desarrollar la política de tipo de cambio competitivo, como a que la reinstauración de las retenciones permitieron fortalecer la recaudación de fondos públicos a partir de los cuales el Estado ha venido desplegando diversos mecanismos de transferencia de recursos con el fin de organizar y compensar los distintos intereses en pugna entre las fracciones de clase bajo el marco del nuevo modelo de acumulación.

3 Datos tomados de Ministerio de Trabajo, empleo y seguridad social 2004.

que estaban percibiendo los agentes productivo-exportadores debido a los altos valores internacionales de los *commodities*.

A su vez, la pesificación asimétrica de deudas y depósitos,⁴ una vez eliminado el techo inicial de US\$100.000, fue el mecanismo implementado durante el gobierno de Duhalde para “socializar” y licuar las deudas del gran capital, que luego serían estatizadas a través del plan de “salvataje” al capital financiero, orientado a compensarlo de los perjuicios producidos por la salida devaluacionista y la pesificación asimétrica con la emisión de deuda pública por US\$20 mil millones. EL capital financiero se encontraba afectado también por el *default*. La salida del *default* concretada con el canje de 2005 presentó una importante quita (43.4%) y mejoró sustancialmente los indicadores de deuda/PBI y deuda/exportaciones, aunque dejó un pesado calendario de pagos por delante. Aparecieron en el canje componentes “compensatorios” novedosos como las Unidades Ligadas al PIB, y la indexación de la deuda en pesos a la inflación que puede ser entendida como una medida que garantiza al capital financiero no perder más posiciones respecto del capital productivo-exportador, principal beneficiario del ciclo inflacionario. En este camino también se realizó el cancelamiento del tratado vigente con el FMI y el pago por adelantado de las obligaciones con dicho organismo, con el fin de ganar márgenes de libertad en materia de acción estatal, pero también coherente con la necesidad del Fondo de disminuir sus riesgos financieros.

Asimismo, observamos cambios en algunas de las dinámicas que hacen al *lugar* de la fracción financiera del capital. El descenso de la tasa de interés real y el hecho de que la rentabilidad bancaria no esté dada por los resultados de las tasas de interés sino por la simple tenencia de bonos y los servicios, implica (más aún con la caída de la convertibilidad de la moneda que operaba como seguro de cambio gratuito) un corte en el proceso de “valorización financiera” del capital y su circuito ligado al endeudamiento externo, derivación improductiva de recursos de grandes empresas al sistema financiero procurando aprovechar el diferencial positivo entre las tasas de interés internas y externas, posterior fuga de capitales y quiebra de las cuentas del Estado. De este modo, el capital financiero dejó de constituir un eje articulador a nivel del mode-

⁴ Esta política implicó que los bancos debieron devolver los depósitos en dólares a \$1.40 por cada US \$1, mientras que los deudores con la banca local vieron pesificadas sus deudas en dólares a \$1 por US \$1.

lo de acumulación, si bien desde 2005 sus rentabilidades se recuperan y logran un importante incremento.

El fin de la convertibilidad perjudicó también las posiciones relativas de las empresas de servicios públicos privatizadas. En 2002 se establecieron las herramientas legales iniciando el congelamiento y renegociación de tarifas, y el gobierno de Duhalde desplegó una estrategia dual, por un lado, beneficiando a las empresas ubicadas en áreas no sensibles al consumo popular y, por otro, dilatando las negociaciones en todas las áreas sensibles para dejarlas al gobierno siguiente (Azpiazu y Schorr, 2003). Durante el gobierno de Kirchner se desplegó una estrategia heterogénea consistente en tres acciones estatales diferenciadas: renegociación, reestatización y creación empresarial. Como veremos luego, esta estrategia persiguió distintos objetivos, orientándose fundamentalmente a establecer un nuevo esquema de precios relativos favorable a la producción de bienes transables. En este sentido, aparecieron acciones estatales que se diferencian de las netamente privatizadoras de los años 90 pero sin generar un plan de recuperación de los recursos y servicios estratégicos.

3. Cuestiones estructurales y de fracciones.

La llegada de la dictadura militar en 1976 en la Argentina, entre otras cosas, desarticuló las bases de una etapa muy particular del capitalismo argentino, donde, no sin inconvenientes, se había logrado desarrollar en el país un aparato industrial relativamente integrado, que fue la base estructural de una clase trabajadora organizada.⁵ La apertura asimétrica del mercado de bienes, junto a la reforma financiera de 1977, abrieron un período histórico donde la matriz productiva se reordenó en torno a un reducido grupo de actividades ligadas tanto al aprovechamiento de las ventajas comparativas naturales de nuestro país, como al aprovechamiento de los bajos costos locales de la mano de obra.

La dinámica es compleja, y básicamente se explica por la convergencia de distintos procesos que han redefinido la estructura económica local y sus fracciones de clase. Por un lado, y como consecuencia de la

⁵ Sobre el desarrollo industrial argentino de aquellos años y su relación con la organización del movimiento obrero se puede consultar, por ejemplo, a Basualdo (2006). Sobre los quiebres que supuso la dictadura se puede consultar al mismo autor, y a Azpiazu y Schorr (2010), Santarcángelo y Pinazo (2008), entre muchos otros.

política interna, la desarticulación de las herramientas de estímulo que se habían desarrollado durante la segunda mitad del siglo XX, junto a la eliminación de los distintos mecanismos arancelarios de protección, redundaron en la contracción de casi todas aquellas actividades que no estuviesen vinculadas al aprovechamiento de recursos naturales. Por el otro, y como consecuencia de un proceso que tiene sus raíces en transformaciones que exceden lo que sucede en la Argentina, las industrias no dedicadas al aprovechamiento de recursos naturales que se habían desarrollado al calor de los anteriores mecanismos de estímulo (la automotriz básicamente, y luego la industria química), comenzaron un proceso de reconversión profunda. Muy esquemáticamente, gracias al desarrollo de la tecnología de las comunicaciones, la informática, y la baja en los costos de transporte a nivel internacional, un reducido número de capitales transnacionales comenzaron a incorporar tecnología de punta, en una dinámica que lejos de redundar en el desarrollo del aparato productivo doméstico, tendió a generar actividades de ensamble y exportación, aprovechando los bajos costos de la mano de obra local. Dicho proceso tendió a consolidarse en la década del '90, con la fuerte apreciación cambiaria que supuso el Plan de Convertibilidad y la eliminación casi total de aranceles.⁶

Así las cosas, la estructura industrial argentina llegó a finales del siglo XX en una situación de profunda heterogeneidad. Por un lado, presenta un reducido número de empresas que, dedicadas a un reducido número de actividades, exhiben altos parámetros de productividad laboral⁷ en términos internacionales, y por lo tanto tienen una gran capacidad exportadora y una gran capacidad de absorber aumentos sa-

6 Para un análisis detallado de las transformaciones producidas en la Argentina de los años 90 ver: Gambina y Campione, 2003.

7 Si bien su análisis detallado no constituye claramente los fines de este trabajo, debemos decir que la productividad laboral es una variable central de cualquier análisis económico. Su evolución expresa básicamente el desarrollo de la fuerza productiva del trabajo, en términos de su capacidad generadora de bienes y servicios. En términos formales resulta del cociente entre la evolución del producto físico que genera año a año una economía, y la cantidad de trabajadores de la misma. En palabras de Celso Furtado (1967, p. 94): "La expansión del flujo de ingreso, medida con respecto a la fuerza de trabajo que se utiliza, ha venido siendo aceptada desde los clásicos como el mejor índice del proceso de desarrollo de una economía". Particularmente, hablando de una economía periférica como la argentina, que compite y se articula de diversos modos con otro conjunto de países, conocer las particularidades de sus sectores en términos de productividad laboral es fundamental para analizar distintos aspectos de los ciclos económicos y los problemas distributivos.

lariales. En las antípodas, encontramos un enorme grupo de pequeños y medianos empresarios que exhiben una profunda dificultad para competir en ese ámbito, los cuales, en un contexto de fuerte desprotección arancelaria, se encuentran en una situación de alta fragilidad frente a la competencia importada (Fal, Pinazo y Lizuain, 2009).

Intentando completar el panorama sobre la estructura económica argentina, podemos decir que su universo de grandes empresas incluye además un reducido número de capitales dedicados a actividades extractivas (minería o petróleo), empresas dedicadas a los servicios comunicacionales, los servicios públicos privatizados (electricidad, gas y agua), y aquellas ubicadas en el sector financiero.

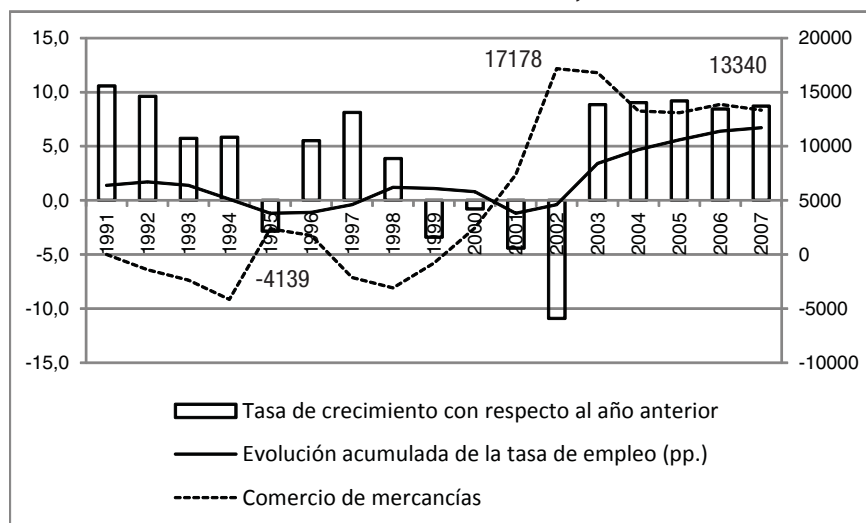
La idea ahora es profundizar en los modos en que la modificación cambiaría impactó sobre esta estructura económica, intentando explicar aquellos rasgos que hacen distintivo al período de la post-convertibilidad. La primera cuestión sobre la que deberíamos hacer alguna mención es el tipo de cambio. Según Rolando Astarita (2007: 18, énfasis original), “En la teoría de Marx, por el contrario, el equivalente, esto es el dinero, es encarnación del valor, o sea, de tiempo de trabajo social. El tipo de cambio por lo tanto vincula dos equivalentes de tiempos de trabajos sociales, nacionalmente determinados. Estos tiempos sociales de trabajo nacionalmente determinados se asientan en diferentes niveles de productividad, según los países. En otras palabras, existen espacios nacionales de valor sustentados en desarrollos desiguales de las fuerzas productivas (...) Los espacios nacionales de valor diferenciados se combinan, además, con un mercado mundial en el cual se hacen sociales múltiples trabajos nacionales y privados. Todo plantea la existencia de una relación compleja y articulada entre espacios nacionales de distintas productividades, y el mercado mundial.”

En muy pocas palabras, podemos pensar que, en tanto relación entre distintas monedas, el tipo de cambio relaciona distintos espacios nacionales de valor, o espacios desiguales de desarrollo de la fuerza productiva del trabajo. Siendo esto así, *se entiende aquí que la política económica central que caracteriza al período que estamos analizando pasa por el intento deliberado de sostener un tipo de cambio que, más allá del nivel en el que podría encontrarse como consecuencia de los resultados del comercio exterior, “potencie” la competitividad internacional de los sectores industriales.* Este “potenciamiento” proviene simplemente del

abaratamiento en dólares del precio del salario, lo que modifica la relación entre los costos en dólares de dichas industrias y su productividad; el problema es que esta estrategia cambiaria incide sobre el conjunto de precios relativos de la economía argentina, y tiene significativas consecuencias en materia distributiva.⁸

Pero retomemos entonces algunos datos del período en cuestión. A primera vista, llama muchísimo la atención cómo la devaluación de la moneda de 2002 pareció, como por arte de magia, revertir las características macroeconómicas centrales de la década de los '90. De pronto, no sólo la industria comenzó a exhibir un comportamiento que no había mostrado en décadas, sino que su crecimiento motorizó además una dinámica agregada que no se registraba desde hace casi un siglo, acompañada de techos históricos en materia de empleo y superávits en términos comerciales.

**GRÁFICO Nº 1: PRODUCTO BRUTO INTERNO,
COMERCIO DE MERCANCÍAS Y VARIACIÓN DEL EMPLEO, ENTRE 1991 Y 2007**



Fuente: Elaboración propia sobre la base de la DNCN, la EPH (INDEC) y la Secretaría de Política Económica.

Ahora bien, si en base a la discusión precedente agrupamos a los sectores en los que puede dividirse la actividad económica interna se-

⁸ En el apartado que sigue, específicamente en los gráficos 6 y 7, intentaremos profundizar en las consecuencias distributivas de estas políticas.

gún sus parámetros de productividad (como una forma de aproximarnos a la competitividad heterogénea del aparato productivo argentino),⁹ encontraremos varias cuestiones interesantes. En primer lugar, podremos ver que el dato novedoso en el período actual pasa, casi de manera excluyente en materia de crecimiento y empleo, por el comportamiento de las industrias de baja productividad; y que esto, en realidad, poco tiene de sorprendente. En segundo, y más importante aún, *que parece haber una identidad muy fuerte entre las actividades más competitivas que desarrollan el país y un reducido número de grandes empresas*. En efecto, si bien la comparación entre lo que hemos denominado como actividades de alta productividad (ver anexo) y las actividades que figuran en el informe que produce el INDEC sobre grandes empresas,¹⁰ es dificultosa (básicamente por el nivel de agregación de este último), es interesante señalar que la casi totalidad de grandes empresas está (y estuvo) dedicada a este tipo de actividades. Por otro lado, cuando comparamos los datos sobre valor agregado, vemos que lo producido por las casi 180 empresas dedicadas a la producción de alimentos, bebidas y tabaco, y químicos, combustibles y plásticos, es el equivalente a entre el 50 y 60% de todo lo producido por los estratos de alta productividad de 2002 a 2007. Es decir que, agregando las 8 empresas terminales automotrices y quitando las empresas dedicadas a la producción de plástico, estamos hablando de un conjunto de actividades de alta productividad que *es explicado casi de manera excluyente por menos de 200 empresas*

9 Siguiendo el texto y la metodología de Lavopa (2007), en lo que sigue analizaremos el desempeño reciente de la economía argentina desagregando por tipo de actividad económica (industria manufacturera, producción primaria, construcción y servicios) y estrato de productividad (alta o baja productividad). La idea es que la desagregación por estrato de productividad nos permita aproximarnos al carácter heterogéneo de la estructura productiva de nuestro país, y que esto nos permita contribuir a clarificar aquello que nos habíamos propuesto en la introducción, es decir, qué tipo de transformaciones se encuentran detrás del actual desempeño agregado de la economía argentina. Debemos decir por último que hemos denominado como estratos de alta productividad a aquellas ramas que, según la clasificación del CIU rev. 3 a dos dígitos del Censo Económico de 1994, presentan parámetros de productividad por obrero ocupado iguales o superiores al doble de la media, y que al resto de los sectores los llamaremos estratos de baja productividad. Las diferencias con la metodología utilizada por Lavopa es que hemos distinguido a la construcción de los servicios de baja productividad, y que consideramos a la industria alimenticia como estrato de alta productividad, en función de su vinculación con recursos naturales de alta productividad en términos internacionales.

10 Para las comparaciones mencionadas se puede consultar el Anexo de este trabajo y los distintos informes públicos que figuran en la página oficial del INDEC: <http://www.indec.gov.ar/>.

en el país. Esto es fundamentalmente lo que permite comprender el desempeño de dichos sectores incluso durante años macroeconómicamente adversos para la industria como fueron los '90, y la gran similitud en términos de productividad entre ambos tipos de recorte.

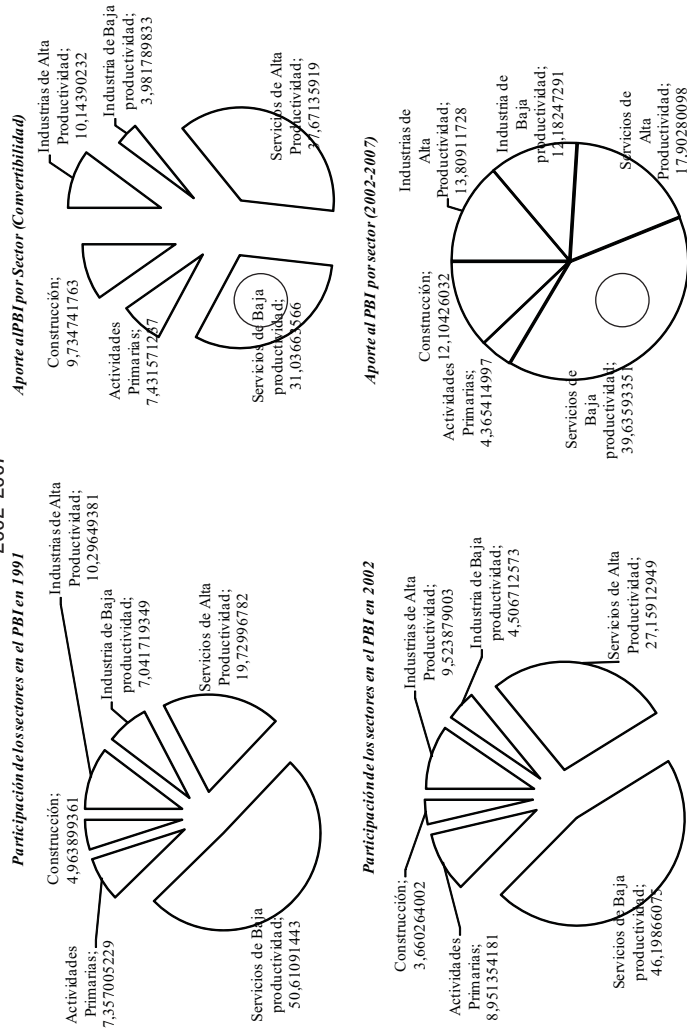
Hablando ahora de la post-convertibilidad, específicamente del período 2002-2007, lo que vemos en el gráfico 2 es que éste no sólo se caracteriza por sus altas tasas de crecimiento económico agregado, sino por el particular dinamismo de la industria en general, y de las industrias de baja productividad en particular. En efecto, este es el hecho fundamental que distingue al período que estamos analizando de su predecesor en materia de crecimiento. Las industrias de baja productividad, que en 2002 explicaban apenas el 5% de PBI total, explicaron en el período 2003-2007 cerca del 12% del crecimiento económico (y, de hecho crecieron durante estos años en alrededor de un 150%). Este hecho específico es el que permite comprender por qué durante el período que analizamos la industria creció por primera vez en décadas por encima del PBI agregado, llegando a ubicarse en sus techos históricos a precios constantes de 1993.

Por otro lado, este particular dinamismo está vinculado a otro de los elementos centrales del período: la generación de empleo. Ateniéndonos particularmente a la generación de empleo asalariado,¹¹ debemos decir que las industrias en general, y particularmente los estratos de baja productividad, son los sectores destacados en la materia. No sólo por la contribución directa que tuvieron durante los años de crecimiento (particularmente, como vemos en el cuadro 1, en los momentos donde el tipo de cambio se encontraba particularmente elevado en términos reales, años 2003-2006), sino por su particular efecto multiplicador sobre el resto de la estructura económica (Cuadro 3).

Ahora bien, si la reactivación de las industrias de baja productividad son una de las claves para comprender la reactivación en el empleo, en las antípodas, y como veremos en los gráficos que siguen, tanto la novedosa participación de las exportaciones en el valor bruto de producción industrial (que permite explicar los renovados superávits comerciales que acompañan el crecimiento del PBI), como los incrementos sostenidos en

11 El empleo asalariado ha representado históricamente, y representa, alrededor del 80% del empleo total. Su estudio específico tiene que ver con el intento de vincular la dinámica de empleo con la del crecimiento de los estratos de baja productividad.

GRÁFICO N° 2
Aporte de los distintos sectores productivos al PBI durante los años de crecimiento de la convertibilidad y el período 2002-2007



Fuente: Elaboración propia sobre la base de Lavopa (2007) y el Ministerio de Economía.

los parámetros de productividad laboral en la industria manufacturera, son explicados en gran medida, tanto en los '90 como ahora, por un reducido número de actividades competitivas que habían sobrevivido (y crecido) durante la fuerte apreciación cambiaria de la década anterior.¹²

CUADRO N° 1						
Distribución del nuevo empleo asalariado según sectores productivos (2003-2007)						
Años	Industrias de alta productividad	Industrias de baja productividad	Servicios de alta productividad	Servicios de baja productividad	Sector público	Construcción
Distribución del empleo asalariado por sector (2003)						
2003	5,6	8,0	8,1	50,0	23,2	5,1
Aporte al nuevo empleo asalariado generado por sector						
2003-2007	5,6	17,1	14,9	40,4	6,3	15,6
2003-2006	5,9	18,0	12,2	42,7	3,4	17,8
2003-2005	5,5	21,8	20,4	39,2	-7,0	20,1
2003-2004	2,7	17,1	23,3	45,6	-7,0	18,3
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la EPH (INDEC). Por ser una encuesta que se realiza en aglomerados urbanos, la EPH no refleja adecuadamente lo que sucede con el empleo en el sector primario en general, y agropecuario en particular. Por tal motivo, en los cuadros donde nos referimos al empleo, no tenemos en cuenta lo acontecido en dichos sectores, y agregamos al sector público que no era de nuestro interés al referimos a lo acontecido con el PBI.						

En otras palabras, los “éxitos” de la post-convertibilidad son una combinación de fenómenos históricos y coyunturales, que no necesariamente pueden ser atribuidos a un cambio estructural inducido por modificaciones en la política económica. La transformación en los modos de producir manufacturas, a los que hicimos brevemente mención, son los que se encuentran en última instancia detrás de la nueva penetración de manufacturas argentinas en el comercio internacional. Ya en la convertibilidad, con una fuerte apreciación cambiaria, no sólo las industrias de alta productividad habían logrado explicar el 10% del crecimiento económico total, sino que habían logrado incrementar significativamente sus volúmenes exportables, y sus parámetros de pro-

¹² Es interesante observar el comportamiento combinado de las Industrias de Alta Productividad tanto en los '90 como ahora, a partir de la evaluación conjunta de los gráficos 4, 5 y 6. Pese a la fuerte apreciación cambiaria, los sectores no sólo tuvieron un impacto significativo en el crecimiento, sino que lograron aumentar sus parámetros de productividad y sus exportaciones. De hecho, la participación de las exportaciones en el VBP de estos sectores, pasó del 6% aproximadamente en 1993, al 13% en 2000, en contextos de una fuerte apreciación del tipo de cambio real.

ductividad. En este sentido, es interesante señalar que ya en esos años comenzaron a registrarse techos históricos en materia de participación de las exportaciones en el valor bruto de producción industrial (VBP).

CUADRO Nº 2						
Requerimientos directos de producción y efectos multiplicadores de empleo por estrato productivo, según la Matriz de Insumo-Producto de 1997						
	Sectores Productivos*					
	Primario	Industrias de alta productividad	Industrias de baja productividad	Servicios de alta productividad	Servicios de baja productividad	Construcción
Requerimientos directos de producción**	0,37	0,45	0,52	0,31	0,3	0,47
Multiplicadores de Empleo***	2,02	4,34	2,96	1,50	1,7	1,64

* Promedio del conjunto de ramas a 5 dígitos incluidos en cada sector según la Matriz de Insumo-Producto de 1997.
 ** En pesos por peso producido en el sector.
 *** En cantidad de veces por las cuales se multiplica el empleo en el conjunto de la economía, por cada 1000 puestos de trabajo que se crean en el sector.

Lo que intentamos mostrar con estos datos, es la matriz estructural de un aparato industrial que durante la post-convertibilidad parece exhibir varios signos de profundización. Es decir, un aparato industrial que puede ser dividido en dos grandes sectores. Por un lado, y vinculado a la idea de enclave exportador mencionada en el apartado anterior, un sector de alta productividad (parte de la siderurgia, petróleo, alimentos y automóviles) con capacidad de insertar sus manufacturas en el mercado mundial, y por el otro, un sector de baja productividad, con menor capacidad exportadora, pero central en términos de empleo asalariado.

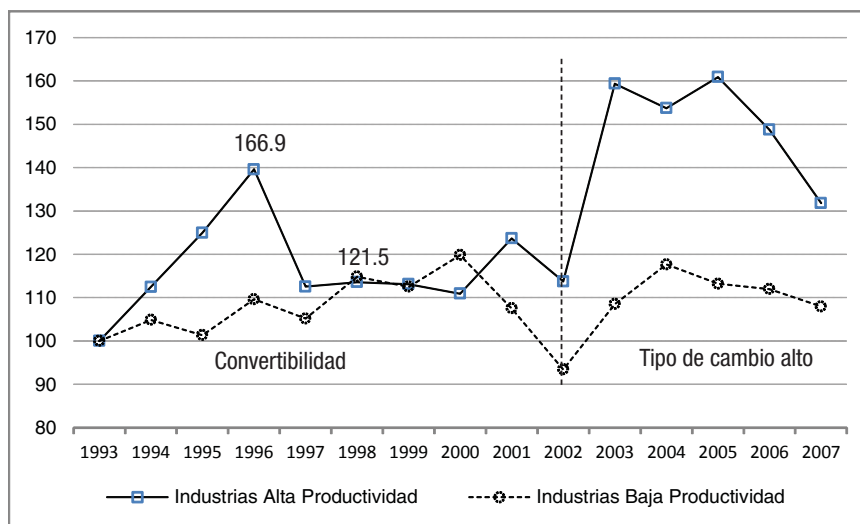
De manera complementaria, si hacemos el corte por “tamaño del establecimiento empresario” en lugar de por estrato productivo, encontramos signos que parecen corroborar la anterior afirmación. En este sentido, el comportamiento exportador de lo que podríamos denominar como el segmento de pequeñas y medianas empresas es sumamente elocuente: *para el 2007, sólo el 11% del gran universo empresario que emplea entre 1 y 200 trabajadores había logrado exportar más del 5% de su VBP.*¹³ Como contra-

13 Este dato surge de la Fundación Observatorio PYME. Para mayor información, véase “Informe 2007/2008. Evolución reciente, situación actual y desafíos futuros de las PYME industriales”. El dato ha sido extraído de Fal, Pinazo y Lizuain, 2009.

partida, y según la Encuesta Nacional a Grandes Empresas (INDEC), las primeras 200 empresas explicaban para 2005 alrededor de las $\frac{3}{4}$ partes de las exportaciones industriales totales. Es más, según un artículo reciente de Azpiazu y Schorr (2010, p. 134), el superávit comercial de las 100 empresas industriales más grandes de nuestro país era en 2007 de unos 15.800 millones de dólares, es decir 4 mil millones de dólares más que el superávit comercial total de la economía argentina, y el equivalente al 30% de las exportaciones totales del país.

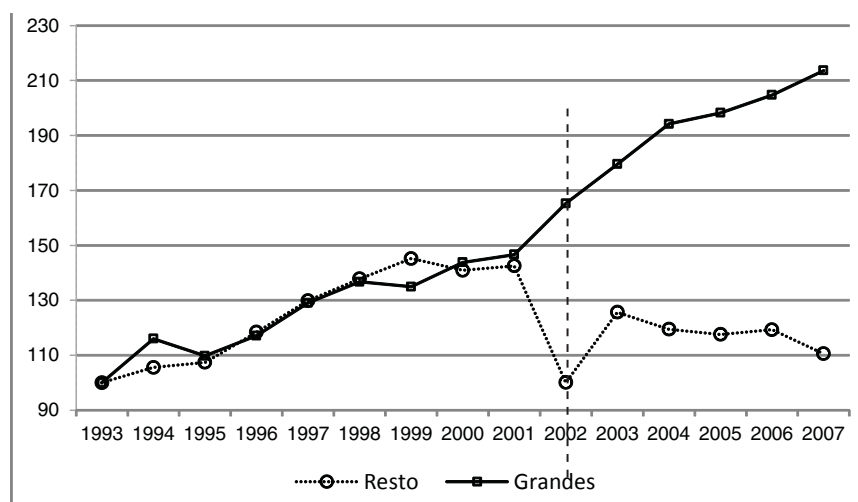
CUADRO Nº 3							
Exportaciones industriales según estrato de productividad							
Años	Exportaciones industriales*	Industrias de Alta Productividad			Industrias de Baja Productividad		
		Participación del estrato en el total de X (%)	Participación de las exportaciones en el VBP (%)	Participación en el VBP Industrial (%)	Participación del estrato en el total de X (%)	Participación de las exportaciones en el VBP (%)	Participación en el VBP Industrial (%)
1993	9711,1	61,2	6,6	32,6	38,8	5,0	67,4
1994	11359,9	61,3	7,6	32,8	38,7	7,0	67,2
1995	15036,9	62,1	9,9	34,4	37,9	8,4	65,6
1996	16245,3	66,3	10,2	35,0	33,7	7,2	65,0
1997	18868,2	66,9	12,3	33,9	33,1	8,7	66,1
1998	18600,9	67,8	12,3	34,8	32,2	7,9	65,2
1999	16608,1	63,6	11,8	36,4	36,4	9,0	63,6
2000	17993,0	60,5	12,8	35,9	39,5	12,1	64,1
2001	17905,7	58,8	15,5	38,6	41,2	15,5	61,4
2002	17843,1	60,2	41,0	33,1	39,8	22,5	66,9
2003	20932,8	60,9	20,2	32,9	39,1	16,2	67,1
2004	24901,8	59,7	18,9	31,7	40,3	15,7	68,3
2005	28840,5	60,7	19,5	32,3	39,3	15,5	67,7
2006	34570,9	62,6	25,3	31,8	37,4	16,7	68,2
2007	41102,6	65,3	27,6	31,0	34,7	14,8	69,0
2008	50786,9	66,6	32,9	31,4	33,4	15,8	68,6

GRÁFICO 3
 Evolución de la producción física por obrero ocupado*
 en las industrias de alta y baja productividad. 1991-2009
 Expresada en millones de pesos de 1997 por trabajador



Fuente: Elaboración propia sobre la base del CEP (2010) y la Encuesta Industrial (INDEC).
 * Para los datos de productividad laboral hemos utilizado un método similar al del cálculo de los salarios, con la salvedad de que hemos utilizado como insumo los datos absolutos de valor de producción y obreros ocupados por rama para 1997, que surgen de la Encuesta Industrial (INDEC).

GRÁFICO 4
 Evolución de la producción física por obrero ocupado
 en grandes empresas industriales y el resto. 1993-2008
 Valores índice (1993=100).



Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC y Ministerio de Economía.

Los gráficos anteriores nos muestran una de las continuidades (o profundizaciones) más importantes del período de la post-convertibilidad. Como vemos, tanto lo que hemos denominado como estratos industriales de baja productividad, como las pequeñas y medianas empresas industriales, muestran un estancamiento, o incluso una contracción, en sus parámetros de productividad laboral (frente al crecimiento que exhiben las grandes empresas y los estratos de alta productividad). Esto explica porqué ya en 2007, y frente a la leve pero sistemática recuperación del salario que comenzó a registrarse desde 2004, los estratos industriales de baja productividad comenzaron un proceso de leve contracción en sus niveles de actividad y expulsión de mano de obra.¹⁴

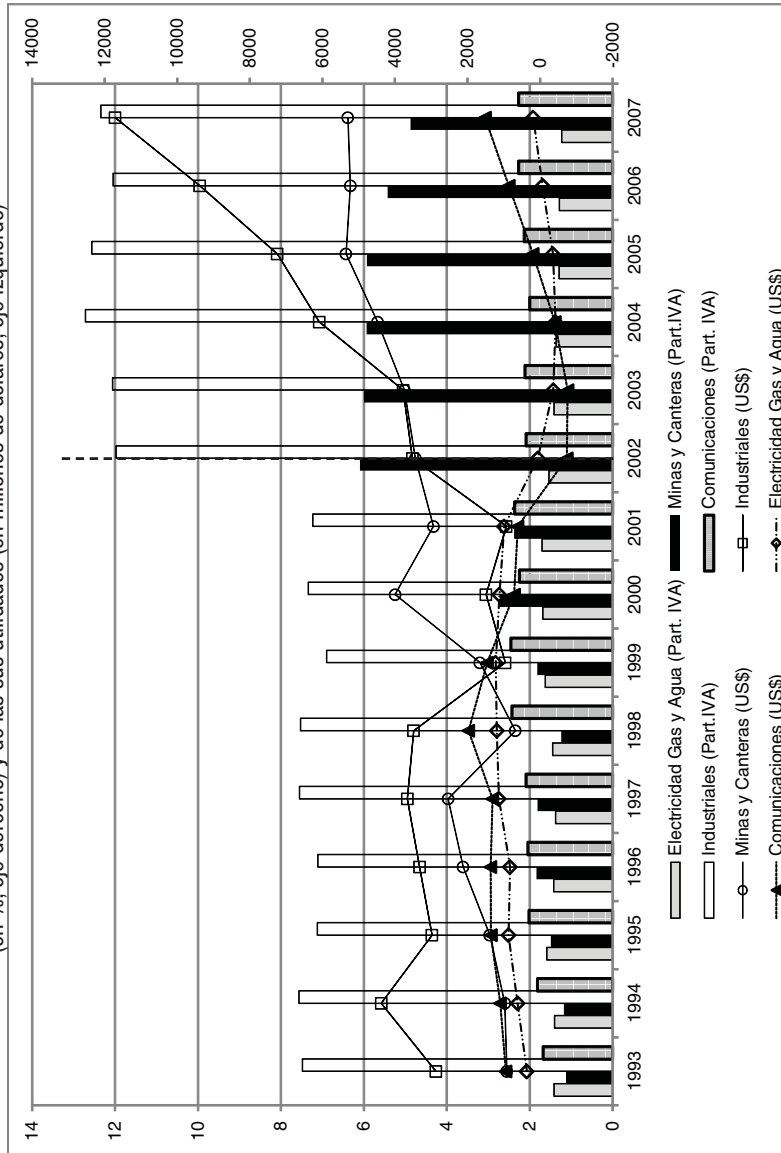
Situación antitética es la que viven no sólo las grandes empresas industriales exportadoras, sino una parte importante de las empresas ubicadas en la cúpula y los bancos privados. Como vemos en el gráfico que sigue parece haber una clara distinción entre un reducido grupo de grandes empresas exportadoras y el resto. Estas empresas se dedican, y prácticamente pasaron a controlar, a un reducido grupo de actividades competitivas en términos internacionales; exportan una parte importante de su producción, y tienen la capacidad para absorber los aumentos salariales a partir de sus particulares parámetros de productividad laboral. En este sentido es que no parece arriesgado afirmar que han sido los grandes beneficiados del actual esquema de precios relativos. Esquemáticamente porque la modificación cambiaria actuó potenciando un contexto internacional favorable, en términos de los precios internacionales de sus productos (y en la demanda de los mismos), a partir de la disociación entre sus ingresos y sus costos (básicamente los laborales).

Asimismo, observamos que los bancos privados, exhiben una rentabilidad sobre activos que desde 2007 dobló aquella que habían alcanzado en el régimen cambiario anterior, mostrando algunas líneas de continuidad a nivel estructural que se expanden inalteradas en la post-convertibilidad.

Volviendo a lo que señaláramos en la introducción de este apartado, lo que sí es un elemento novedoso es la política cambiaria adoptada

¹⁴ Según la EPH (INDEC) entre el tercer trimestre de 2008 y el mismo período de 2007 el empleo asalariado en dichos estratos se contrajo casi un 15%, en un contexto donde estratos sólo explicaron sólo el 5% del crecimiento, siendo el 7% del PBI.

GRÁFICO N° 5
 Evolución de la participación de la cúpula empresaria en el Valor Agregado total
 (en %, eje derecho) y de las sus utilidades (en millones de dólares, eje izquierdo)



Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Encuesta Nacional a Grandes Empresas (INDEC)

por el Gobierno Nacional, que ha tenido un doble impacto. En primer lugar, la política cambiaria ha permitido multiplicar las ganancias de lo que podríamos denominar como una fracción productivo-exportadora del capital, compuesta por agentes de la industria automotriz (principalmente las terminales), las empresas de hidrocarburos, las mineras, un heterogéneo abanico de agentes vinculados a los circuitos agro-industriales, junto a empresas químicas y siderúrgicas. Todos ellos caracterizados por fuertes dinámicas de concentración, creciente avance de la extranjerización económica, y, en líneas generales, una participación decreciente de los asalariados en la apropiación del valor creado. Estos agentes venían consolidándose con la transformación de la matriz productiva suscitada en las últimas décadas, con un fuerte basamento en la extracción y procesamiento de recursos naturales, con un destacado proceso de “sojización” y un rápido desarrollo de la minería a cielo abierto,¹⁵ entre otros. Pero, al mismo tiempo, la política cambiaria ha permitido también el crecimiento de los sectores de baja productividad, lo cual ha redundado en un crecimiento del empleo que no tiene antecedentes en la historia argentina. El límite de esta nueva política está en el poder adquisitivo de las remuneraciones de esos nuevos empleos. La contracara de las ganancias extraordinarias de los sectores exportadores de alimentos, es el encarecimiento de una gran parte de la canasta de consumo de los sectores asalariados. En la medida en que los sectores que generan los nuevos empleos continúan con las mismas limitaciones estructurales de antaño (fundamentalmente en lo que tiene que ver con sus parámetros productivos), es muy difícil que puedan absorber aumentos salariales sin que esto repercuta en el ciclo económico y el empleo.

4. Políticas de ingresos y transferencias de recursos.

Según Poulantzas, “El Estado capitalista, sin dejar de representar de manera predominante los intereses de la clase o fracción hegemónica —ésta misma *variable*—, reviste una *autonomía relativa* respecto de esta clase y fracción y respecto de las demás clases y fracciones en el poder. De una parte, porque asegura el *interés político general del conjunto del bloque en el poder*, al organizar el “equilibrio inestable de compromisos”

¹⁵ Para un análisis en profundidad de la cuestión minera en Argentina ver: Gambina, Lizuaín y Pappi, 2009.

(Gramsci) (...). De la otra, porque organiza esta hegemonía respecto del conjunto de la formación social, por lo tanto igualmente respecto de las clases dominadas” (Poulantzas, 1981:90). De este modo, el análisis de las políticas económicas cobra relevancia en tanto inciden en la configuración y mantenimiento de rasgos particulares del proceso de acumulación de capital, en un tiempo y espacio determinado, reorganizando de manera singular los equilibrios inestables entre las fracciones de clase en estrecha vinculación con los cambios en sus relaciones de fuerza.

Entendemos que en la Argentina comenzaron a desarrollarse en el período en análisis, un conjunto de políticas de ingresos hacia las clases subalternas que establecen rupturas en relación a las aplicadas en la década previa. Asimismo, estas políticas se articulan con diversos mecanismos de transferencia de recursos que permiten visualizar la compleja construcción de hegemonía¹⁶ a partir de un amplio abanico de acciones estatales tendientes a organizar el equilibrio inestable de compromisos, en el marco de las variaciones en la correlación de fuerzas entre las distintas fracciones de clase.

Al interior de las clases dominantes, podemos detectar un conjunto de acciones estatales que procuraron “armonizar” las relaciones entre las distintas fracciones en el nuevo marco de relaciones de fuerzas. Habiendo analizado previamente las dinámicas del capital productivo según tamaño y productividad, parece relevante situarse en dos fracciones que fueron predominante en los años 90: la fracción financiera del capital y la de empresas de servicios públicos, con su núcleo fundamental de privatizadas.

La devaluación, y la política de tipo de cambio real competitivo que la siguió, estableció cambios en los precios relativos: los bajos salarios ya mencionados, la caída de las tarifas y de la tasa de interés real. Es importante tener en cuenta que los precios expresan relaciones de fuerzas y los mismos evolucionaron de forma dispar distribuyendo cargas y beneficios entre las distintas fracciones de clase. El fin de la convertibilidad afectó las posiciones relativas de la mayoría de las empresas privatizadas. En 2002 la *Ley de Emergencia Pública* desdolarizó las tarifas y eliminó los mecanismos indexatorios que las mismas poseían, asimismo

16 Para un análisis más detallado del proceso de construcción de hegemonía ver: Varesi, Gastón Á., 2010, “El gobierno de Néstor Kirchner: características y alcances de la recomposición hegemónica.” Espacio Crítico n°12, enero-junio 2010, Colombia.

se establecieron las herramientas legales iniciando el congelamiento y renegociación de tarifas. Como mencionamos previamente, el gobierno de Duhalde desplegó una estrategia dual, por un lado, beneficiando a las empresas ubicadas en áreas no sensibles al consumo popular y, por otro, dilatando las negociaciones en todas las áreas sensibles para dejarlas al gobierno siguiente. Durante el gobierno de Kirchner se desplegó una estrategia heterogénea consistente en tres acciones estatales diferenciadas: renegociación, reestatización y creación empresarial. Esta estrategia persiguió tres objetivos: 1) intentaron interrumpir los procesos judiciales que muchas privatizadas llevan adelante en el CIADI; 2) evitar un “tarifazo”, limitando la inflación y buscando mantener el nuevo esquema de precios relativos favorable a la producción de bienes transables; y 3) aumentar la influencia del Estado en determinadas áreas.

Las renegociaciones tendieron a presentar aumentos, dirigidos principalmente a los grandes, procurando evitar el “tarifazo” directo sobre los sectores más vulnerables de las clases subalternas y manteniendo un esquema de precios relativos favorables a la producción de bienes. Si bien en todos los casos el acuerdo implicó el retiro de las demandas del CIADI, a las privatizadas no se les exigieron las inversiones anteriormente incumplidas. Las reestatizaciones fueron realizadas por fuera de las figuras legales para empresas estatales formándose sociedades anónimas, consignadas bajo la Ley n° 19.550 que regula y tipifica las sociedades comerciales, con mayoría accionaria estatal. Esto sucedió con el Correo Argentino, Aysa, el espacio radioeléctrico, y hubo reestatizaciones parciales como Aeropuertos y el Ferrocarril San Martín. Esta acción estatal parece marcar una distancia con la tendencia netamente privatizadora de los años 90. La tercera variante fue la creación empresarial por parte del Estado. Éste fue el caso de Enarsa, creada como parte de la política energética del gobierno para incidir en esta área clave.

No desplegó un plan integral de recuperación de los recursos estratégicos y las reestatizaciones avanzaron sólo sobre los casos más escandalosos de la gestión privada, ya sea por deterioro del servicio o falta de pago del *canon* al Estado. Aun así, las privatizadas ocupan una posición subordinada respecto de la década de 1990, época en que presentaban las rentabilidades más elevadas de la estructura económica argentina. Las empresas de servicios vuelven paulatinamente a estar sujetas a las prioridades del capital productivo y la acción estatal procura además establecer tarifas diferenciadas con el fin de preservar las condi-

ciones de vida de las clases subalternas. Esto se observa también en que, en el modelo actual, las empresas de servicios públicos privatizadas (a diferencia de las privatizadas productivo-exportadoras) han perdido posiciones al interior de la cúpula empresarial y sus rentabilidades se encuentran, en casi todos los casos, por debajo de la de los años 90.

TABLA 1 Promedio anual de las rentabilidades operativas de varias empresas privatizadas o vinculadas a las privatizaciones (utilidades operativas sobre ventas), 1998-2001 y 2002-2006 (porcentajes)		
Empresa	Promedio 1998-2001	Promedio 2002-2006
Repsol-YPF	26%	40%
Transportadora de Gas del Norte	54%	34%
Transportadora de Gas del Sur	66%	45%
Camuzzi Gas Pampeana	11%	9%
Distribuidora de Gas Cuyana	26%	16%
Gas Natural BAN	20%	9%
Metrogas	14%	7%
Central Costanera	18%	25%
Central Térmica Güemes	0%	1%
Central Puerto	18%	1%
Hidroeléctrica Piedra del Águila	42%	27%
Transener	40%	18%
Edelap	13%	-2%
Edenor	22%	5%
Edesur	14%	0%
Telecom	13%	7%
Telefónica de Argentina	25%	14%

Fuente: Ortiz, Ricardo y Martín Schorr (2007)

Por otro lado, se ha desplegado una política de subsidios “compensatorios” que representan mecanismos de transferencia de recursos desplegados desde el Estado con el fin de recomponer el equilibrio de compromisos inestables al interior de la clase dominante. Esta acción complementa otras como la pesificación asimétrica de deudas y depósitos, mecanismo establecido durante el gobierno de Duhalde para socializar las deudas del capital, un aspecto de continuidad respecto de las lógicas previas: “Entre los 50 mayores deudores privados que a comienzos de 2002 vieron licuados sus pasivos con el sistema finan-

ciero local (...) quedaron incluidas 25 empresas privatizadas que por ese medio obtuvieron un beneficio –del orden de los 2000 millones de dólares– prácticamente equivalentes a las ganancias obtenidas por las mismas en el año 2000” (Azpiazu y Schorr, 2003:77).

Fue en este contexto, que el gobierno de Duhalde dispuso un plan de “salvataje” al capital financiero, dando lugar a transferencias de recursos destinadas a compensar a dicha fracción del capital por las consecuencias de la salida devaluacionista y la pesificación asimétrica, y que fueron cubiertas con emisión de nueva deuda pública. Visualizamos así los mecanismos de transferencias de recursos que culminan con la estatización y socialización de las deudas del gran capital a través de compensaciones que incrementaron el endeudamiento público.

Las políticas vinculadas a la deuda pública tuvieron un claro impacto en las relaciones de clase, en tanto una parte considerable de los bonos en *default* estaban en poder de los conglomerados financieros, que habían visto perjudicadas sus posiciones relativas por la salida devaluacionista y pesificadora y que habían comenzado a ser compensados en 2002 a través del “salvataje”. La salida del *default* concretada con el canje de 2005 presentó una importante quita del 43.4% sobre el total canjeado. Aparecieron en el canje componentes novedosos como las Unidades Ligadas al PIB, cupones que, en las condiciones de crecimiento económico reciente, produjeron ganancias que se multiplicaron año tras año. Otro elemento relevante es que cerca de 47% de la deuda se encuentra pesificada e indexada a la inflación. La indexación de deuda a crecimiento e inflación debe ser entendida como una medida que garantiza al capital financiero no perder más posiciones respecto del capital productivo-exportador, principal beneficiario del ciclo inflacionario. Al mismo tiempo, representa una doble extracción a las clases subalternas: el traspaso de recursos que implica la inflación y la carga interminable de la deuda pública financiada por una estructura tributaria regresiva. Aun con la importante quita del canje, queda un calendario de pagos con desembolsos anuales. El canje y la continuidad del ciclo de endeudamiento representan la cristalización de una nueva transferencia de recursos de asalariados a capitalistas, ya que recompone las relaciones en la clase dominante a costa del conjunto de la sociedad.¹⁷

17 Para un análisis en detalle del *default* y el canje de 2005 ver: Varesi, 2008.

Aun así, la fracción financiera del capital comienza a ocupar un lugar distinto al característico de los años 90. El descenso de la tasa de interés real y el hecho de que la rentabilidad bancaria no esté dada por los resultados de las tasas de interés sino por la simple tenencia de bonos y los servicios, implica (más aún con la caída de la convertibilidad de la moneda que operaba como seguro de cambio gratuito) un corte en el proceso de “valorización financiera”¹⁸ del capital y su circuito ligado al endeudamiento externo, derivación improductiva de recursos de grandes empresas al sistema financiero procurando aprovechar el diferencial positivo entre las tasas de interés internas y externas, posterior fuga de capitales y quiebra de las cuentas del Estado. Así, el capital financiero dejó de performar esta función relevante en las décadas previas, si bien mantiene un carácter fuertemente especulativo y desde 2005 sus rentabilidades se recuperan y logran un importante incremento. Esta fracción sigue cumpliendo un rol importante en el proceso de endeudamiento público, pero los descensos de la relación deuda/PBI y deuda/exportaciones en un contexto de superávit fiscal y comercial ha permitido sostener los pagos del arduo calendario de desembolsos que quedó tras el canje.

Debemos destacar, que el sistema financiero local, ha proseguido un camino de creciente concentración pero, a diferencia de las otras fracciones del capital concentrado, exhibe el avance de grupos de capital local en este sector. Por otra parte, es necesario observar la escasa articulación de la banca privada con la fracción de PyMEs, lo cual implica que las inversiones tiendan a ser financiadas a través de la propia ganancia inmediata.

Por otra parte, la aproximación al sistema de transferencias de recursos compensatorios que expresan el aumento de la *autonomía relativa* del Estado en la post-convertibilidad, requiere de una breve aproximación a la estructura impositiva. En esta área, tras la reinstalación de las retenciones, la acción estatal no ha mostrado otros avances. El IVA, impuesto de naturaleza regresiva, explica más del 30% de la recaudación. Es seguido por el impuesto a las Ganancias.

El impuesto distintivo del período 2002-2007 lo constituyen las retenciones, principal insumo del tributo de Derechos al comercio exterior, que, en el contexto de altos precios de los commodities y de

18 Nos referimos a la dinámica analizada por Basualdo, 2010.

expansión de las exportaciones, representó un 13% de la recaudación. Este impuesto marca una novedad: por un lado, busca desdoblarse los precios del mercado externo e interno procurando limitar la inflación (una variable con prelación y regularidad en nuestro período de estudio) que afecta principalmente a las clases subalternas; por otro lado, se grava la fracción más dinámica del capital (productivo-exportador), para derivar recursos a otras fracciones dominantes y subalternas a través de los distintos mecanismos directos e indirectos que fuimos identificando. Representa un intento de construir gobernabilidad a partir de la compensación de distintos intereses de clase. Por una parte, las retenciones, intentan limitar el proceso inflacionario y acompañan algunas medidas de ingresos orientadas hacia las clases subalternas. Por otra parte, las retenciones incrementan el superávit primario que será destinado al pago de deuda y que acompañan a otras acciones: tanto las compensaciones a los bancos (en 2002) como la salida del *default*, que incluye cupones atados al crecimiento y bonos en pesos indexados a la inflación. También debemos señalar que las retenciones comenzaron a constituir un factor de creciente diferenciación al interior de la fracción productivo-exportadora del capital, entre quienes aparecen gravados por ellas y quienes quedan exentos y muchas veces son beneficiarios de otras transferencias como subsidios o beneficios impositivos.

Con respecto a las clases subalternas, debemos demarcar dos cuestiones fundamentales: en primer lugar, el piso en términos de poder adquisitivo del salario y participación asalariada en el ingreso que caracteriza a todo el período en cuestión, y que está íntimamente vinculado a la política cambiaria y es la contracara de los techos en materia de empleo asalariado; y en segundo lugar, la puesta en funcionamiento de un conjunto amplio de políticas de ingresos que afectaron de manera desigual al heterogéneo conjunto de los sectores populares.

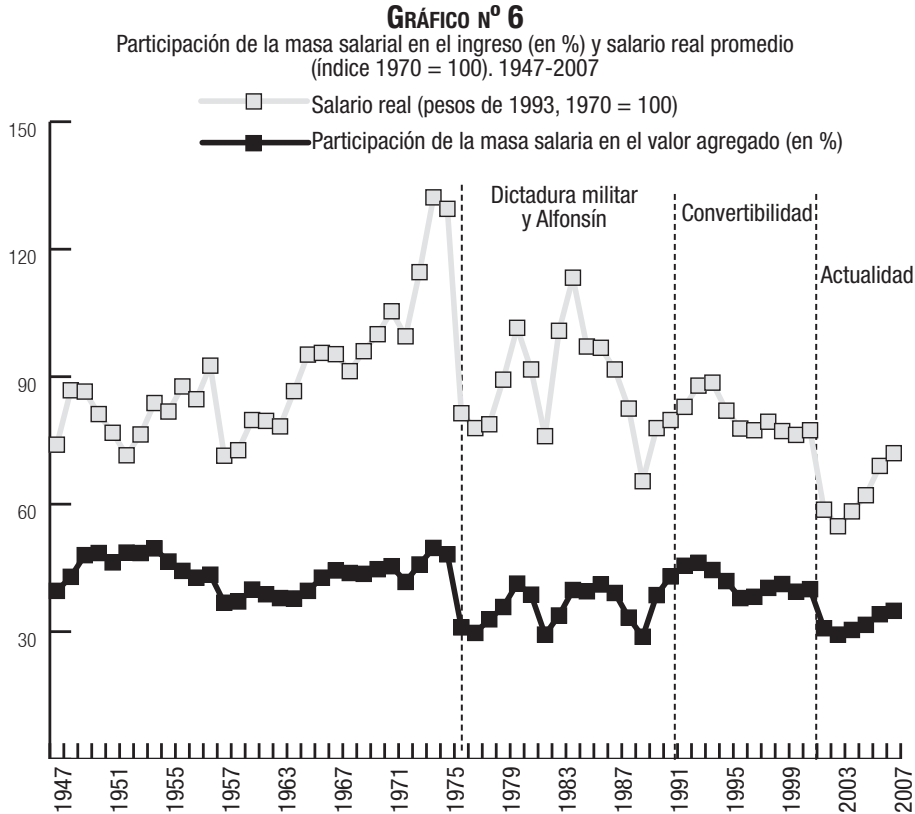
Como señalamos, la así llamada “competitividad” no es otra cosa que el abaratamiento en dólares del costo salarial, que ha permitido una profunda reactivación del empleo asalariado. Ahora bien, la contracara de esta dinámica está dada por lo siguiente: dado que el grueso de los asalariados, y las clases subalternas en general, dedican una parte más que importante de sus ingresos al consumo de alimentos (más todavía cuando estos se encuentran en niveles tan bajos como los de fines de la convertibilidad) el encarecimiento del dólar también significa el encarecimiento (en mayor o menor medida dependiendo de las distintas polí-

ticas que se puedan adoptar para contenerlos) de estos mismos alimentos, en la medida en que los mismos son dedicados en una importante proporción al mercado externo. Esquemáticamente, el distanciamiento peso-dólar es a la vez la fuente de las ganancias extraordinarias de aquellos sectores que reciben sus ingresos en dólares y tienen sus costos en pesos, como del empobrecimiento de aquellos que tienen su salario en pesos y consumen sus productos a precios “dolarizados”.

En este sentido es que para 2007 podemos encontrar la situación aparentemente paradójica de que las tasas de empleo se encuentren en sus techos históricos, y el salario real en sus pisos (de hecho, es interesante observar que el salario real se encuentra en los pisos históricos de la serie que abarca desde 1947 la fecha, lo mismo que la participación asalariada en el ingreso; esto es, en niveles más bajos que los que se encontraba en el primer plan auditado por el FMI en 1958, en 1976 y en la convertibilidad). La producción local se vuelve “competitiva” lo que le permite a la enorme cantidad de gente que sale a buscar empleo, encontrarlo. Pero también podemos pensar que esta enorme cantidad de gente que sale a buscar empleo (tasa de actividad) está vinculada a lo bajo de las remuneraciones de los efectivamente empleados, lo que obliga a los hogares, las familias o los grupos pobres, a renovar sus esfuerzos por conseguir fuentes de ingreso.

Pasando a otro orden de cuestiones, podemos decir que esta situación en términos de pisos distributivos fue acompañada por una serie de complejas herramientas de política social. En 2002 frente al pico de deterioro de las condiciones de vida de las clases subalternas y los niveles crecientes de conflictividad social, el gobierno de Duhalde desarrolló una *estrategia de contención/coerción* consistente, por un lado, en la masificación de los planes sociales y por el otro en una ofensiva de represión y criminalización de la protesta social.

Se puso en juego el plan social de mayor alcance hasta ese momento: el Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados con el fin de contener el conflicto y limitar las consecuencias que la crisis económica estaba teniendo sobre las clases subalternas. Al mismo tiempo, se asistió a una escalada, tanto desde los medios masivos de comunicación como desde fuentes estatales, a criminalizar la protesta social incrementada durante el 2002, procurando debilitar las articulaciones al interior de las clases subalternas, visibles hacia fines de 2001, entre los sectores

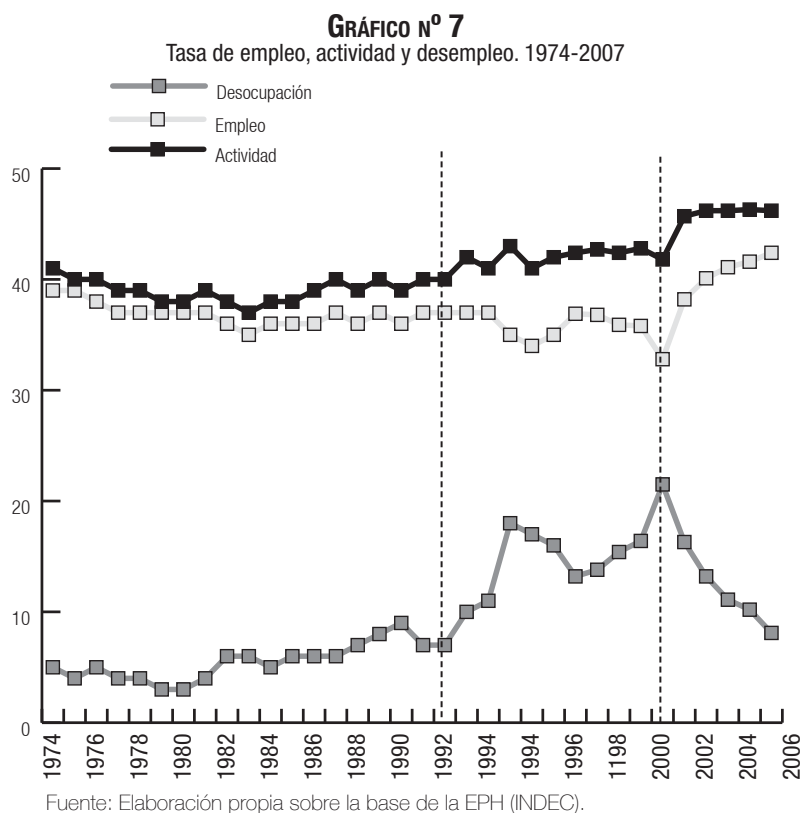


Fuente: Elaboración propia sobre la base del CEPED (2008) y el Ministerio de Economía.

medios, los trabajadores y los desocupados, de gran protagonismo en esos años. La criminalización de la protesta estuvo acompañada por un aumento de la violencia represiva que tuvo su punto álgido en la “Masacre de Avellaneda”¹⁹ que constituyó el intento de aplacar el conflicto por vía represiva, pero cuyo masivo repudio llevó al Duhalde a adelantar el llamado a elecciones.

A partir del gobierno de Kirchner, se han desplegado un conjunto de acciones estatales tendientes, por un lado, a apuntalar los ingresos mínimos de las clases subalternas y, por otro, a aumentar de forma más significativa los salarios en los sectores más dinámicos de la economía. Esta estrategia se basó en cuatro mecanismos fundamentales: a) aumen-

¹⁹ Refiere a la brutal represión del 26/6/2002 desatada sobre los movimientos de desocupados que cortaban el puente Pueyrredón y que culminó con el asesinato de los militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.



to del salario mínimo, b) impulso a los acuerdos y convenios colectivos de trabajo, c) aumento y extensión de las jubilaciones mínimas y d) acuerdos de precios para limitar la inflación.

a) El salario mínimo, luego de una década de estar congelado, cobró forma primero a través de aumentos por decreto y, rápidamente, a partir de la convocatoria al “Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil”, en la que comparecieron entidades empresarias, obreras y representantes gubernamentales, revitalizando las mediaciones corporativas como instancia clave de las disputas distributivas. En este trayecto el salario mínimo fue llegando a \$450 en 2004, a \$510 en 2005, a \$630 en el 2006, alcanzando los \$980 a fines de 2007.²⁰ Debe tenerse en cuenta que esta medida alcanza

²⁰ Se aclara que la línea de pobreza fue establecida por organismos oficiales a \$923 en julio 2007.

directamente sólo a los trabajadores privados registrados y a los dependientes del sector público nacional, pero también funciona de regulador de los “pisos” de ingresos para el conjunto de las clases subalternas. Asimismo, debemos señalar que la CTA cuestiona que este consejo sólo definió a priori el salario mínimo, dejando de lado el tema empleo y menos aún la productividad, por lo cual dicha central de trabajadores se abstuvo de participar en varias ocasiones²¹.

b) En segundo lugar, encontramos los acuerdos y convenios colectivos de trabajo, mecanismos de puja distributiva que habían perdido peso durante el proceso de instauración del neoliberalismo. En términos cualitativos, debemos tener en cuenta que la Ley 25.877 de Ordenamiento Laboral que sustituyó a la previa ley laboral introdujo modificaciones favoreciendo las negociaciones en un ámbito mayor en relación a la fuerte preeminencia de las negociaciones limitadas al ámbito de la empresa. Si bien las negociaciones por actividad mostraron mayor relevancia que la tendencia evidenciada en los años 90, no se logró revertir totalmente este fenómeno²². Asimismo, las negociaciones quedaron limitadas principalmente a discusiones salariales, dejando de lado, en general, otras reivindicaciones ligadas a las condiciones laborales. En términos cuantitativos, se visualizan mayores grados de ruptura, ya que los convenios colectivos se multiplicaron desde 2003 permitiendo a sus beneficiarios importantes recuperaciones de salario real. En relación al alcance, los convenios colectivos pasaron de involucrar a 3 millones a comienzos de 2002, a superar los 4,5 millones de trabajadores del sector privado en 2007. Con respecto a la cantidad de acuerdos y convenios homologados, ya en 2004 alcanzaron los 349, duplicando el promedio de los 10 años anteriores, representando el nivel de negociación más alto desde comienzos de la década de los 90, y centrándose en la industria manufacturera. Esta tendencia se fue amplificando hasta superar los 1000 convenios y acuerdos colectivos en 2007, evidenciando que constituye un rasgo perenne de las relaciones capital/trabajadores en el modelo post-convertibilidad.

21 En este sentido, ver Gambina y colaboradores, 2006.

22 Según los datos de Marticorena (2010) en el período 1995-1999 los convenios colectivos se desarrollaron a nivel empresa en un 76,6% y a nivel actividad en un 23,4%, esta relación cambia a partir de 2004, con la Ley 25.877, llevando las negociaciones aproximadamente al 67% a nivel empresa y al 33% a nivel actividad, aunque se mantiene la fuerte preeminencia de las negociaciones en el ámbito menor de la empresa por sobre el de la actividad.

c) Con respecto a las jubilaciones, se observan dos acciones importantes: el aumento de los haberes jubilatorios y la extensión de las jubilaciones a sectores que se encontraban desprovistos de la misma. Por un lado, al inicio del gobierno Kirchner las jubilaciones mínimas se encontraban en \$200 mensuales y a través de varios aumentos alcanzaron en agosto de 2007 los \$596. A pesar de los aumentos todos aquellos que perciben la jubilación mínima quedaron muy por debajo de la línea de pobreza, establecida por los organismos oficiales en \$ 923 (julio 2007). Además, se motivó un proceso de masificación de las jubilaciones mínimas. En este camino, el gobierno dispuso dos planes: el de Prestación Anticipada por Desempleo, dirigido a personas desempleadas con los años de aporte necesarios pero con menor edad de la requerida, y el Programa de Inclusión Previsional, orientada hacia quienes poseían la edad necesaria para jubilarse pero no tenían los años de aporte requeridos, completándose los mismos con una moratoria que se descontaría del haber (Mira y Kiper, 2009). Estas acciones estatales dieron como resultado la extensión de la jubilación mínima a aproximadamente a 1.800.000 personas que se encontraban por fuera del régimen, iniciando un genuino proceso tendiente a la universalización de la incorporación al sistema jubilatorio. Asimismo, permanece una fuerte demanda desde el movimiento de jubilados por mejorar los haberes y exigir el 82% móvil como criterio.

d) El gobierno impulsó acuerdos de precios con los principales productores y comercializadores para intentar contener la inflación, que acumuló cifras cercanas al 10% promedio anual. Las retenciones a las exportaciones actuaron también en el mismo sentido. El gobierno ha negociado la adjudicación de subsidios a agentes del capital concentrado para limitar el aumento de precios, comprometiendo a mantener la estabilidad del precio de determinados productos. En algunos casos de productos que eran a la vez de exportación y de consumo masivo de la población los subsidios equivalieron a la brecha entre el precio de exportación y el precio interno de dichos productos (Mira y Kiper, 2009). Aun así ya en 2007 volvió a desatarse una fuerte presión inflacionaria.

A estos mecanismos claves, se le ha sumado otro conjunto de acciones estatales tendientes a mejorar los ingresos y condiciones de vida de las clases subalternas constituyendo elementos de análisis relevantes para comprender el proceso de recomposición hegemónica desarrollado tras la crisis del 2001 y que en materia de políticas de ingreso ha

mostrado un punto de inflexión en el año 2003, y conteniendo medidas tales como aumentos en las asignaciones familiares, suspensión de los despidos sin causa justa, modificación de la ley de quiebras 26.086 devolviendo a la justicia laboral la competencia en los reclamos de los trabajadores contra las empresas en concurso de acreedores o quebradas, comienzo de la reforma previsional habilitando la posibilidad de pasarse de las AFJP al ANSES, entre otras²³. Sin embargo, el mantenimiento de una estructura tributaria regresiva, basada principalmente en el IVA, marca límites de la acción estatal en este período para transformar las condiciones de vida de los agentes subalternos.

Con respecto a las políticas de ingresos desplegadas desde 2003, podemos decir que las mismas han tenido efecto positivo, que implicó un aumento de los ingresos reales y mejora de los indicadores sociales respecto del momento de su aplicación, elevando sobre todo los “pisos” de ingresos como resultado de las fuertes políticas en materia de salario mínimo, jubilaciones mínimas y caída del desempleo. En este sentido, podemos observar un descenso de las mediciones de pobreza, que había alcanzado picos históricos al inicio del modelo post-convertibilidad llegando en octubre de 2002 al 57,5% de la población comenzó un continuo descenso hasta el 25,5% en el segundo semestre de 2006²⁴. La misma tendencia a la baja se encuentra aún más acentuada en materia de indigencia, que pasó del 27,5% al 8,7% en el mismo periodo, reduciéndose cerca de un 70%²⁵. Por primera vez desde 1980 los niveles de pobreza e indigencia exhiben cinco años seguidos de reducción. Sin embargo, no se ha logrado mejorar los niveles, ya altos, existentes al comienzo de la década de los 90, con un nivel de pobreza del 17% (1993) y de indigencia del 3,7% (1994) (CENDA, 2008b). También mejoraron los índices de desigualdad, ya que en 2002 la crisis social desatada en

23 Para ver un análisis de las medidas sociales y de ingresos ver CENDA, 2007.

24 Tomamos el segundo semestre de 2006 como último dato certero, ya que en 2007 el gobierno intervino el INDEC manipulando deliberadamente la construcción del IPC con su impacto en los indicadores socio-económico, como la Canasta Básica de Alimentos que se utiliza para medir la indigencia y la Canasta Básica Total usada para la medición de la pobreza (estos impactos pueden ser vistos en detalles en CENDA, 2008).

25 Buscamos articular aquí un análisis de los impactos de las políticas que, por rigurosidad analítica deben ser evaluados desde el momento de su aplicación, con otros criterios más estructurales que nos llevan a concluir que si bien estas políticas generan mejoras desde su aplicación, estas mejoras encuentran fuertes límites estructurales por el lugar que ocupan los salarios reales en términos del modelo de acumulación en su conjunto.

el marco de la salida devaluacionista-inflacionaria de la convertibilidad llevó a que el 10% de la población más rica percibiera 80 veces más recursos que el 10% más pobre, relación que se redujo alcanzando en 2006 a ser de 1 a 31²⁶.

En segundo lugar, si ampliamos el foco de análisis y observamos el lugar del salario real promedio en términos históricos, encontramos que las políticas han tenido un *efecto limitado*. Efecto limitado decimos porque, si es cierto que la devaluación es la piedra angular del modelo, debemos decir entonces que el período se caracteriza en sus inicios (y estrictamente durante todo el mismo) por los salarios reales promedio más bajos de los últimos 80 años de historia argentina. Ahora bien, por otra parte, esto ha sido acompañado por un aumento en los niveles de empleo, y por un conjunto de políticas sociales, que les ha permitido a una parte más que importante del universo asalariado, y de las clases subalternas, la salida de la situación de pobreza y miseria que caracterizó los años de neoliberalismo duro de los '90. En este sentido, el efecto limitado se relaciona a que, si bien el conjunto de indicadores sociales mejoran respecto del cataclismo de 2002, la participación de los asalariados en la distribución funcional del ingreso es en 2006 (41,3%) aún inferior a la del 2001 (42,1%), presentando también disminución en la participación del ingreso mixto (cuenta propistas + patrones de PyMEs) que baja del 16,2% al 13,6%, conllevando en total un aumento del excedente bruto de explotación del 41,8% (2001) al 45,1% (2006)²⁷. Esto no sólo parece mostrar un “techo” que no modifica la distribución sino que, como sostiene Basualdo, “el capital está en mejores condiciones que antes debido a que se apropió a través de sus ganancias de una porción mayor del valor agregado generado anualmente, registrándose una participación creciente del mismo en el ingreso” (Basualdo, 2008:3-4).

Finalmente, observamos que las medidas distributivas han tenido un *impacto dispar* en lo particular, ya que, dentro de los asalariados puede percibirse una fractura en dos sentidos:

1) por un lado pueden observarse evoluciones diferentes entre las distintas categorías laborales: los salarios reales de los trabajadores registrados del sector privado muestran en 2007 una mejora del 6%

26 La reducción de la desigualdad puede observarse también en el coeficiente Gini que pasa del 0,537 en 2003 al 0,485 en 2006.

27 Datos tomados de Lozano (2008).

respecto del año 2001; los trabajadores no registrados exhiben pérdidas del 13,3% respecto de 2001, y los trabajadores estatales obtuvieron en 2007 un salario real un 21,7% por debajo de 2001²⁸. De este modo, observamos la profundización de los rasgos de heterogeneidad en las clases subalternas según las distintas categorías laborales como una característica que perdura y se acrecienta desde la instauración del neoliberalismo en Argentina.

2) por otro lado, puede visualizarse una fuerte diferenciación salarial en la estructura de ingresos de los trabajadores formales mismos donde “el 11,9% de ellos concentran el 32,5% de la masa salarial total, mientras el 61,1% de los trabajadores formales perciben el 30,6% de la misma” (Lozano, 2008:9). Esto estaría señalando una diferenciación clave: la distinción entre agentes gerentes del proceso productivo que, si bien perciben salario y no son propietarios de los medios de producción, expresan una personificación del capital en tanto ejercen la función de control del proceso de trabajo. Recuperamos aquí el señalamiento de Poulantzas (2001) en torno de la posición de los altos funcionarios de empresa y su clivaje de clase. Según su óptica, los altos funcionarios de las empresas deben ser entendidos como parte de la clase dominante por su ejercicio de control y gestión del proceso de explotación del trabajo, por lo que, aun cuando perciban un salario, expresan una personificación de funciones de clase dominante. También se puede incluir en este renglón a los *intelectuales orgánicos* (Gramsci, 2004) de las clases dominantes que ocupan altos cargos en el Estado.

En este sentido, debemos tener en cuenta que si bien los salarios reales se han recuperado a partir de 2003 permitiendo ampliar los consensos dentro de las clases subalternas en el marco de un proceso de recomposición hegemónica, estos aumentos no son lo suficientemente altos como para ejercer una distribución progresiva del ingreso ya que, en contextos de incremento de la productividad laboral, asistimos a una caída del costo laboral que beneficia al empresariado, en tanto el trabajo es más “barato”, aún más si se toma su precio en dólares, constituyendo una de las claves de la competitividad internacional y las ganancias empresarias. Una limitante estructural del crecimiento salarial en el actual modelo se encuentra en que, por un lado, el perfil exportador del gran capital productivo tiende a ubicar el salario principalmente como un

28 Datos tomados de Lozano, 2008.

costo y no como un elemento fundamental de demanda para la realización del capital. Aun así estas grandes empresas por sus mayores niveles de productividad y, en muchos casos su vinculación a la apropiación de renta proveniente de la explotación de recursos naturales, pueden otorgar mayores aumentos salariales (aunque los mismos sigan fuertemente depreciados en términos de divisas) pero proporcionalmente generan menos absorción de mano de obra. Por otro lado, encontramos una amplia fracción de PyMEs mayormente involucradas con el desarrollo del mercado interno y que son fundamentales en la generación de empleo, pero cuya condición de existencia, debido a su baja productividad, encuentran en los bajos salarios su condición de subsistencia.

Estas parecen ser limitantes estructurales que signan la relación trabajo asalariado/capital, que ponen límites a las numerosas políticas de ingreso desplegadas desde 2003 con el fin de mejorar las condiciones de vida de las clases subalternas. Éstas han logrado sobre todo mejorar los “pisos” de ingresos de los agentes subalternos, pero se enfrentan a serios límites para superar los “techos” de distribución en relación a los años 90. Este fenómeno también se hace palpable en que, una vez alcanzado el salario real niveles similares al 2001, volvió a desatarse una fuerte presión inflacionaria explicada ahora por la reanudación de la puja distributiva, ya que los agentes del capital procuran trasladar a precios los aumentos salariales con el fin de preservar sus ganancias.

5. Concluyendo:

El proceso de acumulación de capital en Argentina sufrió una serie de transformaciones que tuvieron su origen en el contexto de crisis integral que marcó el agotamiento del modelo de la convertibilidad (1989-2001), el cual encarnó la forma más acabada de aplicación de las reformas neoliberales.

En este camino, observamos una serie de novedosas e inéditas dinámicas en los principales indicadores económicos: alcanzado records en materia de tasa de empleo, producto bruto interno, producto bruto industrial, exportaciones industriales y el peso de las exportaciones en el producto industrial. Sin embargo, si bien el período en cuestión se caracteriza por una serie de novedosas políticas económicas, que han impactado sobre las clases subalternas así como en las relaciones de fuerzas al interior de la clase dominante, éstas transformaciones no han

tenido profundas consecuencias sobre la estructura económica en materia de matriz productiva, la cual se ha venido consolidando durante las últimas tres décadas de neoliberalismo en la Argentina.

Uno de los primeros rasgos a destacar del modelo en análisis, es la *centralidad de la fracción productivo-exportadora del capital*, constituido principalmente por agentes de la industria automotriz (principalmente las terminales), las empresas de hidrocarburos, las mineras, la industria química y un heterogéneo abanico de agentes vinculados a los circuitos agro-industriales. Como sostuvimos, la devaluación generó un tipo de cambio internacionalmente competitivo que dio lugar a la dinamización de las exportaciones y, a través de su gravamen mediante retenciones, a la recomposición de las cuentas públicas. Observamos que la recuperación económica conllevó un aumento de la producción manufacturera, impulsada por la dinámica exportadora e incluyendo un fenómeno periférico de sustitución de importaciones producto de la protección generada por la modificación del tipo de cambio. Por otra parte, el efecto inflacionario ligado a la devaluación redujo sustancialmente el salario real, y junto con el congelamiento relativo de las tarifas de servicios, los elevados precios de los *commodities* y el nuevo tipo de cambio, permitió a los agentes productivo-exportadores generar elevados márgenes de ganancia y recuperar niveles de actividad económica. Los gobiernos desarrollaron una política activa para mantener una política de tipo de cambio competitivo, la cual se convierte en un rasgo distintivo clave del período post-convertibilidad, un tipo de cambio que “potenció” la competitividad internacional de los sectores industriales, pero lo hizo a partir simplemente del abaratamiento en dólares del precio del salario, lo que modificó la relación entre los costos en dólares de dichas industrias y su productividad. El problema es que esta estrategia cambiaria tiene consecuencias significativas en materia de distribución del ingreso. De este modo, la política cambiaria alentó la expansión económica a partir del crecimiento de las exportaciones. Así, la exportación se convierte en la vía primordial de realización del capital, el contexto internacional favoreció esta inserción y las acciones estatales se orientaron abiertamente a beneficiar la acumulación de esta fracción y sostener relaciones de fuerza a ésta favorable.

Los agentes económicos del capital productivo-exportador aparecen como los principales beneficiarios del modelo post-convertibilidad, aspecto que se observa también en una fuerte identidad entre las activi-

dades más competitivas que desarrolla el país y un reducido número de aproximadamente 200 grandes empresas de alta productividad.

Por otra parte, visualizamos una fracción de pequeñas y medianas empresas, que se constituyen en agentes fundamentales para explicar el aumento del empleo, pero que poseen baja productividad (exhibiendo una tendencia al estancamiento o contracción de la productividad laboral). De este modo, encontramos un escenario complejo en tanto las PyMEs, aun obteniendo una rentabilidad que triplica la del promedio que obtenían en los años 90 y estando relativamente protegidas por la política cambiaria frente a la presión de los productos importados, ven duplicar la brecha de rentabilidad respecto de las grandes empresas (Kulfas, 2011). En este contexto, observamos que un límite en los nuevos empleos creados por estos agentes y que remite al poder adquisitivo de sus remuneraciones, en tanto la clave de su rentabilidad y subsistencia se encuentra en muchos casos en los bajos salarios y altos índices de informalidad laboral.

En este proceso de análisis, fuimos vislumbrando cambios en las relaciones de fuerzas al interior de la clase dominante, que confirmaban la mencionada centralidad del capital productivo-exportador.

En resumen, se comenzó a gestar un modelo que presenta innovaciones tanto en los indicadores macroeconómicos como en las políticas, pero que no logra transformar significativamente la matriz productiva, basada en la explotación y procesamiento de recursos naturales (agro, minería, hidrocarburos) a lo que se suma la industria terminal automotriz y la industria química. Este modelo presenta cambios en las relaciones de fuerzas y en la acción estatal, desplegando estrategias de intervención económica con el fin de sustentar el modelo en curso, cuyos pilares descansan en fuertes superávits comerciales y fiscales, y desarrollar políticas compensatorias hacia las fracciones de clases dominantes y subalternas con el fin de construir un momento hegemónico.

Finalmente, parece importante destacar algunas de las tensiones fundamentales presentes en el proceso de acumulación post-convertibilidad. En primer lugar, la propuesta esgrimida desde fuentes oficiales y corporaciones del capital productivo en torno a una alianza entre la fracción productiva del capital y los trabajadores encuentra límites objetivos en los rasgos estructurales del gran capital productivo en Argentina. Su orientación primordialmente exportadora genera por un lado, impactos en la dinámica inflacionaria (principalmente en alimentos) buscando

equiparar precios externos con los internos, y por otro lado, esta misma lógica exportadora hace que el salario, en vez de aparecer como una condición fundamental para la realización del capital, tienda a representar un costo, que debe ser bajado en pos de aumentar la competitividad internacional y los márgenes de ganancia. La “burguesía nacional”, apelada constantemente en el discurso, parece carecer de bases sólidas dada la profundización de procesos de extranjerización que presenta la economía argentina. Entre las 500 empresas más grandes, aquellas con más del 50% de participación extranjera pasaron de apropiarse el 35% de las utilidades totales en 1993 al 90% en 2005 y explican, para el año 2007, el 81,7 % del valor bruto de producción y el 83,8 % del valor agregado del país. Si bien dentro de la cúpula empresaria existen algunas importantes empresas de capital local, su propia lógica transnacionalizada y el predominio general del capital extranjero son notorios. Tampoco parece posible hallar el rol de la “burguesía nacional” en los agentes de la fracción de PyMEs, ya que si bien está compuesta por empresas que son claves para la producción de empleo y tienen una mayor orientación al mercado interno, su rentabilidad y condición de existencia yacen ligadas a la super-explotación del trabajo, ofreciendo bajos salarios y altos índices de informalidad laboral. Su baja productividad y las restricciones relativas a la escala de producción rompen las complementariedades posibles con la clase trabajadora. Asimismo, la ausencia de un proceso distributivo progresivo de largo alcance puede representar una limitación estructural para la recomposición hegemónica. Si bien se han presentado avances con las políticas de empleo y de ingresos, las dificultades para controlar la inflación, la ausencia de una reforma impositiva, y la ubicación del bajo costo laboral como una capacidad competitiva para la clase dominante muestran algunas de las limitaciones del sistema capitalista para generar mayores transformaciones en la vida de las clases subalternas.

Bibliografía

Azpiazú, Daniel y Martín Schorr. 2003. *Crónica de una sumisión anunciada. Las renegociaciones con las empresas privatizadas bajo la administración Duhalde*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores.

Basualdo, Eduardo. 2008. “La distribución del ingreso en la Argentina y sus condicionantes estructurales”, en *Memoria Anual 2008*, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Buenos Aires.

Basualdo, Eduardo. 2010 [2006]. *Estudios de historia económica argentina: desde mediados del siglo XX a la actualidad*, Buenos Aires, Siglo XXI-FLACSO.

CENDA. 2007. “Los principales cambios en la legislación laboral 2003-2007”, en *El Trabajo en Argentina. Condiciones y perspectivas*, n°13, Informe trimestral, primavera. Buenos Aires.

CENDA. 2008. “Mercado de trabajo y estadísticas”, en *El Trabajo en Argentina. Condiciones y perspectivas*, n°14, Informe trimestral, otoño, Buenos Aires.

CENDA. 2008b. “La pobreza hoy: evolución mapa y perfil de quienes viven en situación de pobreza en la Argentina”, en *El Trabajo en Argentina. Condiciones y perspectivas*, n°14, Informe trimestral, otoño, Buenos Aires.

Costa, Augusto, Axel Kicillof y Cecilia Nahón. 2004. “Las consecuencias económicas del Sr. Lavagna. Dilemas de un país devaluado”, en *Realidad Económica*, n° 214, IADE, Buenos Aires.

Fal, J., Pinazo, G. y Lizuaín, J., (2009), “Notas sobre la postconvertibilidad: los límites a la mejora en las condiciones de vida de los sectores populares”. *Revista Periferias*, año 13, n° 18.

FISyP. 2009. “Informe de coyuntura. Primer trimestre 2009”, Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, Buenos Aires, en <http://www.fisyp.org.ar/WEBFISYP/INFCOY.doc>.

Fundación observatorio PYME, (2008), “Informe 2007/2008. Evolución reciente, situación actual y desafíos futuros de las PYME industriales”, en Fundación Observatorio PYME, Buenos Aires.

Gambina, Julio y Campione, Daniel. 2003. *Los años de Menem. Cirugía mayor*, Buenos Aires, Centro Cultural de la Cooperación.

Gambina, Julio y colaboradores. 2006. “La política económica del gobierno argentino (2003/2006)”, en <http://www.fisyp.org.ar/WEBFISYP/GTTNI.doc>.

Gambina, Julio, Antonio Lizuaín y Sergio Papi. 2009. “Consideraciones sobre la cuestión minera en Argentina”, en Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, <http://www.fisyp.org.ar/modules/news/article.php?storyid=378>.

Gramsci, Antonio. 2004. *Los intelectuales y la organización de la cultura*, Buenos Aires, Nueva Visión.

Graña, J., Kennedy, D. (2008). “Salario real, costo laboral y productividad. Argentina 1947-2006 análisis de la información y metodología de estimación”, Documento de Trabajo N° 12, CEPED–IIE–FCE–UBA, Buenos Aires.

Kulfas, Matías. 2011. *Las PyMEs y el desarrollo. Desempeño presente y desafíos futuros*, Buenos Aires, Colección Clave para Todos, Capital Intelectual.

Lavopa, A. (2007). “Heterogeneidad de la estructura productiva argentina: impacto sobre el mercado laboral durante el período 1991-2003”. DT n° 9. CEPED-UBA.

Lozano, Claudio. 2008. “Una mirada sobre la coyuntura económico y social”, IEF-CTA, en http://www.aterosario.org.ar/IMG/article_PDF/article_252.pdf.

Marticorena, Clara. 2010. “Relaciones de laborales y condiciones de trabajo en la industria manufacturera (2003-2009)”, en VI Jornadas de Sociología de la UNLP “Debates y perspectivas sobre Argentina y América Latina en el marco del Bicentenario. Reflexiones desde las Ciencias Sociales”, La Plata, 9 y 10 de diciembre.

Ministerio de Trabajo, empleo y seguridad social 2004. “Costos laborales en la Argentina 2003. Un análisis comparativo” Serie de documentos de trabajo n°1, Argentina.

Mira, Pablo y Esteban Kiper. 2009. “Políticas de Ingresos desde 2003”, en *Nota Técnica*, n°19, Empleo e Ingresos, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Ortiz, Ricardo y Martín Schorr. 2007. “La rearticulación del bloque de poder en la Argentina de la post-convertibilidad”, en *Papeles de trabajo*, Revista electrónica del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín. Año 1, n° 2, Buenos Aires.

Poulantzas, Nicos. 1981 [1976]. *Las clases sociales en el capitalismo actual*, México D.F., Siglo XXI Editores.

Poulantzas, Nicos. 2001 [1968]. *Poder político y clases sociales en el Estado capitalista*, Buenos Aires, Siglo XXI.

Santarcángelo, J. y Pinazo G., (2009a), “La sustentabilidad del nuevo crecimiento económico argentino”. Revista Realidad Económica n° 243. ISSN - 0325-1926. IADE. Argentina. Junio de 2009. Seleccionado y figura en el Alternative Press Index, pág. 792, Volumen 41 N° 1 de 2009, editado por el Alternative Press Center, Chicago, EEUU.

Santarcángelo, J. y Pinazo G., (2009b), “Análisis crítico de la reindustrialización en la posconvertibilidad: una mirada desde el sector automotriz”. Revista Realidad Económica, N° 247, IADE, Buenos Aires.

Varesi, Gastón Ángel. 2008. “La actualidad de la deuda argentina. Resolución del default, actores y políticas en el modelo post-convertibilidad, 2002-2007”, en revista *Periferias, Revista de Ciencias Sociales* n°16, pp. 111-134

Varesi, Gastón Ángel. 2009. “Empresas privatizadas y acciones estatales en el modelo post-convertibilidad, 2002-2007”, en CD del XXVII Congreso ALAS, del 31 de agosto al 4 de septiembre, Buenos Aires, UBA.

Varesi, Gastón Ángel. 2009b. “Inflación, transferencias y distribución del ingreso en la Argentina post-convertibilidad. ¿Cómo se gestan y a quiénes benefician?”, *Sociohistórica* n°26, segundo semestre 2009, Centro de Investigaciones Socio Históricas, UNLP, La Plata.

Varesi, Gastón Ángel. 2010. “El circuito productivo sojero argentino en el modelo post-convertibilidad. Una aproximación desde el enfoque de análisis regional” en *Cuadernos del CENDES* n°74, UCV, Caracas.

Varesi, Gastón Ángel. 2011. “Las políticas fundacionales del modelo post-convertibilidad”, en *Anuario de Investigación* n°1, FISyP-RLS.

ANEXO. RAMAS INCLUIDAS DENTRO DE CADA UNO DE LOS ESTRATOS PRODUCTIVOS	
Producción de Bienes Excepto Industria (Primario)	Servicios de Alta Productividad
Agricultura, ganadería, caza y servicios conexos. Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos Pesca Explotación de minas y canteras Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente Captación, depuración y distribución de agua	Hoteles Transporte por vía acuática Transporte por vía aérea Correo y Telecomunicaciones Intermediación Financiera, excepto seguros y de pensiones Actividades inmobiliarias
Industrias de Alta Productividad	Servicios de Baja Productividad
Elaboración de productos alimenticios y bebidas Elaboración de productos de tabaco Fabricación de coque, refinación del petróleo y combustible nuclear Fabricación de sustancias y productos químicos Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones Fabricación de metales comunes Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	Comercio Restaurantes Transporte por vía terrestre; Transporte por tuberías Act. De transporte complementarias y auxiliares Seguros y de pensiones, excepto seg. Soc. de afiliación obligatoria Servicios empresariales Enseñanza Servicios sociales y de salud Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento Actividades de asociaciones N.C.P Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas Otras actividades de servicio Hogares privados con servicios doméstico Organizaciones y órganos extraterritoriales Adm. Pública y Defensa; Seg. Social de Afiliación Ob.
Industrias de Baja Productividad	Construcción
Fabricación de productos textiles Fabricación de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles. Curtido y terminación de cueros; bolsos y calzado Producción de madera y productos de madera, excepto muebles Fabricación de papel y de productos de papel Actividades de edición e impresión y grabaciones Fabricación de productos de caucho y plástico Fabricación de otros productos minerales no metálicos Fabricación de productos de metal, excepto maquinaria y equipo Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. Fabricación de inst.s médicos, ópticos, de precisión y relojes Fabricación de otros tipos de equipo de transporte Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p.	Construcción
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Lavopa (2007) y el Censo Económico (1994).	



El Estado como relación social

***La búsqueda de alternativas: articulación
de lo social y lo político***



Crisis y recomposición de la hegemonía capitalista: Continuidades y rupturas (años 2001-2007)

***Beatriz Rajland
Daniel Campione
Julio C. Gambina
Marcelo Barrera
Martín Cortés***

Introducción

Nos referiremos a un aspecto específico del Estado: el de ser el momento sintético de las contradicciones del capitalismo, saliendo así de la dicotomía entre mercado y estado, que entendemos como falsa.

Por eso, interesa establecer en primer lugar, el carácter de clase del Estado desde el análisis de la relación de fuerzas y la composición de las clases dominantes y las clases subalternas, la formación del bloque histórico en el período y su estrategia de búsqueda y consolidación de hegemonía. En ese contexto, indagar sobre las continuidades y rupturas respecto al pasado reciente, tomando dos aspectos fundamentales:

Cuáles son los sujetos en lucha por la constitución de una nueva hegemonía en Argentina y la relación de lo social y lo político como unidad necesaria y base para la construcción de alternativas.

1. ¿El final de una (falaz) dicotomía? Relación Estado-mercado

(El Estado y el Mercado como referentes en la crisis)¹

Partimos en este análisis del concepto de Estado como una relación social, afectada a la reproducción del conjunto del sistema social, que reproduce (y re-procesa) a su interior las relaciones de dominación que imperan en la sociedad, para proyectarse nuevamente sobre ella. Esta concepción pretende excluir visiones instrumentalistas, que lo ven como una herramienta, exclusivamente al servicio directo de los intereses de los propietarios de los medios de producción. Pero también nos distancia de nociones que cosifican al Estado, independizándolo del resto de las relaciones sociales, colocándolo en un rol de producción y realización de los intereses generales de la sociedad.

El aparato del Estado está atravesado por los procesos sociales y posee una relativa autonomía que le permite retro-actuar sobre la sociedad y no sólo “reflejar” las relaciones que se traban en el seno de aquella. Está sometido a las exigencias de las clases subalternas y sus resultados dependen de la relación de fuerza a su interior. Es decir, el Estado tiene carácter de clase y en tal sentido interviene en resguardo y reaseguro de la política de los sectores hegemónicos, pero al mismo tiempo, es un lugar de la lucha de clases, un lugar de disputa. Por ello, es importante saber de qué relaciones sociales es portador.

Para nosotros, el Estado de las sociedades capitalistas es un Estado capitalista, y no simplemente un Estado “de los capitalistas” aunque ellos sean la fuerza social hegemónica. El Estado capitalista es producto del capital como relación social en sentido histórico, y al mismo tiempo entonces, como dijimos, es espacio de lucha disputado por las clases subalternas.

Ahora bien, ¿Cuál es la relación Estado-mercado en una sociedad capitalista? En el contexto actual: ¿Qué efectos tiene la crisis internacional sobre la vinculación mencionada? La evolución de la crisis internacional iniciada en el año 2008 ha contribuido a desatar una verdad velada desde hace tiempo pero que durante el período de hegemonía del neoliberalismo ortodoxo, especialmente desde la década de los ´80,

1 Colaboraron con los autores en este apartado: José Francisco Puello-Socarrás y Carlos Wladimir Gómez Cárdenas.

había permanecido intacta y se había convertido en una máxima de uso corriente y, hasta cierto punto, casi irrefutable: la (supuesta) irrelevancia del Estado –como institución e institucionalidad– para el funcionamiento del sistema capitalista.

Durante varios años, la idea de hacer incompatibles y mutuamente excluyentes Estado y Mercado parecía colonizar políticamente el sentido común de la época en los discursos y en las prácticas.

Las grandes controversias públicas y los debates académicos más sonados del momento fueron ilustrativos. El pensamiento político y económico dominante intentó sistemáticamente ocultar y reproducir alrededor de una dicotomía, en sus propios términos, “insalvable”, la relación: Estado versus Mercado. Bajo este credo, el Estado más que contribuir al desarrollo económico (como en la época del industrialismo desarrollista latinoamericano) era un “elefante blanco” –tal como se escribía en el tristemente célebre Consenso de Washington de 1989–, es decir, un enorme obstáculo para el crecimiento.

En América Latina y el Caribe este tipo de ideas tuvieron una gran difusión y fueron además de fácil adopción e irreflexivamente acogidas. Se sostuvo por entonces que el primer paso para salir definitivamente del subdesarrollo requería un Estado “mínimo”. Desde luego, no se omitieron posiciones que sugerían incluso ir más allá con la idea de un Estado “ultra-mínimo”² y la existencia “máxima” de los Mercados.

Aún sin conocer a ciencia cierta qué significaban los “mínimos” (o “ultramínimos”) estatales y si se trataba de reducir el tamaño de las burocracias o disminuir el “intervencionismo” del Estado y la injerencia del Gobierno o de evitar al máximo la presencia –para algunos– “asfixiante” de las instituciones públicas en el desenvolvimiento de diferentes campos económicos y sociales, las convicciones anti-estatistas convertidas en “sentido común”, estuvieron a la orden del día.

La oleada anti-estatista bajo el eufemismo del Estado (ultra)mínimo pretendía, entre otras cosas, la reducción del Estado³ (espacio de lucha y

2 Se trata de las tesis del “Estado mínimo” al estilo del monetarismo neoliberal de Friedman o propuestas extremistas del “Estado ultra-mínimo” de Nozick.

3 Junto a lo que aparece como reducción se produce una profunda reconfiguración del mismo. El Estado se “retira” de buena parte de sus funciones anteriores mientras que en otros de sus roles asume un accionar mucho más decidido y profundizado.

disputa) como la forma más conveniente para garantizar el menor protagonismo estatal y lograr imponer una menor intervención de las funciones directivas públicas e institucionales más básicas para acceder finalmente a un espacio de mayor acción para los agentes privados y del mercado, nacionales e internacionales aunque, especialmente, transnacionales.

Pero los últimos acontecimientos de esta crisis y, principalmente, cierta oleada de signo contrario provocada por los “salvatajes” parece haber destrozado la falaz idea y la falsa dicotomía que mantenía la incompatibilidad entre el Estado y el Mercado en el marco del sistema, tesis –dicho sea de paso– que continúa siendo estratégicamente ensalzada por los hoy viejos, anacrónicos y ortodoxos neoliberales durante los últimos veinte años como una forma de imponer la superioridad innata y virtuosa de las libertades del mercado.

La emergente euforia “pro-estatista” sólo resulta ser tal en su superficie. Por el contrario, el fondo del asunto previene que en lo sustancial, las cosas poco han cambiado y que la mera intervención del Estado no es muestra alguna de intentos de alternativizar la hegemonía del capital.

Lo que se persigue es paliar, regular los intereses del conjunto de la clase dominante, co-administrar en la protección de ese bloque, en definitiva “salvar” el sistema capitalista, inyectando desde el Estado la moneda que impida las quiebras, que las financie, para asegurar su futuro. Como no puede ser de otra manera en el capitalismo, el Estado le es funcional, es “socio” natural de las empresas del sistema, aunque las formas de expresión de esa “sociedad” sean diversas.

El absolutismo del Mercado sigue siendo central como referente de la organización social dominante en general y las reivindicaciones (incluso, en algunos casos en la forma de reclamos) sobre una “mayor presencia” del Estado deben ser interpretados tomando en cuenta este dato primordial.

Hay que aclarar que –en definitiva– la simpatía pro-estatal nunca ha sido una demanda por la intervención del Estado. Se trata en realidad de meros reclamos por una mayor regulación estatal, cuestiones muy distintas pero que generalmente se confunden.

Así “el (supuesto) regreso al Estado” como referente económico-político, desde este punto de vista, no implicaría la convicción de reinstalar la “acción del Estado” en la economía política global actual, una

suerte de intervencionismo estatal en detrimento del decaído “libertinaje” de los mercados. Hay que interpretarlo, mejor, como la institucionalización de la no-acción estatal (ésta última difiere de la simple inacción estatal), si se quiere, la presencia quirúrgica, selectiva y “complementaria” del Estado que evite a toda costa que su eventual protagonismo reemplace u obstruya la mayor libertad para los mercados.

2. Los años de la genealogía y apogeo hegemónico del neoliberalismo en la Argentina (1976-2001)

Es ineludible, para una acabada comprensión de la temática del Estado en la Argentina y aunque el período específico de investigación sea de 2001 a 2007, comenzar el análisis haciendo referencia al golpe de estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976, que se extendió hasta 1983, así como a las políticas que los gobiernos constitucionales que se sucedieron entre 1983 y 2001 continuaron.

El periodo dictatorial 1976-1983, se caracterizó por el planteo y puesta en marcha de un proyecto claro de reestructuración global de la sociedad. En tal sentido, se operan cambios que abarcan todos los planos, desde el económico hasta el ideológico. En lo económico, comienza un proceso de concentración y centralización del capital, enmarcado en el abandono de la estrategia de sustitución de importaciones, y la búsqueda de una nueva integración en el mercado mundial.⁴ Esa modificación del capitalismo a nivel global, se complementa con una transformación de las relaciones entre capital y trabajo, que incluye la reorganización interna de las plantas productivas. Paralelamente, se desarrolla un cambio global en los roles asumidos por el Estado,⁵ y su

⁴ En cuanto a las causas de este cambio de orientación, se ha señalado la convergencia de dos factores: a) El agotamiento de la segunda etapa de la industrialización sustitutiva (orientada a los bienes de consumo durables e iniciada en los años 50), b) La crisis capitalista mundial desatada en los primeros años 70 (Con las manifestaciones que van desde el derrumbe de la paridad dólar-oro hasta la crisis del petróleo). A estos dos factores se añade un tercero, ya en el nivel de las decisiones políticas, que fue el proyecto de alcance “refundacional” que planteó la gestión Martínez de Hoz. Se expresan en este sentido Aspiazu, et. al. (1986)

⁵ Ya en el discurso que inaugura su gestión, el 2 de abril de 1976, el ministro de Economía José Martínez de Hoz, plantea el paso del Estado a un rol de “subsidiariedad”, que implica actuar sólo allí donde la “iniciativa privada” no lo hace. Ver Jorge Schvarzer (1986). Esa prédica a favor del “Estado subsidiario” perdurará a lo largo de toda su gestión, alcanzando el rango de un principio básico.

forma de vincularse con la sociedad. Es la puesta en marcha del proyecto neoliberal.

El contexto social en la época anterior al golpe, en los 70, es el de una fuerte actividad militante política, sindical y estudiantil impulsada luego en 1973, por la asunción del presidente Héctor J. Cámpora, seguida a los pocos meses por nuevas elecciones y la asunción como presidente de Juan Domingo Perón. Aparecen claramente expresadas, por un lado las fuerzas militantes hacia cambios profundos⁶ que nacen incluso antes de los 70 y al mismo tiempo una derecha también militante que organiza los cruentos sucesos de Ezeiza a la llegada del Gral. Perón a la Argentina, disputando hegemonía e imponiendo su avance integrándose cada vez más a las instituciones del Estado. Un momento clave al respecto es cuando el propio presidente Perón hecha de la mítica Plaza de Mayo –el 1° de mayo de 1974– a los jóvenes luchadores que él mismo había impulsado años atrás, definiendo una política represiva, que va a culminar en la aparición con carácter de organismo para-militar pero de la autoría del propio Secretario de la Presidencia, José López Rega (a) el Brujo, de la organización: las 3 A (Alianza Anticomunista Argentina), responsable de atentados y asesinatos de dirigentes sindicales, intelectuales, políticos y prolegómeno de la represión instaurada por la dictadura cívico-militar en 1976.

En función de la puesta en marcha del proyecto neoliberal se produce el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 que enfrenta a un pueblo activo en la lucha, aunque ya debilitado y se propone la eliminación de cualquier atisbo de resistencia, organizando lo que se ha denominado una “política sistemática” de arrasamiento y represión, que incluyó detenciones a disposición del Poder Ejecutivo, pero cuya característica fundamental fue la de la desaparición forzada de personas, militantes y comprometidos con las causas populares, arrojados a las mazmorras de los “campos de detención o de concentración” clandestinos funcionando en sedes militares, policiales e incluso dentro de las empresas multinacionales, sometidos a torturas inimaginables, violencia sexual, violaciones, arrojados al mar, asesinados, cuyos paraderos definitivos aun se ignoran. Esa política sistemática incluyó niños y bebés nacidos en cautiverio, la mayoría apropiados y entregados a

6 Incluidas las organizaciones guerrilleras tanto montoneras (peronistas) como del ERP (marxistas).

familias que los privaron de su identidad. Un verdadero genocidio que dejó un saldo de 30.000 desaparecidos, 500 niños apropiados (105 se han recuperado), además de los presos, la usurpación y apropiación de sus bienes, etc.

Desde el punto de vista político institucional, se instauró una Junta Militar, se dejó de lado la Constitución y las leyes, el parlamento, se prohibieron partidos políticos y sindicatos, agrupaciones estudiantiles.

La reestructuración global, a la que aludimos se lleva a cabo dentro del contexto señalado. Se da impulso a una amplia acción “anti estatista”, expresada en la reducción de mecanismos reguladores, la liberación del sistema de precios y el descenso de barreras aduaneras. En materia de privatizaciones, se comienza trabajando en terrenos periféricos, o en la desestatización de sectores absorbidos por razones meramente coyunturales. Entre esas privatizaciones “periféricas”, se cuenta la concesión de áreas de explotación y servicios de transporte por parte de YPF (petróleo), algunos servicios anexos a ENTEL (telefonía), buena parte de las actividades de la Dirección Nacional de Vialidad, reparación de vías y material rodante de los ferrocarriles, y la apertura del servicio de correos a la actuación de operadores privados. Dentro de las actividades que habían sido incorporadas al Estado, se privatizaron algunos ingenios azucareros, y los frigoríficos de la CAP. Paralelamente se operó en sentido descentralizador, con la transferencia de las escuelas primarias nacionales a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,⁷ y lo mismo respecto a Obras Sanitarias de la Nación, (agua), también “provincializada”. Hay una actividad consciente, ideológica y material, de debilitamiento de la estructura estatal, de endeudamiento improductivo de las organizaciones públicas, de disminución de inversión. Se estatiza la deuda externa privada, la que sumada a la creciente deuda externa del Estado, produce un aumento ilegítimo, ilegal e impagable para 1983.

Por otro lado, se arremete contra los mecanismos de organización obrera en las fabricas (comisiones internas, cuerpos de delegados) que fueron durante décadas una fortaleza peculiar del movimiento obrero argentino.⁸ La organización de los trabajadores al interior de las unidades

7 Sin transferencia de presupuesto.

8 Ver Gilly, Adolfo (1990).

productivas va a ser destruida, con el uso directo y criminal de la violencia a partir de la “entente”: empresas-terrorismo de Estado.⁹ El resultado es que los capitalistas retoman el control pleno en las unidades productivas, amenazado virtualmente desde el primer peronismo.¹⁰ En el plano laboral más general, se emprende una verdadera batalla contra las normas protectoras de los derechos laborales, tendiente a reducir los costos de la mano de obra, por una parte, y a ampliar las facultades de dirección de los empleadores, por la otra.¹¹ La organización de los trabajadores y los trabajadores en cuanto tales, son vistos como un “enemigo a destruir”, y se propende por todos los medios a la fragmentación de las organizaciones sindicales o a su pérdida de capacidad negociadora efectiva

En medio del endeudamiento externo,¹² del persistente déficit fiscal,¹³ y del debilitamiento del mercado interno,¹⁴ y de los sectores empresarios a él dirigidos, el aparato estatal constituido a partir de 1930, queda en los comienzos de la década del 80 afectado de anemia de recursos, y huérfano de una racionalidad clara a implementar.¹⁵ La crisis

9 Investigaciones posteriores, sacarían a la luz la colusión de empresarios y “grupos de tareas” de la dictadura, para el secuestro y desaparición de delegados y activistas. En el caso de empresas en conflicto, como Ford y Mercedes Benz, comisiones internas completas son secuestradas. Por otra parte, la metodología era aplicada de manera similar en empresas públicas, siendo el caso más notorio el de Luz y Fuerza, que incluyó hasta al secretario general del sindicato, Oscar Smith. Ver Pablo Pozzi (1988).

10 Los reclamos de los capitalistas en orden a recuperar el control efectivo del proceso productivo frente al poder de delegados, comisiones internas y sindicatos, puede rastrearse hasta una fecha tan temprana como 1955, en el Congreso de la Productividad. Allí traen el tema a debate, pero no logran ponerse de acuerdo con la dirigencia sindical.

11 En primer lugar, se anulan una serie de medidas incorporadas a la Ley de Contratos de Trabajo durante el breve período constitucional anterior, y luego se la emprende contra las conquistas y estatutos especiales de los más diversos gremios, así como se aplican criterios más restrictivos en los regímenes de insalubridad, jornadas reducidas y otros. En el plano del “costo laboral”, una medida importante es la supresión de los aportes patronales en materia jubilatoria.

12 La deuda externa bruta, que ascendía a 7875 millones a fines de 1975, sufrió un fuerte incremento a partir de 1978, que la llevó a más de 35.000.000 de dólares a fines de 1982. Datos del BCRA. Memorias Anuales.

13 Como un indicador del volumen alcanzado por el déficit fiscal, puede señalarse que en el último año de dictadura, 1983, el déficit fiscal alcanza a un 16,1% del PBI.

14 El producto bruto industrial sufrió sendos descensos en los años 1980 (1,8%) y 1981 (3,9%). Datos del BCRA.

15 Juega un papel importante en este cuadro, la acción consciente de desprestigio, y virtual sabotaje llevado a cabo desde el estado mismo durante la conducción económica de Martínez de Hoz.

planteada entre las necesidades de acumulación y las de legitimación, para el Estado capitalista, se van resolviendo en la Argentina claramente a favor de la acumulación.

3. Los años de Alfonsín (1983-1989)

Producida la vuelta al régimen constitucional, el período 1983-1985 constituyó un intermedio, en que se ensaya con timidez la vuelta a políticas redistribucionistas y de desarrollo orientado al mercado interno, y se frenan las políticas dirigidas al desmantelamiento del aparato estatal que habían avanzado en la dictadura. Existen sí orientaciones a una refuncionalización de ese aparato, con un sesgo de predominio tecnocrático, centrado en la profesionalización y tecnificación del aparato estatal. La configuración estructural del Estado ingresa ya en el debate, pero bajo una perspectiva genéricamente calificable como “modernizadora”, que intenta clarificar objetivos y funciones, y ajustar su estructura en base a definiciones en esos terrenos. Este enfoque puede denominarse también “refuncionalizador”, en cuanto piensa al Estado en base a las funciones que se le asigne, y no a su “tamaño”, es decir a su participación en el producto bruto global, y más precisamente al nivel de gastos que genera. Durante ese período, el “achicamiento” del Estado, era una bandera de la oposición neoliberal, llevada adelante con fuerza e insistencia crecientes, pero que no parecía penetrar decisivamente en los ámbitos gubernamentales.

La necesidad de reformular el estado encuentra un lugar no central, pero sí importante, en la programática y el accionar inicial del gobierno del presidente Alfonsín. En cambio, desde los organismos financieros internacionales, y los demás componentes del complejo acreedor,¹⁶ se presionaba en dirección al ajuste fiscal generalizado, y en ese marco, a la reducción del aparato estatal.

¹⁶ Con la denominación “complejo acreedor” designamos la coalición de alcance mundial que se fuera configurando para tratar el problema de la deuda externa después del estallido de la crisis en 1982. La Secretaría del Tesoro, el Banco Mundial, el F.M.I., los estados acreedores nucleados en el Club de París, y los grandes bancos acreedores, fueron conformando las soluciones superadoras de la reacción inicial de efectuar exhortaciones al pago con escasas posibilidades de éxito. En su evolución, las propuestas de pago de la deuda se convirtieron en un diseño completo de reforma económica (con el sector público en un lugar central) para los países deudores.

A partir de 1985 tomó fuerza una reorientación global del gobierno, basada en el retorno al pago de la deuda externa y el abandono de medidas reformistas. Las preocupaciones de índole fiscal, en ese cuadro, se van acercando al primer plano. Gradualmente, la reducción del aparato estatal, ingresa en la agenda gubernamental y toma un papel central.¹⁷ Uno de los primeros síntomas de la adopción en la práctica de las concepciones de ajuste fiscal es que, ya en 1986, se reduce el personal de la administración pública por medio de mecanismos de retiro voluntario, y se hace participar a representantes del gran capital en la gestión de las empresas públicas.¹⁸

Hacia los años 87 y 88, se ingresó en una nueva etapa en la adopción del modelo “fiscalista” de reforma estatal. Los grandes ejes del discurso tecnocrático neoliberal sobre el tema fueron tomados como propios desde el gobierno radical y se presentaron proyectos concretos de privatización de empresas de servicios (básicamente Aerolíneas Argentinas y Entel), junto con acciones de “desregulación” y “desmonopolización.”¹⁹

El saldo fundamental de esta etapa, es que se llegó al convencimiento de que el Estado ya no estaba en condiciones de mantener un

17 Esta modificación en la agenda deriva, en buena medida, del cambio de política en torno a la deuda externa, y la consiguiente penetración de las propuestas provenientes del “complejo acreedor” en torno a la generación de recursos para el pago de la deuda. Las iniciativas de capitalización de la deuda a través de privatizaciones son decisivas en este aspecto. En el plano interno, en la medida en que se afianza la alianza con los “capitanes de la industria” las propuestas de privatizaciones, desregulación y descentralización, encuentran impulso en los protagonistas de la coalición.

18 El retiro voluntario, orientado con un criterio netamente fiscalista, ya que retira gente de todos los organismos y niveles sin prioridades de tipo funcional, marca la inauguración (en términos de medidas concretas e importantes) de la política de ajuste al interior del aparato estatal, y reduce un 10% el personal de la Administración Pública Nacional, porcentaje que luego se amplía. En lo que respecta a la inserción de los representantes del gran capital en las empresas públicas, nos referimos a la creación del DEP (Directorio de Empresas Estatales), una suerte de organismo de superintendencia, que da como resultado que algunas empresas estatales sean dirigidas (o supervisadas) por altos ejecutivos de grupos económicos, aunque no se avance todavía hacia privatizaciones de importancia.

19 Estas propuestas son lanzadas desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos por Rodolfo Terragno, portador de una concepción de reforma del Estado, enmarcada estrechamente en una propuesta global de modernización económica. Consisten en la privatización, vía asociación con compañías extranjeras que operan en los rubros respectivos, de y Aerolíneas Argentinas. Los respectivos proyectos de ley fueron rechazados en el Congreso por la oposición del PJ, que a favor de su ubicación fuera del gobierno, demoraba su adaptación ideológica y práctica a las “nuevas ideas” neoliberales.

aparato estatal tan extendido, y una gama de actividades consiguientemente amplia.²⁰ Los dos partidos mayoritarios asumieron como verdadero que su relación con el Estado no podía seguir siendo la misma que hacía cuatro décadas. La “retirada” fue el toque de clarín para el Estado, y ya alrededor de 1988, la discusión se centró más bien en la profundidad y el ritmo con que esto debía hacerse, mientras que la necesidad de privatizar, desregular, y reducir el déficit fiscal, pasaron a ser verdades aceptadas, puestas fuera de la discusión.

Las motivaciones básicas para llevar a cabo esas reformas fueron tres:

1) El pago de la deuda externa.

2) La disminución del déficit fiscal, visto cómo causa fundamental de la alta inflación.²¹

3) La supresión de trabas para la acumulación capitalista, lo que permitía abrir nuevos espacios de obtención de ganancias para el gran capital local y extranjero, así como aumentar sus posibilidades de reorganizar la producción en un sentido favorable a sus intereses. De ese modo, las acciones del estado en Argentina tendieron a ponerse en línea con la ola ideológica neoconservadora que ganaba el predominio a nivel mundial en torno a los años 80.²²

Sus funciones de “capitalista colectivo”,²³ en orden a la reproducción general del sistema, se evidencian como vacantes a lo largo del primer periodo democrático, con un estado que no acierta a definir una es-

20 En realidad, este “convencimiento” tuvo fuerte relación con las pautas fijadas en el “Consenso de Washington” para la reestructuración de las economías en orden a la solución a la crisis de la deuda externa. Por eso, a renglón seguido, colocamos al pago de la deuda externa en el primer lugar en cuanto a las motivaciones para la retirada del Estado.

21 Esto es atinente en especial en el tema de las privatizaciones, donde las transferencias a empresas y otras entidades privatizables (el sistema de seguridad social en primer lugar), fueron consideradas como una causa central del déficit.

22 Esta “ola neoconservadora” marca una diferencia sustantiva con la situación en tiempos de la dictadura militar. Mientras en torno a 1976 se podía argüir con justicia que la política de Martínez de Hoz era un experimento sólo comparable a los que estaban en curso (y desde hacía muy poco tiempo) en Gran Bretaña, Chile e Israel, en la segunda mitad de los ochenta, se había agregado el éxito (visto desde su lógica interna) de las *reaganomics*, y el vuelco privatista de las experiencias social demócratas de España y Francia, entre muchos casos de los más variados países (con el limítrofe caso de Chile en sitio destacado).

23 Esta categoría se encuentra desarrollada en A. Altvater (1986).

trategia apta para contribuir a la redefinición del patrón de acumulación imperante, e incluso pierde progresivamente la capacidad para hacer efectiva sus decisiones. A todo ello se suma un deterioro generalizado de la infraestructura estatal, y de los sueldos del sector público, que derivan en un progresivo empeoramiento de la prestación de servicios, y una difundida sensación de inevitabilidad en cuanto a la ineficacia, morosidad e incapacidad de modernizarse de las organizaciones estatales. El resultado de esto último es que la gestión estatal no sólo pierde legitimidad frente al capital, sino también frente al conjunto de la población, y la “opinión pública” se vuelve un sustento de las políticas de “retirada” estatal. En torno al año 1989, las privatizaciones y la reducción del aparato estatal se habían vuelto una suerte de “causa popular”.

Todo esto se producía en el marco de las presiones externas a favor de un ajuste estructural desatadas a partir de la crisis de acumulación del capitalismo mundial, acentuada con los problemas en el pago de la deuda externa. A ello se sumaban, en el plano local, las presiones del gran capital, que buscaba consolidar su predominio económico, y construir poder político a partir de allí.²⁴ Esto en condiciones tales que, dado el estancamiento de sus otros mercados, el Estado aparecía como principal fuente de ganancias potenciales.²⁵

24 La constitución en actor político central de los sectores del gran capital más beneficiados por la reestructuración en curso, se encuentra explicada en Ostiguy, Pierre, *Los capitanes de la industria* Legasa, 1991. Este proceso puede ser interpretado como una consciente readaptación del núcleo predominante de la burguesía, a un régimen democrático-constitucional., y en ese sentido tuvo indudable éxito. Cuando hablamos de “construcción de poder político”, nos referimos a la intención de consolidar el predominio económico alcanzado, con la posibilidad de ejercer una dirección política efectiva en condiciones democráticas, lo que era un objetivo nuevo para el gran capital. Hasta 1976, la regla había sido que los grandes capitalistas recurrieran al golpe militar como “factor de corrección” de las políticas de gobiernos electos que se tornaban difícilmente controlables.

25 Otra vez haciendo referencia a esta “nueva centralidad” del mercado estatal, impulsada por el estancamiento de la actividad económica, en general, y de la industria en particular. Como proveedores, contratistas de obras y de servicios, y por variados mecanismos tendientes a generar ganancias extraordinarias, esta fuente de acumulación presionaba sobre el gasto público de modo muy importante. Las privatizaciones fueron emergiendo como una solución que permitiera al mismo tiempo reducir el gasto público y proveer fuentes de acumulación alternativas, a través de la obtención de beneficios en actividades antes estatales. A ello se sumó la supresión progresiva de todo tipo de restricciones, a través de apertura económica, liberación de precios, y condiciones muy liberales para la inversión extranjera, y “flexibilización” progresiva de las relaciones de trabajo. Ambos mecanismos, privatización y desregulación, jugaron como compensación con creces de la “pérdida” del mercado estatal para el gran capital.

Para esos intereses internos y externos, fortalecidos en la coyuntura, la refuncionalización del Estado no ocupaba una alta prioridad. Esta era sí asignada a la implantación de políticas de ajuste que implicaban el desmantelamiento de buena parte del aparato de intervención empresario y de regulación social que se hallaba en manos del Estado. Desregulación y privatización pasan a ser los reclamos centrales en el campo del sector público, dentro de una reestructuración que abarcaba la reorientación exportadora de la economía, el retiro de las regulaciones monetarias y fiscales, la generación de mecanismos novedosos de pago de la deuda (privatización con capitalización), y la disminución del nivel de “tutela” de las relaciones capital-trabajo. Estos requerimientos se potenciaban a través de planteos más globales, que procuraban revertir el creciente peso del sector estatal, al que se percibía como un obstáculo para la acumulación capitalista.²⁶ En verdad, se estaba asistiendo a la combinación de una lógica local de concentración capitalista, facilitada por una prolongada ofensiva de los sectores dominantes, y otra mundial, de un cambio del patrón de acumulación que abarca desde el proceso de trabajo (fin de la era fordista de producción en masa basada en una línea estandarizada), hasta la configuración de los mercados a nivel mundial (masiva internacionalización en un cuadro de mercados segmentados para una mayor variedad de bienes),²⁷ y el cuestionamiento abierto a las colisiones producidas entre la lógica de acumulación y la del Estado de Bienestar, al que se lo veía afectando a la ganancia capitalista por varias vías.²⁸

4. La década menemista: cirugía mayor (1989-1999)

Con el regreso del peronismo al gobierno, en 1989, la discusión en torno al desmantelamiento del Estado quedó resuelta desde el ini-

²⁶ Nos referimos a la entronización de un pensamiento neoconservador que plantea la devolución al mercado de funciones “usurpadas” por el estado, y denuncia a las políticas keynesianas y de bienestar social como causantes de estancamiento del proceso de acumulación, que sobreviene al agotamiento del ciclo largo de crecimiento posterior a la postguerra.

²⁷ Estas transformaciones a escala mundial son planteadas por Benjamín Coriat (1988 y 1991).

²⁸ El crecimiento del aparato estatal producido a lo largo de décadas de políticas de intervención, y la escasa capacidad para frenar las reivindicaciones económicas de los sindicatos por parte de ese mismo aparato, genera una situación potencialmente crítica que hace eclosión cuando las condiciones que permitieron el crecimiento sostenido de las economías capitalistas se agotan a fines de los años 60. Un buen análisis a este respecto lo efectúa John Holloway (1993).

cio a partir del planteo de que la extrema agudización de la crisis, presentaba un escenario propicio a la ejecución de una política de ajuste en su versión más extrema. Ya con vistas a las elecciones presidenciales de 1989, la Unión Cívica Radical había adoptado un programa neoliberal, que en sus líneas centrales, resultó similar al aplicado después por el presidente Menem.²⁹

En tal sentido, analizamos las políticas llevadas adelante por la administración menemista (1989-1999) como un proceso que contiene dos aspectos principales:

1. Cambio en funciones que el Estado aun desempeñaba a la época, que significaron tanto el abandono de políticas de carácter social, orientadas a reasignación de recursos y cierta redistribución de la riqueza, como la adopción de políticas orientadas a la regulación del proceso de acumulación capitalista y a la intervención directa en el mismo.

2. Configuración de un nuevo modelo de accionar estatal, que disminuía aceleradamente los roles en la producción de bienes y servicios y en la regulación de la actividad económica, pero contaba con una gran concentración de poder orientado a producir una reformulación global de la estructura de acumulación del país.

En el año 1989 dos leyes sancionadas por el Congreso nacional operaron como los vehículos jurídico-institucionales que permitieron que se iniciara el proceso de reformas estructurales: la de Reforma del Estado (N° 23.696) y la de Emergencia Económica (N° 23.697). Mientras que esta última “suspendió” por 180 días (aunque luego se renovaría indefinidamente) la política estatal de los regímenes de promoción industrial, regional y de exportaciones así como otros subsidios y subvenciones a las empresas (art. 2), reformó la Carta Orgánica del Banco Central con el fin de otorgarle “independencia funcional” con respecto al Poder Ejecutivo (art. 3) y dio los primeros pasos en materia de flexibilidad laboral (art. 44), la primera permitió una expandida política de privatizaciones³⁰

29 Nos referimos al programa electoral del candidato presidencial del radicalismo, Dr. Angeloz. De hecho, esa plataforma fue elaborada por un grupo de economistas de filiación radical (López Murphy, Mezzadri, Sturzenegger), que con posterioridad a 1991, mantuvieron un sostenido apoyo al plan de convertibilidad, pese a la opinión contraria de la mayoría de su partido, incluidos otros grupos de economistas.

30 Es de destacar que ya en la última dictadura militar (1976-1983), se efectuaron lo que la literatura especializada denomina con el término de “privatizaciones periféricas”, esto es, la

y concesiones parciales o totales de las principales empresas públicas de propiedad estatal (Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Aerolíneas Argentinas, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Ferrocarriles Argentinos, complejos siderúrgicos, etc.).

Tales transformaciones estructurales generaron una redefinición de la relación entre el Estado y el mercado, de tal modo que, a la par que produjeron una formidable transferencia de capitales del sector público al privado, se modificó en detrimento del primero la distribución de responsabilidades asignadas a cada una de los sectores.

El proceso privatizador, comienza de modo bastante desordenado con la privatización de las empresas de comunicaciones (ENTEL) y de aeronavegación (Aerolíneas Argentinas). Con algunos reajustes en los procedimientos, la “retirada” del Estado proseguirá a todo ritmo (servicio de electricidad, agua y gas, empresa petrolera, servicios ferroviarios, etc.). En definitiva –en el marco de la instalación del denominado “discurso único”³¹–, y mediante sucesivas declaraciones de “sujeta a privatización” en el marco de la Ley de Reforma del Estado, u otros procedimientos legales (entre ellos la “venta en Bolsa” de las acciones de YPF fue el más importante) las privatizaciones avanzaron mas allá aún de las previsiones iniciales del gobierno.³²

La meta buscada en este campo ha sido que el Estado Nacional deje de prestar servicios de modo directo, “descargándose” así de demandas

infiltración selectiva de la inversión privada en las empresas estatales de pequeñas dimensiones a través de concesiones y tercerización de actividades selectas. Por lo tanto, si bien el menemato genera un salto cualitativo en este aspecto, es otro elemento de continuidad con la política económica de la última dictadura militar.

31 La expresión discurso único remite a un sistema de ideas que reproduce los valores y nodos conceptuales troncales del denominado “Consenso de Washington”. El discurso único a la par que se volvió verdaderamente hegemónico en hacia fines de los años ochenta y comienzos de los años noventa, operó como un discurso legitimante de las transformaciones neoliberales ocurridas en ese momento histórico.

32 En menos de cuatro años se privatizaron la empresa de aeronavegación, los teléfonos, la principal empresa petrolera del país, mil kilómetros de la red vial, la generación y distribución de electricidad, la distribución y el transporte de gas, la red de distribución de agua y sistema cloacal, empresas petroquímicas, ramales y líneas de ferrocarriles, elevadores terminales de puertos, dos acerías, tres fábricas militares, el mercado de hacienda, dos canales de televisión, numerosas áreas para la explotación de combustibles, etc. en un proceso que se inició efectivamente avanzado el año 90, y cobró acelerado impulso una vez iniciado el Plan de Convertibilidad. Ver Mabel Thwaites Rey (1994).

que tendían a caer en su órbita. En tal sentido, en materia de educación se produjo el traspaso de la educación secundaria y terciaria no universitaria a los Estados provinciales (los cuales se encontraban con fuertes déficit presupuestarios), así como también el aumento de autorizaciones de funcionamiento a universidades privadas, todo lo cual no sólo produjo un deterioro pronunciado de la educación pública y un aumento de la matrícula en el sector privado, sino que cambió el eje de un sistema educativo que hasta la década del 70 estuvo incuestionablemente estructurado a partir del Estado nacional. En lo que respecta a la salud, hubo un notable incremento de la medicina prepaga y otras modalidades comerciales, lo que generó un virtual “mercado” de la medicina. En ambos casos el denominador común es el deterioro manifiesto de las prestaciones estatales.

De tal forma, que las funciones que pasó a cumplir el Estado Nacional se centraron en dos direcciones principales:

a) Las más tradicionales del “Estado-gendarme” (defensa, seguridad interior, justicia, recaudación y manejo de la hacienda pública), acompañadas por funciones de regulación y supervisión del sistema educativo y sanitario, en el que ya casi no presta servicios directos y b) Una serie de actividades ligadas a la planificación y la coordinación de la economía (relaciones económicas internacionales, manejo de la deuda externa, negociación con los empresarios de diferentes ramas productivas, superintendencia de las actividades financieras), dentro de las pautas marcadas por la reforma estructural, y que tendían a concentrarse en la órbita, directa o indirecta, del Ministerio de Economía.³³

En definitiva, a partir del año 1985, el Estado argentino, en condiciones de democracia constitucional, se transformó al compás de un proceso de ajuste estructural. En dicho proceso, su “retirada” de funciones sociales, de regulación de mercados, y de producción de infraestructura productiva, se convirtió en un imperativo para abrir una acumulación que abandonara de modo definitivo el patrón anterior. El papel del Estado en la prestación de servicios públicos, el fomento industrial, la producción de bienes de valor estratégico, la investigación al servicio del desarrollo científico técnico, y otras funciones enumeradas

³³ Todo el mecanismo de elaboración presupuestaria y su posterior ejecución ha sido objeto de una compleja regulación, que incluye una detallada normativa y la consolidación de estructuras tecnocratizadas encargadas de operarlo. La Oficina Nacional de Presupuesto, en el ámbito de la Secretaría de Hacienda, ha cobrado un papel protagónico en ese campo.

en su momento, fueron consideradas como anacrónicas en bloque, por la predica anti estatista ya ampliamente predominante que propugnaba la devolución al mercado de toda su libertad de acción.

Ese proceso de “retirada” general del Estado, fue el correlato institucional de un proceso de concentración y centralización de capital, acompañado por una internacionalización de la economía argentina que se tradujo en la entrega creciente de parcelas de poder económico y aún político al capital financiero internacional, proceso en el cual la existencia de la deuda externa jugó un papel primordial.

De allí emergió un Estado debilitado en sus posibilidades de regulación y de equilibrio social, aunque conservara un grado de eficacia importante en la protección de los intereses capitalistas.

La continuidad en las políticas neoliberales no sólo “impactó” de manera negativa en el Estado, sino que también produjeron intensos efectos negativos en la sociedad: generaron una profunda disgregación y desalarización de la clase obrera, así como un notable proceso de fragmentación y empobrecimiento de las clases populares “en su conjunto”, proceso que tiene como uno de sus aspectos más relevantes, los altos niveles de desocupación, subocupación, precarización e informalización laboral que se hubieran registrado en décadas.

Asimismo, el inédito aumento de la desocupación y el descenso de la participación de los asalariados en el ingreso nacional –hacia 1994 los dos deciles más bajos de la distribución del ingreso mostraban una participación menor que la que tenían en 1991 (Lo Vuolo y Barbeito, 1998)– consolidó e incluso profundizó una estructura social cuya incubación y primeras expresiones se remontan a mediados de la década de los setenta, una estructura que, a contrapelo de nuestra historia, se caracterizó por el alto grado de fragmentación, segmentación y dualización.

5. La Alianza en el gobierno (1999-2001)

Cuando los partidos de la Alianza (UCR-Frepaso) llegaron al gobierno,³⁴ a partir de diciembre de 1999, intentaron llevar a la práctica la conjunción de medidas moralizadoras y de afianzamiento de

³⁴ La formula presidencial estaba compuesta por Fernando De la Rúa (candidato a presidente en representación de la UCR) y Carlos “Chacho” Alvarez (candidato a vicepresidente en representación del Frepaso).

la legalidad y las instituciones, con políticas económicas del mismo signo que las de los gobiernos anteriores. Se aplicaba así un diagnóstico sesgado del proceso argentino vivido en la década de los 90: El problema del país era visto básicamente como de ética de su dirigencia política, y de afianzamiento de las instituciones republicanas. El sentido de las políticas en curso, en cambio, era apreciado como una indispensable modernización, que dejaba a sus ejes fuera de cuestión. El corolario de esta apreciación era que lo que debía superarse era un conjunto de “excesos” llamados simplificadoramente “menemismo”, y que las reformas estructurales debían continuar, profundizándose, “moralizándose” y “emprolijándose”. El capitalismo concentrador y excluyente quedaba fuera de duda, y el nuevo gobierno (en realidad ya desde la campaña electoral), se proponía como autor de la “segunda generación” de reformas.

Sin embargo, ya no contarían con la unanimidad de las clases dominantes. El gran capital, desde aproximadamente 1995, quedó atravesado por un eje de enfrentamiento público entre “empresarios productivos” de la industria y del agro, por un lado, y las finanzas y los servicios públicos por el otro, a propósito de tasas de interés, tarifas de los servicios públicos, protección arancelaria. En realidad era sólo la manifestación de superficie de desacuerdos más complejos y de la falta de capacidad por trazar una estrategia desde el aparato estatal, que no siempre responden a ejes sectoriales, difíciles de establecer entre conglomerados económicos con frecuencia muy diversificados. Y tampoco se podía contar con la tolerancia de la mayoría de la población hacia un estado de cosas que sólo le prometía más y mayores privaciones. Terminado el efecto activador ejercido por la conjunción de las privatizaciones, la detención del proceso inflacionario y el consiguiente aumento del consumo, y la afluencia de inversiones favorecidas por el nuevo contexto de apertura y desregulación, el panorama económico favorable se fue revirtiendo, hasta caer en un marasmo difícil de superar. El efecto conjugado de recesión en el mercado interno, atraso cambiario que desfavorecía las exportaciones y facilitaba las importaciones, endeudamiento creciente, crisis fiscal persistente, llevó al país al borde del derrumbe económico, en medio de tasas de desocupación que fueron ascendiendo hasta superar el 20%, y creciente deterioro de los salarios. La ecuación entre continuidad de la estrategia de desarrollo elegida (plan de “convertibilidad” incluido),³⁵ y modificación de las tácticas abu-

35 El nombramiento de Domingo Felipe Cavallo -símbolo privilegiado del gobierno de Carlos Saúl Menem- al frente del Ministerio de Economía, es un claro síntoma de ello.

sivas empleadas para consumarlas, no funcionó, y el nuevo gobierno no tardó en aparecer como una continuidad del anterior en todos los aspectos importantes, con el agravante de que se había pasado de un conservadurismo frontal y decidido, a uno irresoluto y con rasgos de inoperancia.

Ello dio lugar a la profundización de la crisis económica, acompañada por una crisis política creciente, expresada como crisis de representación política, una crisis social y cultural, o sea una crisis totalizadora. Una crisis integral del sistema de dominación que fue claramente visible en las elecciones del 14 de octubre de 2001 que expresó uno de los más fuertes repudios que conociéramos a la forma tradicional de política y representación y que se manifestó en todo su esplendor en las históricas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.

6. 19 y 20 de diciembre de 2001: crisis de hegemonía (2001-2002)

Antes de abordar y describir empíricamente las históricas jornadas de diciembre de 2001, las cuales, –cabe mencionar– tuvieron como epicentro la Ciudad de Buenos Aires pero se desarrollaron en todo el país, nos parece prudente, en primer lugar, desarrollar un conjunto de notas teóricas en torno a ciertas categorías políticas centrales. Las mismas permitirán comprender más claramente el significado social y político que las jornadas señaladas encerraron.

Los intentos por parte de las clases dominantes por homonimizar representación política con democracia, considerando la representación política en cuanto a régimen político como democracia representativa, constituyen una ficcionalidad. Lo parlamentario-electoral, aparece cómo su única o más valorada expresión, ignorando sus contenidos sustanciales o privándola de ellos.

Tratando de imponer ese criterio se le ha otorgado carácter de universalidad a las instituciones del liberalismo político: sufragio y parlamento (resultado de la representación), ignorando las particularidades socio-culturales y políticas así como las concepciones ideológicas que la controvierten.

Como el “mercado”, la “democracia representativa” pretende *aparecer* como el horizonte universal y límite de nuestros tiempos. Es en ese sentido que Follari (2007) sostiene, que:

(...) La reducción de la democracia al modelo de representación parlamentaria, resulta ser funcional al modelo de libre mercado, ya que este pensamiento focaliza al sistema político a partir de la dicotomía democracia/autoritarismo, pero al reducir lo democrático a la formalidad republicana de la delegación parlamentaria de ciudadanos libres e iguales excluye por un lado la posibilidad de pensar otras formas de participación democrática y por el otro la discusión sobre igualdad/desigualdad.

Al abordar la crisis de representación política, nos referimos a la asunción –conciente o inconciente aun– por parte de la masa de ciudadanos, del verdadero carácter ficcional, ocultador, mistificador de la representación política liberal en cuanto a legitimante del poder social dominante.

La Argentina de hoy es un ejemplo acabado de la “minimización” del componente de “gobierno del pueblo” de un sistema de representación política liberal, basado en el sufragio universal. A partir de la restauración del régimen constitucional en Argentina, una de las “lecturas” más plausibles de la evolución de su régimen político, es interpretarlo como la instauración de una democracia cada vez más limitada a lo “procedimental”, no sólo en el sentido de su pérdida de toda aspiración a contribuir a una transformación social de sentido más igualitario; sino por la disminución progresiva de incidencia de la ciudadanía en las decisiones, reemplazada por una elite política.

Se puede, no obstante, decir que en Argentina hay una “estabilización” de la democracia, y en ese contexto queda pendiente el interrogante sobre qué tipo de democracia es la que se está consolidando en este período. Una respuesta tentativa es que está signada por una correlación de fuerzas ampliamente favorable a la clase dominante, manifiesta en una acumulación de poder por parte de ésta, tanto en el plano económico como en el político y cultural.

El gigantesco proceso de privatizaciones que tuvo lugar, fue base fundamental, pero no única, de un nuevo ‘posicionamiento’ de los grandes conglomerados empresarios, que recibieron el control de empresas de comunicaciones, transporte y servicios públicos, bancos antes públicos, algunas grandes plantas industriales hasta ese momento de propiedad estatal, medios de comunicación; y la empresa de mayor

envergadura del país, la petrolera estatal YPF. La ‘desregulación’ de los mercados de bienes y capitales, la ‘flexibilización’ de las relaciones laborales en sentido siempre favorable al incremento del poder patronal y la disminución de los derechos y conquistas de los trabajadores, la ‘apertura’ a las importaciones de bienes y al ingreso de capitales externos, acompañaron a las ‘privatizaciones’, consolidando la orientación económica y social y sus consecuencias referidas a los sectores populares.

Así, la evolución del desempleo fue una de las más elevadas de la historia del país, o al menos desde que se llevan registros confiables. En mayo de 2002 llegó a situarse por encima del veintiuno por ciento. (Datos Indec. <www.indec.gov.ar>)

En 1995 la proporción de hogares pobres registró un aumento de un 24%, revirtiendo la tendencia al descenso desde 1989 (año que marcaba un punto altísimo, en medio de la crisis hiperinflacionaria). En 1995 se estimaba en un 21% el porcentaje de hogares del G.B.A que se encontraba por debajo de la línea de pobreza, en tanto que un 15,3% tenía sus necesidades básicas insatisfechas. Esto se potencia con el abandono de las políticas sociales universales y su reemplazo por el gasto social focalizado. Cf. Svampa, Maristella y Martuccelli, Danilo (1997:43).

Podría no estar claro en situación de crisis, el *por* qué pronunciarse, ya que hay ausencia de alternativa, pero sí se puede intuir *contra* qué se está. Esto de ninguna manera, implica la existencia concreta de una salida necesariamente positiva de la crisis. Hay muchos factores que intervienen o deben intervenir para que la acción de los sujetos concientes se concrete positiva y no regresivamente.

Lo que iba quedando claro hacia el 2001 en la Argentina, es que una de las consecuencias de la crisis de la representación política, era el rechazo hacia la política en general, pero sin asumir asunción alternativa, lo que contribuye, sin duda a su prolongación, a su irresolución.

6.1. 19 y 20 de diciembre de 2001: "los hechos"³⁶

En lo que sigue describiremos brevemente los principales hechos que llevaron a configurar articuladamente las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, para luego, realizar un breve análisis (con características de balance) teórico-político de las mismas (Barrera, Cáceres y Giellis: 2009).

En la noche del domingo 2 de diciembre de 2001, el entonces presidente Fernando De la Rúa junto con el ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, anuncian formalmente por cadena oficial radial y televisiva, un conjunto de medidas económicas, de las que destaca la limitación para el retiro de dinero de las cuentas bancarias por el o los titulares (medida denominada popularmente como "corralito").³⁷ Al día siguiente, y por un plazo máximo de 90 días –según la vigencia que se estipulada tendría la medida–, sólo se podría retirar 250 pesos convertibles semanales o 1.000 mensuales por cuenta bancaria.

Como respuesta popular a los anuncios, desde el día posterior a los mismos hasta las históricas jornadas del 19 y 20 se sucedieron una serie de protestas que asumieron distintas modalidades expresivas (actos, movilizaciones, ocupaciones de edificios públicos, cortes de calle y rutas, saqueos, etc.) y fueron protagonizadas por diversos actores (trabajadores ocupados y desocupados, estudiantes, profesionales, etc.).

En el marco de ascenso de las protestas, el día 19 de diciembre el Presidente De la Rúa dictó el decreto estableciendo el estado de sitio. Este acto desató la movilización de grandes columnas de manifestantes hacia la Plaza de Mayo de distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, en abierto desafío al gobierno, este tipo de manifestación se repite en las principales ciudades del país. En la Ciudad

36 No es nuestra intención realizar en los párrafos que siguen un inventario exhaustivo de todos los hechos gestados en diciembre de 2001. Este apartado tiene como objetivo contextualizar el análisis posterior con el fin de dotar de una suerte de "hoja de ruta" al lector que no se encontrara familiarizado con los hechos de diciembre. Para un análisis pormenorizado de las acciones de protesta ocurridas en diciembre ver Iñigo Carrera y Cotarelo, 2006.

37 Las otras medidas anunciadas fueron: 1) Dolarización voluntaria de los plazos fijos a su vencimiento. 2) Dolarización voluntaria de los créditos bancarios. 3) Imposibilidad de cobrar o pagar las tasas de interés en pesos mayores que en dólares. 4) Todos los nuevos créditos debían ser instrumentados en dólares. 5) Las transferencias al exterior que no correspondieran a operaciones de comercio exterior o al pago de consumo de tarjetas de crédito emitidas en la Argentina debían ser autorizadas por el Banco Central.

de Buenos Aires se produce un enorme cacerolazo al que se suman las bocinas de los autos extendiendo así la protesta a toda la ciudad.³⁸ Pero estas manifestaciones no concluyen ese mismo día. El cacerolazo del 19 continúa durante la madrugada del 20.

Los centros políticos nacionales en la Ciudad de Buenos Aires: la Plaza de Mayo y la Plaza de los Dos Congresos, devienen escenarios de diversos tipos de movilizaciones y manifestaciones. Los manifestantes golpean cacerolas y otros “elementos sonoros”, al tiempo que cantan el Himno Nacional y gritan “Que se vayan todos”. Poco después de la 1 de la madrugada, mientras los miles de manifestantes, hombres, mujeres, familias con sus niños, festejan la renuncia del entonces ministro de Economía Cavallo, la Policía Federal inicia la primera “ola” represiva de la jornada con gases lacrimógenos para despejar la Plaza de Mayo, provocando el desplazamiento forzado de los manifestantes hacia la Plaza Congreso.

A las 4 de la madrugada, ante una nueva embestida represiva de las fuerzas policiales –en el que un manifestante resultó herido de balazos– los manifestantes se desconcentran. En la mañana del 20 de diciembre, se produce otro ataque policial que dispersa nuevamente a los manifestantes por las calles aledañas. Miembros de distintos organismos de derechos humanos, entre ellos las Madres de Plaza de Mayo, –quienes también son reprimidas salvajemente–, se concentran en la plaza de Mayo. Los participantes de esta gesta popular, resisten la represión policial que ya abarca no sólo la Plaza de Mayo, sino prácticamente todo el centro político de Buenos Aires. En él se desarrollarán por más de veinte horas, escenas de violencia desde el accionar policial contra los múltiples actores parte de esta movilización (organizaciones de desocupados, estudiantes, motoqueros, diversos partidos de izquierda, organismos de derechos humanos, entre otros).

A media tarde el presidente De la Rúa “habla por televisión llamando a un acuerdo y ofreciendo al justicialismo, con mayoría en ambas cámaras, participar en un gobierno de unidad nacional”.³⁹ El Partido Justicialista rápidamente rechaza el ofrecimiento.

Simultáneamente, la CGT oficial y la CGT disidente convocaron a un paro general. Por su parte la CTA (organización sindical alternativa

38 Iñigo Carrera y Cotarelo 2006: 76-77.

39 Ibid, p. 85.

a la burocrática), convocó a un paro extendido hasta el 21 de diciembre. Finalmente, presionado por la movilización popular, al no lograr un acuerdo con el Partido Justicialista y con los grupos económicos que pugnaban por la devaluación del peso, el gobierno de la Alianza renunció en pleno. El saldo de las jornadas de verdadero levantamiento popular de los días 19 y 20 de diciembre de 2001, fue verdaderamente cruento: 33 personas asesinadas, prácticamente “fusiladas” en todo el territorio nacional por parte de las fuerzas represivas del Estado, no llegando a establecerse judicialmente, hasta la actualidad, la autoría política e intelectual de esas acciones.

6.2. 19 y 20 de diciembre: un análisis

No hay dudas acerca de que las jornadas del 19 y 20 de diciembre fueron un hecho histórico, un punto de inflexión para cualquier tipo de análisis teórico-político-ideológico. Por primera vez una rebelión popular fue la parte activa que contribuyó a voltear a un gobierno constitucional. Antes era una tarea de los militares, o producto de un golpe económico del gran capital. Claro, siempre era una combinación de esos factores: militares y poder económico. En esta ocasión fue la contribución activa del pueblo movilizado la que contribuyó a la caída del gobierno de De la Rúa.

Esto hacía parte de algo nuevo, de una creciente conciencia política de convocatoria para abordar los problemas y los padecimientos populares, aun no suficiente, quizás incipiente, pero real.

En lo inmediato las protestas de diciembre fueron la respuesta a la instauración del corralito, pero rápidamente el sentido de las mismas se expandió notablemente. Es que con el “que se vayan todos” se cuestionó a todo el régimen político, es decir, a la Corte Suprema de Justicia, al Parlamento, en definitiva, a la mal denominada “clase política” en su totalidad. Pero ¿quién dirigió la protesta? Nadie claramente, y cada quién donde pudo en la medida del protagonismo en los acontecimientos. No se puede comprender la pueblada, sin dar cuenta de la diversidad convergente de modalidades de resistencia y protesta. El pueblo se manifestó con formas inéditas y creativas, ingeniosas y combativas, y enfrentó el estado de sitio y la represión, formas de expresión de la afirmación omnipotente del poder de la clase dominante, que muchos ni siquiera conocían o habían experimentado antes.

Lo más visible fue el cacerolazo, que se atribuye a capas medias urbanas y a una masa de actitud previa silenciosa, cuyo antecedente inmediato anterior fue el aludido voto bronca en las elecciones de octubre, principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.⁴⁰ Pero también hubo saqueos durante la gesta popular del 19 y 20 de diciembre e incluso antes. Hay quiénes sostienen que éstos fueron inducidos por punteros del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y desde ese razonamiento objetan un movimiento de miles de personas que, más allá de todo, actuaron para satisfacer sus necesidades afectando el corazón del régimen capitalista: la propiedad privada. Es cierto que algunos afectados fueron pequeños propietarios y que los grandes tuvieron especial custodia de la policía, pero buena parte de las acciones fueron realizadas por organizaciones que remiten al territorio y les sirvió para afianzar iniciativas colectivas que potenciaran la identidad organizativa de tipo territorial.

El cuadro se completó con movilizaciones y convocatorias orgánicas de partidos de izquierda, de organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, etc. También, de una masa juvenil muy aguerrida, acostumbrada a confrontar cotidianamente contra la prepotencia policial en los barrios, canchas o lugares de concentración popular.

Las acciones realizadas remiten a un conjunto diverso de iniciativas e individuos y organizaciones que constituyeron de hecho un sujeto social activo que enfrentó al gobierno y al poder, aunque haya sido por razones muy distintas. Algunos salieron contra el “corralito” bancario, otros salieron porque ya estaban en la lucha. Son los que conformaron en parte el activo social que protagonizó la resistencia frente al menemismo en los años noventa. Venían de cortes de calles y de rutas, o de acompañar a las Madres de Plaza de Mayo los jueves, o las convocatorias diversas de las organizaciones de derechos humanos. Fueron piqueteros o huelguistas, con las cosas claras o no. Militantes de la resistencia en definitiva.

Mucho se ha discutido en torno al carácter espontáneo u organizado de la rebelión popular. En tal sentido creemos que si bien no es

40 En las elecciones a legisladores realizadas el 14 de octubre del año 2001 se registraron altos índices abstención, voto en blanco y voto voluntariamente impugnado (introduciendo algún objeto, personajes de historieta, etc.) o también denominado “voto bronca” (que obtuvo un 23, 36 por ciento).

posible sostener el carácter organizado de la misma tampoco es correcto sobreestimar su espontaneidad. En tal sentido es relevante destacar que es claro que lo “espontáneo”, siempre en realidad, es relativamente espontáneo, no está vaciado de antecedentes, de prolegómenos, de hechos y luchas previas que contribuyen a la expresión que finalmente brota. Algunas de las luchas y experiencias organizativas previas más relevantes al 19 y 20 de diciembre son: los piquetes en Cutral C6 y Plaza Huincul en el a6o 1997, la conformaci6n de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Marcha Grande por el Trabajo en junio y julio del 2000, entre muchas otras experiencias de luchas, resistencia y organizaci6n que emergieron “desde abajo”.

Debe hacerse menci6n tambi6n del plesbiscito realizado el 14 de diciembre de 2001 por el FRENAPO (Frente Nacional contra la pobreza) de voluntaria participaci6n masiva.

La rebeli6n tuvo un serio limite ligado a la ausencia de una alternativa pol6tica que pudiera canalizar pol6ticamente la rebeli6n popular. Si bien la pueblada no consigui6 una renovaci6n profunda de la clase dirigente, ni mucho menos hacerse con el poder del Estado, s6 se logr6 tanto limitar la autonomizaci6n o distanciamiento de la “clase pol6tica” con respecto a las demandas populares, como tambi6n poner un freno a las pol6ticas de ajuste sistem6tico, dejar planteado el rechazo a las pol6ticas neoliberales. Los gobiernos constituidos inmediatamente a posteriori lo hicieron legalmente, pero con menor legitimidad. En tal sentido, no es posible comprender las “reformas” adoptadas por los gobiernos que le sucedieron sin recalcar en la profunda huella surcada por aquellas jornadas.

7. La necesidad de la articulaci6n de lo social y lo pol6tico: un l6mite a trascender por parte del campo popular

Una preocupaci6n central surgida al calor de las jornadas de diciembre, es la referida al tema de la relaci6n entre lo social y lo pol6tico y particularmente entre el movimiento social y el pol6tico expresado org6nicamente en movimientos sociales y partidos pol6ticos.

El 19 y 20 de diciembre de 2001, fue claro el rechazo a la pol6tica profesionalizada y a las organizaciones verticales y jer6rquicas, que se hicieron evidentes en esas jornadas.

Sin embargo pese a lo positivo de la reacción, esta concepción (llevada a ultranza) y como luego analizaremos, puede conducir a rechazar toda implicación con el Estado y con la idea de ‘lucha por el poder’, corriendo el riesgo de impedir que los movimientos se expandan del plano económico-corporativo hacia la lucha política.⁴¹

En tal sentido, cabe destacar que

(...) Consideramos (...) que la articulación de lo social y lo político, ya no meramente de los movimientos sociales y políticos como entidades diferenciadas sino de lo social en lo político y de lo político en lo social, es la piedra angular de la construcción de sujetos sociales capaces de producir los cambios reales dirigidos a la ruptura sistémica (Rajland, 2007:386).

En la Argentina, esa relación se mostró desarticulada para la época, lo que se tradujo en cierto rechazo de lo político y/o la política, desde parte del movimiento social, identificando política con prácticas orgánicas tradicionales, que expresan la ficcionalidad respecto a la representación y el sufragio, pero que al mismo tiempo llevó a esas organizaciones críticas, a dejar de lado la cuestión fundamental del poder político.

Es así que los principios de autonomía y horizontalidad levantados desde esos sectores, partiendo de una premisa crítica justificada, al ser sostenidos a ultranza llevaron frecuentemente a traducirse en apartamiento del conjunto social, de la construcción común de alternativas y de la idea de *lucha por el poder político*, restringiendo el espectro de posible expansión y de articulación de lo económico-social-reivindicativo con lo político o la lucha política conciente, sin perjuicio de que no obstante, se hubiera avanzado en términos de formación de conciencia colectiva.

Faltó y falta, por tanto, la articulación política de las luchas sociales, que se traduzcan en propuestas o alternativas de carácter *universal*, dirigidas hacia transformaciones políticas. Y aclaramos que referirse a articulación significa para nosotros hablar de *estrategias*, y no de meras tácticas de coyuntura que a menudo se expresan en coordinaciones y que pese a ser importantes, no importan cambios estructurales como los estratégicos.

41 Ver Campione, Daniel (2003).

7.1. Lo social y lo político y lo que surge de la realización de algunas entrevistas.

En el marco de esta investigación se realizó un trabajo de campo que incluyó seis experiencias organizativas del campo popular: una organización inscripta en el campo de la lucha por la defensa de los derechos humanos (Liga Argentina por los Derechos del hombre – LADH), una cooperativa de trabajo (Hotel Bauen, autogestionado), una asamblea popular (Asamblea de Flores-Ciudad de Buenos Aires) y tres organizaciones de trabajadores desocupados o piqueteros (MTD de Solano, Movimiento Evita, Federación de Tierra y Vivienda-FTV). , En las mismas, realizamos entrevistas en profundidad a sus principales dirigentes o referentes. Retomamos aquí los párrafos más relevantes de las mismas, confrontando lo expresado por todas y cada una de las organizaciones.

El miembro del *Movimiento de Trabajadores Desocupados de San Francisco Solano (Provincia de Buenos Aires)* entrevistado, habla de la “...necesidad de articulación con otras experiencias similares” rechazando cualquier articulación con partidos políticos sin excepción, ni viejos ni nuevos.

En cambio los miembros entrevistados pertenecientes tanto al *Movimiento Evita* como a la *Federación de Tierra y Vivienda (FTV)* consideran particularmente la necesidad de vinculación con las organizaciones sociales y políticas afines a los sectores del partido justicialista hoy en el gobierno.

Los de la *cooperativa Bauen* se refiere a la necesidad de vincularse con otras empresas recuperadas y otros movimientos para *presionar* al gobierno afirmando que “(...) no es un partido político ni es una organización (...)” y considerando que hay que encontrar cómo “(...) esa expresión social que está bastante organizada en el país y que son las empresas recuperadas, el movimiento de desocupados, movimientos sociales que hacen viviendas, que construyen un barrio entero, las cooperativas agrícolas, todo eso tiene que encontrar una expresión electoral”.

Los de la *Asamblea de Flores* dicen tener

“articulación con la Confederación de Trabajadores de la Argentina (CGT) y con otras organizaciones territoriales que realizan un trabajo social y cultural en los barrios”.

Mientras que los representantes del *Movimiento Territorial de Liberación (MTL)*, declaran que

“(...) intentan construir un movimiento político-social contra-hegemónico (...) un movimiento que ensayara construcciones de poder popular”.

Graciela Rosemblum, presidenta de la *LADH*,⁴² sostiene que

“(...) si no hay articulación de partidos políticos y movimientos es imposible pensar en articular el movimiento popular, imposible pensar en alternativa política”.

O sea, que de seis de los movimientos sociales más relevantes a la fecha en la Argentina, sólo dos se plantean claramente trascender la lucha social reivindicativa hacia un horizonte de cambio social y transformaciones políticas, profundo y estructural de carácter estratégico.

Otros no lo consideran y alguno de ellos (tales como el Bauen) lo ve ligado a lo meramente electoral, o sea que aunque diferentes, todos refieren a la coyuntura.

Referencia a algunos debates sobre el tema y su interacción con las respuestas de los entrevistados.

Las cuestiones recogidas en las entrevistas están situadas en el contexto del desarrollo teórico que gira en torno a algunos debates recientes y que referimos siguiendo trabajos anteriores de Rajland, Barrera, Gielis (2010:365/383):

1. ¿A que nos estamos refiriendo cuando hablamos de movimientos sociales?

Una conceptualización clásica al respecto, diferencia movimiento social de representación política (Thwaites Rey, 2002:20), considerando que el movimiento social se refiere a acciones de la sociedad civil, con reivindicaciones sectoriales mientras que la representación política se refiere a organización del Estado y a actividades cuya lucha se refiere al poder del mismo.

⁴² Liga Argentina por los Derechos del Hombre, organismo de DDHH fundado en el año 1937, el más antiguo de la Argentina, que conserva su nombre original.

La autora mencionada, rescata el carácter político de los movimientos, por su referencia al Estado, y formula la pregunta acerca de la posibilidad de que se constituyan en representantes políticos del conjunto ante la crisis de representación. Acotemos al respecto, que una cosa es referirse al Estado y otra muy distinta es *aspirar a ser Estado* o sea *aspirar al poder*.

Ayuda visualizar y agrupar los tipos de movimientos que se conocen y consideramos como tales. Ellos son a nuestro criterio:

a) Lossindicatos,⁴³b) Los movimientos claramente reivindicativos,⁴⁴ c) Movimientos sectoriales, con las mismas características que b), d) Movimientos con reivindicaciones específicas pero cuyo carácter es de por sí *abarcativo*, o de abordaje más universalizado hacia la realidad de las relaciones sociales y la necesidad de cambios estructurales.⁴⁵

2. La tensión movimiento-clase:

Ante aquellas posturas de movimientistas y estudiosos de los movimientos sociales, que colocan el tema en franca oposición excluyente, sostenemos que no sólo no son opuestas o contradictorias sino que la

teoría de las clases, lejos de oponerse, es la matriz desde donde pensar los movimientos sociales; y a su vez, la teoría de los movimientos sociales no obtura un análisis de clase, sino que lo complejiza (Stratta, 2007).

En estos últimos años el análisis de los movimientos sociales y también del cambio social emancipatorio, ha estado dominado por el *movimientismo* (Seans y Moers, 1996), en sentido de autonomismo, cuya síntesis refiere a que la lucha por la liberación se base en movimientos autónomos, cada uno luchando en su propio terreno específi-

43 Tienen el límite de sus reivindicaciones específicas, las que no trascienden hacia la aspiración al poder (ya Lenin (1946) se ocupó de este tópico).

44 Tampoco aspiran al poder o a algún lugar de las estructuras del poder. Las reivindicaciones están ligadas a problemas puntuales.

45 En la entrevista con los dirigentes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), nos decían que si bien la fundamental demanda y reclamo ha sido y es por "... memoria, verdad y justicia, referida al genocidio (se refiere a la política represiva de la dictadura de 1976-1983 que provocó la desaparición de 30.000 personas. La aclaración es de los autores), actualmente intentan incorporar otras reivindicaciones sociales y políticas referidas al presente". También en la entrevista ya referida con el MTL, tener en cuenta su afirmación en el sentido de construcción de poder popular.

co, y con sus formas específicas y en todo caso confluyendo pero sin articulación orgánica sino libre.

El abordaje estuvo ligado a la negación del marxismo, más aun a sostener su superación por la visión *movimientista*, y a fundamentar la acusación acerca de la supuesta profunda equivocación del marxismo descrito como *reduccionista*. Esa concepción implica –como antes señaláramos– una pérdida del sentido de universalidad en sentido de totalidad en vinculación con la necesidad de la fijación de estrategias totalizadoras para la emancipación. No considerarlo así, conduce a una indeterminación que debilita los lazos imprescindibles para la lucha por el cambio social. Desde un punto de vista dialéctico, el marxismo tiene mucho que contribuir a la teoría y práctica de los movimientos sociales, así como tiene mucho que aprender de los mismos (Seans y Moers, 1996).

Está claro que hay que partir de una concepción inclusiva de la clase o lo que es lo mismo por considerar la teoría de clases en el contexto del capitalismo de época, –de esta época– y las diferentes formas que hoy asume la venta, y por tanto, la explotación de la fuerza de trabajo. Nuestros entrevistados coinciden en la pluralidad respecto al sujeto, pero con distintos significados. Así el MTD de Solano se refiere a un sujeto que excede a la clase obrera; para el Movimiento Evita, “(...) los excluidos son la columna vertebral de los movimientos sociales”, la FTV generaliza en un sujeto “pueblo”, la Cooperativa Bauen sostiene la necesidad “(...) de construir un movimiento masivo que aglutine a muchos sectores sociales y políticos”, la LADH considera un “sujeto plural” y el MTL enumera a

(...) la clase obrera ocupada y desocupada y nosotros decíamos que los trabajadores en el neoliberalismo son como son, son ocupados, desocupados, flexibilizados, jubilados, en negro, pero que son trabajadores, que la categoría de trabajadores no es negociable.

3. La categoría de movimientos sociales y su carácter de “viejos” o “nuevos”

Esta temática está profundamente ligada a la anterior, porque hay una marcada tendencia (marcada, o sea no absoluta), que indica que aquellos que ponen el énfasis en los *nuevos movimientos sociales* en oposición a los *viejos movimientos sociales*, lo hacen desde posturas epistemológicas de negación de la teoría de clase.

La asunción de la oposición entre *viejos* y *nuevos*, niega en la práctica los procesos históricos con sus continuidades y rupturas y creemos que esto es lo sustancial. No se trata de sostener que no ha pasado nada a lo largo de años de historia y que los escenarios y los actores permanecen inalterables, sino de situarnos en los cambios de época pero desde la concepción de que en la historia las rupturas no significan negar lo existente o lo anterior, sino en todo caso, cambiarlo.⁴⁶

Podemos pensar en la cuantiosa experiencia histórica de desarrollo de movimientos sociales en el mundo, pero particularmente en Latinoamérica y el Caribe. El feminismo, el cooperativismo, la lucha contra la existencia de armas nucleares, los movimientos de solidaridad con diversas luchas. En Argentina también ha sido importante el fomentismo vecinal. La organización de la lucha por los derechos humanos que aparece entre los *nuevos*, no es exactamente *nueva*,⁴⁷ sólo que aparece más plural y diversificada especialmente relacionada con la denuncia y resistencia contra las dictaduras genocidas más recientes.

No se trata, de practicar *revival* o quedarnos en el pasado. Lo que no se debe ni teórica ni políticamente es olvidar la experiencia histórica, inclusive desde su faz práctica, ya que en muchas ocasiones se vuelven a presentar problemas similares a los ya abordados históricamente. Sin embargo, *decir que no son los mismos, es casi una obviedad*. Claro que no lo son y que han aparecido nuevas necesidades (o no nuevas pero que antes no se tenían en cuenta o no estaban encaradas), nuevas formas, nuevos abordajes, nuevas adhesiones, nuevas presencias. Entre ellas por ejemplo, una de importancia vital y universal en el alcance: la del medio ambiente y la preservación de la tierra.

Tengamos en cuenta que el énfasis en el uso de la denominación de *nuevos movimientos sociales* con carácter de categoría social, irrumpió alrededor de los últimos años setenta, particularmente de Europa, continente para el cual, sin duda que algunos de ellos eran realmente nuevos por lo menos en su dimensión, por ejemplo el de Derechos Humanos en relación con las dictaduras de América Latina. Otros no lo eran tanto como el de género –aunque el paso de feminismo a género

46 Marx (1946:63).

47 Ya aclaramos que en Argentina existe desde 1937 la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, a lo que se debe agregar los importantes antecedentes de la Liga antiimperialista y el Socorro Rojo, en solidaridad con los republicanos españoles.

haya implicado un cambio—, o el de medio ambiente que en Europa tiene mayor historia que por nuestras tierras.

La lectura a hacer es que se estaba a la búsqueda de nuevas experiencias, que se sustentaban fundamentalmente en la crisis de los partidos políticos, el desarrollo del neoliberalismo y el neoconservadurismo que apuntaban a la separación entre Estado y sociedad civil, politizando esta última pero a nivel de lo privado autonomizándose de lo público, sin aspiración a disputar el poder ni tampoco a plantarse frente al poder exigiendo políticas estatales que satisfagan sus reivindicaciones. Esta era la base de acción y función que se pretendió de los denominados *nuevos movimientos sociales* los que frecuentemente coincidieron objetivamente en la práctica operacional con los programas sustentados por las fuerzas más conservadoras, quedando acotados al mundo de lo *privado* (Offe, 1992).

De Sousa Santos dice sobre el tema, que “...La novedad de los NMSs no reside en el rechazo de la política, sino al contrario, en la ampliación de la política más allá del marco liberal de la distinción entre estado y sociedad civil” (2001:181).

Es la suma, o la acumulación de lo expuesto, sintetizado en rechazo de la política y sobreestimación de lo social en el contexto latinoamericano marcado por la deslegitimación de la política y los partidos (Borón, 2006:289), de la valorización de los *acontecimientos* dispersos, de las heroicidades particularizadas, del *encanto de lo pequeño* como dijera alguna vez Naomi Klein, de la individuación de grupos, de la pérdida de esencialidad, universalidad y criterio de totalidad, lo que esteriliza muchos de los esfuerzos cotidianos en curso, cuya limitación es que justamente, no están dirigidos a transformar la sociedad como totalidad.

Como dice el historiador Miguel Mazzeo:

(...) las dificultades con las que tropieza cualquier proyecto de transformación en las actuales condiciones están basadas, muchas veces en la ausencia de nexos entre lo social y lo político” entendido como “la instancia que encausa las luchas particulares y las prácticas objetivamente contrahegemónicas hacia un horizonte trascendente (2000:29).

En definitiva, la esencia de lo desarrollado en este apartado, podría sintetizarse en la afirmación acerca de la necesidad de articular lo

así llamado social y lo así llamado político, desechando las falsas dicotomías funcionales sólo a la clase hegemónica en el poder.

La conjunción de lo social y lo político es ineludible e imprescindible, sin ella no existe posibilidad de futuro ni teórica ni políticamente, ya que desde lo propiamente conceptual esa dicotomía resulta totalmente paralizante, esterilizante respecto a la conformación de alternativa política con capacidad de dirigir los cambios estructurales que nuestras sociedades exigen para su verdadera emancipación económica y social.

8. El kirchnerismo en el poder: hacía la recomposición de la hegemonía capitalista (2003-2007)

Ante la falta de construcción de una alternativa política real para encarar los cambios reivindicados por los levantamientos en diciembre de 2001, en la práctica se fue produciendo un proceso de recomposición gradual de la mellada "autoridad estatal" y variados intentos de pacificación del conflicto, impulsados desde el poder político. En ello jugó un papel preponderante, la implementación de mecanismos de asistencia social que aunque limitados, resultaron eficaces en lo inmediato.

8.1. Elecciones del 27 de abril de 2003. Reconfiguración de la hegemonía

Después de dos presidentes "efímeros" y uno: Duhalde, que fue titular del Poder Ejecutivo y tuvo a su cargo ese proceso de recomposición gradual del que antes habíamos mencionado, la "normalización institucional" pasa por las elecciones de 2003.

Estas elecciones fueron planteadas como una reconfiguración del poder dominante en crisis. Y hubo una reconfiguración del bloque dominante, de su hegemonía, pero no hubo una reconfiguración política de las clases subalternas.

Si bien es cierto que las jornadas del 19 y 20 de diciembre habían operado como aceleradores de la crisis del bloque dominante, golpeándolo fuertemente, lo que de ellas surgió a nivel de construcción popular (asambleas, consolidación del movimiento "piquetero"), sumado al movimiento ya existente (MTD, fábricas tomadas por los trabajadores,

trueque y organizaciones políticas en resistencia), tanto social como político, no alcanzó a plasmarse en alternativa política de poder.

El bloque dominante se reconfiguró a nivel político, como pudo, fragmentado tras una "ley de lemas" encubierta, apresurado en encontrar una "salida", antes de que pudiera ser desestabilizado y afectada su "gobernabilidad". No olvidemos que el presidente Duhalde en una ofensiva política, llama a elecciones después del asesinato de los jóvenes "piqueteros", Kostecky y Santillán el 26 de junio de 2002.

Decimos, "ley de lemas" encubierta, porque en la práctica hubo tres candidatos del justicialismo y de alguna manera tres del radicalismo, en sus distintos espectros ideológicos. El acto electoral, le planteó al conjunto de la ciudadanía, la "tarea" de resolver la crisis interna del Partido Justicialista. Dato importante en el mapa político-histórico de la Argentina, es este de la fragmentación de los dos partidos "tradicionales" del sistema, lo que en cierta forma expresaba su propia crisis. La crisis fue tanto interna como externa.

El pueblo, consecuente con las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, votó rechazando el modelo neoliberal, el de la pobreza y la desocupación generalizadas, el del hambre, la desnutrición, el aumento de la muerte infantil, ese fue el contenido de su voto, pero lo que sostenemos es que no tuvo relación directa con los contenidos reales expresados por los candidatos votados, que representaban los mismos intereses (aunque maquillados) rechazados en las luchas.

Lo que fue quedando también en evidencia es como ya señalamos, la dicotomía, la falta de articulación de lo social y lo político, el rechazo desde el movimiento social a lo político, al poder político, que parte de una concepción basista que alimenta esa dicotomía y de alguna manera, recluye al movimiento popular en el margen de lo social, obstaculizando la trascendencia de su resistencia y lucha hacia el campo de lo político.

Desde Alfonsín a De la Rúa, pasando por Menem, ha habido en forma constante, por parte de los gobernantes, una verdadera apropiación del consenso obtenido en las urnas, de la confiabilidad que se les otorgara. En cambio, de acuerdo al resultado electoral de 2003,⁴⁸ no ha

48 El presidente Néstor Kirchner llegó al gobierno, en mayo de 2003. Lo hizo con un porcentaje de votantes escaso, bastante por debajo del 25% (un 22%), ya que el retiro de su

habido, de “origen”, consenso alguno “concedido” por los ciudadanos, sino mera expectativa. El nuevo presidente Kirchner, tuvo rápida conciencia política acerca de que su ascenso sobre una base electoral escasa provocaba la necesidad imperiosa de reconstruir ese consenso para aumentar el grado de legitimación en el ejercicio de su poder y actuó en consecuencia. Recomposición del consenso que no significa variación respecto a la subordinación al gran capital.

El kirchnerismo viene a suturar “... la crisis de representación del propio Estado desatada en 2001. Suturar no es borrar ni volver a la situación inmediatamente anterior, sino (...) absorber la problemática bajo la forma estatal, esto es, reconocerla como ‘cuestión’ e inscribirla en los marcos de la institucionalidad” (Cortés, 2009). Es claro que la respuesta kirchnerista se planteó acotada en sus objetivos y “desmovilizante” en su modalidad de aplicación. Su finalidad central no fue producir un cambio fundamental en las características de la democracia argentina ni una reversión drástica del proceso de concentración de la riqueza y de deterioro del nivel de vida popular, sino la restauración de la “gobernabilidad”, el recuperar la idea de unas instituciones políticas eficaces, que puedan aparecer como guiadas por el bien común. Formado mayoritariamente por integrantes de la cuestionada dirigencia política, el gobierno no buscó la renovación integral de la misma, sino generar las condiciones para que, con mínimas depuraciones y ciertos cambios de orientación, esa dirigencia pudiera seguir al frente del aparato estatal, reduciendo a límites “tolerables” la contestación activa y movilizadora que se había desplegado en los años 2001 y 2002.

En consecuencia, una vez asumido el mando por el presidente electo, Néstor Kirchner, se aplicó a configurar una coalición nueva en torno a su figura, que pudiera superar las limitaciones del sistema partidario en ruinas, atrayendo expresiones de varias fuerzas políticas y sobre todo algunas ajenas a cualquier estructura partidaria. Y rescatando un término que en su momento se aplicó al ‘progresismo’ de los 90’, se la bautizó como ‘transversalidad’. Con ese planteo se logró la captación de algunas organizaciones sociales expresivas de nuevos movimientos (La Federación de Tierra y Vivienda, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, la Corriente “Patria Libre”, etc.),

rival (el ex presidente Menem) en la segunda vuelta, le impidiera convalidar su designación con un porcentaje mucho mayor.

El gobierno, en resumen, no se planteó de modo serio y sistemático la generación de nuevos mecanismos de organización y movilización popular, que pudieran aspirar a revertir el proceso de degradación de la vida democrática. Más bien se orientó a desactivar el potencial contrahegemónico del movimiento de protesta más numeroso y activo, el de los “piqueteros”, frente a quienes ensayó tanto la institucionalización de los sectores más “moderados” como la represión selectiva de los más díscolos. Los procesados por hechos vinculados a la protesta social sumaron varios miles, el gobierno ha judicializado la protesta social y política.

Lo que se ensayó con más empeño desde el gobierno, fue una táctica de recomposición de legitimidad, que le resultaba imprescindible. Se la centró en reforzar la idea de un gobierno receptivo a las reivindicaciones populares, y no alineado automáticamente con las demandas de los organismos financieros internacionales, los bancos o las compañías privatizadas. Se distanciaría así del decenio de Menem y del trunco período de De la Rúa.

A cambio de un cuestionamiento al capital tildado de “especulativo”, de “extranjero” o de ambas cosas, se propuso la promoción de un capitalismo “nacional”, “sano”, “productivo”, modo de formular en un lenguaje progresista la idea de que el movimiento social debe renunciar a cualquier impulso anticapitalista, y que la acción de gobierno declina de antemano el enfrentarse en cualquier grado con el núcleo del poder social existente.

El consenso logrado por la nueva orientación de gobierno viene sirviendo, hasta cierto punto, de “amortiguador” del conflicto social. Las organizaciones sociales debatieron acerca de si mantener una actitud esperanzada frente al rumbo de las políticas públicas, o seguir la lucha con toda la fuerza y la urgencia que da una situación que sigue siendo terrible, con un amplio abanico de posiciones intermedias. A las importantes divisiones ya preexistentes, se sumaron las producidas en torno a este último punto, que han derivado en particiones de muchas organizaciones populares. También ha incidido en la morigeración del conflicto el desprestigio inducido sobre ciertas modalidades de lucha, como los “piquetes” y cortes de ruta.

Una cuestión central en este punto es cómo leer la apropiación gubernamental de ciertos reclamos históricos del campo popular (cár-

cel a los genocidas de la dictadura, etc.). Para ello consideramos acuciante no abandonar la dialéctica frente a tentaciones maniqueas. En ese sentido, las medidas oficiales identificadas con luchas que marcaron las últimas décadas no pueden reducirse a una mera concesión que busca apaciguar la protesta, sino que constituyen también una conquista producto de la acumulación de fuerzas en esa disputa. Sólo una concepción dialéctica del Estado, que conciba sus aparatos (lo que incluye leyes y medidas, desde luego) como cristalización de fuerzas en el orden social permite pensar en la complejidad de la relación entre las luchas sociales y su dimensión estatal.

De manera que lo que aparece luego del 2003 es una puja en torno a la movilización social y, fundamentalmente, a su direccionamiento. En ese contexto, si bien no sería sensato negar la dimensión de cooptación de las políticas oficiales, las mismas no pueden reducirse a esa única dimensión dado que, más bien, se constituyen en centrales al momento de generar y producir consenso social. De tal modo que consideramos que no se trata simplemente de políticas de desmovilización sino también de una movilización selectiva. Como habíamos adelantado, el gobierno intentó contener y desactivar el conflicto social, para ello buscó el apoyo activo de un conjunto de organizaciones sociales y políticas. Así, el apoyo de sectores del movimiento popular (las organizaciones piqueteras más moderadas, organismos de derechos humanos, etc.) fue fuertemente impulsado por el gobierno, buscando ampliar sus bases de sostén social a partir de un efecto de identificación, más que de mera incorporación y/o acallamiento.

8.2. El "proyecto"

En la dirección ya señalada, en su discurso de asunción presidencial, El presidente Néstor Kirchner sostuvo: "En nuestro proyecto ubicamos en un lugar central la idea de reconstruir un capitalismo nacional que genere las alternativas que permitan reinstalar la movilidad social ascendente". "Al contrario del modelo de ajuste permanente, el consumo interno estará en el centro de nuestra estrategia de expansión".⁴⁹ Se manifestaba que el modelo propugnado apuntaba a la producción expansiva (productivismo) con inclusión. En un país con más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza y con más de un quinto de la

49 Diario Página 12 (2 de mayo de 2003)

población económicamente activa desempleada, los enunciados presidenciales generaron expectativas.

Una discusión de fondo y necesaria particularmente en la región nuestra americana, es acerca de si realmente se puede “re” construirse “capitalismo nacional” y quiénes son los sujetos sociales para ese proyecto, especialmente en tiempos de creciente internacionalización de la producción y transnacionalización del capital, que incluye en su dinámica a los capitales más concentrados de origen local.

Si a ello agregamos que en el mismo discurso y posteriormente al igual que la presidenta Cristina Fernández sostuvieran la propuesta de un capitalismo “normal”, iban quedando más claros los posicionamientos.

¿A qué se denomina capitalismo normal? Alude a que todo dentro del sistema pero recompuesto a la manera de un país central, evitar el conflicto, la lucha, para lo cual necesariamente hay que distribuir, elevar el nivel de consumo (lo que beneficia al consumidor, al que estaba debajo de la línea de consumo básica, pero también beneficia y en alto grado a la empresa productora), ampliar los límites de lo posible, sin cambios estructurales,⁵⁰ sin reinserción genuina sino apelando a la política de subsidios ya no tan focalizados como en los ‘90. El discurso explícito así lo indicaba, la política implementada hacia los movimientos populares, así lo evidenció. Cooptación, captación, fragmentación.

8.3. El “consenso” y la “amortiguación”

El consenso logrado por la orientación de gobierno de Néstor Kirchner ha servido, hasta cierto punto, de “amortiguador” del conflicto social. Las organizaciones sociales debatieron acerca de si mantener una actitud esperanzada frente al rumbo de las políticas públicas, o seguir la lucha con toda la fuerza y la urgencia que da una situación que sigue siendo terrible, con un amplio abanico de posiciones intermedias. A las importantes divisiones ya preexistentes, se sumaron las producidas en torno a este último punto, que han derivado en particiones de muchas organizaciones populares. También ha incidido en la morigeración del

⁵⁰ El carácter “nacional” del capitalismo pregonado se mostraba compatible con el mantenimiento por las multinacionales de las principales posiciones estratégicas ocupadas en la década de los 90’, desde la producción petrolera hasta el manejo de las telecomunicaciones.

conflicto el desprestigio inducido sobre ciertas modalidades de lucha, como los “piquetes” y cortes de ruta.

Una cuestión central en este punto es cómo leer la apropiación gubernamental de ciertos reclamos históricos del campo popular (cárcel a los genocidas de la dictadura, etc.). Para ello consideramos acuciante no abandonar la dialéctica frente a tentaciones maniqueas. En ese sentido, las medidas oficiales identificadas con luchas que marcaron las últimas décadas no pueden reducirse a una mera concesión que busca apaciguar la protesta, sino que constituyen también una conquista producto de la acumulación de fuerzas en esa disputa. Sólo una concepción dialéctica del Estado, que conciba sus aparatos (lo que incluye leyes y medidas, desde luego) como cristalización de fuerzas en el orden social permite pensar en la complejidad de la relación entre las luchas sociales y su dimensión estatal.

De manera que lo que aparece luego del 2003 es una puja en torno a la movilización social y, fundamentalmente, a su direccionamiento. En ese contexto, si bien no sería sensato negar la dimensión de cooptación de las políticas oficiales, las mismas no pueden reducirse a esa única dimensión dado que, más bien, se constituyen en centrales al momento de generar y producir consenso social. De tal modo que consideramos que no se trata simplemente de políticas de desmovilización sino también de una movilización selectiva. Como habíamos adelantado, el gobierno intentó contener y desactivar el conflicto social, para ello buscó el apoyo activo de un conjunto de organizaciones sociales y políticas. Así, el apoyo de sectores del movimiento popular (las organizaciones piqueteras más moderadas, organismos de derechos humanos, etc.) fue fuertemente impulsado por el gobierno, buscando ampliar sus bases de sostén social a partir de un efecto de identificación, más que de mera incorporación y/o acallamiento.

8.4. Las “medidas”

Las primeras medidas del Presidente Kirchner comenzaron ensayando una táctica en cuanto a esa recomposición del consenso aludido, centrada en la construcción de la imagen de un gobierno receptor y escucha de las reivindicaciones populares y con una cierta autonomía respecto de las demandas de los organismos financieros internacionales. Desde el inicio de su gestión, apuntó en cuanto a objetivos, hacia

aquello del poder que aparecía como más cuestionado, hacia las áreas claves en la sensibilidad popular, tales como: la remoción de cúpulas militares, policiales y de seguridad (SIDE), la estructuración de juicio político contra integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y –haciéndose eco de una de las principales demandas que resonaron aquel 19 y 20⁵¹– produjo fundamentales cambios en su composición.

La reforma se inició en junio del 2003, fecha en la que Kirchner comenzó a solicitar públicamente –y lo logró– la renuncia de tres de sus miembros (Nazareno –presidente de la corte–, Vázquez y López) e impulsó un juicio político contra dos de sus otros miembros (Boggiano y Moliné O’ Connor). Con el objetivo de cubrir las vacantes producidas por las renuncias y juicios políticos ya referidos, Kirchner nombró un conjunto de jueces de probada capacidad técnica. Asimismo, restableció la composición de cinco miembros de la Corte Suprema previa al menemismo.⁵²

La colocación de ciertos límites a los abusos más desmesurados de parte de algunas grandes empresas, particularmente las que habían sido privatizaciones de empresas estatales, incluyendo las tarifas de las que proveen servicios públicos, y otros sectores de poder, apareció como audaz y novedosa a fuerza de lo vivido en materia de corrupción e impunidad en todos los terrenos durante las dos décadas anteriores. El gobierno nacional se negó a otorgar de inmediato los aumentos de tarifas que pedían las empresas concesionarias de servicios públicos, rescindió algunos contratos y estatizó algunas empresas privadas quebradas y de gestión particularmente desastrosa (el servicio de Correos, un ramal ferroviario) o cuyos beneficiarios se estaban retirando (como en el caso de Suez, de Aguas Argentinas), e impuso, a otras empresas algunas multas por incumplimiento de obligaciones o deficiente prestación de servicios. En definitiva, en lo que respecta a las empresas privatizadas, el gobierno de Kirchner “se limitó en la mayoría de los casos a la contención de las tarifas, mientras que en los demás aspectos, contractuales y regulatorios, cedió ante las presiones de las privatizadas,

51 Cabe ser destacado que alrededor del que se vayan todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia se estructuró un movimiento popular, verdaderamente plural

52 Carlos Menem extendió la conformación de la Corte Suprema a siete miembros, conformaban la denominada *mayoría automática*.

los gobiernos y los organismos internacionales”.⁵³ Pese a lo limitado de sus miras y lo parcial de sus alcances (el gobierno de ningún modo revirtió el proceso privatizador de los años 90), las medidas mencionadas fueron visualizadas por gran parte de la población, como un “corte” con la etapa anterior.

También tomó intervención sobre situación escandalosa del PAMI (atención de jubilados y pensionados), así como encaró campañas de persecución de grandes evasores fiscales. La propuesta de un regreso al imperio de las leyes laborales estableciendo el aumento del salario mínimo, vital y móvil y la puesta en funcionamiento de las paritarias, fueron medidas que impactaron a los sectores del trabajo, que había sido tan “agredido” durante el menemismo, con leyes de reducción de salarios, no funcionamiento de las convenciones colectivas, etc. No obstante no se atacó de fondo el tema de la precarización laboral que hoy sigue afectando a un 40% de la población.

Un momento importante de la gestión fue la participación en la Cumbre de las Américas de 2005, del lado de los mandatarios opuestos a la aprobación del ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas), el “auspicio” al acto multitudinario realizado por las organizaciones populares y en el que dirigió la palabra el Presidente Hugo Chávez. Recordemos que esa reunión terminó con el retiro de Bush, presidente de los EE.UU, derrotado en esa iniciativa por la fuerza de la acción conjunta del pueblo y el apoyo de algunos de los presidentes de la región líderes de los procesos de cambio en sus países.

Asimismo, se impulsó la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, por parte del Congreso, y en cuanto a interlocutores, se abrió hacia los organismos de Derechos Humanos, hacia el movimiento piquetero, incluso respecto a ambos, con sus sectores más duros y radicalizados. Un aspecto también relevante es el de situarse en cuanto a las relaciones internacionales alineado o dispuesto a establecer lazos con aquellos que en el panorama latinoamericano, se visualizan como independientes o con aspiración a mayor autonomía: la invitación a Fidel Castro y el “patrocinio” de su participación en eventos populares, lo mismo respecto al presidente Hugo Chávez de Venezuela, a Lula presidente de Brasil, (se inscribe en esa política la intervención

53 Bonnet y Piva, 2011.

en el conflicto en Bolivia).⁵⁴ Estas y otras medidas nutrieron la expectativa en el conjunto de la población, tan permanentemente golpeada y sin respiros por los gobiernos anteriores, aunque estuviera clara la pervivencia de las causales profundas de la crisis, que permanecieron intactas en su base.

Estas medidas como dijimos, apuntaron a la reconstrucción de hegemonía por parte del bloque dominante, pero lo tuvieron que hacer a partir de lo que constituyó el discurso y la lucha popular, o sea, no son concesiones graciosas sino condicionamiento resultado de las luchas populares anteriores y posteriores a diciembre de 2001.

En ese sentido podría decirse que el desplazamiento de la ola “antipolítica”, obedeció en vasta proporción a que desde la cúspide del aparato del estado se intentó una absorción de parte de sus demandas y una respuesta a algunas de ellas, que mas allá de restringirlas en sus alcances y moderarlas en sus efectos, fue interpretada por gran parte de la población como un cambio de rumbo ampliamente favorable.

La estrategia concentradora y excluyente tocó sus límites sociopolíticos alrededor de 2001, además de llevar a un callejón sin salida en lo económico. Pero esa inviabilidad no demuestra automáticamente la factibilidad de lo que apareció como el modelo ‘productivista’, favorecedor del consumo interno, y la acción estatal como impulsora de la demanda interna y de la competitividad en el plano internacional.

Una parte importante de este proceso de develamiento de la manipulación política, debe llevar a polemizar con otra categoría que se intenta naturalizar, la de la pobreza. Se hace cada vez más imprescindible trascender el eje de la pobreza en la discusión y quehacer político y pasar a situarlo sobre la desigualdad profunda de nuestra sociedad, porque ello contribuye a plantear el debate en sustancia, que tiene que ver con el sistema hegemónico. Ello da la medida entre asistencialismo y cambio.

Avanzando desde el 2003, se observa, la toma de resoluciones en consonancia con las anteriores, fundamentalmente las relativas al impulso a los juicios contra la impunidad de los crímenes de la dictadura cívico-militar, la anulación del indulto aprobado en su momento

54 Que fuera provocado por los sectores de la “media luna”, contrarios al presidente Evo Morales.

por el presidente Menem, la nacionalización de las AFJP (jubilaciones privadas), la asunción de las empresas de agua y de línea aérea de bandera (si bien éstas medidas, han respondido al prácticamente “abandono” de responsabilidades por parte de los que fueron beneficiarios de las privatizaciones anteriores de las mismas), y sobre las cuales se ha manifestado la intención de que sean oportunamente reprivatizadas), también la aprobación y puesta en marcha, de la asignación universal (relativamente universal) por hijo.⁵⁵

Sin embargo, si analizamos en conjunto, las medidas dispuestas en el período de esta investigación, que va de 2003 hasta 2007⁵⁶, advertimos que los cambios o medidas populares han sido fundamentalmente de carácter superestructural, que tocando puntos nodales en el sentimiento y las necesidades de diversos sectores, producen expectativas positivas en relación al Presidente.

La gran pregunta es al mismo tiempo varias preguntas: ¿qué pasó con la propuesta y la política económica del gobierno Kirchner? ¿Qué pasó en cuanto a redistribución de ingresos y estructura productiva? ¿Qué pasó en cuanto a la creación de puestos de trabajo genuinos? ¿Cuáles son las continuidades y rupturas respecto a los anteriores gobiernos? *¿Es válido referirse al actual proceso como neo desarrollismo? ¿O es aun neoliberalismo? ¿O ninguno de los dos sino un proceso diferente que puede albergar elementos de ambos, además de otros?* Estos son algunos de los interrogantes que se plantean y las respuestas no resultan alentadoras.

8.5. Las primeras conclusiones indican que:

- El denominado “kirchnerismo” en su momento fue la “salida” que tuvo la clase dominante ante la crisis y rebelión popular de 2001. En tal sentido es que parte de la táctica aplicada fue la de una política de fragmentación de las organizaciones sociales y políticas.

- Sin embargo, el kirchnerismo fue dejando de representar para la clase dominante, la opción que más los satisficiera. Es que el kirch-

55 Propuesta originalmente elaborada y planteada como reivindicación por la CTA. (Central de Trabajadores de carácter alternativo).

56 Las de carácter socio-económico han sido desarrolladas en el capítulo respectivo en este mismo volumen por Varesi y Pinazo.

nerismo ha practicado una política de resoluciones, que fueron consideradas inadecuadas para la propia clase y por ello comenzó a resultar poco confiable, aunque esa política sea insuficiente para los sectores populares.⁵⁷

- Para los sectores subalternos no representa los cambios necesarios e ineludibles en relación a la distribución. Tuvo oportunidad económica para producirlos pero no lo hizo.

- Nos encontramos ante una profunda crisis no sólo de representación política, sino también ante una crisis política en general y esta crisis va más allá de números coyunturales electorarios.

- Hay sobre todo, una total falta de conformación de una alternativa política en consonancia con los cambios en la región nuestra americana.

El balance nos presenta más continuidades que rupturas.

9. Bibliografía

Altwater, A. (1986), "Problemas del intervencionismo de Estado", en Sonntag, H. R. y Vallecillos, R., *El Estado en el Capitalismo Contemporáneo*, (México DF, Siglo XXI).

Aspiazu. et. al. (1986), *El nuevo poder económico en la Argentina de los años 80* (Buenos Aires: Legasa).

Barrera, Marcelo, Caceres, Gonzalo y Gielis, Leandro (2009), "Estado y política en Argentina. Algunas notas teórico-políticas a propósito de los hechos del 2001", en *Periferias* (Buenos Aires: FISyP) N° 18.

Bonnet, Alberto y Piva, Adrian (2011), *Argentina en pedazos* (Buenos Aires: Peña y Lillo).

Borón, Atilio (2006), "Crisis de las democracias y movimientos sociales en América Latina: Notas para una discusión" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 20, mayo-agosto.

⁵⁷ Es la característica de nuestra clase dominante que no está dispuesta a "ceder" nada. Ya pasó en la primera presidencia de Perón, que aunque él insistiera en que los beneficiarios de su política (incluida la social), en definitiva serían los empresarios, los bancos (como así fue), chocó contra una burguesía prebendaria que no estaba dispuesta justamente a distribuir algo de su renta a los sectores subalternos.

Campione, Daniel (2003), *Prolegómenos del peronismo: los cambios en el Estado Nacional, 1943-1946* (Buenos Aires: FISyP).

Carrera, Nicolás Iñigo y Cotarelo, María Celia (2006), “Génesis y desarrollo de la insurrección espontánea de diciembre de 2001 en Argentina”, en *Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina* (Buenos Aires: CLACSO).

Coriat, Benjamín (1988), *El taller y el cronómetro* (Madrid: Siglo XXI).

----- (1991), *El taller y el robot* (Madrid: Siglo XXI).

De Sousa Santos, Boaventura (2001), “Los nuevos movimientos sociales” en *OSAL*. (Buenos Aires: CLACSO) N° 5, septiembre-octubre.

Gilly Adolfo (1984), “La anomalía argentina. Estado, sindicatos y corporaciones”, en *El Estado latinoamericano. Teoría y Práctica* (México DF: Siglo XXI).

Follari, Roberto A. (2007), “La falacia de la democracia parlamentaria como modelo irrefutable”, en Edgardo Biagini, Hugo (comp.) *América Latina hacia su segunda independencia. Memoria y Autoafirmación* (Buenos Aires: Antea Tauro).

Holloway John (1993), “Al borde del abismo. Surgimiento y caída del keynesianismo”, Mimeo.

Lenin, V.I. (1946), *¿Qué hacer?* (La Plata: Edit. Calomino).

Marx, Carlos (1946), “Tesis sobre Feuerbach”, en Engels, Federico, apéndice en *Ludwig Feurbach y el fin de la filosofía clásica alemana* (Moscu: Lenguas extranjeras).

Mazzeo, Miguel (2000), “Pensar la herramienta política (estratégica) del campo popular”, en *Periferias* (Buenos Aires: FISyP) N° 8.

Nozick, Robert (1988), *Anarquía, estado y utopía* (México D.F.: F.C.E.).

Offe, Klaus (1992), *Partidos políticos y Nuevos movimientos sociales* (Madrid: Politeia).

Ostiguy, Pierre (1991), *Los capitanes de la industria* (Buenos Aires: Legasa).

Pozzi, Pablo (1988), *Oposición obrera a la dictadura militar* (Buenos Aires: Contrapunto).

Rajland, Beatriz (2007), “Articular lo social y lo político resulta hoy imprescindible” en Gambina, Julio C. y Estay, Jaime (comps.) *¿Hacia dónde va el sistema*

mundial? Impactos y alternativas para América Latina y el Caribe (Buenos Aires: REDEM - FISyP - RLS).

Rajland, Beatriz, Barrera, Marcelo y Gielis Leandro (2010), “Dicotomización de lo social y lo político: obstáculo para la articulación de sujetos colectivos protagonistas de cambios transformadores” en *Temas y procesos de la historia reciente de América Latina* (Santiago de Chile: ARCIS - CLACSO).

Schvarzer, Jorge (1986), *La política económica de Martínez de Hoz* (Buenos Aires: Hyspamerica).

Seans Adam y Moers Colin (1996) “Política de la hegemonía: democracia, clase y movimientos sociales” en *Cuadernos marxistas*. (Buenos Aires: Cuadernos marxistas).

Stratta, Fernando (2007) “Clases, movimientos y sujetos”, ponencia presentada en el Taller *Repensando los movimientos sociales*, el 20/10/2007 en el Centro Cultural de la Cooperación, Buenos Aires.

Svampa, Maristella y Martuccelli, Danilo (1997), *La plaza vacía. Las transformaciones del peronismo* (XX: Losada).

Thwaites Rey, Mabel (1994), “Qué estado después del estatismo. Un análisis de la política de privatizaciones en la Argentina (1984-1993)” en *Aportes* (Buenos Aires: Asociación de Administradores Gubernamentales) año 1 N° 1 Otoño 1994.



***Concepciones del mundo,
identidades y lógicas
comunicacionales***

***La batalla de ideas en la periferia y la
construcción
de subjetividad***



La reconfiguración de la hegemonía cultural: Significaciones en disputa en la esfera pública, los medios masivos de comunicación y el campo intelectual (2001-2007)

**Adrián Pulleiro
Alejandro Gambina
Carolina Allievi
Micaela Ronconi
Rodolfo Gómez**

Introducción

Este trabajo tiene la premisa de dar cuenta de cómo se reconstituyó la “hegemonía”¹ en Argentina, luego de la crisis que tuvo su máxima expresión en la insurrección de diciembre de 2001, –momento de la caída del gobierno de la Alianza encabezado por Fernando de la Rúa de la Unión Cívica Radical.

En tanto que el enfoque metodológico utilizado considera a las sociedades capitalistas contemporáneas (y la Argentina es una de ellas) como una “totalidad” que se presenta empíricamente de manera “frag-

1 Tomamos la definición de lo que Antonio Gramsci comprende por “hegemonía” en el “período carcelario”, cuando el intelectual sardo se preguntaba cómo fue posible –cuando poco antes parecía inminente la expansión de la Revolución Rusa hacia buena parte de Europa– el surgimiento del consenso que las masas proletarias le prestaron a los fascismos. A nuestro entender, en el sentido que Gramsci refiere a la hegemonía, esta no supone la configuración de un “falso” consentimiento sino más bien que dicho consenso se establece considerando ciertos elementos ideológicos pero sustentados en bases materiales concretas. Esto quiere decir que las prácticas concretas que sustentan la “hegemonía” están asentadas en relaciones de fuerza determinadas estructuralmente (THWAITES REY, M.; 1994). Tal como aparece en el párrafo tan citado del propio Gramsci, la hegemonía remite a la capacidad de dirección intelectual y moral que conquista una clase fundamental en lo económico, para convertirse de ese modo en clase dominante y también dirigente (Gramsci, A.; 2008: 92).

mentaria” (Marx, Adorno, Horkheimer, Lukacs, Holloway), trabajaremos en este apartado en lo relativo a cómo se reconfiguró dicha crisis y se recompuso esa hegemonía en lo que hace a su dimensión cultural e ideológica. En este sentido, concebimos a la cultura como grupo de prácticas significantes, es decir como una trama de relaciones significativas atravesadas por relaciones de poder, determinaciones económicas y luchas por imponer las explicaciones sobre lo real acordes a los intereses de las clases y grupos sociales (Bourdieu; 1999: 69). Si la cultura es un terreno conflictivo, partimos de la idea de que las producciones significantes que aquí nos ocupan entonces actúan en todo momento en relación con un sistema cultural hegemónico, o sea respecto a un sistema de prácticas, significados y valores que opera como dominante en la medida en que ha sido asumido como “modo de vida” (Gramsci; 2009) y es capaz de integrar y/o neutralizar los elementos disruptivos (Williams; 2000). A la vez, como nos interesa el papel de ciertas prácticas, valores y significados en un proceso histórico particular, cuando hablemos de “ideología” nos ubicaremos en un nivel que va más allá del plano de las ideas “en general”; remitiendo a un tipo de fenómeno discursivo que tiene menos que ver con el ocultamiento o la distorsión que con un efecto de dislocación respecto de los procesos que producen a la sociedad en tanto totalidad (Hall; 1998) y, en un orden más específico, a los significados que contribuyen a fundar o reforzar relaciones de dominación (Thompson; 1998).

Hemos delimitado para el análisis una serie de hechos que consideramos cruciales para el proceso de recomposición hegemónica, dentro del período que va desde la crisis de diciembre de 2001 hasta las elecciones de octubre de 2007. Los mismos son: a) la insurrección de diciembre de 2001 y la caída del presidente De la Rúa, la designación de los gobiernos provisionales de Adolfo Rodríguez Saá y de Eduardo Duhalde en enero de 2002; b) el asesinato de los militantes “piqueteros” Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, que estableció un límite temporal al gobierno de Duhalde y precipitó el llamado a elecciones para abril de 2003; c) la asunción de Néstor Kirchner como presidente el 25 de mayo de 2003; d) el acto de entrega del otrora campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) a los organismos de Derechos Humanos para crear allí del Museo de la Memoria, el 24 de marzo de 2004; e) la realización del llamado “canje de la deuda externa” en los meses de febrero y marzo de 2005; f) las elecciones legislativas de

octubre de 2005; g) la cancelación de deuda con el FMI en diciembre de 2005; y h) las elecciones presidenciales de octubre de 2007.

En cada uno de estos momentos indagamos el comportamiento –básicamente plasmado a través de los discursos, pero también a través de acciones como ser decretos, declaraciones, demandas, actos de protesta, etc.– de un conjunto de actores sociales, políticos y culturales relevantes por sus posiciones institucionales y su capacidad de intervención pública; como ser los partidos políticos (Partido Justicialista, Unión Cívica Radical, diversas vertientes de la izquierda), las entidades empresariales (la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina, los bancos, las grandes empresas de servicios públicos privatizadas), el gobierno nacional (Duhalde, Kirchner), las organizaciones de trabajadores (centrales y sindicatos), los movimientos sociales (de derechos humanos, de desocupados, etc.), la Iglesia católica, organismos internacionales (FMI, Banco Mundial, entre otros), los intelectuales y los medios masivos comerciales de comunicación (en el sentido que estos por un lado “son” una parte muy importante de la “esfera” de “lo público” y por el otro son “actores” de notable importancia dentro de esa misma “esfera pública” y la producción simbólica).

Para sistematizar y analizar esa “discursividad” hemos considerado como fuentes principales, aunque no exclusivas, a los tres diarios de circulación con mayores tiradas: *La Nación*, *Clarín* y *Página 12*.² Finalmente, podemos adelantar que el análisis realizado en torno a los actores mencionados en los momentos seleccionados, nos permitió visualizar un “clima cultural” de época³ que atravesará todo el período. Un hori-

2 Como mencionamos en un trabajo anterior, “la caracterización lograda de los períodos considerados a partir de estos relevamientos, puede ser en cierto sentido incompleta y debiera complementarse con el relevamiento de otros tipos de soportes radial y audiovisual; pero en la medida que en nuestro país nos encontramos con un “sistema de medios” donde el “peso” de la gráfica es notablemente importante a la hora de fijar la “agenda” política y social (y donde se observa una fuerte monopolización de la producción informativa a partir del funcionamiento de multimedios, donde tal vez sea *Clarín* el más importante de ellos), podemos entonces decir que el relevamiento escogido nos brinda una serie de indicadores confiables que pueden ayudarnos a esbozar algunas hipótesis provisionarias”. (AA.VV, FISyP-RLS, 2011: 34).

3 Utilizamos el término “clima cultural de época” en el sentido del “zeitgeist” (espíritu de época) del que hablaba Herder. Por ejemplo en Argentina podría decirse que sobre todo durante el primer gobierno de Menem (1989-1995) existía un “clima de época” favorable a las privatizaciones y crítico del intervencionismo estatal; que se fue modificando promediando el segundo mandato de este (1995-1999) a la luz del importante crecimiento de la desocupación, entre otros factores macroeconómicos negativos.

zonte de significados y valores que emergió en los momentos de mayor movilización social y mientras se concretaban los reajustes en el interior del bloque de poder que siguieron a la salida de la convertibilidad y que se mostraría consolidado en los momentos de mayor estabilidad institucional, por lo que puede contarse entre las razones que nos llevan a hablar de un momento de recomposición (y reconfiguración) de una “hegemonía” política, cultural y también económica.⁴

1. La “cultura menemista” (o la cultura durante la “convertibilidad”)

En la medida que ello resulta importante para comprender el proceso de recomposición de la hegemonía impuesto en Argentina luego de la crisis de 2001, intentaremos en unas breves páginas explicar cierto funcionamiento –hegemónico– de lo cultural, que fue –por lo menos en parte– puesto en cuestión durante ese período.

Lo que suele denominarse “hegemonía menemista” fue el resultado del amplio y fuerte consenso respecto de las políticas neoliberales –continuación de la de los gobiernos anteriores y comenzadas con la dictadura cívico-militar (1976-1983)– llevadas adelante por los gobiernos encabezados por Carlos Menem. En efecto, el gobierno del radical Raúl Alfonsín (1983-1989), concluyó con un proceso hiperinflacionario y con una revuelta protagonizada por importantes sectores que habían quedado fuera del aparato productivo y no poseían ningún tipo de protección social. La sensación final –también alimentada por los grupos mediáticos comerciales– fue que se estaba al borde del “caos” social (una sensación que volvería a manifestarse poco más que una década después, a fines de 2001).

4 Tomando en consideración una frase donde Raymond Williams describe un elemento importante para la configuración de la “hegemonía” como son las “estructuras del sentir”, podemos decir que “sobre la base de ciertos supuestos existe una serie de acciones que pueden ser consideradas definitivamente concluidas, es habitualmente proyectado no sólo a la sustancia siempre movilizadora del pasado (el “peronismo” en nuestro caso, N. del R.), sino a la vida contemporánea (el “kirchnerismo”), en la cual las relaciones, las instituciones y formaciones en que nos hallamos involucrados son convertidas por esta modalidad de procedimiento en totalidades formadas antes (la “nueva hegemonía”) que en procesos formadores y formativos....de modo que en la actualidad, como en aquel pasado producido, sólo existen las formas explícitamente fijadas (la “nueva hegemonía” en nuestro caso); mientras que la presencia viviente (la conflictividad inherente al funcionamiento de la sociedad capitalista en Argentina), por definición, resulta permanentemente rechazada”. (Cfr. Williams; 2000: 150).

La construcción cultural del alfonsinismo había estado sustentada en la búsqueda de la “consolidación de la democracia”. Pero la crisis económica echó por tierra las promesas de la transición democrática y generó mejores condiciones para el despliegue de una “cultura” que, potenciada por la disolución de los regímenes soviéticos del este europeo y de la propia URSS, encumbraba la “eficiencia” capitalista y la individualidad hedonista y colocaba en el saco de la nostalgia cualquier alusión a un proyecto de cambio radicalizado. Esto implicó que para la naciente “cultura menemista”, los ideales de un individualismo “exitoso” se combinarían con un creciente reclamo de “orden” y “eficiencia” frente a la crisis inflacionaria y el fracaso del “intervencionismo estatal”. Lo que se evidenció con mucha claridad en el consenso que obtuvo el discurso que sustentó las privatizaciones de las empresas estatales.

Hay que decir que esa exaltación del “individualismo”, del “hedonismo” y de la preeminencia de lo “privado” resultaba contraria a la tradición del peronismo, donde más bien se reivindicaba la vigencia de una “cultura popular” de factura colectiva. Sin embargo, bajo la construcción (o tal vez re-construcción) de la imagen de Menem como un líder “fuerte” que podía poner orden en esos momentos de “caos” (por contraposición a la debilidad del gobierno radical que había renunciado varios meses antes de la finalización de su mandato), al que seguiría – como era norma en el peronismo – el resto del “movimiento”, se plasmó una curiosa síntesis entre la mencionada defensa de valores ligados al individualismo capitalista, de lo privado y del mercado, y aquellas visiones de tipo “populistas” muy propias del “folklore” peronista (que tuvo una imagen paradigmática en el presidente manejando una Ferrari). Esto fue lo que Beatriz Sarlo bautizó en esos años como “neopopulismo de mercado” (Sarlo; 2004) y que la jerga periodística denominó “pizza con champán”.

Como ya señalamos, la imagen del “caos” que predominó en el último tramo de la administración alfonsinista estuvo vinculada a la “hiperinflación”, pero también en términos políticos a la imposibilidad de mantener a raya a las Fuerzas Armadas. En ese sentido, luego de algunos intentos poco exitosos, la implementación del “Plan de Convertibilidad” en 1991 le permitiría al gobierno menemista construir una imagen de un gobierno verdaderamente “fuerte”, al ser capaz de “domesticar” la inflación e “imponer” reglas claras para el funcionamiento de la economía. Pero también hizo lo propio con las Fuerzas Armadas, a través de una

política que alternó la concesión y la respuesta enérgica. La medida que cambió el escenario en este plano fue el indulto a los genocidas que encabezaron la última dictadura y a los dirigentes de las organizaciones armadas, al que Menem definió como un gesto de “pacificación nacional”.

Como sostiene Bonnet, ambos elementos, suponían el claro triunfo de una democracia capitalista; no solamente implicaban la más absoluta subordinación de las Fuerzas Armadas a las directivas de la institucionalidad representativa (burguesa) sino también una forma pautada y determinada de la relación entre estado y mercado, que supuso una acentuación de las funciones represivas del estado en detrimento de sus funciones sociales (Bonnet; 2008). Asimismo, esa intervención estará orientada a conseguir que la sociedad argentina sea cada vez más claramente un “espacio de capital” (Harvey; 2004), atractivo a la inversión y la valorización transnacional.

Esas políticas fueron llevadas adelante con un consenso importante, producto de la hegemonía política construida desde el gobierno justicialista de Carlos Menem. No sería comprensible la velocidad con la que se concretaron las reformas estructurales que se llevaron a cabo (Gambina y Campione; 2002, Bonnet; 2008) sin el consentimiento de una parte notable de la población, aún de un sector importante de la clase trabajadora. Claro está que en ello también jugaron un papel importante las falencias en el funcionamiento de las otroras empresas públicas, los mensajes provenientes de los medios de comunicación comerciales que contraponían dicha “ineficiencia” estatal con la “eficiencia” privada, medios que habían pasado a manos privadas, luego de la Ley de Reforma del Estado.

A su vez, desde el punto de vista del funcionamiento de la democracia, la reivindicación de la “individualidad” refería más a una práctica orientada al mercado que a una intervención política. Esa “individualidad” implicaba un retraimiento al ámbito privado y la desestimación de la acción pública, que quedaba así reservada a la actividad de aquellos “políticos” capaces de implementar desde la esfera estatal “políticas públicas”; es decir, quedaba reservada al accionar “despolitizado” de los “técnicos” encaramados en la órbita del estado (Thwaites Rey y López, 2005; Gómez, 2005). Esta concepción “no participativa” de “lo político”, reforzó la tendencia a la “desideologización” del discurso político y la preeminencia de la “imagen” por sobre la lógica argu-

mental del tradicional “discurso” político. Lo que algunos intelectuales dominantes llamaron “el fin de las ideologías” y el “fin de la historia”, que decretaba el triunfo final del capitalismo (y por ende la defunción definitiva del socialismo), hacía de la “política” una mera disputa entre los candidatos-personajes con “buena imagen”. Era el triunfo de la despolitizada “videopolítica” (Landi, 1992; Sartori, 1998 y Sarlo, 2004).

Y si en el plano de la “política” nacional se asumía el triunfo definitivo del capitalismo y de una forma de pensamiento (liberal) “única”, esto redundaba en un alineamiento en el plano internacional con Estados Unidos, la potencia capitalista dominante en el plano político-militar. Contradiendo la tradición argentina tendiente al no alineamiento en materia de política internacional, los gobiernos menemistas impusieron un alineamiento total con la potencia del norte.

Resumiendo, la “hegemonía menemista” implicaba frente al “caos” y la imprevisión de la hiperinflación, su contracara previsible: el Plan de Convertibilidad. Frente a una política exterior orientada hacia lo “imprevisible” de los países latinoamericanos; su contracara previsible: las “relaciones carnales” con la potencia político-militar dominante a nivel internacional. Sin embargo, esta “hegemonía” había tenido poco en cuenta, en su orientación política e ideológica, que lo más imprevisible era el funcionamiento de una economía capitalista orientada básicamente al despliegue de los imperativos emanados desde el mercado. Esto explica, de una manera bastante sintética, el porqué de la posterior entrada en crisis de esa misma –y formidable– hegemonía.

Reforma constitucional de por medio, Menem logró la reelección en 1995. En términos económicos, todavía se vivían los beneficios de los primeros años de convertibilidad y privatizaciones, pero para 1998 la situación comenzaría a agravarse seriamente potenciada por la crisis brasilera que estalló ese año.⁵ En términos de los discursos mediáticos ya podía tenerse registro de un fuerte crecimiento de la desocupación y de la subocupación; como así también observarse una cantidad de notas referidas a la “corrupción” dentro de las instituciones políticas, lo que dio origen al llamado “discurso anti-corrupción” que se replicó en toda una serie de programas y segmentos de periodismo de investigación, tanto en medios gráficos como en la TV.

⁵ Tengamos en cuenta que para las elecciones de 1997, el “menemismo” ya había sufrido una “derrota” electoral significativa (en términos relativos).

Fue ese tipo de discursividad el que de alguna manera enarboló la Alianza (UCR-Frepaso) que llegó al Gobierno en 1999. No nos detendremos a caracterizar ese Gobierno, sólo diremos que si bien en términos culturales De la Rúa no representaba los valores del individualismo hedonista y de la búsqueda afanosa de “poder personal”, como en el caso de Menem, el modelo económico y la forma de construcción política no se modificó prácticamente en nada al punto que el “mentor” del Plan de Convertibilidad, Domingo Cavallo, asumió como ministro de Economía de su gobierno en los primeros meses de 2001.

En ese marco, si bien el triunfo de la Alianza resultó una (tibia) crítica por parte del electorado –más que por parte de los “políticos profesionales”– a ciertos valores culturales (individualistas, hedonistas, privatistas, antipolíticos) expresados antes por el menemismo; eso no suponía ni de parte del nuevo gobierno ni de parte de la población una “superación” de la “hegemonía” político-cultural del menemismo. Sólo la crisis de legitimidad desatada a fines de 2001 y la caída de De la Rúa –luego del hartazgo de los diferentes sectores sociales con la puesta en funcionamiento del llamado “corralito” financiero, con la prosecución (una vez más) de un nuevo plan de “ajuste” que suponía congelamientos y reducciones salariales– pudo poner en jaque dicha “hegemonía”, cuestionando todo ese horizonte cultural que se había impuesto como el único posible.

2. La conformación de un nuevo clima cultural: de la crisis de 2001 a los prolegómenos de “otra forma” de la hegemonía dominante

La explosión de la crisis en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 supuso algo más que la caída de un gobierno elegido democráticamente, implicó además la ruptura del consenso establecido con el discurso neoliberal dominante hasta entonces –aunque no necesariamente con sus prácticas y fundamentos–. Sobre todo en lo que respecta a la evaluación de la política de privatizaciones y a la “no intervención” del estado en la economía,⁶ pero también respecto de la visión individualista de lo político.

⁶ Esto no niega el hecho objetivo de que la convertibilidad” supuso una intervención del estado en pos de sostener la paridad cambiaria.

Se ha discutido mucho respecto de la “naturaleza” de esta crisis. A nuestro entender la crisis que se produjo en la sociedad argentina hacia fines de los años noventa y que tuvo su punto máximo en el estallido de diciembre de 2001 es parte de un proceso más vasto que podemos definir como una crisis del “modelo” neoconservador-neoliberal vigente hasta entonces. En el caso de Argentina, una profunda crisis económica se conjugó con una crisis de legitimidad que involucró a las principales instituciones económicas (la “Convertibilidad”, los organismos de financiamiento multilaterales), políticas (el Parlamento, la Corte Suprema de Justicia y, en particular, los partidos políticos –como la UCR o el PJ– que constituyeron la base del sistema de representación política vigente durante la mayor parte del siglo XX) y culturales (fundamentalmente, los medios masivos de comunicación comerciales) que dieron fundamento al auge neoliberal de los años 90.⁷

El punto máximo de la crisis evidenció la incapacidad de los sectores dominantes para ejercer también su papel dirigente, en la medida en que la situación social y económica dificultó la posibilidad de hacer aparecer sus intereses particulares como los intereses del conjunto de la sociedad. En ese momento la crisis desatada, en tanto “crisis de autoridad”, supuso un proceso de disputa entre sectores hegemónicos y subalternos para generar salidas políticas acordes a sus respectivos intereses.

Luego de la caída de De la Rúa se lanzaron los intentos de recomposición del sistema político y del funcionamiento institucional, a partir de los sucesivos gobiernos provisionales. A la vez, pudo verse un

⁷ Dicha crisis está vinculada a diversos procesos estructurales, entre ellos: a) las consecuencias de la indiscriminada apertura económica que generó una estructura económica más vulnerable a los vaivenes del mercado mundial; b) un nuevo aumento de la deuda externa producto de la caída de las inversiones extranjeras a fines de los noventa, que implicó una importante disminución de la capacidad de pago y una suba notable de la desocupación; c) una mayor capacidad de articulación por parte de los actores sociales que llevaban a cabo la protesta en contra del modelo; d) la reconfiguración –producto de la emergencia de la protesta– de las identidades sociales constituidas hasta entonces, teniendo como un ejemplo importante la consolidación de la CTA como actor crítico más allá del ámbito del trabajo y más allá de las reivindicaciones puramente salariales. El “discurso anti-corrupción” también jugó un papel importante como elemento instalado en la agenda mediática e incluso como pieza clave en el discurso electoral de los comicios de 1999. Dejamos planteada esta cuestión para poder analizar mejor los alcances de la insurrección de 2001, ya que la caída del gobierno de De la Rúa significó un ejemplo claro de que el “problema argentino” no era la “corrupción” sino el “neoliberalismo” y que no se trataba de un problema “individual” sino sistémico, que se expresaba en las instituciones y en los sujetos.

proceso paralelo de consolidación y crecimiento de algunos de los movimientos que habían canalizado la protesta contra el “modelo” durante la época menemista y que habían jugado un papel central en las luchas que culminaron con la caída del presidente aliancista –como ser el movimiento piquetero o bien sectores de la CTA– además del surgimiento de nuevos nucleamientos denominados “asambleas populares” o “asambleas barriales”; que implicaron una reconfiguración del espacio público urbano (en la medida que produjeron una nueva “apropiación”) y el desarrollo de nuevas formas de participación y organización.

Este momento de fuerte crecimiento de la protesta social y de presencia de diferentes movimientos sociales en el espacio público no implicaba la búsqueda de un cambio radical en la estructura social (aunque esto fuera cierto en algunos casos), pero sí un momento diferente en la disputa por la apropiación e institución de sentido que comenzaba a hacerse de ese espacio por parte de los sujetos movilizados. Tampoco significó un cambio en la estructura del sistema de medios masivos comerciales de comunicación, pero sí un cambio en la temática, en la forma de descripción de la temática –mucho más atravesada por contradicciones y cruces– llevada a cabo por dichos medios y en la aparición de medios de comunicación alternativos y de “políticas culturales” no “oficiales” (por parte de las mencionadas asambleas, movimientos sociales y partidos políticos críticos). Al contrario, más allá de que en los momentos iniciales sostuvieron la legitimidad de los reclamos, tanto los medios masivos de comunicación comercial como el sistema político y económico promoverían mecanismos de institucionalización y de control de las protestas, buscando el re-establecimiento de las normas tradicionales de funcionamiento social, aunque claro está dando cuenta, de una u otra manera, del nuevo escenario político y cultural; esto es, aquello que podríamos denominar una búsqueda de la “recomposición hegemónica”. Este es el proceso que intentaremos dilucidar a continuación.

2.1. ¿Crisis de qué?

El uso generalizado del término “crisis” para dar cuenta de los acontecimientos que siguieron a la insurrección de diciembre, abrió además una disputa específica por imponer una lectura del proceso histórico, que también delineaba las posibles líneas de acción e intervención según los diversos actores. Salvo la intelectualidad crítica, los partidos

de izquierda y las organizaciones sociales más combativas, lo que primó fue una lectura que tendió a ubicar la crisis en una parcialidad del funcionamiento social para evitar referirse a los fundamentos del orden social, económico y político, en tanto sistema y totalidad. Según el actor que se trate, “la parte” sobre la que se trabaje discursivamente podrá ser “el sistema político” y “la clase política”, “la corrupción” o “la falta de rigurosidad en los manejos de los fondos públicos”. De ese modo, se irá construyendo una cadena de sentidos que asocia la idea de *crisis* en sí misma con sujetos e instituciones determinadas, que en el mismo movimiento disimula las relaciones causales entre fragmento y totalidad y perfila las medidas a poner en juego para superarla. Por eso diremos que todos los actores que se muestran más preocupados por readecuar ese orden social que en alentar formas alternativas de organización social y acción política, pondrán en juego una operación ideológica cuando trabajen sobre el significado de esa crisis.⁸

La fracción liberal de la intelectualidad y *La Nación* llevarán esta operación hasta las últimas consecuencias. Estos actores harán hincapié en la *crisis de representatividad y de credibilidad* sufrida por las *instituciones políticas*. De allí, sostienen la necesidad de concretar una profunda renovación en la dirigencia política, a la que definen como “clase política” y a la que se refieren con una serie de calificativos degradantes. Esto es sin dudas un arma de doble filo, porque también alimenta el descrédito y el repudio que esa dirigencia política venía sufriendo, ahora de manera masiva.⁹ Al mismo tiempo, adjudican la crisis económica a la incapacidad del estado y de los gobiernos sucesivos para llevar a cabo una política fiscal austera. El nivel de repudio hacia la dirigencia política se percibe con claridad en una nota publicada por Abel Posse, en la que el escritor asegura: “O Duhalde se inscribe como verdugo de la vieja política o se condenará con ella. La Argentina no aguanta más la corporación politiquera” (*La Nación*, 11/2/2002). En el mismo sentido,

8 En este caso el funcionamiento ideológico se basa en operaciones que ocultan, niegan o disimulan las relaciones de dominación; desviando la atención u ocultando procesos existentes. Uno de los modos de funcionamiento de ese discurso, que se evidencia en este caso, es la sinécdoque, un tipo de operación que “implica la combinación semántica de la parte y del todo: se usa un término que representa la parte de algo a fin de referirse a la totalidad” (Thompson, 1998: 94-95).

9 Hacia fines de febrero de 2002 en *Clarín* y en *La Nación* aparecerán las primeras notas que llaman la atención sobre ese nivel de rechazo y comienzan a convocar al lector a que distinga “la paja del trigo”.

Marcos Aguinis, sostiene: “necesitamos que muera la vieja política y nazca una nueva” (*La Nación*, 27/1/2002).

En ese marco, ante la irrupción de las protestas callejeras encabezadas por las capas medias de las grandes ciudades, la lectura acerca de sus demandas se vuelve un terreno de controversias. En parte, lo que está en juego es la imposición de un sentido sobre los reclamos que orientará también las respuestas válidas. En este punto, Santiago Kovladoff considera que los reclamos apuntan a quienes tienen el deber de afianzar la democracia, pero no han hecho más que corromperla. El columnista de *La Nación* no dudará en afirmar que “la ciudadanía no descrea del sistema en el que vive sino de la idoneidad de muchos de los que lo representan” (*La Nación*, 9/1/2002).

Si nos volcamos directamente a las interpretaciones puestas en juego desde *La Nación* encontramos una línea editorial que propone un análisis sesgado de la crisis y del proceso de movilización. Al respecto, pasados algunos días de la insurrección del 20 de diciembre uno de sus editoriales plantea: “será fundamental que el actual presidente de la República y el Congreso de la Nación sepan interpretar los reclamos de la ciudadanía independiente”, “lo que se pide es la drástica disminución de los altísimos costos de la política y la entronización de una nueva manera de concebir el manejo de los asuntos públicos” (*La Nación*, 26/12/01). Esta lectura se traducirá en una constante demanda para que se restrinja el gasto público, a partir de una reducción de los gastos de “la política”. Lo que demuestran estas interpretaciones es que una vez lanzado el movimiento de protesta, un movimiento por demás ambiguo, el sentido de sus demandas se transforma en un campo fundamental de disputa. Es decir, desde esta franja del campo cultural no sólo se tratará de deslegitimar esa movilización, sino también incidir sobre su carácter.

No obstante, el planteo respecto de la necesidad de llevar a cabo una reforma institucional del sistema político –y por ende la idea de una crisis institucional– para poder contener y encauzar las demandas sociales no será exclusiva de esa fracción liberal y de las instituciones que la nuclea. De hecho, el propio Duhalde anunciará su intención de impulsar el cambio del sistema presidencialista hacia un régimen parlamentario, idea que fue apoyada por intelectuales que asumen tradiciones que van más allá de la liberal, como Eugenio Zaffaroni (*Clarín*, 14/1/2002).¹⁰

10 Vale señalar, en este punto, que los medios masivos funcionarán como verdaderas tribunas de interpelación a los dirigentes políticos acerca de la gravedad de la crisis y de la ne-

Por su parte, *Clarín* se diferencia sensiblemente de *La Nación* al poner más el foco en la situación socioeconómica que en la institucional, pero comparte la caracterización de la agudeza de la crisis. Para *Clarín* el “cuadro de crecientes necesidades básicas sin satisfacer, más la ausencia de horizontes conforman un explosivo caldo de cultivo para el estallido social, e impiden el despegue económico anhelado por el conjunto de la sociedad” (*Clarín*, 27/12/2001). De allí se deriva lo que sería la tarea primordial del nuevo gobierno, que deberá “establecer como prioridad nacional, a la par de promover la creación de puestos de trabajo sustentables, asumir la gravedad de la emergencia social y cumplir con los propósitos de reducir la pobreza”. En este sentido, *Clarín* asume una perspectiva más ligada con la crítica a las políticas neoliberales, lo que no quita que en otras notas aparezca la preocupación por la “institucionalidad”.

De este modo, lo que hay que resaltar es que las posiciones más proclives a la reforma o la conservación llana del orden social, responden a las condiciones políticas que generarían la movilización en relación a una u otra institución y en cada momento particular. A la vez, si la lectura de la crisis en clave de sinécdoque tiende a dejar a salvo al orden institucional, sacrificando en todo caso a la dirigencia política, también tiende a instalar la idea de cierto *aggiornamento* necesario de las instituciones políticas para recuperar su legitimidad.

2. 2 El cuestionamiento a “los 90”

A la hora de intervenir en una crisis de magnitud como la que nos ocupa, y en el momento de definir lecturas y posibles salidas una operación fundamental en relación a la producción de sentido pasará por la definición de un pasado con el cual contrastar el futuro que se propone. En este caso veremos cómo desde los distintos actores que tuvieron una participación activa en los momentos más acuciantes de la crisis y también durante la recomposición hegemónica que se impuso luego, se fue construyendo un “núcleo de sentido” que a través de diversos tér-

cesidad de que el sistema político de cuenta de las demandas puestas en juego por las distintas manifestaciones populares. Incluso antes del estallido popular, *La Nación* dejaba sentado el llamado de atención a toda la clase dirigente con una frase contundente: “no es la suerte de un gobierno la que está en juego, sino la del país” (*La Nación*, 20/12/2001). En esta línea Joaquín Morales Solá, editorialista del diario, señalaba con alarma que los dirigentes políticos seguían metidos en disputas internas, advertía que la clase media estaba sublevada y que por eso urgía “un gobierno fuerte” (*La Nación*, 23/12/2001).

minos –como los 90 o el modelo neoliberal– fue construyendo una idea respecto del pasado inmediato y de un conjunto de políticas gubernamentales, que operará como una imagen que pasará a representar “lo que no hay que hacer” y “a lo que no hay que volver”. Es evidente que en un primer momento dicha operación respondió al peso que adquirieron las protestas que siguieron a la insurrección de 2001, pero luego seguirá operando bajo diferentes formas. También es justo decir que al establecer esta representación como “punto de referencia negativo”, los propios sujetos que la construyen se distinguen de aquellos que se fijan como responsables, al tiempo que imponen una lectura sobre lo que se hizo mal y lo que no.

En este caso una parte de la intelectualidad y, de un modo u otro, los medios de comunicación comerciales actuarán como una especie de avanzada. Apenas ocurrida la insurrección, la intelectualidad liberal nucleada en torno a *La Nación* comenzará a poner en juego esta construcción de sentido. En una nota publicada en ese diario el 22 de diciembre de 2001, Tomás Eloy Martínez asegura: “Cuando se lee que Menem asoma en las encuestas como uno de los candidatos para suceder a De la Rúa, se hace difícil creer que los argentinos tengan una memoria tan flaca (...) Ninguno de los protagonistas del pasado inmediato parece adecuado para rescatar a un país que se hunde”.

En la misma línea, Abel Posse es más contundente en relación a ese pasado inmediato: “nadie veía en aquellos tiempos de fiesta –dice Posse– que detrás de las privatizaciones se privatizaban las ganancias y se socializaban las pérdidas: el país más armónico y culturizado de nuestra América terminaría por tener la mitad de su escasa población bajo el nivel de pobreza” (*La Nación*, 23/2/2002).

Entre la franja de economistas que mantuvieron durante el auge neoliberal posicionamientos críticos desde posturas que retomaban principios de la doctrina keynesiana y mantenían una línea más vinculada a un “Estado Social” también se contribuyó a alimentar esa noción sobre el pasado que fue estableciendo un nuevo piso para la discusión. El máximo exponente de esta posición fue el grupo Plan Fénix, conformado en 2001 por profesores de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Ante la agudización de la crisis, Aldo Ferrer, integrante de ese colectivo, afirmaba que no había más alternativa que “asumir las consecuencias del derrumbe de la estrategia neoliberal”, en ese marco llamaba a asumir

“que tenemos que vivir con lo nuestro, es decir, hacernos cargo de nuestro propio destino en el mundo global” (*Clarín*, 8/1/2002).

Si dirigimos la mirada a los medios de comunicación masivos comerciales, encontraremos diferentes elementos que hacen a lecturas críticas respecto del “modelo neoliberal”. En el caso del diario *Clarín* durante los días previos al estallido popular y también en los días posteriores, podemos ubicar una serie de editoriales que llaman la atención sobre los problemas que atraviesan las empresas de servicios públicos privatizadas (*Clarín*, 19/12/2001; 29/12/2001). Por su parte, al analizar la movilización de la noche del 19 de diciembre y los saqueos producidos ese día en el conurbano bonaerense, el editorialista de ese diario, Eduardo Van der Kooy pondrá el foco en lo que parece ser “el derrumbe del principio de autoridad”, pero también en un Gobierno que “debe entender que su política de ajuste permanente parece haber encontrado un límite en la sociedad” (*Clarín*, 19/12/2001). Producida la insurrección, otro editorialista de ese diario, Ernesto Semán criticará explícitamente a la convertibilidad y al estilo político que impuso el menemismo (*Clarín*, 21/12/01). Tres días después, el propio Semán definirá a las víctimas de la represión del 20 de diciembre como “jóvenes víctimas del modelo”.

En los días que siguieron a la insurrección esta mirada crítica acerca de las políticas neoliberales estará presente en diversas notas de opinión, en las que se caracterizará al modelo neoliberal como “menos poder del Estado, más desocupación y más corrupción” (*Clarín*, 22/12/01). En esos textos también se trabaja la idea de que ese “modelo” impuesto por los gobiernos de Menem y la Alianza son culpables del estallido social y responsables de las muertes causadas por la represión policial (*Clarín*, 24/12/01).

Página 12 trabajará en una línea similar. Como muestra de ello, el 20 de diciembre, Horacio Verbitsky, refuerza la idea de que la insurrección ha dado muestras de que no existía margen para las políticas de ajuste y Luis Bruschtein, editorialista del diario, sostenía que Menem dejó en el país “tierra arrasada”.

Entretanto, en *La Nación* encontramos una posición distinta, no hay una crítica frontal, sino un intento por diferenciar la política económica y los principios “liberal-democráticos” de la manera en que una y otros fueron aplicados. En sus dos editoriales del 21 de diciembre, por ejemplo, desde este diario se intenta salvar de las críticas generalizadas

al ex ministro Cavallo (se habla de una crisis económica que “pese a los esfuerzos del ministro Domingo Cavallo no pudo ser revertida”), al tiempo que se centran las responsabilidades en los “políticos” por su incapacidad para llevar a cabo acuerdos duraderos. Así, la crítica a los 90 pasará ya no por los elementos centrales de un modelo económico social, sino por los rasgos que adquirieron las acciones de un grupo social, es decir de las elites dirigentes de los partidos políticos que ejercieron la conducción del Estado en aquel momento. En este punto, encontramos una variante de la operación ideológica que de por sí implica la expresión los 90. Una operación que supone reemplazar el todo por la parte, o sea para no discutir el orden social global (en este caso, ni siquiera un modelo económico) se pone el foco en una parte: la dirigencia política, a la que se caracteriza como corrupta e incapaz. No obstante, se aporta de algún modo a construir un pasado al que no hay que volver y en el que se van señalando los problemas que habrá que abordar.

Entre las fuerzas políticas el panorama es otro. Dentro del justicialismo, el duhaldismo ratificaba el plan económico que venía planteando desde las elecciones de 1999. El plan consistía en la pesificación de la economía, la salida de la convertibilidad y la reestructuración de la deuda externa, todo debería contar con el aval de los centros de poder transnacional. La propuesta contaba con el respaldo de los sectores críticos de la UCR, encabezados por el entonces senador Raúl Alfonsín (*La Nación*, 21/12/01). Puntualmente, por aquellos días el Encuentro de Economistas Argentinos, vinculado al PJ y a entidades empresarias presentó un plan alternativo, que consistía básicamente en promover “una salida ordenada de la convertibilidad”. Además el documento hablaba de una devaluación y de recuperar competitividad (*Clarín*, 19/12/01).

Si hacemos un salto en el tiempo nos encontraremos con el lugar que este tópico ha ocupado en el discurso kirchnerista. Vale la pena advertir que es un elemento que tiene un peso importante desde el recorrido previo a las elecciones de 2003. En aquel tiempo, Néstor Kirchner aseguraba: “los argentinos tendríamos que preguntarnos cómo puede haber un 18, un 17 o un 20 por ciento de votos para los que le robaron a la Argentina”. Y subía la apuesta, con un discurso que no se queda en el tema de la corrupción o el despilfarro: “Menem propone un país aliado al capital concentrado, de relaciones carnales con Estados Unidos” (*Página 12*, 13/4/2003). Por aquellos días, el entonces ministro

de Economía, Roberto Lavagna, ratificaba el balance de las políticas aplicadas por los gobiernos de Menem y de De la Rúa. Para Lavagna, la convertibilidad es “un caso de estudio para no repetirlo”, “fue un chaleco de fuerza” para la economía argentina, generó “la destrucción de la industria y los puestos de trabajo” (*Página 12*, 20/4/03).

Si pasamos al ámbito empresarial, veremos cómo es la Unión Industrial Argentina (UIA) la entidad que asume más claramente esta operación como forma de fundamentar las modificaciones que impulsa en la política económica. Sus demandas venían siendo planteadas desde hacía un par de años cuando impulsó la creación del Grupo Productivo junto con la Cámara de la Construcción (CAC) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el plan de ese agrupamiento, contaba con el apoyo de los bancos nacionales y coincidía con el del duhaldismo, ya que básicamente planteaba la devaluación y la implementación de retenciones a ciertas exportaciones. Para graficar el tipo de intervención de la UIA, unos días antes del estallido de diciembre la entidad se había movilizó a la Cancillería junto con un sector de la CGT para reclamar “la defensa de la industria nacional” (*Clarín*, 19/12/2001).

De este modo, podemos señalar cómo esta serie de actores políticos y sociales fueron construyendo una operación ideológica que implicó una disimulación de los procesos históricos que explican todo un estado de situación y de los mecanismos específicos que se implementaron en un período histórico. Concretamente dicha operación consistió en poner en primer plano ciertos elementos parciales: la “convertibilidad”, “la corrupción”, “la liberalización de la actividad económica”, que por un lado se descontextualizaban de sus propias condiciones de emergencia y por otro fijaban la agenda de la superación de la crisis.

2. 3 El caso de los medios masivos de comunicación comerciales

A la hora de plantear el proceso de recomposición hegemónica, una de las principales hipótesis que formulamos refiere al accionar de –lo que podría denominarse– “el sistema” de medios masivos de comunicación comercial en nuestro país, cuya configuración remite a las reformas implementadas desde 1989 a la legislación vigente, que permitieron la conformación de conglomerados multimedia que funcionarían como oligopolios comunicacionales.

Como ya señalamos, en la primera etapa del menemismo, esos multimedios acompañaron las reformas implementadas por el gobierno justicialista, más allá de algunos espacios críticos (como es el caso de *Página 12*). La crítica desde algunos medios masivos comerciales emergió iniciado ya el segundo gobierno de Menem (1995-1999), focalizando en el modo en que se realizaron las privatizaciones como así también en las características “prebendarias” y/o “corruptas” en las que tuvo lugar la implementación del proceso, pero no sobre el proceso “en sí” (justamente allí es donde se puede observar concretamente el accionar de la “hegemonía”).

Esto implica que las “voces críticas” provenientes del “campo periodístico” profesional¹¹ inserto en estos medios masivos de comunicación comercial en general –con algunas salvedades– no cuestionaban al “modelo” en sí, sino al “modo” en el que dicho modelo fue implementado por el gobierno menemista. Por eso es que la paulatina “ruptura” del consenso respecto de las políticas neoliberales llevadas adelante por el menemismo no implicaban necesariamente una crítica respecto del Plan de Convertibilidad en sí, cosa que quedó en claro con la llegada de la Alianza al gobierno.

El resultado fue la continuidad “neoliberal” de las políticas “aliancistas” y las llevadas adelante antes por el gobierno de Menem, que no lograron reducir ni el enorme “ejército de desocupados” ni la enorme desigualdad social producida al interior de la masa poblacional empleada.

Como ya es sabido, luego vendría un proceso de crecimiento de las luchas sociales que culminaría en el estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001, pero que se mantendría en los meses siguientes, en un ciclo que no pasará tanto por la cantidad sino por la cualidad, es decir por la masividad y por la diversidad de sectores que participaron. En este apartado nos interesa particularmente analizar el funcionamiento de esos medios de comunicación masivos comerciales ante la emergencia de ese movimiento de protesta que no solo levantaba aquella

11 Que abarcaba un “amplio” espectro ideológico, ya que iba desde las manifestaciones de un periodista ligado a la derecha más elitista e incluso a sectores golpistas como Mariano Grondona, pasando por las de periodistas del Grupo *Clarín* como Magdalena Ruiz Guiñazú o Eduardo Van der Kooy, hasta el grupo de periodistas ligados a un diario de centroizquierda como *Página 12* como Jorge Lanata, Horacio Verbitsky, Martín Caparrós, Román Lejtman, Raúl Kollmann, José María Pasquini Durán o Ernesto Tenenbaum; muchos de ellos hoy parte también del Grupo Clarín.

consigna del “que se vayan todos”, sino que también reclamaba mejoras sociales y repudiaba las instancias formales de representación política.

En este sentido, hemos tomando una serie de presupuestos que funcionan además en términos de marco teórico, para el análisis de los medios seleccionados. En primer lugar, suponemos que si bien la hegemonía tiene un sustento material, el mismo se articula con una serie de procesos simbólicos construidos en términos del accionar de un “sentido común” discursivo, presente dentro del “sistema” mediático comercial. En segundo lugar, que este “sentido común” práctico-discursivo, operante dentro del mencionado sistema de medios implica que esos discursos presentes en los medios se despliegan en términos de existencia de un “control social”. Esto es, que el discurso prevaleciente al interior del sistema de medios busca siempre “institucionalizar”, “identificar” a los diferentes sujetos, de modo de promover la “funcionalización” de las acciones dentro del marco democrático institucional establecido.

Es por eso que puede verse que en los días previos a los sucesos del 19 y 20 de diciembre *La Nación* identifica la existencia de una crisis, caracterizada como una crisis económica y simultáneamente como una crisis “política”. Una vez ocurridos los saqueos del 19 de diciembre, el diario señala que estos fueron actos “irracionales” y de “violencia organizada”. En las crónicas se relatan “ataques a la propiedad privada y comercios” y se reclama protección jurídica y social. En relación al gobierno de la Alianza, se destaca la falta de autoridad y de liderazgo político para enfrentar la crisis (*La Nación*, 21/12/2001). Consumada la renuncia de De La Rúa, el diario identifica un “vacío de poder” donde la peor opción es una convocatoria inmediata a elecciones. Se plantea que la idea de “que se vayan todos” es imposible e ingenua, la salida debe ser dentro de las instituciones existentes (*La Nación*, 23/12/2001). Mariano Grondona manifiesta que “el potro argentino es magníficamente rebelde. Sólo el domador que una la seducción de la caricia a la firmeza del pulso podrá calmarlo” (*La Nación*, 30/12/2001)

Concretada la asunción de Duhalde, *La Nación* saluda el hecho de que tanto la Plaza de Mayo y el Congreso estén custodiados con numerosa fuerza policial, cosa que no había ocurrido “cuando la violencia organizada se abrió paso en la calle, primero contra el gobierno de De la Rúa y después contra el de Rodríguez Saá” (*La Nación*, 2/1/2002).

La Nación esgrime la necesidad de “frenar la protesta” para conseguir la “paz social”. La protesta social es asociada a la “irracionalidad” y al “vandalismo organizado”. Actos ilícitos y “orquestados”, algunas veces por la izquierda y en otras por el PJ.

A lo largo de esos convulsionados meses, en *Clarín* podrá observarse como los hechos de protesta se construyen en tanto que hechos de “violencia” o bien “delictivos” (en el caso de los saqueos); con el consecuente llamamiento al “orden” que de ello se desprende. En las fechas previas al estallido de diciembre pero también a la Masacre del Puente Pueyrredón, encontramos una gran cantidad de informaciones referidas a los hechos que hemos denominado de “control social” (robos, secuestros, hechos delictivos y otros que suponen una “desviación” de la norma social establecida). En las fechas donde se producen los sucesos (19 y 20 de diciembre de 2001, 26 de junio de 2002) puede verse un aumento de las noticias referentes a hechos de “protesta”, pero que las mismas también se combinan –en menor grado– con las noticias denominadas de “control social”. La construcción noticiosa desde donde se promueve un llamamiento al “orden” implica –en mayor medida– el recurso básico a la “objetividad” periodística, a partir del uso de crónicas, antes que la opinión vertida en un “editorial”, aunque esto también se encuentra en menor medida.

Por su parte, *Página 12* reivindica por entonces la insurrección popular y condena la represión.¹² No muestra preocupación por la legitimidad, sino por dilucidar el significado del estallido social, remarcando el carácter “burocrático” de la “salida” aprobada por el PJ. Pero muestra preocupación ante las alternativas que no garantizan cierta recomposición de la legitimidad de las instituciones (*Página 12*, 23/12/2001). En algunos miembros relevantes existe cierta expectativa con Rodríguez Saá que no existirá con Duhalde: “El presidente provisional Adolfo Rodríguez Saá (...) promete medidas de austeridad –dirá Verbitsky– que, por una vez, no recaerían en los más postergados” (*Página 12*, 23/12/2001). También en este diario empiezan a tener una presencia importante las fuerzas de centroizquierda e izquierda.

12 Se habla de “gesta popular”, de una “movilización espontánea y masiva”. Pero además Pasquini Durán advierte que “tienen que surgir nuevas fuerzas políticas” y que “el destino colectivo no puede ser dejado en manos de un puñado de políticos profesionales”; porque se necesitan “más política y más definiciones ideológicas”.

Así las cosas, en *Página 12* predominan las dudas y las advertencias para un lado y para el otro. Por un lado, en relación a una devaluación que puede seguir maltratando a los trabajadores, por otro, el peligro del copamiento de la calle y la represión. Pasquini Duran es uno de los editorialistas que irá más allá y pone el eje en las posibilidades reales de lograr un cambio político, social y económico que deberá estar sustentado en otras coaliciones sociales y deberá ir en contra de las minorías privilegiadas. Para el periodista, Duhalde no expresa esa posibilidad e incluso está en duda que pueda encauzar la crisis.

En definitiva, en términos comparativos, puede observarse que en el modo de construcción de la noticia, tanto en *La Nación* como en *Clarín* nos encontramos –frente a los sucesos de diciembre de 2001, pero también frente a la Masacre de Puente Pueyrredón– con un llamamiento de “regreso” al “orden”, pero en *Clarín* éste se construye a partir básicamente de crónicas, mientras que en *La Nación* se observa un peso mayor en las editoriales y notas de opinión (aparece de ese modo como un medio “doctrinario” y hasta pedagógico). Al mismo tiempo, en los tres medios se observa un llamamiento a mantener la “institucionalidad democrática”, sin embargo nuevamente en *Clarín* y *La Nación* esto se construye a partir de la postulación de una idea de un “orden democrático” (institucional) opuesto a una “violencia” (para-institucional), mientras que en *Página 12* –a pesar de la existencia de cierta ambigüedad al respecto– el “orden democrático” (institucional) se construye con un carácter más inclusivo de la “disidencia”. Incluso, esto se puede plantear en términos de una matriz que se vuelve permanente respecto de cómo ponderan las amenazas hacia ese orden. En el caso de *Página 12* la estructura del razonamiento repite la condena a la transgresión a ese orden que supuso la dictadura, en *Clarín* y *La Nación* el repudio es frente a la violencia “de todos los bandos.

De esta forma, encontramos –partiendo de las hipótesis antes mencionadas– motivos y elementos empíricos como para sostener que en estos momentos históricos relevados puede observarse que los medios masivos de comunicación comerciales operaron como instrumentos de “control social” tendientes a reconstituir el discurso hegemónico bajo el contenido de cierta ideología de la clase dominante (la de la “convertibilidad” durante los noventa; la de la “producción” luego de diciembre del 2001 y la de la “normalización institucional” y la de la “seguridad”). Esto puede verse en la defensa de cierta institucionalidad

“democrático-formal” (aún en un diario como *Página 12*, donde podría decirse que opera cierto discurso de la llamada “transición democrática”); en la caracterización de los “hechos de protesta” como hechos que bordean la “legalidad” y que pueden ser tildados de “ilegales” y por lo tanto condenados (sobre todo en *Clarín* y *La Nación*); en la presencia, compensatoria de los hechos de protesta, de una gran cantidad de sucesos “delictivos” durante estos momentos históricos (también aquí tenemos que hacer la salvedad de que esto es mucho más importante en *Clarín* y *La Nación* que en *Página 12*).

Sin embargo, cabe aclarar que esta “instrumentalización” es concebida aquí en un sentido más “estructural”, que va más allá de la coyuntura política que estamos analizando puntualmente. A partir de trabajos anteriores (AAVV., 2008) y de un análisis comparativo del funcionamiento de los medios masivos comerciales en su interrelación con el funcionamiento del “sistema” político y del económico (interrelacionados dentro de una “totalidad” capitalista), consideramos que si bien los medios pueden representar distintas tendencias y perspectivas ideológicas, lo cierto es que se ubican en general dentro de una suerte de “ideología intermedia” más allá de las variantes particulares, traccionados por una noción histórica de “objetividad periodística”. En tanto que empresas comerciales ligadas al mercado, por lo general –salvo en el caso de los medios “públicos”– sus críticas se despliegan en gran medida hacia el subsistema político antes que al económico, con la excepción que se desarrolle mainstream del campo periodístico, suele ubicarse “gradualmente” hacia la izquierda o hacia la derecha de los gobiernos, según la orientación político-ideológica de estos últimos (gradualmente a la “derecha” de Alfonsín, a la “izquierda” de Menem, a la “derecha” de De la Rúa, en el “centro político” –con algunas salvedades en este caso tanto por derecha como por izquierda– de Duhalde¹³ y a la “derecha” de Kirchner). Por último, ésta “ubicación” (o “topografía” como sostendrían algunos autores estructuralistas) posee límites establecidos por el “sistema” político (en el sentido de nunca subvertir la legalidad burguesa), lo que puede constatarse en el mencionado análisis de los sucesos de diciembre de 2001 y el posterior abroquelamiento de

13 Este tal vez sea el caso más interesante a ser estudiado, que motivó también nuestro interés al pensar la cuestión de la “recomposición hegemónica”. Lo que pareciera ser claro es que el conjunto de los medios masivos comerciales jugaron un rol en el proceso de recomposición del “sistema” político durante el periodo duhaldisto y a posteriori de este.

los medios comerciales en la defensa del conjunto de ese mismo “sistema político” y de la estructura” económica.

2. 4 El papel de “lo nacional”

Ya en su discurso de asunción, en enero de 2002, Duhalde trató de instalar la idea de que el suyo debía ser un Gobierno de “salvación nacional”. Allí apuntó a “la elaboración de un programa de salvación nacional” y afirmó: “asistimos al proceso inédito a la formación de un gobierno de unidad nacional. No hay nada que celebrar, ni aplaudir. No es momento de cánticos ni de marchas partidarias. Es la hora del Himno Nacional” (*La Nación*, 2/1/2002).

Unos días más tarde, el por entonces presidente le enviaría una carta al titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Estanislao Karlic, en la que ratifica aquel enfoque. En esa misiva, el por entonces presidente provisional les ratificó a los obispos su decisión de aceptar el ámbito ofrecido por la Iglesia Católica para “transitar un proceso de diálogo nacional” que permita de manera concertada con todos los sectores sociales “la elaboración inmediata de un programa de salvación nacional” tal como expresó en su discurso ante la Asamblea Legislativa (*Página 12*, 5/1/2002).

Aunque con un matiz, este significativo ocupa un lugar importante en la manera en que Néstor Kirchner analiza el escenario que dejó la insurrección y los objetivos de su gobierno, días antes de las elecciones de 2003: “Creo que hoy estamos ante un gobierno de supervivencia nacional con aciertos, con asignaturas pendientes y con errores (...) El nuestro es un proyecto de reconstrucción nacional” (*Página 12*, 13/4/03).

Lo que aparece aquí con toda claridad es una operación ideológica que busca construir una comunidad imaginaria, o en todo caso, recomponerla para intentar construir un horizonte de referencia que ponga los intereses comunes por encima de los particulares.¹⁴ En este caso recurrir a la idea de “lo nacional” no sólo va a operar en el plano de la disimulación de los conflictos, las desigualdades y los antagonismos propios de una sociedad que se estructura en relaciones de explotación

¹⁴ “Las relaciones de dominación se pueden establecer y sostener si se constituye, en el plano simbólico, una forma de unidad que abarque a los individuos en una identidad colectiva, sin tomar en cuenta las diferencias y divisiones que puedan separarlos” (Thompson, 1998: 97).

y dominación, sino que también intenta contactar con un imaginario muy potente en una sociedad como la argentina en la cual la idea de la construcción de una Nación ocupó un papel central en la acción cultural de la clase dominante, amén de la relación directa que en este caso particular ciertos actores van a intentar construir con un período histórico en el que “lo nacional” se refería a la posibilidad de desarrollar un capitalismo relativamente autónomo sustentado en el papel jugado por una burguesía nacional. En este plano, “lo nacional” es un elemento cultural residual, es decir generado en el pasado pero con capacidad para seguir operando en la construcción de un sistema cultural hegemónico, aunque de modo conflictivo en la medida en que el movimiento de protesta no dejará de recurrir a toda una serie de símbolos y no omitirá lecturas sobre la crisis en clave de “la entrega del patrimonio nacional”, hecho que denota la distinción entre responsables y perjudicados (Williams, 2000).

Entre los intelectuales liberales dicha operación ideológica será recurrente. Uno de los casos paradigmáticos, se presenta cuando ante la asunción de Duhalde Santiago Kovladoff señala: “al justicialismo se le brinda hoy la oportunidad de demostrar que hay algo que le interesa más que el poder (...) Y ese algo es la Nación. No la patria peronista: la Nación. No la patria sindical: *la Nación*” (*La Nación*, 9/1/2002).

En cuanto a los medios de comunicación, surge un acuerdo entre *Clarín* y *La Nación*. El 31 de diciembre de 2001, luego de la renuncia de Rodríguez Saá, *Clarín* publica un editorial titulado “La hora de la unidad nacional”, en donde considera que la sociedad reclama cambios en “la política” y que la salida de la crisis reside en la conformación de un “gobierno con autoridad moral” que sea producto de, y busque, “acuerdos sólidos” para recomponer la confianza de los ciudadanos. Y que implemente “un modelo económico sustentable que respete la seguridad jurídica”. En tanto, *La Nación* se muestra conforme con la asunción de Duhalde, su editor José Claudio Escribano titula su nota de análisis “Triunfó la política del acuerdo” y sostiene que la Argentina ha comenzado a desfilarse hacia la primera definición realista (*La Nación*, 2/1/2002). En uno de los editoriales de ese día, se puede leer: “éste debe ser un verdadero gobierno de unidad nacional. Ha llegado el imposterable momento de que esa intención sea cristalizada”.

En la misma línea, en los momentos de mayor incertidumbre, la dirigencia empresarial recurre a la misma operación discursiva. Ante la renuncia de Rodríguez Saá, el Grupo Productivo (conformado por la UIA, la Cámara de la Construcción y Confederaciones Rurales Argentinas) reclamó la necesidad de un “un gobierno de unidad nacional” que lleve adelante un plan económico sustentable y lo presente en Estados Unidos para requerir el apoyo de los organismos multilaterales de crédito (*La Nación*, 31/12/01). Asimismo, desde REPSOL se pone en juego una mirada que denota una lucidez respecto de lo que estaba en juego: “Las privatizadas deberemos aceptar que ganaremos menos. Como dijo Duhalde, se terminó el modelo. El país está mal y hay que salvarlo” (Ídem.).

2. 5 El rol del estado

En medio de la crisis económica muchas de las miradas se centran en el papel reorganizador e impulsor que puede jugar el estado a partir de diferentes políticas. El discurso que postula un estado pequeño que cumpla funciones mínimas va perdiendo fuerza e irá quedando refugiado, más que nada, en los institutos de investigación neoliberales, algunos consultores, ciertos voceros periodísticos y el grueso de la fracción liberal del campo intelectual.

Entre los empresarios, la crisis económica es de tal envergadura que, aunque no siempre se plantee explícitamente –nadie dejará de hacer lobby ante el Gobierno–, todos los sectores empresarios buscan en el estado el agente que compense las pérdidas o la merma en las ganancias. A la vez, desde distintos espacios institucionales y posiciones político-ideológicas se interpela a los dirigentes políticos para que se implementen cambios en las políticas, pero también reformas en los mecanismos de funcionamiento institucional.

Un Estado con políticas para la producción, el empleo y la pobreza

En este punto, si la reestructuración del Estado y la modificación de su función en la década anterior tendió a garantizar la desregulación y la apertura económica, ahora sectores de la industria, una parte de los partidos tradicionales, de los medios masivos y del campo intelectual plantearán una especie de programa que se centra en configurar un tipo de Estado que promueva la producción y el empleo y se haga cargo de

las urgencias sociales¹⁵. Esta línea de intervención se complementará con la que hace al modelo “productivo”, que analizaremos en el apartado siguiente.

La señal más importante que da el gobierno de Duhalde en este sentido es la creación del Ministerio de la Producción. Aunque esa cartera quedará vaciada en pocos meses, la impronta de un estado que interviene para alentar la producción, crear empleo y generar mejores condiciones para insertar los productos nacionales en el mercado internacional está a la orden del día. Asimismo, en esa dirección, recién asumido, frente a industriales y demás empresarios, Duhalde se comprometerá a que el estado se dedique a cuidar y potenciar la capacidad productiva que sigue en pie luego del proceso de desindustrialización. También dirá que uno de los objetivos primordiales de su gobierno pasará por “garantizar los derechos humanos básicos a los argentinos, la alimentación y la salud” (*Página 12*, 5/1/2002). Los economistas del PJ, por su parte, hablan de un plan keynesiano (*Página 12*, 22/12/2001).

Página 12, es el medio de comunicación que asume el llamado a modificar el rol del estado con más contundencia. Julio Nudler grafica el espíritu que comparte todo el equipo de editorialistas de ese medio, al plantear la necesidad de implementar un programa económico que:

Devalúe, maneje con prolijidad la política monetaria y fiscal, enfatice la mejora del tipo de cambio exportador con cargo a ciertas importaciones, repare la regresividad del régimen impositivo, reduzca la ineficiencia de la administración fiscal, ataque específicamente algunos precios oligopólicos (...), declare el default con una propuesta dura y realista a los acreedores, tome algunos pasos concretos

15 Vale señalar que este horizonte discursivo no es ajeno a las propuestas que hacia principio de la década empezaron a elaborar los organismos multilaterales de crédito. En el caso del Banco Mundial, los resultados sociales y económicos de las políticas neoliberales y los procesos de resistencia popular obligaron a introducir modificaciones en sus programas. Esta readecuación fue conocida como “reformas de segunda generación”. Las mismas suponen una serie de medidas publicadas en el “Informe del Banco Mundial sobre el Desarrollo en el Mundo, 2000-2001”. En el prefacio, de ese documento el presidente del organismo planteaba un objetivo orientador: “Fortalecer la aceptación de las reformas y de los procesos de estabilización”, con el fin de “impedir los conflictos vinculados a la distribución de los recursos, que con frecuencia traen consigo bloqueos, agravan las crisis económicas y pueden incluso hacer caer a los gobiernos” Para ello será necesario impulsar la creación de “redes de seguridad” sociales.

para la reforma del Estado, establezca una red de protección social en base a medidas de redistribución progresiva del ingreso y persiga por lo menos algunos casos emblemáticos de corrupción.

Esta posición respecto al papel que debe jugar el Estado en relación a la producción abarca a un arco amplio entre las fracciones intelectuales. Tal es el caso del consultor Carlos Magariños y el profesor de la UCA, Hugo Dalbosco quienes parten de una caracterización similar:

Si algo queda claro luego de la crisis argentina es la patente debilidad del Estado, que, después de más de una década de reformas estructurales y múltiples ajustes, se encuentra incapacitado para ejercer su poder. Por eso se puede decir que el problema de la Argentina es el Estado, pero no por el peso relativo de su gasto, sino por su debilidad para promover el crecimiento del producto nacional (*Clarín*, 18/2/2002).

Los autores completan esa caracterización haciendo referencia al papel del estado en otras sociedades contemporáneas. Aseguran que “difícilmente se encuentre alguna economía próspera en la cual el Estado no pueda imponerse sobre los demás grupos sociales y, llegado el caso, pueda resolver los “fallos” del mercado sin desacreditar la economía capitalista”. De esta manera, no dejan dudas acerca de que el fortalecimiento del estado no es contradictorio con la dinámica de acumulación del capital, sino todo lo contrario, los autores piensan en políticas e instituciones que apuntalen el funcionamiento del mercado y posibiliten su expansión. El artículo de Magariños y Dalbosco es esclarecedor porque pretende tranquilizar y generar consenso, sobre todo entre el empresariado. Por eso afirman que es necesario definir y poner en práctica “un modelo de desarrollo para lo cual es preciso armar un plan de negocios rector, que implica una política industrial y tecnológica determinada que defina la inserción de la Argentina en el mundo”.

Vale la pena remarcar la manera en que aparecerá –a posteriori– el papel del estado en la campaña electoral de Néstor Kirchner. Este por un lado definirá su propuesta de gobierno como estructurada a partir del objetivo de construir un capitalismo nacional. A su vez, hablará de la necesidad de superar el pasado en base a la “subordinación del poder económico al poder político nacional, en acatamiento de la

capacidad regulatoria del Estado”. Junto con ello, dirá que hay que apuntar a una “sociedad equilibrada” y llamará la atención sobre el aprendizaje que ha significado asumir que “el mercado organiza económicamente pero no articula socialmente”. En esa perspectiva, según Kirchner “el Estado debe actuar como reparador de las desigualdades sociales a través de una tarea constante de inclusión social” (*Página 12*, 23/4/2003).

La reforma del Estado y del sistema político

Las lecturas parciales respecto de las razones de la crisis social, económica y política, derivan en una preocupación acerca de la necesidad de incorporar también reformas en el sistema político que permitan recuperar la pérdida legitimidad. Esto hará que un actor como *La Nación*, que seguía sosteniendo la idea de un estado garante de las libertades individuales más que orientador de la economía, coloque a la cuestión del estado entre sus preocupaciones centrales. De hecho, la necesidad de volver más “eficiente” al estado será un tema recurrente. Por dar un ejemplo, en un editorial del 6 de enero de 2002, se asegura con alarma que en el plan anunciado por el gobierno no se estiman medidas “que apunten a una mayor eficiencia del Estado y a una reducción genuina, sostenible y significativa del gasto público”. Asimismo, ante el auge de las protestas que tenían como blanco a la dirigencia política, *La Nación* aspirará a que el Gobierno y la dirigencia política perciban la gravedad de la crisis y hagan gestos que permitan descomprimir la situación. Por eso en un editorial de febrero de 2002 afirma que es imprescindible “considerar la urgente necesidad de que ciudadanos independientes, desconectados de toda fuerza partidaria, puedan participar como candidatos en las contiendas electorales y puedan, así, acceder a los principales cargos públicos de origen electivo” (*La Nación*, 24/2/2002).

La demanda de una mayor transparencia y eficiencia institucional, tampoco es monopolio de *La Nación*. Incluso luego de definir los grandes ejes de un plan económico que supone salir de la convertibilidad y apostar a “los sectores productivos”, *Clarín* asegura que es “igualmente importante reformular el aparato del Estado en función de una mayor eficiencia y transparencia, desactivando los viejos resortes del clientelismo político” (*Clarín*, 20/1/2002).

Tomemos dos casos representativos para analizar el modo en que la cuestión del estado aparece entre los intelectuales liberales y liberal-democráticos. Entre estos últimos, Oscar Oszlak, referente de un espacio crítico respecto de las políticas neoliberales, sostiene, a principios de 2002, que en nuestro país, sobre todo durante la década del '90, se llevó a cabo un proceso de transformación estatal que implicó un verdadero “desguace”:

En los '90, el Estado redujo su aparato institucional aunque no su intervención. El Estado modificó la naturaleza de los destinatarios, retirándose de algunas funciones esenciales que fueron asumidas por otras instancias (...) En los últimos años el Estado puso el piloto automático. No tuvo prácticamente ninguna intervención decisiva respecto de salvaguardar las fuentes de trabajo ni alentar la producción nacional (*Página 12*, 4/2/2002).

En otra nota publicada por esos días, Oszlak plantea su concepción del Estado al analizar la crisis argentina: “El Estado ha dejado de ser el cemento que amalgama a la sociedad, la principal instancia de articulación de relaciones sociales, el garante de la reproducción de un sistema de reglas de juego bajo las cuales se desenvuelven esos vínculos” (*Clarín*, 2/2/2002). Por esa razón, para nuestro autor, la crisis de la sociedad argentina se caracteriza por un movimiento en la sociedad que “exige al Estado un papel mucho más protagónico”. Para Oszlak, en este contexto, la tan mentada “reforma del Estado” “no puede limitarse a un nuevo torniquete sobre el gasto”, sino que debe incorporar un tipo de gestión pública que pugne por defender derechos adquiridos, rever buena parte de las decisiones tomadas en el pasado inmediato, juzgar a los corruptos, reconstruir el poder judicial y definir reglas de juego claras y estables, “únicas aptas para la convivencia civilizada y el desarrollo material y moral de sus miembros”.

Para cerrar, analicemos una intervención que sintetiza la posición de la fracción liberal de la intelectualidad. En sucesivas notas periodísticas, el politólogo Natalio Botana plantea que el “régimen democrático” ha entrado “en zona de riesgo por dos causas principales: porque no responde a la crisis como la opinión espera y porque se ha puesto en tela de juicio el sistema representativo” (*La Nación*, 28/2/2002). Ante ese panorama, Botana sostiene la necesidad de llevar a cabo una reforma del estado y de los partidos, orientada a implementar una marcada renovación del sistema político que ponga freno a la crisis de legítimi-

dad de las instituciones. La reforma política que vislumbra Botana se refiere a una renovación de la dirigencia y a la recuperación de la capacidad recaudadora del estado (*La Nación*, 17/1/2002).

Hay que recordar, finalmente, que desde el sistema político el propio Duhalde llegó a plantear la necesidad de una reforma constitucional que impulse el pasaje a un “parlamentarismo”. En una línea similar, Elisa Carrió, desde su condición de candidata a presidenta, promovió una “Constituyente que refunde todos los poderes del Estado”, y que genere “una nueva representación política que conduzca a un sistema semiparlamentario al estilo de la V^o República en Francia. Una reforma del estado que no sea un simple ajuste sino un rediseño estatal” (*Página 12*, 24/1/2002).

Llegados a este punto, vale la pena señalar que las discusiones respecto del rol que debía asumir el estado en el escenario abierto por la crisis denota no sólo una nueva operación ideológica orientada a integrar a los grupos sociales más allá de los conflictos, al asumir la noción de “Estado” en tanto instancia supuestamente neutral que actúa por más allá de la lucha de clases, sino también la trascendencia de éste en la construcción de hegemonía político cultural. Es que es en función de la mediación que desempeña el estado capitalista cómo una clase (con sus fracciones y aliados) puede organizarse como un bloque en el poder y es también a través del estado desde donde esa clase dominante puede desplegar iniciativas orientadas a impedir o dificultar la organización de las clases subalternas (Bonnet, 2008:275).

2. 6 Un modelo “productivo”

Asumido Duhalde en 2002 se instalará un discurso que intenta imponer la idea de que se está llevando a cabo un cambio rotundo en el modelo económico. Desde el Gobierno se hablará de una nueva alianza social que gobernará el país, basada en la “comunidad productiva”. Este gesto inaugural se apoyará en reuniones públicas y en el acercamiento a las entidades industriales. Como ya señalamos, una de las primeras medidas del Gobierno de Duhalde fue crear el Ministerio de la Producción y asignar como titular al entonces presidente de la UIA Ignacio De Mendiguren. En esta cruzada por imponer la idea de que se estaba dando vuelta una página en las políticas económicas, habrá una operación constante que busca perfilar un “modelo productivo” como

la contracara del modelo basado en el capital financiero y la especulación, que se presenta como predominante en la década anterior.

Repasemos algunos gestos fundacionales emprendidos por Duhalde. En su discurso de asunción habló de “terminar con un modelo agotado”, de recuperar el mercado interno y la producción (*Clarín*, 2/1/2002). Partió de una caracterización del momento contundente con críticas a las políticas aplicadas en los gobiernos anteriores: “La Argentina está quebrada. La Argentina está fundida. La propia esencia de este modelo terminó con la convertibilidad. Arrojó a la indigencia a dos millones de compatriotas, destruyó la clase media, quebró nuestras industrias y pulverizó el trabajo de los argentinos”. A su vez, definió tres tareas fundamentales para su gobierno: “reconstruir la autoridad política e institucional, garantizar la paz social y sentar las bases para el cambio del modelo económico y social”. Y aseguró que su compromiso pasaba por “sentar las bases de un nuevo modelo capaz de recuperar la producción, el trabajo, el mercado interno y promover una distribución más justa de las riquezas” (*La Nación*, 2/1/2002).

Unos días después de asumir su cargo, Duhalde encabezó una reunión con industriales, empresarios de la construcción, dueños de hipermercados y dirigentes de la CGT. Allí dejó un mensaje contundente. Dijo sin medias tintas: “vengo a decirles que debemos terminar con la alianza que perjudicó al país, que es la alianza del poder político con el poder financiero”. Luego admitió que, debido al “proceso de desnacionalización” de la economía, el Estado deberá “proteger lo que nos queda” (*Página 12*, 5/1/2002). Luego, el por entonces presidente comentó: “quise tener este primer encuentro con la gente de la producción, porque la comunidad productiva es la que debe gobernar en el país”. Y añadió: “sé que a algunos esta clase de afirmaciones les parecerá una exageración, pero la comunidad productiva debe ser la semilla de la nueva alianza que construyamos en la Argentina” (*Clarín*, 5/1/2002).

La fórmula que define al modelo económico que es necesario aplicar en oposición al capital financiero no es patrimonio único del sector del PJ que asume el Gobierno con Duhalde. En el sistema político, la figura de Carrió aparece como una figura central por su imagen positiva y su carácter de dirigente no desprestigiada. En momentos en que ese sector de la actividad económica está absolutamente cuestionado por el movimiento de protesta, Carrió cuestionará las medidas

económicas del Gobierno asegurando que el paquete diseñado por el equipo de Duhalde “no toca los intereses del sistema financiero” y que, aunque tiene aspectos positivos, “deja tranquilos a los bancos” (*Página 12*, 6/1/2002). El posicionamiento de la por entonces líder del ARI se acerca al clima de movilización que se vive por aquellos días, alienta las movilizaciones, pide elecciones de todos los cargos, la renovación de la Corte Suprema y un plan económico que haga eje en “el combate a la pobreza y en la distribución del ingreso”. Acorde con esas definiciones no duda en afirmar que “el Gobierno se está rindiendo ante el establishment financiero” (*Página 12*, 24/1/2002).

La crítica se complementa con la postulación de una serie de medidas que permitan construir una “nueva matriz económico-social a partir de la moneda nacional, una reforma tributaria profunda, un seguro de desempleo como el propuesto por el Frenapo y un replanteo de las economías regionales” (*Página 12*, 24/1/2002).

Néstor Kichner, por su parte, hará del “modelo productivo” una bandera desde los días de la campaña electoral en 2003. En un mensaje pronunciado a una semana de las elecciones, el por entonces gobernador de Santa Cruz aseguraba: “No podemos dar más saltos al vacío a contramano de la historia, hay que profundizar el modelo de la producción y el trabajo” (*Página 12*, 20/4/2003). En los días previos a las elecciones, el santacruceño redoblaba la apuesta y sentaba las bases para una dicotomía que iba a quedar instalada. Aseguraba que “en las próximas elecciones se juegan dos proyectos de país: el de la concentración económica y el hambre y el de la producción y el trabajo genuino para la gente”. Más concretamente, afirmaba que:

En la Argentina se están poniendo a consideración de la ciudadanía dos modelos: el de la concentración económica, de la especulación financiera, de corrupción y de hambre, frente al proyecto nacional progresista, popular y racional, donde queremos volver a sentar las bases de un nuevo país con crecimiento, producción y trabajo digno.

En la misma línea dirá que su fórmula representa un proyecto “nacional y popular” (*Página 12* 22/4/2003). A esto hay que sumarle la forma en que cerró su campaña gritando que había llegado la hora de terminar con los ajustes y de que ¡paguen los que más tienen!” (*Página 12*, 25/4/2003).

En el caso del empresariado, más allá de que la UIA es el sector que, en los momentos previos a la insurrección, más intenta imponer un plan económico con definiciones claras, que incluye como ya señalamos la devaluación, la pesificación, la reducción de impuestos como el IVA, la reestructuración de la deuda y la aplicación de planes de asistencia social, nos interesa analizar la manera en que ese plan es presentado públicamente. Su titular, De Mendiguren aparece como una de las figuras menos desprestigiadas de las elites dirigentes de la clase dominante y por tanto tiene una exposición superlativa.

Antes de la asunción de Duhalde, que significará el prólogo para la implementación de varias de las medidas reclamadas por su sector, De Mendiguren aseguraba que “hay que darle a la gente un proyecto que demuestre que es posible crecer y dejar de vivir ajustándonos y sufriendo” (*La Nación*, 21/12/2001).

Una vez asumido su puesto en el Gabinete de Duhalde, De Mendiguren propuso restringir las importaciones y encabezó la línea dura en favor de la devaluación. “Nosotros, como Unión Industrial que llega al Ministerio de la Producción, lo que vamos a hacer es presentar un plan productivo para la Argentina” (*Clarín*, 4/1/2002). Por aquellos días, su entidad hizo circular una propuesta que incluía la creación de un nuevo banco, al estilo del desaparecido Banco Nacional de Desarrollo, el incremento de las exportaciones, por la vía de moderar la apertura de la economía y la implementación de ayuda social. Un directivo sintetizaba así la posición de la organización: “En la Argentina pasamos de una economía cerrada hasta el absurdo, con Falcon de 48 años, a importar porotos desde la India. El mundo está en el medio de esas dos posturas y Argentina debe imitar al mundo” (*Clarín* 3/1/02).

Si bien De Mendiguren ocupó ese cargo solamente hasta mayo de 2002, por aquellos días de enero aparecía como uno de los voceros más buscados para dar a conocer los planes del Gobierno. En una nota publicada en *La Nación*, asegura: “es preciso construir una Argentina moderna y abierta al mundo, pero no se puede competir si su economía no es competitiva”. Luego señalaría que las principales líneas de acción serán la competitividad, las Pyme, las inversiones, las economías regionales, la recapitalización de las unidades productivas y el comercio exterior (*La Nación*, 4/1/2002).

Respecto de esos medios masivos de comunicación, con la asunción de Duhalde consumada, Julio Blanck, editorialista de *Clarín*, caracteriza al nuevo Gobierno como un intento por cambiar el esquema de beneficiados en el bloque de poder, a favor del sector mercado-internista (*Clarín*, 2/1/2002). En el editorial del 3 de enero, *Clarín* sostiene que el nuevo gobierno deberá presentar “una estrategia económica adecuada” y mantener “el consenso político”. Ratifica el acierto que significó no llamar nuevamente a elecciones y resalta el discurso de asunción del dirigente justicialista, en el que “formuló una severa crítica al modelo económico que rigió en la última década, proporcionó datos sobre la crisis fiscal y financiera y se comprometió a trabajar para reconstruir la autoridad política e institucional, garantizar la paz social y recuperar la producción, el trabajo y el mercado interno”. Objetivos que para el diario “son ampliamente compartidos, sin duda, por la gran mayoría de la población”.

Al delinear lo que debería ser un plan económico a llevar adelante desde el gobierno, *Clarín* parte de dos grandes proposiciones. La primera es que “la crisis de la convertibilidad es, también, la crisis de un estado de cosas que, en muchos sentidos, desalentó las actividades productivas y el capital nacional y estimuló la búsqueda de ganancias en actividades financieras o especulativas”. La segunda: ese modelo “tampoco prestó atención a objetivos como la diversificación y tecnificación de las exportaciones o la construcción de instituciones adecuadas para reducir las imperfecciones de funcionamiento de los mercados”. Así se posiciona en una línea bastante afin al discurso gubernamental: modelo productivo e intervención estatal. A la vez, no pierde de vista los intereses particulares, asegura que tanto el Gobierno como la dirigencia política, económica y social, “tiene la oportunidad de avanzar hacia un orden diferente, en el cual las empresas puedan sanear sus finanzas, volver a capitalizarse, crecer y proyectarse al exterior” (*Clarín*, 20/1/2002).

En sintonía con el nuevo horizonte de sentido que desde el gobierno y sus aliados se intenta imponer, el 6 de enero de 2002, o sea en las horas previas a que el nuevo gobierno anuncie sus primeras medidas importantes en materia económica y monetaria, *La Nación* hace saber su preocupación respecto de la “inserción internacional del país”. En el mismo sentido, en una nota de opinión firmada por Jorge Oviedo, advierte que el borrador da cuenta de un plan que “no parece mejorar la situación”. Además señala que “Duhalde parece querer hacer la alianza con el sistema productivo, generándole un subsidio por la vía de tipos

de cambio elevados que lo protejan de la competencia extranjera”. Para el columnista se pondrá en pie “un esquema con mucha intervención estatal y con amplia discrecionalidad en manos de los funcionarios” (*La Nación*, 5/1/2002).

Por su parte, los intelectuales no quedarán al margen del avance demostrado por este discurso “productivista”. Como caso paradigmático, que sin duda tendrá una expresión más orgánica en el Grupo Fénix y en su creciente nivel de exposición pública e inserción institucional, vale repasar las palabras del escritor liberal Abel Posse:

Es imprescindible volverse hacia adentro, hacia la política, y alcanzar el epicentro de la realidad: producción, trabajo, recuperación de los negocios argentinos, mercado interno y regional, apoyo total al productor argentino (...) Ahora es el tiempo político: la urgencia ante el hambre y la marginalidad; lograr el ingreso de dos millones de jóvenes en la cultura del trabajo y del estudio (*La Nación*, 11/2/2002).

Más allá de los gestos y de algunas medidas que pudieron haber beneficiado sobre todo a los sectores productivos del agro y de la gran industria, el Gobierno de Duhalde se caracterizó por favorecer con medidas puntuales a los grandes bancos (congeló los depósitos y aprobó un salvataje por la pesificación a 1,40), a las exportadoras a quien les liquidó una deuda a principios de enero al dólar libre, y con las privatizadas que negoció importantes ventajas después de una década de bonanza. A su vez, aún en los planes presentados por la UIA, y en las acciones mismas de gobierno, nunca estuvo en los planes llevar a cabo un programa económico que no cuente con el visto bueno de Washington y el FMI.

Casi un año después, la UIA se mostraba satisfecha por la llegada de Kirchner a la presidencia. La entidad hizo saber a los medios de comunicación que el nuevo presidente “cuenta con el absoluto respaldo y legitimidad” y que espera un impulso a la industria nacional, el consumo y las exportaciones. Por su parte, en Repsol-YPF, estimaron —a modo de elogio— que su programa de gobierno “coincide con las organizaciones multilaterales”, en alusión al FMI y el Banco Mundial. En esa línea, el presidente de Fiat, Cristiano Rattazzi, dijo que Kirchner “va a hacer una buena gestión”. En tanto, Luciano Miguens, titular de la Sociedad Rural, señaló que el nuevo presidente “es un hombre al que

la gente de campo no conoce”, pero comprometió el apoyo de la Rural, “porque la Argentina no tiene ganas de suicidarse” (*Clarín*, 15/5/2003).

De este modo, el discurso “productivista” se plasmó sobre todo en una medida fundamental: la devaluación que permitió recuperar la competitividad de los productos nacionales en función de una baja brutal en el salario real. Sin embargo, su mayor aporte en el plano de la recomposición hegemónica fue en términos de la construcción de un horizonte de acción que se distanciaba de los rasgos centrales de las políticas que estaban en la raíz de la crisis económica y social. Del mismo modo, ese “productivismo” no recibió la crítica estricta que se merecía, ya no en relación a su nivel de plasmación en las políticas o como mecanismo utilizado para construir consenso, sino en lo que implicaba en cuanto a un proyecto económico que expresaba el reacomodamiento entre las fracciones de la burguesía que la salida de la convertibilidad había originado. Por lo tanto, en términos ideológicos, el discurso productivista merece un análisis—ya no en cuanto a un posible “engaño”—sino en relación a lo que deja de decir: qué sectores se benefician y cuáles no, qué relaciones sociales se dejan intactas, sobre qué derechos laborales se aplicará el proyecto, en función de qué matriz distributiva, etc. En la medida en que obtura esos debates, el “discurso productivista” tiene un efecto claro sobre el régimen de lo decible y lo no decible.

3. Un nuevo momento de “estabilidad institucional” (2004-2007)

En las páginas anteriores intentamos plantear de algún modo cómo, una vez iniciada la crisis económica, política y social que estalló en diciembre de 2001 se desarrollaron paulatinamente una serie de “operaciones” ideológico-discursivas, en las que participaron los medios masivos de comunicación como aquellos núcleos de periodistas e intelectuales ligados a estos medios comerciales, también instituciones como la Iglesia, la UIA, la CGT, etc., tendientes a reformular las características sobre las que se venía asentando esa “discursividad” dominante.

Frente a la profunda crisis de legitimidad —sustentada por supuesto en un enorme crecimiento de la desigualdad social y de la desocupación— las condiciones para sostener un discurso basado en el “libremercado” y en un “Estado mínimo” se estrecharon; desde el punto de vista cultural

también se volvía más difícil desplegar un discurso sustentado en el “individualismo” liberal.¹⁶

Estas “operaciones” –que al decir de un autor como Voloshinov, sitúan también al campo de lo ideológico, de lo discursivo y cultural dentro del antagonismo de clase– supusieron, en primer lugar, la búsqueda de restauración de cierto “orden (o control) social” –donde fue preponderante el rol de los medios masivos de comunicación comerciales– y complementariamente la recuperación de cierto discurso “productivista” que implicaba por un lado la “intervención” estatal en la actividad económica y por el otro una defensa de “lo nacional”.

Como mencionamos previamente, al principio este intento de reconfiguración de un discurso hegemónico dominante fue cobrando “forma” en el gobierno de Eduardo Duhalde; quien, si bien era un representante de la llamada “vieja política”, por otro lado como tal también controlaba el “aparato clientelar” de la provincia de Buenos Aires, la más convulsionada –y atravesada por fuertes protestas– del país. Lo que daba un indicio tanto de los “límites” políticos del duhaldismo como del motivo por el que en ese momento, ocupaba ese lugar.

Más concretamente, en ese momento no podía darse por parte del sistema político un “retorno” al discurso de “los noventa”. Y en ese sentido, aún dentro del “sistema político”, Duhalde encarnaba –por lo menos en parte– a ese “nuevo discurso”, productivista, crítico del “capital financiero”, que promovía una “presencia” más fuerte del estado en el control y gestión de la economía, y de recuperación de la “industria nacional”. Sin embargo, al mismo tiempo también formaba parte de esa dirigencia política que –desde De la Rúa, pasando por Alfonsín, Cavallo o Menem– estaba siendo repudiada en las calles.

Como ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y “hombre fuerte” de ese territorio, parecía que era posible que pudiese “controlar” o volver “pacíficas” las protestas que marcaron los tiempos políticos durante todo el primer semestre de 2002 (GEPSAC; 2006). Sin

16 Estas condiciones objetivas novedosas se perciben claramente al analizar el desplazamiento que la franja de expertos neoliberales sufrió respecto de las posiciones dominantes que había ocupado tanto en los medios de comunicación como en organismos de la administración pública. En contraposición, en uno y otro ámbito, los economistas “heterodoxos” –nucleados por ejemplo en el Plan Fénix– encontraron un terreno más propicio para desplegar sus posicionamientos, si lo comparamos con la década anterior (Pulleiro; 2011).

embargo, la imposibilidad de que este proceso –de reconducción del descontento social– pudiera hacerse dentro de los canales “institucionales” de comunicación política y de resolución de conflictos quedó patente con la Masacre del Puente Pueyrredón que culminó con el asesinato por parte de la Policía bonaerense de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán (Movimiento de Trabajadores Desocupados –MTD– Aníbal Verón, 2003).

Este suceso no resultó ser “uno más” dentro de los distintos hechos de protesta y de represión policial sino que claramente marcaba “el límite” de credibilidad, de legitimidad y de capacidad de reconstrucción hegemónica que presentaba el gobierno encabezado por Eduardo Duhalde. Se hacía necesario un cambio de figuras y así lo entendió el propio Duhalde que una semana después anunciaría el adelantamiento de las elecciones presidenciales, que finalmente se realizarían en abril de 2003. Si él mismo, como había quedado demostrado, no podía encauzar (institucionalizar) la crisis; la recomposición de la legitimidad cuestionada debía provenir de un político que no estuviera del todo asociado a esa “vieja política”. Esto fue lo que encarnaría Néstor Kirchner, no sólo inicialmente para el propio Duhalde sino a posteriori, luego de su asunción como presidente de *la Nación*.

La figura de Kirchner, como intentamos mostrar en párrafos anteriores, supuso una continuidad con el discurso “productivista”, crítico del capitalismo “financiero”, que suponía un Estado preocupado por la asistencia social y con un papel activo en la orientación de la actividad económica y la recuperación de la “industria nacional”, desarrollado originariamente por el gobierno de Duhalde. Pero, a su vez, su emergencia y consolidación definiría la conformación de una “nueva forma” política. Más allá de la situación particular que implicó el hecho de asumir con un exiguo caudal de votos, el gobierno que asumió en 2003, desarrollaría –en tanto novedades relevantes para aquella situación política– una política de derechos humanos con la que se diferenciaría de todos los gobiernos que se habían sucedido desde el regreso de la democracia en 1983 e incluiría además en su seno a parte del movimiento piquetero o de las llamadas “empresas recuperadas”, entre otros movimientos sociales.

Del mismo modo, como veremos a posteriori, impulsó negociaciones con los por entonces muy desacreditados organismos internacio-

nales de crédito (como el FMI o el Banco Mundial) pero manifestando al mismo tiempo una fuerte crítica hacia las llamadas “políticas de ajuste” promovidas frecuentemente por estos mismos organismos y los expertos neoliberales. Se trataba, por cierto, de la emergencia de un “nuevo” discurso, construido en franca oposición al discurso de “los noventa”, pero al mismo tiempo suponía la conformación de un discurso que –aunque sea de modo parcial y distorsionado respecto del discurso– se plasmaba de manera “práctica” y “concreta”. En este sentido, la “nueva política” (hegemónica) no sólo debía “declamarse” discursivamente sino que debía plasmarse en hechos que permitieran recuperar esa legitimidad perdida por parte del “sistema político” y Kirchner parecía ser por entonces la figura que llevar adelante el proceso.

3. 1 De la ESMA al Museo de la Memoria: los derechos humanos como “política” de Estado

El 24 de marzo de 2004 marcaría un antes y un después respecto de la relación entre el Gobierno surgido casi un año atrás y los organismos defensores de los Derechos Humanos más reconocidos. Si bien existía un antecedente significativo a nivel de las acciones gubernamentales respecto de su posición sobre el Terrorismo de Estado, como fue la aprobación de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, votada en el Congreso a mediados de 2003 por las bancadas del oficialismo, la izquierda y la centroizquierda, este caso representó un momento diferente porque puso en el centro de la escena al propio Néstor Kirchner.

Ese día por la mañana el primer mandatario había llevado adelante una acción con una importante carga simbólica cuando ordenó al Jefe del Ejército retirar los cuadros de los genocidas Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone, que todavía estaban colgados en el Colegio Militar. A continuación, frente a los cadetes del colegio, Kirchner afirmaba: “nunca más, nunca más, tiene que subvertirse el orden institucional en la Argentina” (*Página 12*, 25/3/2004). El hecho generó el retiro de tres jefes militares en disconformidad.

Horas más tarde, el propio Kirchner encabezó junto al por entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, el acto que dejaba concretado el convenio entre los estados nacionales y comunales y los organismos de derechos humanos para construir en

lo que había sido el centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en “un espacio para la memoria y promoción de los derechos humanos”.

El discurso de Kirchner y la forma en que fue dispuesto el acto de entrega tuvo un carácter muy emotivo. En un escenario montado en las puertas del predio de la ESMA, y ante un conjunto de organizaciones sociales que se habían convocado, primero se escuchó el himno nacional con la música de Charly García, luego hubo intervenciones de miembros de la agrupación HIJOS y el discurso del presidente. A continuación cantaron León Gieco, Víctor Heredia y Joan Manuel Serrat.

No se trató de un acto con simbología partidaria, de hecho en las horas previas hubo un cruce importante entre el Ejecutivo y cinco gobernadores justicialistas cuya presencia en el acto había sido vetada por los organismos. El día anterior esos gobernadores llegaron sacar una solicitada en la que acusaban a Kirchner de avalar el veto. No obstante, el espíritu de rememoración no correspondió sólo al Gobierno Nacional, el propio Gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, que había sido uno de los dirigentes resistidos, participó aquel día de un acto en un colegio de su distrito donde se proyectó “El Núremberg argentino”.

Volviendo al acto de la ESMA, hay que señalar que Kirchner se asumió en su discurso como parte de la generación del '70, reivindicó la militancia y asumió como Jefe de Estado la responsabilidad del Estado Nacional en “callar esos delitos aberrantes”. En esa línea, al comenzar su intervención, el mandatario afirmó: “cuando recién veía las manos, cuando cantaban el Himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en los que quedamos que este país se puede cambiar” (*Clarín*, 25/03/2004). De este modo, el gesto del Gobierno no se limitaba a reconocer la acción de los organismos de derechos humanos, sino que dejaba planteada una acción reivindicativa de la militancia política como tal.

Ese espíritu fue compartido por un sector del sistema político que podemos ubicar en el progresismo, que venía impulsando la batalla contra las políticas de impunidad en el ámbito parlamentario y que por entonces no formaba parte del armado político del oficialismo. Eduardo Macaluse (diputado nacional del ARI) reconocía los “gestos positivos” y aseguraba que había que apoyar la voluntad de “llegar a la

verdad”, “para lograr una sociedad más justa y más sana” (*La Nación*, 25/03/2004). Por su parte, el también diputado nacional por el PS, Jorge Rivas, afirmaba: “fue una jornada muy importante, donde se dieron fuertes gestos en el plano simbólico”, pero a la vez advertía que “hay que trabajar de verdad para desatar los nudos de la impunidad que todavía quedan”. “El brazo parlamentario del PJ nos ayuda muy poco a lograr ese objetivo”, añadía (*La Nación*, 25/03/2004).

En un sentido totalmente opuesto, se posicionarán el diario *La Nación* y otros sectores del PJ vinculados a la figura de Eduardo Duhalde. Tanto unos como otros intentaron darle cabida a la idea de “la reconciliación”. La diputada nacional Chiche Duhalde ofrece una serie de lugares comunes que hacen a ese discurso. Por un lado, sostuvo que “es negativo que los argentinos sigamos divididos”, a lo que agregó: “es imperioso cerrar este capítulo de la historia y que miremos hacia adelante” (*La Nación*, 25/3/2004).

En el mismo sentido, en un editorial del día posterior al acto en la ESMA *La Nación* afirmaba:

Es necesario que la sociedad argentina supere los enfrentamientos del pasado y acepte marchar con paso firme hacia la pacificación nacional. La memoria no puede ser hemipléjica o unilateral. Debemos condenar toda la violencia sin excepción, cualquiera haya sido su motivación ideológica o política. ¿Por qué los argentinos nos obstinamos en seguir alentando nuestras divisiones y seguimos siendo prisioneros del pasado?

De esta manera, en el caso de *La Nación*, la revitalización del discurso de la reconciliación vendrá de la mano con una versión aggiornada de la teoría de los dos demonios. En ese mismo editorial se sostiene que:

Al pedir perdón en nombre del Estado nacional por las violaciones a los derechos humanos perpetrados durante el último gobierno militar, el presidente de la República produjo ayer un gesto de valor moral que debería servir para fomentar la reconciliación de los argentinos y no para alentar nuevas divisiones. La sociedad debe unirse para repudiar los crímenes ejecutados por grupos pertenecientes a estructuras estatales en el contexto de la represión ilegal contra el

terrorismo (...) Cabría preguntarse, sin embargo, por qué razón se suelen dejar en el olvido los hechos aberrantes perpetrados en las décadas del 60 y del 70 por las bandas y organizaciones subversivas.

Por otro lado, si volvemos a analizar la dimensión simbólica del acto en la ESMA y la intervención de Kirchner vamos a encontrar un acento respecto a cómo se presenta el rol que debe jugar el Estado, que expresa una continuidad con la manera en que distintos actores sociales y políticos que tuvieron un papel clave en la recomposición le fueron asignando con factor fundamental en la integración social, la garantía de ciertos derechos y el impulso de ciertas actividades económicas. El gesto que implica las palabras del presidente cuando asegura: “vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades”, supone una acción que procura relegitimar la instancia estatal, en su condición (siempre parcial y sujeta a la dinámica de los conflictos entre clases y grupos sociales) de instancia de resolución de conflictos (Boron, 2007: 32). Pero, más aún, expresa una voluntad de presentarse a sí mismo como un presidente decidido y con iniciativa política, en oposición a los casos anteriores que por diferentes motivos habían quedado atrapados en indefiniciones o en posiciones oscilantes, y de hacer aparecer a su Gobierno como un momento refundacional de la democracia argentina. En este sentido, las iniciativas gubernamentales que mencionamos en relación a la impunidad del Terrorismo de Estado, deben ser analizadas como parte de una serie más amplia en la que se destaca la renovación de la Corte Suprema.

Para concluir, habrá que señalar que el discurso y la impronta desplegada por el Gobierno tendrá su apoyo casi total en el caso de *Página 12*, mientras que el diario *Clarín* no demuestra mayores discrepancias e incluso reconoce ese nuevo rol que pretende desempeñar, aunque advierte sobre la utilización política de los desaparecidos. Al otro día del acto, uno de sus editorialistas, Eduardo van der Kooy, señalaba acerca de esta cuestión:

No es la primera ocasión en que el Presidente intenta presentarse como el refundador de la democracia en la Argentina. En algún sentido está bien porque el sistema reconquistado en 1983 ha exhibido hasta el presente, sin dudas, más

debilidades que fortalezas. En esa dirección podría estar el impulso del Gobierno para mejorar la Justicia, empezando, como hizo, por la depuración de la Corte Suprema. En idéntico sentido podría registrarse el proyecto de reformular el orden económico interno, desvirtuado en los 90, y de compaginar un nuevo cuadro social, plagado de miserias e inequidades.

Cabe destacar, finalmente, que lo sucedido en la ESMA y en el Colegio Militar no generó opiniones públicas por parte de las entidades empresarias más importantes.

3.2 El Canje: firmeza, responsabilidad y soberanía nacional

Muy sintéticamente, tenemos que reponer algunos datos cronológicos para enmarcar lo que fue el proceso de reestructuración de la deuda externa encarada por el Gobierno de Néstor Kirchner. El 23 de diciembre de 2001, el por entonces Presidente provisional, Adolfo Rodríguez Saá, declaró la cesación de pagos de la deuda pública ante la Asamblea Legislativa. A partir de ese momento, el Estado había dejado de pagar los intereses y las amortizaciones de los títulos públicos que había emitido, pero continuó con los pagos a los organismos internacionales de crédito. El 22 de septiembre de 2003, el Ministro de Economía, Roberto Lavagna, presentó la primera oferta oficial de reestructuración, durante la asamblea anual del FMI en Dubai. Esa propuesta contemplaba una quita del 75% del valor nominal de los títulos en cesación de pagos. El 1 de junio del año siguiente, el Gobierno flexibilizó la oferta al incluir el pago de intereses, un cupón atado al crecimiento del PBI y el pago de intereses caídos hasta junio de 2004 si la aceptación superaba el 70 por ciento. Finalmente, el 6 de agosto de 2004, el Gobierno decidió encarar el canje de la deuda sin el respaldo del FMI. El proceso de canje propiamente dicho se abrió el 14 de enero de 2005 y se cerró el 25 de febrero de ese año.

En aquel momento, la deuda pública ascendía a los 180 mil millones de dólares y la oferta del Gobierno rondaba los 81 mil millones. Lanzada la propuesta se abrió una discusión respecto de cuál debería ser el porcentaje de acreedores adheridos para considerar exitoso el canje de bonos. Mientras que para el mundo financiero el nivel se ubicaba entre el 75 y el 80%, el Gobierno se mantuvo firme en que con un 50% alcanzaba.

Durante el lapso que duraron las negociaciones, la figura del Gobierno que llevó las riendas en las intervenciones públicas fue el ministro Lavagna, secundado por otros funcionarios de esa cartera. En medio de la discusión sobre los niveles de aceptación el ministro se mostraba terminante respecto del nivel de aceptación y también sobre la posibilidad de reabrir la propuesta. Por un lado, afirmaba que si el 50% de los acreedores aceptara la oferta, “se habrá reestructurado más de las dos terceras partes de la deuda total”. Por otro, que “la deuda no canjeada puede permanecer indefinidamente en cesación de pagos”. A su vez, se esforzaba por remarcar que la decisión gubernamental era responsable, por eso aseguraba que el proceso de negociación “llevó finalmente a la mejor oferta, hasta el límite de lo posible, hasta el límite de la sustentabilidad” (*Clarín*, 13/1/2005).

De esta manera, el Gobierno pretendió mostrarse firme, pero también intentó dejar de lado cualquier tipo de gesto que despertara desconfianza respecto de su capacidad para hacer frente a sus compromisos o que implique una apología de la cesación de pagos. En esa línea el secretario de finanzas, Guillermo Nielsen indicaba: “es la mejor oferta posible para la capacidad de pago de la Argentina y que garantiza un trato justo para todos los acreedores”. Los “rasgos fundamentales de la oferta son fortalecer la previsibilidad fiscal y disminuir la vulnerabilidad por shocks externos”, agregaba el funcionario. Por último, Nielsen aseguraba que nadie podrá esgrimir “la falsa idea de un premio para el país” por la quita propuesta, ya que el proceso ha sido “muy doloroso” (*Clarín*, 16/1/2005).

Así las cosas, se trata de un discurso medido, que hace hincapié en la responsabilidad, la sustentabilidad y en la posibilidad de reinsertar al Estado argentino en el sistema de crédito internacional. Incluso, Lavagna se encargaría de remarcar el hecho de que el canje implicaba un esfuerzo por asumir la responsabilidad respecto de la deuda contraída por el Estado argentino y que no suponía ningún gesto de ruptura con las pautas impuestas por los grandes agentes del sistema financiero. En esa dirección, advirtió que el Gobierno seguiría “buscando con el FMI y los organismos internacionales de crédito” una “relación madura” y recordó que entre 2002 y 2004 Argentina fue el único de los grandes deudores que canceló deuda con el FMI y fue “uno de los pocos” países que reconoció como acreedores privilegiados a los organismos multilaterales (*Clarín*, 13/1/2005).

Una vez concretada la quita, el presidente Néstor Kirchner ocupará un lugar más importante. En su caso, al discurso sobre la responsabilidad se le suma la construcción de una serie de contendientes a los que se culpa del default y de la crisis vivida por la sociedad argentina, al tiempo que se plantea la reestructuración como una decisión colectiva. “La quita no la hicimos para sacarle nada a nadie –dirá Kirchner– sino que fue una voluntad última del pueblo argentino para cumplir una obligación que fue creada, armada y estructurada para saquearlo” (*Página 12*, 26/2/2005).

Es importante remarcar cómo funciona esta construcción discursiva en base a dos opuestos, ya que se repetirá una y otra vez en el caso del por entonces presidente y de los principales dirigentes del kirchnerismo: por un lado, “el pueblo”, por otro, sus saqueadores. El tercer sujeto del relato será el propio gobierno, que se construye a sí mismo como una fuerza “reparadora”. En esa línea, Kirchner critica a un actor sumamente desprestigiado a partir de la insurrección de 2001, como son los economistas neoliberales: “hace un año y medio iniciábamos la tarea del canje de la deuda en default y nos dijeron locos, irracionales, de mí dijeron cualquier cosa los sabios del neoliberalismo y los profetas de las respuestas económicas de la Argentina”, dirá Kirchner. Para luego agregar: “la deuda forma parte del drama que ellos mismos crearon, porque fueron funcionarios de todos los gobiernos desde 1976” (*Clarín*, 26/2/2005). En ese marco, tampoco ahorró críticas a los periodistas y medios de comunicación que alentaban una quita menor de la deuda.

En tanto, será el por entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien avance un paso más para subrayar “el coraje” del presidente y el rumbo que ha tomado el país gracias a él. Además, vincula el canje de la deuda con el perfil productivo y distributivo que el Gobierno se asigna. Para Fernández, la reestructuración servirá para conseguir créditos y atraer nuevas inversiones. Asimismo, pondera esa operación como un acto de fortaleza: “La imaginación de los argentinos nos ha permitido trabajar fuertemente con una idea única y un coraje a prueba de balas, comprometiéndonos ante los argentinos a pagar solo lo que podían pagar” (Ídem.).

En un tono similar se manifestó la conducción de CGT. Su titular, Hugo Moyano, emitió un comunicado en el que apoyó las gestiones del Gobierno al considerar que “apuntan a defender el interés nacional” ya

que “millones de compatriotas sin trabajo y con salarios retrasados también son acreedores a un mejor destino”. Tal como ocurrirá con más claridad durante el pago en efectivo de la deuda con el FMI realizado unos meses después, algunos sectores del Gobierno y organizaciones que lo apoyan construirán una lectura sobre la reestructuración de la deuda en clave de un fortalecimiento de la soberanía nacional, poniendo en primer plano el porcentaje de la quita del valor nominal de esa deuda y desestimando la discusión sobre el origen y naturaleza misma de esa deuda.

Si colocamos la mirada más allá del Gobierno, entre los distintos sectores empresariales encontraremos un respaldo, casi sin fisuras. Las asociaciones que nuclean a los bancos públicos y a los privados se muestran optimistas por las condiciones internacionales y respaldan la operación porque genera mejores condiciones para conseguir nuevos créditos. Lo mismo ocurre con la Bolsa de Valores, la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA); la Cámara Argentina de Comercio (CAC); las aseguradoras; la UIA; Coninagro y las AFJP. Además, es necesario destacar que después del canje hubo record en la bolsa por el optimismo.

En este sentido, Mario Vicens, titular de ABA –la asociación de bancos que nuclea a las entidades de capitales extranjeros– sostuvo: “Este es un paso muy importante, porque es un buen momento internacional y eso puede ayudar a que el canje sea un éxito, algo fundamental para mantener el crecimiento de la economía” (*Clarín*, 13/1/2005). Por su parte, la Confederación de Cooperativas Agropecuarias (Coninagro) emitió un comunicado de prensa titulado: “Argentina un país más previsible” donde afirmó que “la posibilidad de una solución es una buena noticia, porque a pesar de la mayor competitividad de nuestras producciones, la falta de crédito y el temor de los potenciales compradores externos afectaron seriamente la previsión de toda empresa agropecuaria”.

Entre los medios de comunicación hay algunos matices, pero lo que prima es el respaldo a la operación. El que propone una mirada un tanto más crítica es *Página 12*, en donde el canje es considerado un avance, pero –aunque se destaca el monto de la quita– también se advierte que no resuelve definitivamente el problema de la deuda externa. En este sentido, Mario Wainfeld califica al canje como “la propuesta de mayor quita de deuda externa que se conozca” y Alfredo Zaiat resalta: “se dejó pasar la posibilidad de plantear la cuestión de la legalidad y

legitimidad de un endeudamiento perverso. Para esto último se hubiera requerido saltar el cerco de la negociación financiera, para definir una en el terreno político” (*Página 12*, 13/1/2005).

Clarín se acerca a las miradas que analizan la operación del canje en función del discurso productivista que encontramos en otros actores. Para el diario, la eventual salida del default abre una nueva etapa en la cual es necesario enfatizar el esfuerzo productivo y exportador. Al mismo tiempo, llama la atención acerca de la necesidad de recomponer la relación con el FMI como condición para conseguir crédito. Una vez finalizado el canje, desde un editorial se sostiene que “la salida del default es decisiva para consolidar la recuperación y convertirla en crecimiento sustentado en la inversión”. También se advierte que el Gobierno tiene otras negociaciones por delante para “terminar de superar la crisis del 2001”. Entre ellas, la renegociación de contratos con las empresas privatizadas, y un nuevo acuerdo con el FMI. En ese contexto, se espera del gobierno equilibrio y racionalidad (*Clarín*, 16/1/2005).

Por su parte, si bien ni en *La Nación* ni entre los intelectuales liberales encontramos un apoyo total, tampoco se observan cuestionamientos profundos. A lo sumo aparecen algunas dudas y ciertos señalamientos sobre los efectos negativos del default que, según estos actores, “seguirán vigentes” y sobre la necesidad de lograr una relación más cercana con el FMI. En el fondo, la negociación significa el reconocimiento de la deuda soberana como gesto hacia los inversores externos presentes y futuros, por tanto es una medida que refuerza los principios doctrinarios de este núcleo de agentes culturales y consolida una visión respecto de que “las reglas de juego” deben respetarse.

De este modo, las inquietudes que aparecen aquí hacen más al pasado o al futuro que al presente. Podríamos resumir las principales preocupaciones que plantea *La Nación* en las palabras de Federico Sturzenegger, miembro de su redacción, quien sostiene que el tema de fondo consiste en la superación de un estado de “fragilidad fiscal crónico”. Al tiempo que advierte sobre el tiempo que demandará volver a ser un país “confiable para los inversores” (*La Nación*, 16/1/2005).

Una posición similar asume el núcleo de los especialistas neoliberales. El caso de Carlos Melconian, director de M&S Consultores, nos ayuda a graficarla. A su modo de ver, “más allá del resultado no podemos hablar de éxito”, ya que: “por más que se canjee el 80% de los bo-

nos, las consecuencias del default se van a seguir notando por muchos años”. En la misma línea, respecto del futuro inmediato, el economista advertirá que Brasil es el país que más inversiones está atrayendo en la región y que sin una política monetaria “más ortodoxa” se corre el riesgo de que la inflación comience a dispararse (*Clarín*, 16/1/2005).

Desde la franja de los economistas “productivistas” que forman parte de los equipos gubernamentales, Aldo Ferrer, refuerza la idea de que el canje fue un gesto de soberanía y fortaleza. “La Argentina –dice Ferrer– demostró que puede negociar desde un lugar propio, con conciencia nacional y que puede vivir sin pedirle nada a nadie”. Asimismo, destacará que el Gobierno debe avanzar “en consolidar la gobernabilidad, cuidando la balanza de pagos y manteniendo la competitividad, con un tipo de cambio que permita impulsar la estructura productiva”. En ese marco, el miembro del Plan Fénix no duda en señalar que es necesario generar las condiciones para regular la actuación de los capitales extranjeros en un país que tiene una “política industrial”.

Para terminar, habrá que decir que no es fácil encontrar materiales que permitan acceder a posicionamientos críticos sólidos que hayan circulado por esos días, menos aún de alguna acción de relevancia que haya emergido desde el movimiento popular.¹⁷ Esto no es una cuestión menor si tenemos en cuenta que la cuestión de la “deuda externa” se había convertido en uno de los puntos programáticos más trabajado por las organizaciones populares en los años previos. Uno de los pocos casos proviene de la CTA, Claudio Lozano, economista y miembro de la dirección de esa central, dejaría sentada una postura clara y contundente, que no tendría un correlato en iniciativas concretas durante el tiempo que se prolongó la negociación y se concretó el canje: “el éxito del canje no supone la resolución de los problemas de la sociedad argentina ni implica la resolución de la deuda, que sigue siendo muy grande y en adelante Argentina debe resolver el cambio del paradigma productivo y la redistribución de los ingresos”(*Clarín*, 26/2/2005).

17 Asimismo, en los días analizados no fueron publicadas opiniones de la CTA ni de otras organizaciones sociales no alineadas con la política oficial.

3.3 Las elecciones legislativas de octubre de 2005 y la plasmación electoral de la “nueva” (y difusa) hegemonía

Las elecciones legislativas de octubre de 2005 se encuentran exactamente después de una serie de hechos que ya prefiguraron el modo en el que se presentará el intento de obtención de legitimidad por parte de un presidente como Néstor Kirchner que había asumido el gobierno con un 22% del total de votos, a saber: la entrega de la ESMA a los organismos de derechos humanos y el retiro de los cuadros de los genocidas Videla y Bignone de la Escuela Militar, y el llamado canje de deuda llevado adelante entre los meses de febrero y marzo de 2005. Por otro lado, estas elecciones se encuentran inmediatamente antes de otros hechos también relevantes para lo que sería la conformación de un nuevo clima cultural, como fueron el encuentro de presidentes americanos realizado en la ciudad de Mar del Plata que resultó la partida de defunción del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la cancelación de una porción importante de la deuda que el Estado argentino mantenía con el FMI.

En ese marco, si ponemos el foco en el momento de las elecciones legislativas de 2005, vamos a encontrar, en primer lugar, una escasa participación de intelectuales o académicos universitarios en el debate público (hay por cierto notas de opinión pero que no representan una intervención político-cultural sistemática sobre un tema determinado). En todo caso, las intervenciones quedarán limitadas a los consultores que informan sobre los datos que se desprenden de encuestas de opinión pública, o en las participaciones de los intelectuales liberales que, desde *La Nación*, emiten opiniones críticas respecto de la política de derechos humanos oficial.

Por este entonces podría decirse que un núcleo importante de periodistas –e incluso muchos intelectuales– ubicados en la tradición del “progresismo” apoyaban las posiciones del gobierno sobre todo en lo que respecta a su política de derechos humanos o al distanciamiento político con el FMI, pero no podemos hablar de un alineamiento directo.

Por otra parte, sobre todo desde las páginas de *La Nación*, –con Mariano Grondona como ejemplo paradigmático– se criticaba al gobierno por poco “democrático” y por demostrar poco apego a la “institucionalidad”, como así cierto “personalismo” en la figura del presiden-

te. Lo que indica que la crítica focaliza más bien en el plano ideológico del funcionamiento de una democracia representativa o formal.¹⁸

En lo que respecta al funcionamiento del mismo sistema político, las elecciones de octubre de 2005 marcan cierto cambio en comparación con las elecciones de 2003. En primer lugar porque una vez desplegadas desde el kirchnerismo ciertas estrategias político-discursivas propias de un proceso de acumulación de poder “propio” (la confluencia con los movimientos de derechos humanos, con algunos grupos piqueteros y sindicales, con grupos empresarios “productivistas” y en el plano estrictamente político partidario la llamada “transversalidad”), nos encontramos aquí con la disputa con el duhaldismo (que había sido el apoyo más importante de Kirchner en las elecciones de 2003) que suponía la pelea por la dirección del “aparato político partidario” de la provincia de Buenos Aires. De aquí la candidatura de Cristina Fernández a senadora por la provincia de Buenos Aires. En segundo lugar porque esta decisión de Kirchner de enfrentar a su otrora “mentor” suponía a la vez articular ciertos apoyos dentro del PJ que lo alejaban de la tan mentada “transversalidad” y también dentro de la CGT. Lo que implicó, por un lado, un reacomodamiento en relación a algunos apoyos políticos que se alejaron del kirchnerismo (como ser el ARI de Elisa Carrió, entre otros, que en 2003 habían confluído en listas de diputados comunes¹⁹). Por el otro lado, algunos sectores sindicales y políticos ligados a la CTA, que hasta entonces apoyaban al gobierno, comenzaron aquí –en un sentido inversamente proporcional– cierto distanciamiento a medida que este último se vinculaba cada vez más a una CGT unificada bajo la conducción de Hugo Moyano (pero que incluía en su seno a los sectores denominados “de los Gordos”, que habían apoyado sin más las políticas neoliberales desplegadas durante los dos gobiernos de Carlos Menem).

18 Una de las críticas más importantes desarrolladas en estas elecciones de octubre de 2005 fue hacia el cambio de domicilio de la entonces senadora por la provincia de Santa Cruz Cristina Fernández para poder ser candidata por la provincia de Buenos Aires. Una vez más, desde aquellos agentes que asumen la tradición liberal, queda planteada la necesidad de que los dirigentes políticos no deben dar ante la población el “mal ejemplo” que supone no respetar las reglas establecidas.

19 El “corrimiento” hacia posiciones “democrático-formales” por parte del ARI de Carrió, unido a un fuerte discurso anti-corrupción, redundó en una confluencia de este tipo de discursividad con la desplegada en medios como *La Nación* (sobre todo) y *Clarín* y explica la importante presencia de la líder de este partido en esos medios; como así también la del novel candidato conservador, Mauricio Macri.

La confluencia discursiva, basada en los ejes “calidad institucional” y “lucha anti corrupción”, explica la mayor presencia mediática de candidatos como Elisa Carrió o Mauricio Macri; pero también indica la existencia de una política editorial que brinda mayor espacio a estos dos tipos de discursos mencionados antes que a la principal disputa política que se estaba dando dentro del peronismo. De aquí que en muchos casos, sobre todo en *La Nación* pero también en *Clarín*, puedan verse tanto notas de opinión como crónicas que plantean que a posteriori de los comicios estas diferencias entre kirchneristas y duhaldistas se terminarán saldando con un acuerdo.

Las formas de intervención de los sectores empresarios en la esfera pública son más bien moderadas en lo que respecta a la crítica de las políticas gubernamentales, y esto tiene que ver con la difusión de toda una serie de indicadores macroeconómicos que dan cuenta por un lado de un incremento en la producción industrial y manufacturera, de un crecimiento de las inversiones productivas, de una previa cancelación de deuda externa (aunque con críticas al FMI), de la consolidación de un importante superávit fiscal, también del crecimiento del empleo en blanco, etc. (la mayoría de estos datos fueron difundidos por todos los diarios analizados).

En este mismo plano, y en sintonía con los grupos productivos agropecuarios (sobre todo los más concentrados, como ciertos pools de siembra), las críticas se observan básicamente, en tres ejes: la problemática del control de la inflación, la intervención del Estado buscando el control de precios y la intervención en el control del tipo de cambio.

En este punto, podría decirse que, si bien al momento de la crisis de 2001, *La Nación* editorializó muy fuertemente a favor de la defensa de la democracia representativa y criticó los “desórdenes” que se presentaban en las calles, lo que implicaba una clara defensa del “sistema” político partidario en su conjunto; seguía siendo partidario de tipo de políticas de “enfriamiento” de la economía, de control del gasto público y de liberalización del tipo de cambio. Es por eso que también podemos encontrar durante este período en este diario otras críticas por parte de los sectores agropecuarios, respecto de cierta falta de previsión estatal para el sector (esto es, de ciertas políticas que ellos denominan “productivas”) o respecto también de cierto intervencionismo estatal, lo que a

su vez podría implicar a simple vista cierta contradicción que termina aclarándose en la medida en que se trata en realidad de una discusión sobre el “tipo” de políticas a ser implementadas por el Estado antes que una discusión sobre presencia o ausencia del mismo.

No obstante, dichas críticas se matizan a la hora de la difusión de los índices macroeconómicos respecto de la producción industrial. Que también matizan la fluctuación de los precios de las materias primas, elevados por lo general durante el período relevado aunque por momentos tiendan a la baja.

De algún modo, algo de esta crítica puede aparecer en un periódico como *Clarín* pero notablemente matizada y en una medida mucho menor. Aquí podemos encontrarnos con una categoría particular de intelectuales, como son los economistas. En el caso del Grupo *Clarín* esta figura (aunque aquí la construcción discursiva es diferente en términos de cómo se determina el “lugar del saber” propia de un “intelectual”) es la de Marcelo Bonelli, quien en varias oportunidades se encargará de encarnar el espacio de la crítica (curioso al momento de las elecciones donde se enfrentan Cristina Fernández e Hilda “Chiche” Duhalde), este periodista especializado sostiene que “no hay cambios en la economía ni diferencias de modelo entre lo surgido a inicios de 2002 y lo vigente en este momento”. Pero en este caso como en los otros ejemplos mediáticos relevados, la difusión de los índices macroeconómicos funciona como una suerte de “correctivo” respecto de cualquier posición crítica.

Para el caso de los sectores industriales agrupados en la Unión Industrial Argentina (UIA), el apoyo a las políticas gubernamentales estaba más claro y resultaba una continuidad respecto del apoyo de esta entidad en primer lugar al gobierno de Duhalde en 2002, sobre todo teniendo en cuenta que la continuidad del rumbo económico se veía “garantizada” con la presencia del ministro de economía Roberto Lavagna. Por supuesto los grupos industriales “veían” el crecimiento de la actividad industrial reflejada en los indicadores macroeconómicos, de modo que apoyaban no sólo el “discurso” productivista de presidente sino más bien sus resultados.

Este apoyo al “rumbo económico” expresado por esta entidad industrial tenía también su traducción en el inicio del llamado “diálogo social” con la CGT de Hugo Moyano, en el intento de establecer

un “marco de contención” para el aumento indiscriminado de precios como de salarios; en clara sintonía con la preocupación gubernamental por controlar la inflación.

Una vez finalizado el comicio y confirmado el triunfo kirchnerista, varios de los referentes de la CGT no alineada con el oficialismo (como el caso del gastronómico Luis Barrionuevo por ejemplo) saludan la victoria de Cristina Fernández –y el fortalecimiento de esta opción presidencial dentro del PJ.

Por otra parte, en lo que hace a los medios de comunicación, observamos un espacio destinado a la protesta desplegada por el combativo sindicato de Subterráneos de Buenos Aires (mayoritariamente en *Clarín*), como así a algunas protestas ferroviarias llevadas adelante por sectores que trascendían la perspectiva de la dirigencia del sindicato. En estos dos casos, salvo en *Página 12*, proliferan las críticas hacia estas formas de accionar y hacia estos sindicatos en sí. No es casual que también en términos de relevamiento de la protesta social, pueda observarse en este momento tanto en *La Nación* como en *Clarín* una velada crítica a la “reaparición” en la esfera pública de la “protesta piquetera” caracterizada por el “corte” de calles. Lo que marca una clara línea de continuidad respecto del funcionamiento de los medios masivos de comunicación comerciales desde diciembre de 2001 en adelante, como mecanismos tendientes a recrear cierto “control social”, cierta reproducción de las normas institucionalizadas y establecidas de funcionamiento en la esfera pública, que claramente no incluyen la posibilidad de la protesta.

A modo de conclusión podríamos decir que durante este período, y sobre todo en lo que respecta a los discursos presentes en los medios masivos de comunicación relevados, la mayoría de las críticas importantes, si consideramos lo mencionado en *La Nación* respecto del control de la inflación y de la intervención estatal, se sustentan sobre todo en la “calidad institucional” y en el “estilo político” de la “pareja presidencial”. Nuevamente esto se observa en mucha mayor medida en este medio, primero en lo que hace al estilo confrontativo de Néstor Kirchner (el diario hace un llamamiento explícito a la negociación y al consenso político con posterioridad a las elecciones) y en segundo lugar a la “imposición” de una candidatura como la de Cristina Fernández en Provincia de Buenos Aires cuando el domicilio de la primera dama sigue siendo Río Gallegos (esta consideración también está mencionada en *Clarín*)

Como contrapartida es notable el espacio que tanto *La Nación* como *Clarín* comienzan a destinar a Mauricio Macri.

En *Clarín*, y esto también a nuestro entender “hace” al funcionamiento de los medios masivos comerciales en general, lo más llamativo es el espacio que el diario destina, aún en tapa, a noticias deportivas, de color y policiales; en detrimento del espacio destinado a cuestiones políticas (considerando que se está en una víspera eleccionaria). De alguna manera también *Página 12* pone en tapa ciertas noticias –como la Gripe A, o el impacto del huracán en la región caribeña, etc.– que no refieren a “lo político”. Sin embargo, en este caso, al acercarse el fin de la campaña se presentan encuestas, análisis, panoramas políticos que devuelven protagonismo al tema político. La otra particularidad de *Página 12* es la presencia de lo “político” no electoral, como ser “políticas de derechos humanos” o la discusión respecto de las “papeleras”.

Pero más allá de esto, lo que podemos ver en estos medios masivos comerciales relevados es la presencia de un “nuevo momento” político donde en cierto modo comienza a ser posible ampliar el espacio de la crítica al gobierno. Sin embargo, si al momento de la “hegemonía menemista” nos encontrábamos que, ante un gobierno de corte neoconservador y neoliberal, ese discurso “institucionalista” y “anti corrupción” buscaba minar dicho “consenso” (en pos en realidad de un reequilibrio social, frente a los importantes índices de crecimiento de la desocupación); en este momento este tipo de críticas representa un cambio de sentido pero en un signo contrario, también en este caso en pos de reequilibrar el “sentido común” social, frente a la posibilidad de cierta radicalización “populista” basada en una “mística” peronista, otrora modificada por el menemismo.

Pero estas posiciones relativas al funcionamiento del sistema de medios masivos comerciales tienen que sostenerse en algo más que en un “sentido común” establecido por los (abstractos) “ciudadanos”. Tiene por supuesto un asidero en una parte de la oposición política (sectores liberales como los del ARI de Elisa Carrió o una parte de la UCR, pero también sectores neoconservadores como los que en Capital Federal postulan la candidatura de Mauricio Macri) que adopta nuevamente ese mencionado discurso (institucionalista y formalista), también en una parte de la gran burguesía agropecuaria que busca cierta “liberalización” de la economía en el marco de procurar aumentar

significativamente su margen de ganancia al momento de la suba de los precios internacionales de las materias primas (el caso de la soja, pero también de otras materias primas).

No lo tiene sin embargo en los sectores burgueses industriales nucleados en la UIA, que con claridad (lo que llamativamente no es considerado noticia por varios de los más importantes medios de comunicación relevados) salen a apoyar el programa “productivista” del gobierno nacional, y comienzan un diálogo con la central de trabajadores en la búsqueda de consensuar políticas que permitan el control de la inflación.

La búsqueda de acumulación de fuerzas por parte del gobierno de Kirchner, que suponía hasta este momento transformar en política de estado a los derechos humanos e incorporar a algunos grupos de “excluidos” del ámbito “productivo” (ciertas organizaciones de desocupados como por ejemplo el sector de la Federación Tierra y Vivienda de Luis D’Elía y Barrios de Pie) también a los organismos estatales; no era incompatible con una suerte de “discursividad productivista” atractiva para algunos segmentos de la burguesía industrial y para una parte muy importante del sindicalismo nucleado en la CGT bajo la conducción de Hugo Moyano.

De algún modo, el kirchnerismo asumía una parte del discurso duhaldista pero bajo la retórica de una “nueva política”. Realizado esto, y habiendo triunfado en las elecciones, su margen de maniobra se ampliaba notablemente.

3.4 La cancelación de la deuda con el FMI: un gobierno “responsable” y “autónomo”

El 15 de diciembre de 2005 el presidente Néstor Kirchner anunció la cancelación en un solo pago de 9.810 millones de dólares del monto total de la deuda que el Estado argentino mantenía con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Dicha operación se realizó a través de la utilización de las reservas en dólares del Banco Central, habilitadas para la erogación a partir de la creación de la categoría “divisas de libre disponibilidad” (DNU 1599/2005). Durante el año anterior se había especulado con la posibilidad de que el gobierno argentino llegara a un acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda. Como condición el organismo exigía que la Argentina aprecie su moneda frente al dólar y

eleve las tarifas de los servicios públicos privatizados. A su vez, en la IV Cumbre de las Américas (Mar del Plata, noviembre de 2005) Kirchner realizó una fuerte crítica a los organismos multilaterales de crédito ante los mandatarios de todo el continente americano y calificó la actitud del Fondo como “perversa” porque “le niega a la Argentina la refinanciación de la deuda” (*Clarín*, 3/11/2005).

Frente a una importante cantidad de invitados, entre ellos, representantes del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales, de las Fuerzas Armadas, de la CGT, de cámaras y entidades empresarias como: SRA, UIA, CAME, COPAL, FIAT, IRSA, SIDEKO (grupo Macri) y el presidente Kirchner leyó un discurso, que fue transmitido por cadena nacional, en donde observó que el adelanto del pago representa un ahorro en intereses de “casi mil millones de dólares” y generaba “libertad para la decisión nacional”. A su vez puso en claro que el pago anticipado al FMI “no podrá ser interpretado como obstáculo para continuar reclamando la reestructuración del organismo”.

Según se puede observar, el anuncio buscó dar un mensaje de defensa de una política económica autónoma, que se sujeta sobre una “racionalidad” económica y una prudencia político-institucional. En sus palabras, “se trata de un paso trascendental, que nos permitirá mirar sin imposiciones, con autonomía y tranquilidad, sin urgencias impuestas, sin presiones indebidas la marcha de nuestro futuro”, que al mismo tiempo posee un “efecto monetario neutro”.

El primer mandatario inscribió el pago de la deuda dentro de un “cambio de época”, el cual, según él, deberá ser profundizado a partir de “superar de raíz los problemas de arrastre, creando las condiciones para una estrategia de desarrollo a largo plazo. Un problema de arrastre central y condicionante, es la deuda”. En este sentido, el pasado reciente (“el infierno en que caímos”) se indica como un momento en el cual “decisiones políticas erradas” generaron “terribles heridas” y en donde, justamente, el FMI cumplió un rol decisivo “como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino, de la mano de gobiernos que eran proclamados alumnos ejemplares del ajuste permanente”. Para Kirchner el pago completo y por adelantado era la salida a los condicionamientos del FMI y se podía llevar a cabo debido a la solidez del “modelo de producción, trabajo y crecimiento sustentable, con inclusión social”, implementado por su Gobierno. Por otro lado, también

señalaba que la decisión fue tomada conjuntamente y en diálogo con los presidentes del MERCOSUR, “especialmente con el presidente Lula Da Silva” y agregó que también podía efectuarse debido a “la ayuda permanente recibida de la República Bolivariana de Venezuela”, insertando el pago cómo un elemento más de una política de la integración regional.

Hecho el anuncio, el director gerente del FMI por ese entonces, Rodrigo Rato, recibió “positivamente la amortización por parte de Argentina de sus obligaciones pendientes con el Fondo” y le dio la “bienvenida al pago argentino “. Incluso, el día previo al anuncio, Rato había aconsejado a la Argentina que siga el ejemplo de Brasil, país que también había decidido un día antes la cancelación de la deuda con el FMI.

Los medios gráficos que hemos tomado como referencias de modo general dan el visto bueno y aprueban con entusiasmo la medida. *Clarín* retomando los argumentos centrales del discurso presidencial, señalaría que “el desendeudamiento con el Fondo amplía los grados de libertad del Gobierno” (*Clarín*, 18/12/2005). Al mismo tiempo que, desde el punto de vista financiero, destaca la racionalidad de la medida ya que “la decisión es rentable porque los intereses recibidos por las reservas son menores que los que se pagan por el financiamiento del Fondo (...) las reservas del Banco Central alcanzan para pagar la deuda y mantener una suma cercana a la cotización en dólares de la base monetaria”. (*Clarín*, 18/12/2005). Así mismo *Clarín* –en concordancia con el discurso gubernamental– denomina al pago como “desendeudamiento”, mecanismo que supone una mejor acogida por una considerable parte de la ciudadanía que en diversas oportunidades había considerado el pago al organismo como un síntoma de sumisión a intereses internacionales y de usura por parte de los mismos. A lo largo de las notas publicadas, *Clarín* se manifiesta a favor del pago, sin embargo –y en una dimensión menor– también se permite advertir como un problema que “la sociedad observa que se ha cancelado anticipadamente una deuda cuando existen grandes necesidades sociales que podrían reducirse con un mayor énfasis en los programas sociales” (*Clarín*, 18/12/2005).

Para *La Nación*, el anuncio de la decisión de cancelar la totalidad de la deuda con el FMI es un paso que merece ser respaldado, si bien no utiliza los mismos en los argumentos esgrimidos por Kirchner en su discurso. *La Nación* considera que “asumir con responsabilidad los compromisos contraídos y honrar las deudas tiene que ser una cualidad

que nuestro país debe recuperar para reinsertarse en el mundo como una nación confiable, creíble y previsible” (*La Nación*, 17/12/2005). Para el diario la medida adoptada por el Poder Ejecutivo es “razonable y audaz” a la vez que recomienda con énfasis “mantener a rajatabla la línea de superávit fiscal elevado (...) y abrazar la austeridad en el gasto público como una herramienta insustituible” (Ídem.).

No obstante, a pesar de aprobar el pago, el tradicional diario liberal cuestiona la idea de “endosarle al Fondo todas las razones de nuestros fracasos” y propone:

“muchas de las reformas estructurales que reclama el organismo financiero internacional, lejos de ser negativas, resultan imprescindibles para dotar a nuestro sistema político y económico de la necesaria previsibilidad que reclamaría cualquier potencial inversor. Entre tales reformas, se encuentran la nunca tratada ley de coparticipación federal (...); la eliminación de los impuestos distorsivos, como las retenciones a las exportaciones y el impuesto al cheque, y la postergada renegociación de los contratos de servicios públicos” (*La Nación*, 17/12/2005).

A su vez, dentro de los aspectos cuestionables, se indica la instrumentación de la medida a través de un decreto y señala que “hubiera sido probablemente más inteligente aplicar parte de las reservas del Banco Central a la cancelación de créditos más caros. Los préstamos del FMI son considerablemente más baratos que aquellos títulos públicos que se ajustan de acuerdo con el aumento del costo de vida” (*La Nación*, 17/12/2005). Sin embargo, como ya mencionamos y al margen de estos cuestionamientos, *La Nación* considera que la decisión fue un gesto político trascendental.

Para *Página 12*, la medida adoptada por el gobierno “ahorrará 842 millones de dólares en intereses. Pero, más allá del impacto económico, conlleva una fuerte señal política” (*Página 12*, 16/12/2005). De esta manera el diario indica que en sí, la cancelación de la deuda con el FMI no cambiará el escenario económico pero “el impacto de la decisión es más que nada político” (Ídem.). En este sentido, una particularidad de la cobertura realizada por *Página 12*, en menor medida también presente en los otros diarios analizados, es el énfasis puesto en que la decisión fue obra de Néstor Kirchner, resaltando la figura fuerte del presidente

por sobre la influencia de otros colaboradores (sobre todo frente al que en ese momento era el reciente ex ministro de economía, Roberto Lavagna). Dice *Página 12*: “para tomar la decisión, Kirchner tuvo antes que sacarse de encima a Roberto Lavagna, quien, pese a que ayer difundió un comunicado aplaudiendo la medida, siempre creyó que lo mejor era buscar una refinanciación de la deuda con el Fondo, pateándola hacia delante” (*Página 12*, 16/12/2005). Nuevamente, según *Página 12*, “hacía tiempo que la palabra desendeudamiento había sido instalada por el Gobierno como un escenario para nada descabellado. Para Kirchner, era una obsesión. Lula aceleró los tiempos” (Ídem.).

Dentro de un análisis más general, Mario Wainfeld, uno de los editorialistas del diario, señala que la medida consolida un nuevo escenario político, ya que, según sus palabras, “no es poca cosa salirse (como poco intentar salirse) del círculo de hierro del endeudamiento, la refinanciación y la sobredeterminación de la política por los acreedores. Va en línea con dos ansiedades presidenciales, jamás colmadas, la de recuperar la política y la de acrecentar el poder del Estado” (*Página 12*, 16/12/2005). El mismo indica que “la hipótesis de ruptura y no pago no existe en la agenda de ningún país más o menos sustentable del mundo, lo que confina un eventual debate de este sesgo a sectores de izquierda muy minoritarios”.

Como podemos observar, para *Página 12*, en concordancia con lo propuesto por el Gobierno Nacional, la única alternativa viable a la situación de la deuda externa es el pago de la misma. Sin embargo, Wainfeld considera que “la fortuna que se remesará al FMI cristaliza un enorme sacrificio y fue pagada en buena parte por los contribuyentes más humildes (...) Está por verse hasta dónde llega el desendeudamiento con millones de argentinos privados de los derechos básicos de la ciudadanía social” (Ídem.) Por otro lado, debemos señalar, que si bien la tónica del diario fue avalar la decisión de pago, como contrapeso se destaca una nota de Marcelo Zlotogwiazda (*Página 12*, 16/12/2005) quien afirma:

Hay una lectura incorporada como eje del discurso oficial que es claramente falsa: la decisión no aporta ni un ápice a la independencia económica (...) El Gobierno no se libera de ninguna presión fondomonetarista por la sencilla razón de que no existía presión alguna, ya que no hay en vigencia ningún acuerdo con el Fondo.

A la vez, el periodista especializado en temas económicos también se pregunta: “si resulta que por arte de una decisión política desde ayer existen reservas de libre disponibilidad para pagarle al Fondo cae de maduro preguntarse por qué no utilizarlas para atenuar alguno de los dramas sociales que tiñen de oscuro amplios sectores de la población” (*Página 12*, 16/12/2005).

Para el caso del sector empresarial, la decisión también fue acogida favorablemente. En un arco considerable, los argumentos coinciden con los planteados por el presidente Kirchner. Osvaldo Cornide, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) señaló que “la decisión del Gobierno nacional de cancelar su deuda con el Fondo Monetario Internacional es una actitud soberana que merece el respaldo de todos los sectores”. De modo similar, Eduardo Elsztain, dueño de IRSA, manifestó que “en un negocio, lo mejor que se puede hacer es pagar deudas. Es mejor usar la caja para pagar, antes que para seguir endeudándose”. En la misma órbita, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) consideró que se trata de “un hecho muy positivo, que refleja la fortaleza de la actual economía argentina”. Por su parte, Angelo Calcaterra, CEO de Sideco (empresa del grupo Macri), dijo que “lo más importante, más allá de los efectos en la macroeconomía, es cómo se recupera el estado de ánimo de la sociedad, se revaloriza la confianza en nosotros mismos, se revitaliza y se dinamiza la posibilidad de crecimiento”. De similar manera, José Ignacio de Mendiguren, representante de la UIA indicó que “esta decisión no va a afectar la macroeconomía y lo más importante es que se va a mantener el criterio de solvencia fiscal”. Para el sector financiero también el anuncio era una cuestión a celebrar. Por ejemplo, Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio, señaló que “es una muy buena medida, especialmente porque significa no romper con el Fondo.” Mario Vicens, de la Asociación de Bancos de la Argentina, destacó “la decisión es buena porque está adoptada en el marco de un ejercicio muy responsable de política fiscal y monetaria”.

Con un grado mayor de heterogeneidad, la respuesta de los partidos políticos ajenos a la coalición del gobierno, fue dispar. Ricardo López Murphy, líder del partido Recrear, dijo “es una medida razonable, siempre que se tomen los recaudos para proteger el financiamiento de la República”. Raúl Alfonsín, ex presidente de la nación, manifestó que “el pago total de la deuda al FMI es un signo de independencia económica que debe ser mirado con buenos ojos por los argentinos”.

Por el contrario, el presidente por ese entonces de la UCR, el diputado Roberto Iglesias, calificó la medida como “innecesaria” y dijo que se va a pagar al “peor de los acreedores”. Por su parte, el equipo de prensa de Mauricio Macri difundió un comunicado que recuerda que “este gobierno ha sido el que más ha pagado a los organismos de crédito” y señala que la medida anunciada ayer “no apunta a resolver ninguno de los problemas acuciantes que hoy sufre la Argentina”. La diputada Elisa Carrió dijo que “estamos haciendo lo que quería el FMI” y que “desendeudarse es bueno, pero esta vez le pagamos al FMI a costa de aumentar la deuda en la distribución del ingreso y las políticas sociales”. Rubén Giustiniani, del bloque socialista del Senado, manifestó que “la política de desendeudamiento es un eufemismo para pagarle al FMI lo que el Fondo quiere (...) con el 40 por ciento de la población bajo la línea de la pobreza, con el 13 por ciento en la indigencia, esa masa de dinero es retraerle fondos a las políticas sociales”. La izquierda partidaria tampoco ahorró críticas, el secretario general del Partido Comunista, Patricio Echegaray, indicó que “por su carácter ilegítimo y fraudulento no sólo no debería ser pagada por adelantado, sino que debería ser cuestionada y discutida por el Parlamento”. Y el Partido Obrero criticó que el anuncio se haya efectuado “en simultáneo con la negativa a un aguinaldo para desocupados y el congelamiento en los sueldos de los trabajadores y en las jubilaciones”, al mismo tiempo que declaró que “otra vez hay plata para el Fondo Monetario y no para el pueblo”.

Por parte de las organizaciones sociales presentes en el acto adhirieron a las explicaciones del Gobierno. Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, aseguró que la medida permite superar “una enfermedad”, “no deberle dinero al Fondo es como estar libre de algo malo”.

Durante esos días fue frecuente la aparición en los medios nacionales de la opinión de intelectuales para dar su visión al respecto. En la mayoría de los casos las fuentes consultadas concebían al pago desde una visión positiva. A modo de ejemplo, Aldo Ferrer, economista del Grupo Fénix, señaló que la medida “demuestra que el país ha recuperado el comando de su economía y su capacidad financiera para tomar una determinación de estas características”. “De ahora en más nuestra relación con el FMI será normal, porque no le deberemos nada”, añadió. En el mismo sentido Jorge Schvartzer, también del Grupo Fénix, aseguró que se trata de “una política interesante y audaz (...) lo pode-

mos enmarcar dentro del pensamiento nacional y popular que habla de soberanía política, independencia económica y justicia social”.

Entre las escasas voces consultadas que dan argumentos en contra de la medida se puede destacar la opinión de Claudio Lozano que manifiesta que el pago “es el abandono definitivo de la idea de corresponsabilidad, que supone compartir costos. Acá sólo pone una parte, que es la Argentina”. También, Julio Gambina indicó que la medida “no es más que la continuidad y profundización de la política de pago a los organismos de crédito internacionales y el privilegio del pago al FMI”. El economista miembro de ATTAC y de la FISyP, aseguró además que los recursos destinados a la cancelación anticipada podrían haberse destinado a múltiples necesidades “como la generación de empleo, salud y educación”.

2. 5 Las elecciones de 2007: consolidación y potenciales conflictos

En el escenario planteado por las elecciones generales de octubre de 2007 el espacio político aglutinado en torno a la figura de Néstor Kirchner y Cristina Fernández se constituyó en el actor más relevante, el que marcó la agenda, el lenguaje y los tiempos de la campaña. Se trató del último capítulo del proyecto original de la transversalidad, ya que luego de las elecciones el ex presidente se volcaría al rearmado del PJ. El 25 de mayo de 2006, el oficialismo había lanzado la Concertación Plural, la alianza electoral que conformaba junto a sectores del radicalismo, el socialismo y demás organizaciones. La apuesta, había sido exitosa, como para tener un parámetro claro, cinco de los seis gobernadores radicales adherían a la fórmula encabezada por Cristina Fernández, pero más que en un armado político, la fortaleza del kirchnerismo se sustentaba en los resultados macroeconómicos: al momento de las elecciones la industria mostraba un crecimiento anual del 8,8 %, las ganancias de los bancos se multiplicaban, las exportaciones agropecuarias llegaban a techos históricos y se habían mejorado los niveles de ocupación y de los salarios. Y los grandes empresarios auguraban mejoras en sus ganancias y proyectaban mayores inversiones. El kirchnerismo se terminaría imponiendo en primera vuelta con casi el 45 % de los votos, aunque mostraría ciertas dificultades para consolidar su proyecto en las grandes ciudades con mayor cantidad de “sectores medios”: no pudo imponerse ni en la Ciudad de Buenos Aires, ni en Rosario, ni en Córdoba.

En cuanto a la campaña electoral, habrá que decir que el oficialismo no hizo grandes anuncios ni promesas, remarcó las mejoras conseguidas en materia social y de empleo, y en la expansión de la actividad económica. Reforzó su confrontación discursiva respecto de los gobiernos que actuaron en la década del '90 y defendió sus políticas sociales y económicas, definiéndolas como un modelo “de crecimiento con inclusión social”. Sólo por momentos, Cristina Fernández se refirió a que su gestión tendría como objetivo novedoso la apuesta por mejorar “la institucionalidad”; allí apuntó una de sus propuestas de campaña más importantes como fue la convocatoria a un Gran Pacto Social.

Al mismo tiempo, el kirchnerismo se presentó a sí mismo como el espacio político que expresaba la reivindicación de la militancia clásica, identificada en gran parte con los sueños de juventud. “Muchos de los sueños de estos cuatro años y medio –dirá Cristina Fernández– fueron los sueños de este hombre que está sentado ahí y míos, cuando éramos muy jóvenes y nos conocíamos” (*La Nación* 26/10/2007).

Si analizamos su discurso con mayor detenimiento, veremos cómo uno de los tópicos fundamentales de la campaña, que atraviesa además todo el período analizado, se refiere al llamado a defender y profundizar el modelo, en el cual el Estado tiene asignado un papel crucial. En varios pasajes la candidata oficialista, habló de “un modelo de desarrollo social que permita que mayor cantidad de gente tenga trabajo, mejor remunerado y no informal”. En el que se establezca “una articulación inteligente entre Estado y mercado, pero concibiendo al Estado como aquel que necesariamente tiene que actuar en beneficio de los más débiles, que son los usuarios o consumidores frente a intereses que pueden cartelizarse o monopolizarse” (*Página 12*, 30/10/2007). A su vez, ese modelo asume características específicas en el contexto argentino: “El nuestro es un modelo de acumulación con matriz diversificada. El campo no es incompatible con la industria y la industria no es incompatible con el campo” (*Clarín*, 30/10/2007). De este modo, asistimos una vez más a una operación discursiva (ideológica) que presenta un fenómeno de manera parcial, en este caso propone una visión sobre el Estado como si fuera una estructura que funciona más allá de las luchas sociales, políticas y económicas, cuya acción beneficiaría a todos los grupos sociales por igual. Lo mismo ocurre con el uso del término “productivo”.

Un segundo tópico que vale la pena retomar tiene que ver con la manera en que el kirchnerismo fue construyendo una lectura sobre la crisis de 2001 en tanto momento trágico del que no se podría rescatar absolutamente nada. Así las cosas, a la expresión los '90, utilizada para diferenciarse de otros gobiernos, se le suma la idea de que a esa altura se podía decir que el país había “salido del infierno” (*La Nación*, 21/10/2007). Esto supone una intención: dejar planteado un cambio de época. En palabras de Néstor Kirchner: “somos un país que va saliendo del infierno y con Cristina ese camino se va a profundizar; será un gobierno mucho mejor que éste; se viene la nueva institucionalidad; el acuerdo socioeconómico que nos permita a los argentinos darle calidad estratégica al esfuerzo que hicimos” (*Página 12*, 23/10/2007).

El último núcleo que queremos destacar en el discurso kirchnerista de aquellos meses se refiere al modo en que presenta su proyecto político como un proyecto nacional. Por un lado, el adjetivo está vinculado con la autonomía del gobierno respecto de poderes externos. La propia Cristina Fernández recuerda los comienzos del gobierno de su esposo señalando: “veníamos también con el sueño de recuperar para todo el pueblo la dignidad de los representantes en el Parlamento y en el Ejecutivo. Para que todos supieran que las decisiones se toman en la Casa Rosada y en el Parlamento y no en las oficinas del FMI” (*Página 12*, 26/10/2007). Por otro, la definición se vincula con las tradiciones políticas que lo sustentan, y en particular con una revalorización del peronismo. Esto se vislumbra en las palabras del dirigente justicialista José María Díaz Bancalari, cuando sostiene que “el peronismo debe ser el eje y motor del movimiento nacional que acompañe el proyecto nacional del Gobierno” (*La Nación*, 22/10/2007). En sintonía con esta óptica, el propio Néstor Kirchner justificaba su decisión de ir por la conducción del PJ: “No tengan ninguna duda que en el lugar que nos toque actuar (...) pondremos en marcha una gran reorganización democrática del movimiento nacional y popular que es el Partido Justicialista para que todos los afiliados y todos los argentinos se puedan expresar” (*La Nación*, 24/10/2007).

Por otra parte, el discurso opositor que se construye desde otras fuerzas políticas que podemos ubicar en un arco que representa al bloque de poder y que a nivel de los medios de comunicación se encarna, sobre todo, en *La Nación*, se centrará en dos cuestiones más coyunturales que apuntan a señalar falencias del Gobierno: la inflación y la inseguridad. A eso se le sumará un cuestionamiento vinculado a su “estilo

político”, su falta de “republicanismo” y el uso arbitrario y poco transparente de los fondos públicos. Todo un eje que podemos sintetizar como el aspecto formal de los mecanismos institucionales.

Si nos centraremos en los dos candidatos de este espectro con mayor exposición mediática, veremos que, por empezar, la candidatura de Roberto Lavagna, ex ministro del gobierno de Néstor Kirchner, respaldada por una alianza entre sectores del justicialismo y la UCR, constituía un aval a los fundamentos de la política económica oficial. En ese sentido, su postulación aparecía como una versión más “seria” y “previsible” del modelo. Así las cosas, por un lado, aprobará buena parte de esa política: la reestructuración de la deuda, el pago al FMI, las retenciones, y también intentará presentarse como el referente de un “proyecto nacional” que promueve como bases la producción y el empleo y que se opone a “la derecha y al capital financiero” (*Página 12*, 21/10/2007). Pero por otro lado, cuestionará la política internacional del Gobierno por considerar que ha quedado presa de ciertos gobiernos latinoamericanos (*La Nación*, 21/10/2007) y llamará la atención sobre algunos “síntomas preocupantes, como la inflación” (*La Nación*, 25/10/2007). Desde su espacio político, los referentes del radicalismo serán quienes pongan más énfasis en las críticas al estilo político del kirchnerismo. El propio Raúl Alfonsín afirmaba que el nuevo presidente tenía que caracterizarse por saber “respetar la ley, la República y la división de poderes”. En esa línea, añadía: “Una de las condiciones de nuestra República es el diálogo con los partidos políticos y este gobierno dice que somos corporaciones” (*La Nación*, 25/10/2007).

Este último planteo nos permite acercarnos a la estrategia discursiva de Elisa Carrió, candidata por la Coalición Cívica, quien centrará sus intervenciones en las cuestiones institucionales, sin perder de vista una serie de elementos que a esta altura podemos definir como transversales a las distintas expresiones políticas, como son la inclusión social y la distribución del ingreso. En este punto Carrió es clara: “la sociedad está siendo preparada para un país mejor, y creo que hay millones de argentinos que quieren ser republicanos, civilizados, que quieren la justicia social, la distribución del ingreso, el desarrollo” (*Página 12*, 21/10/2007). Tal como sucede con Lavagna, Carrió trata de diferenciarse de las variantes más conservadoras del sistema político, por eso aclara: “nosotros no somos ni Blumberg, ni Macri” (Ídem.). A la vez, tratando de desestimar cualquier duda sobre la factibilidad de un

gobierno no justicialista, no dudará en definirse como “una republicana con decisión peronista” (*Clarín*, 25/10/2007).

En línea con esos núcleos significantes que están presentes en el discurso de distintos espacios políticos y que por ende dan la pauta de la conformación de cierto clima cultural –de un horizonte de sentido que tiende a no ponerse en cuestión–, también vale la pena señalar que tanto Carrió como Lavagna afirman que están a favor de los juicios a los represores que por aquellos tiempos comenzaban a efectivizarse (*Página 12*, 21/10/2007).

Para cerrar el análisis del discurso propuesto por esos espacios políticos diremos que el escenario planteado por las elecciones estuvo muy centrado en las opciones que aquí repasamos. La posibilidad de encontrar cuestionamientos de fondo al rumbo económico, social y político quedaron limitadas a una fuerza por entonces emergente como Proyecto Sur y a una izquierda marxista muy atomizada, que había retrocedido respecto de la capacidad de intervención social que había mostrado en el clímax de la crisis.

Si de los medios de comunicación se trata, salta a la vista el nivel de complacencia de *Clarín* respecto de las políticas implementadas por el oficialismo. En el siguiente editorial, veremos cómo desde el diario se aprueba el patrón de acumulación implementado luego de la crisis por los gobiernos justicialistas, al que –en todo caso– se le plantean algunos ajustes:

Es necesario, entre otras cosas, actuar con criterio contracíclico invirtiendo una mayor parte de los recursos que se obtienen en esta fase del ciclo de precios, en la promoción de la investigación científica y tecnológica pública y privada, vinculada con la transformación de bienes en los que el país tiene ventaja comparativa y en el desarrollo de nuevos productos. (...) No hay que descuidar la fortaleza del sistema financiero ni el nivel de reservas, y avanzar en la solución de la deuda con el Club de París, requisito indispensable para mejorar la percepción de la Argentina entre los inversores externos (*Clarín*, 21/10/2007).

Así las cosas, *Clarín* contribuye a consolidar la idea de la existencia de un modelo basado en la producción y el empleo que se sustenta en la acción del Estado. Aporta, de esta manera, a legitimar una repre-

sentación de las políticas gubernamentales –y sobre el propio rol del Estado– que quedará asociada al impulso de actividades productivas y a la inversión en infraestructura. Esto no quita que se dejen planteados algunos llamados de atención relacionados, inclusive con el estilo político “áspero” de Néstor Kirchner o la manipulación de las estadísticas públicas (*Clarín*, 21/10/2007; 23/10/2007). Pero hay que decir que aquí no sólo hay una afinidad político-ideológica, sino también una confluencia de intereses, ya que el Grupo *Clarín* se benefició con normativas que le habían permitido proteger su patrimonio y mantener ventajas respecto a otros grupos, luego de la aprobación de la Ley de protección de industrias culturales nacionales (2003) y del Decreto 527/05.

En el caso de *Página 12* no aparecen cuestionamientos de fondo hacia el Gobierno, más allá de alguna crítica puntual. Por otro lado, los principales editorialistas postularán la idea del cierre de una etapa respecto de la legitimidad lograda por el sistema político en relación a la crisis que sufriera en 2001-2003. A diferencia de las preocupaciones que surgen en otros medios respecto de la fragmentación de ese sistema y de la debilidad de los partidos, en *Página 12* se considera que con estas elecciones quedó abierto “un nuevo período de cuatro años que dejará una marca muy fuerte en el proceso de conformación de un nuevo escenario-país que lentamente tiende a reemplazar al que estalló en el 2001-2002” (*Página 12*, 28/10/2007). A su vez, en este diario se le dará un espacio privilegiado a los intentos por justificar el anunciado triunfo del kirchnerismo, cuestión que tiende a explicarse por los “logros” del gobierno de Néstor Kirchner. En ese plano, Horacio Verbitsky remarca que durante el gobierno de Kirchner “se produjo un aumento simultáneo del empleo y del salario real (...) sólo comparable con el ocurrido en el segundo quinquenio de la década de 1940. Ese lapso corresponde a la primera presidencia de Juan D. Perón” (*Página 12*, 28/10/2007). En este punto, vale remarcar que la reminiscencia no es inocente, al tiempo que tampoco lo es el modo en que algunas falencias del gobierno no son blanco de la crítica, sino que conforman la lista de las “cuentas pendientes”.

La Nación, por su parte, reforzará las mismas críticas hacia el oficialismo planteadas por los candidatos de la oposición analizados más arriba, afirmando que la candidata del oficialismo –y el propio Gobierno– omite temas fundamentales como son la inseguridad, la corrupción y la inflación (*La Nación*, 21/10/2007). A esto habrá que sumarle una

marcada preocupación por “la apatía” que la ciudadanía ha demostrado hacia las elecciones y por el estado de debilidad de los partidos políticos.

El acento del discurso promovido desde *La Nación* queda claro en la siguiente afirmación de Joaquín Morales Solá: “Los desalientos locales son políticos, definitivamente, y no económicos” (*La Nación*, 21/10/2007). En un editorial de ese mismo día, se asegura que “la transparencia no ha sido una característica del gobierno de Néstor Kirchner” y se denuncia que en su gestión el Poder Ejecutivo manejó miles de millones de pesos sin ningún tipo de control. A su vez, se relaciona directamente esa falta de “solvencia institucional” con la escasa “inversión extranjera” que recibe el país. Del mismo modo, es en *La Nación* donde aparece un cuestionamiento más sistemático respecto de algunos aspectos parciales de las políticas económicas del Gobierno, en este caso expresando casi corporativamente los intereses del sector agropecuario.

Llegados a este punto, debemos remarcar que la preocupación por el poco interés que ha despertado la elección y por la debilidad que demuestran los partidos políticos es compartida por *La Nación*, *Clarín* y buena parte de la intelectualidad liberal y liberal-democrática. Por el lado de *Clarín*, Ricardo Kirschbaum, uno de sus editores nos allana el camino, cuando sostiene que se llega a las elecciones “con el sistema de partidos casi disuelto”. A su entender, si el objetivo es “mejorar la calidad institucional”, “la recreación de partidos políticos respetados es un objetivo que debe ser estimulado”. Finalmente, el editor asegura que si bien a partir de 2003 “se consolidaron las instituciones al calor, básicamente, de la recuperación económica y de algunas iniciativas gubernamentales”, también se han mantenido prácticas “reñidas con el buen funcionamiento del sistema republicano”, como aquellas que atentan contra la independencia de los poderes (*Clarín*, 28/10/2007). En el editorial del día posterior a las elecciones, *Clarín* dirá que el triunfo justicialista se llevó a cabo a pesar de los “déficit político-institucionales”. En tanto, Eduardo van der Kooy, le dedica un párrafo a la oposición, puesto que considera que tiene la responsabilidad de “empezar a edificar una alternativa que la Argentina no tiene y un equilibrio que necesita esta pobre pero noble democracia” (*Clarín*, 29/10/2007).

En el caso de *La Nación*, además de dejar planteado el diagnóstico se establecen algunas razones que explicarían ese estado de indiferencia. En esa línea, Adrián Ventura, editorialista del diario, ensaya una hipótesis

poco original cuando sostiene que en la base de la apatía está la “anomia”, es decir el desapego a las normas que buena parte de la dirigencia tiende a mostrar, dando un mal ejemplo que se extiende entre la ciudadanía (*La Nación*, 25/10/2007). En una línea similar, Joaquín Morales Solá avanza un paso más y vincula esa situación con el estilo político que se le critica al kirchnerismo. A su modo de ver, el “odio” y la “apatía” son las dos caras de una misma moneda: “la política perdió hasta el componente de una noción, superficial siquiera, de la calidez humana”. El adversario se convirtió en enemigo (*La Nación*, 28/10/2007). Dicho esto, Solá también se despega del pasado inmediato, en su opinión el debate político está “envejecido”, “oscila entre los enfrentamientos que sucedieron en los años 70 y las políticas que predominaron en los 90”.

De este modo, nos encontramos con una preocupación que deriva en una serie de operaciones discursivas que tienden, por un lado, a igualar a los partidos políticos con la democracia y a ésta con el sistema de instituciones que define la democracia liberal-representativa, naturalizando así su conformación y presentándola como el único modo posible para organizar la representación y la toma de decisiones. Por otro lado, se vislumbra una preocupación respecto del grado de legitimidad de las instituciones que garantizan el mantenimiento de la dominación política entre los ciudadanos. Pero al mismo tiempo, se propone una lectura particular para comprender esa supuesta debilidad que consiste en la construcción de una sinécdoque, puesto que ese estado de cosas tiende a explicarse por el desempeño de los ejecutantes, o sea de las elites políticas de la clase dominante. Así, una vez más, se tiende a obturar el debate sobre los límites intrínsecos de ese sistema de representación y se presentan como viciadas algunas de sus partes. Se trata de evitar un nuevo cuestionamiento al conjunto de las reglas y en todo caso se plantea un llamado de atención a esas elites para que “den el ejemplo”.

Cambiando el eje del análisis, podemos decir que en términos generales las entidades que representan a las distintas fracciones de la gran burguesía se muestran conformes con las medidas económicas principales adoptadas por el Gobierno saliente y reciben con buenos ojos los resultados de la elección. Sin embargo, mientras que la UIA aparece como el sector que más frontalmente avala la política oficial, incluyendo la convocatoria al gran Pacto Social, en el sector agropecuario la Sociedad Rural representa la posición más distante y hace saber que espera del nuevo Gobierno una mayor atención.

La UIA se maneja en un horizonte de sentido en el que confluye con el kirchnerismo, la CGT, *Clarín*, *Página 12*, un núcleo de intelectuales provenientes de distintos espacios culturales y diversas organizaciones sociales. Más allá del respaldo que sus directivos expresan hacia el Gobierno, lo que queremos destacar es la forma en que la UIA avala la idea de que existe un modelo económico de perfil productivo, en el cual las políticas estatales juegan un rol fundamental. De hecho al desestimar las críticas por el crecimiento de la inflación, su titular, Juan Carlos Lascurain, aseguraba que se debía a que “hay sectores minoritarios que intentan dificultar el desarrollo de un proyecto productivo, con revalorización de los sectores de mano de obra intensivos y que favorezca el crecimiento del sector industrial y del conjunto de los sectores de la actividad económica” (*Infobae*, 4/10/2007). En esa línea, pasadas las elecciones, Lascurain sostenía: “es un triunfo importantísimo que respalda el modelo productivo que Cristina prometió continuar” (*Infobae*, 29/10/2007). Por su parte, De Mendiguren, agregaba “lo positivo es que el 90% votó un proyecto nacional. Ahora esperamos (...) un llamado a una concertación que convierta este fuerte crecimiento en desarrollo con inclusión social” (*Ídem*).

Entretanto, desde la Asociación Empresaria Argentina (AEA), si bien no hay un aval tan contundente al Gobierno, también se legitiman ciertos significados que hacen a su perspectiva política. Por una parte, mediante un comunicado la entidad felicitó a la presidenta electa y manifestó “su disposición para contribuir a profundizar el diálogo entre los principales actores sociales de la Argentina en la búsqueda de consensos que nos permitan avanzar en el desarrollo económico y social de nuestro país”. Por otra parte, su titular Luis Pagani dejaba sentadas algunas líneas de acción para el futuro inmediato. Entre las más destacadas aparece el llamado a formar “grandes empresas nacionales” que se expandan internacionalmente con apoyo del Estado (*La Nación*, 31/10/2007).

La Sociedad Rural, por su parte, aparece menos embarcada en ese proceso de legitimación pero sin marcar demasiadas diferencias de fondo. Conocido el resultado electoral, su presidente, Luciano Miguens, colocaba el acento en las cuestiones pendientes más que en lo realizado. Así las cosas dirá que “hay que aprovechar la oportunidad histórica que se le presenta al país de la mano del favorable contexto internacional”. En ese sentido, las intervenciones de esta entidad aparecen más vinculadas a los intereses sectoriales: “queremos –agrega Miguens– que se desarrolle una política agropecuaria activa que aborde los problemas

del productor”. Si eso ocurre, dirá, “pueden contar con nuestra colaboración” (*La Nación*, 29/10/2007).

Por último, respecto de la intelectualidad podemos observar lecturas y posiciones bien diferenciadas. De un lado, como ya adelantamos, en la fracción liberal predomina el cuestionamiento al oficialismo por problemas económicos puntuales y por el poco apego a los mecanismos institucionales. En el primer punto, los especialistas neoliberales apuntan a la creciente inflación, cuestión que para éstos explica la poca afluencia de inversiones extranjeras, elemento que, a su vez, vislumbran como la principal falencia de la política económica oficial (*La Nación*, 21/10/2007; 31/10/2007).

Yendo un paso más allá, el poco interés que había despertado el proceso electoral constituye una preocupación central entre los intelectuales liberales tradicionales y los liberal-democráticos. Mariano Grondona nos permite ilustrar una serie de ideas fuerza que son reconocibles en estas interpretaciones. Para el editorialista de *La Nación*, Néstor Kirchner no inauguró un período presidencial más, “sino algo mucho más osado: un nuevo sistema de poder” (*La Nación*, 21/10/2007). Según Grondona, el por entonces presidente había “cimentando un poder absoluto, nada republicano” en base a un uso discrecional del superávit fiscal que le había permitido comprar innumerables voluntades. Rosendo Fraga, por su parte, carga las tintas sobre otra idea fuerza: “las mayorías, por sí solas, no debilitan el sistema institucional. Sí lo hacen cuando no hay una oposición articulada” (*La Nación*, 31/10/2007).

Así las cosas, nuevamente se pone en juego una operación de co-sificación de las instituciones, que borra sus propios procesos sociales de gestación, al tiempo que se pone el foco sobre la necesidad de que el mismo sistema político debe ser capaz de generar sus propias opciones de recambio, que estén listas para intervenir en caso de una nueva crisis de legitimidad. La preocupación se justifica ante todo, porque está fresco el clímax de la crisis de legitimidad que vivieron las instituciones de la democracia liberal representativa en el período 2001-2003 y porque estos intelectuales consideran que la poca predisposición a respetar la división de poderes y a hacer de los partidos políticos instancias participativas que contengan a los ciudadanos más allá del momento del voto, liman la legitimidad del sistema de representación política como tal. En palabras de Sergio Berensztein, miembro de la Consultora Poliarquía, “el

mal ejemplo de Néstor Kirchner se ha generalizado: los políticos, tanto en el oficialismo como en la oposición, prefieren la soledad, los caprichos y la improvisación para tomar decisiones clave” (*La Nación*, 22/10/2007). Pero, también hay una dimensión de esta preocupación que hace a cómo desde la visión del mundo que sostienen estos agentes el respeto de las “reglas de juego” que impone el orden jurídico es fundamental para pensar el desarrollo de la actividad económica. Esto queda más claro cuando leemos las palabras del economista neoliberal, Manuel Solanet:

En la Argentina, el Poder Ejecutivo ha tendido a asumir un poder hegemónico y a utilizarlo en forma arbitraria (...) Al tener un uso hegemónico, arbitrario y no controlado, el Poder Ejecutivo hace que las reglas de juego cambien según su voluntad y eso es justamente lo contrario a tener reglas de juego claras, generales y de largo plazo que son las que necesitan los inversores (*La Nación*, 24/10/2007).

Será desde la franja crítica del campo intelectual desde donde surjan, por un lado, interpretaciones bien diferentes acerca de la fragmentación y la debilidad del sistema de representación, que por aquellos días no encontrarán una materialidad en ninguna expresión consolidada del movimiento popular. La referencia obligada para este otro análisis es la insurrección de 2001 y la incapacidad del movimiento popular para transformar el descontento en alternativa política. La socióloga Norma Giarraca recuerda que “el 2001 fue un gran susto para las clases dominantes” porque “fue puesta en juego la cultura del orden y una idea de sociedad integrada que existe en Argentina” (*Página 12*, 27/10/2007). A su modo de ver, aquella situación explica en gran medida el respaldo que el oficialismo obtuvo de grupos que componen esas clases: “hoy hay mucha necesidad de apoyar a Kirchner, que es un gran generador de hegemonía”, concluye Giarraca. En tanto, para su colega Maristella Svampa es necesario reflexionar más profundamente sobre las “nuevas formas de democracia directa y participativa, que se desarrollan por fuera de los moldes del régimen de dominación, instituido en los ’90”. Svampa llama la atención acerca de cómo muchos dirigentes políticos y académicos están preocupados en integrar esas nuevas formas de participación “dentro de los moldes del actual régimen de dominación”, considerando que esto no sólo es posible, sino “también deseable para la gobernabilidad del país” (*Ídem*).

Por otro lado, desde este sector de la intelectualidad se relaciona esa falta de entusiasmo con la manera en que el kirchnerismo afrontó la campaña electoral, administrando la ventaja que le adjudicaban las encuestas. “El kirchnerismo no quiere saber nada de debate –dice Eduardo Aliverti– porque podría quedar expuesto que, salvo acumular reservas, exportar soja y aprovechar condiciones internacionales muy favorables, carece de grandes líneas de acción convocantes” (*Página 12*, 22/10/2007).

Por último, también estarán los planteos acerca de la necesidad de reformas sociales y económicas más profundas. Tal es el caso de Atilio Boron quien días antes de las elecciones afirma que “se debe definir una estrategia efectiva de combate a la pobreza” y “una reforma tributaria” (*La Nación*, 21/10/2007). O el de Osvaldo Bayer quien sentencia: “mientras haya niños con hambre no hay verdadera democracia” (*Página 12*, 27/10/2007).

Finalmente, en el período analizado, aparece consolidada una franja de intelectuales que, con una trayectoria vinculada al rechazo de las políticas neoliberales o directamente a la cultura de las izquierdas, actuará como un soporte del proyecto kirchnerista. En el plano económico, el Plan Fénix aparece una vez más como una especie de usina de pensamiento que fundamenta el trayecto definido por el Gobierno. En un artículo publicado en los días de campaña el grupo respalda el camino recorrido y establece las tareas futuras: “llegados a este punto de la evolución económica y social, resulta indispensable avanzar en el camino de la consolidación de una institucionalidad que brinde el mejor sustento posible a los desafíos de la gestión del mediano y largo plazo, para asegurar una senda de crecimiento con equidad” (*Página 12*, 21/10/2007). Entretanto, el politólogo Edgardo Mocca plantea una mirada particular respecto al momento del sistema político que difiere tanto de los intelectuales liberales como de los críticos. A su entender, “a los partidos políticos argentinos no los debilitó una estrategia gubernamental particular”, sino una sucesión de promesas incumplidas y hechos de corrupción (*Clarín*, 23/10/2007). En sintonía con la estrategia oficial, para Mocca no habrá que confundir “la innegable necesidad de la reconstrucción de un sistema de partidos como garante del pluralismo y la deliberación política con la reivindicación de los partidos realmente existentes”.

4. Conclusiones

Legados a este punto, podemos afirmar que el triunfo de Cristina Fernández en octubre de 2007 cierra un ciclo en Argentina, y al mismo tiempo abre otro. A nuestro modo de ver, se trata de dos momentos profundamente interconectados porque, sobre todo, no puede explicarse el triunfo electoral de 2007 sin el proceso abierto en diciembre de 2001. A la vez, lo que nos lleva a plantear la apertura de una etapa diferente es que mientras que en la crisis de 2001-2002 se puso en evidencia una profunda crisis de legitimidad que atravesó las instituciones económicas, políticas y culturales; lo que encontramos en octubre de 2007 es un avance notorio en la recomposición de esa legitimidad, sobre todo en lo que respecta a las instituciones políticas. Y en eso mucho tuvo que ver ese cambio en el “clima cultural”, de ese “zeitgeist” emergente en los inicios de este nuevo siglo.

Siguiendo a Bonnet, caracterizábamos a la “década menemista” como un período en el que la clase dominante había sabido producir una hegemonía prácticamente sin fisuras. Algo que sucedía con el aval de una buena parte de los más importantes comunicadores y de los medios masivos comerciales de comunicación, que –salvo en algunos casos emblemáticos– habían apoyado los procesos de privatización, promovido un discurso contrario a la participación estatal y la aplicación de “la Convertibilidad”. Pero también con el respaldo de los grupos empresarios agroindustriales e industriales “a secas”, de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia y con el importante aval de sectores muy amplios de la población.

Como intentamos plantear a lo largo de nuestro análisis, la insurrección de diciembre de 2001 puso en jaque esa “hegemonía menemista” y generó las condiciones para la emergencia de un nuevo horizonte de sentido. Primero el gobierno de Duhalde (entre 2002 y 2003) y luego el de Kirchner (entre 2003 y 2007) supusieron una crítica a esa cultura predominante durante los noventa, impulsada desde las instituciones culturales y también políticas: frívola, cínica e individualista. Por el contrario, el “nuevo discurso” tenía un componente de defensa de la “industria nacional”, “la producción y el trabajo”, se presentaba como crítico del “capitalismo financiero” y promotor en términos culturales de un retorno a cierta “comunidad organizada” perdida (rememorando parte del clásico discurso peronista).

La asociación con la “vieja política” (asociada en el discurso de la población con “la corrupción”, pero también llegado el caso con prácticas mafiosas) fue el “límite” que, en medio de esa crisis de legitimidad, la sociedad marcó al entonces gobierno duhaldista, sobre todo luego del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, lo que generó las condiciones para la proyección de una figura como la de Kirchner, primero como candidato y luego como presidente, que asumía al mismo tiempo rasgos de ruptura y de continuidad respecto de un universo político-cultural en proceso de reconfiguración.

Sin embargo el “discurso kirchnerista” implicaría algo más que la referencia a un “capitalismo nacional” o a un “capitalismo productivo” (por oposición al “capitalismo financiero”) que conformaba por un lado a los sectores empresarios (los más concentrados, pero también a los grupos medianos y pequeños), a la Iglesia (que reclamaba políticas que generaran empleo e “inclusión social”) o al sindicalismo organizado (que también reclamaba empleo y recomposición salarial). También fue capaz de involucrar a otros sectores que al momento se encontraban o bien en la periferia del discurso del sistema político o bien por fuera del mismo, a saber, el movimiento de Derechos Humanos y diversos grupos pertenecientes al “movimiento piquetero” o al de “empresas recuperadas”.

Esta capacidad de incorporación en los marcos del discurso político oficial kirchnerista, mostraba además el límite manifiesto del duhaldismo como así de gran parte de un sistema político hegemonizado por los partidos burgueses más importantes (el PJ, al que pertenecen tanto Kirchner como Duhalde, y la UCR). La “ampliación” del discurso, que permitía que diferentes movimientos sociales pudieran verse representados institucionalmente, oficialmente, por una parte del sistema político, se veía, a la vez, posibilitada en términos concretos por una importante reactivación económica que había permitido la recuperación del empleo y por tanto una caída de la desocupación. Lo que a la vez implicaba, como mencionamos renglones arriba, que el funcionamiento económico podía concitar apoyos políticos por parte del empresariado y de los trabajadores organizados, no casualmente en vísperas de las elecciones de octubre de 2005, donde el Frente para Victoria triunfó ampliamente, tanto la UIA como la CGT habían declarado no sólo apoyar el plan de gobierno sino a la vez la intención de iniciar conversaciones para coordinar mejorías en la productividad y en la asignación

salarial pero intentando controlar el proceso inflacionario, algo similar pasaría luego de las presidenciales de 2007.

Esto parecía indicar que estábamos en presencia de una recomposición del consenso hacia el papel desempeñado por las instancias de representación y los poderes del Estado. Parecía que el kirchnerismo implicaba una suerte de recomposición de cierta “hegemonía” y la reaparición de “otro” discurso dominante.

Sin embargo, si bien se observa un cambio discursivo que se plasmó en una reactivación productiva y en cierta intervención del estado en la esfera económica, lo cierto es que esto no redundó en la re-estatización de las empresas privatizadas ni en una modificación sustancial del funcionamiento de la estructura productiva.²⁰ A la vez, si bien la “Convertibilidad” durante los noventa tuvo su correlato en una “forma” de estado que podríamos denominar “neoconservador-neoliberal”; durante el gobierno de Kirchner pueden observarse cambios en ese estado y en algunas de las políticas públicas llevadas adelante por el mismo respecto de gobiernos anteriores, pero no necesariamente la emergencia de una “nueva forma” de estado contrapuesta a la anterior.²¹

Pero, ¿qué puede decirse al respecto en el plano estrictamente cultural? En principio tenemos que distinguir dos niveles, uno que remite al funcionamiento de los medios masivos de comunicación comercial; el otro que refiere a “políticas culturales” más generales desarrolladas por distintas organizaciones sociales y culturales, entre otros actores.

Por lo que a los medios masivos comerciales refiere, la política del kirchnerismo durante el período fue la de la conciliación, que se plasmó de hecho en 2005 con la renovación de todas las licencias por diez años para radio y televisión (Decreto 527/2005). Esto quiere decir que el oficialismo no presenta diferencias al respecto en comparación con los anteriores oficialismos (el de Carlos Menem y el de De la Rúa). Pero en el plano de las “políticas culturales” el kirchnerismo –como vimos, desde el mismo riñón del sistema político, aunque trascendiendo los límites de éste– construyó una discursividad y un régimen de gestos que instaló nuevamente la problemática de los derechos humanos en la esfera pública. Al mismo tiempo, buscó instalar la idea de que

20 Cfrme. trabajo de Varesi y Pinazo en este libro.

21 Cfrme. trabajo de Rajland y Barrera en este libro.

el Estado no estaba “ausente” del conjunto de la problemática social, no era solamente ese “gendarme nocturno” del que habla la tradición liberal sino –también– un Estado que debía “velar” por el bienestar de la población, con un perfil más “social”; en consonancia con un discurso que comenzaba a reivindicar la “industria nacional” y terminaría imponiendo la idea de que estaba en juego un “modelo” de desarrollo que combinaba el crecimiento con la equidad. Así las cosas, esa nueva articulación social desplegó en torno al papel del Estado y en relación al carácter “nacional” del nuevo modelo económico y del consiguiente proyecto político que lo encarnaba, un tipo de operación discursiva que resultó más que eficiente para la universalización de sus intereses ante porciones cada vez mayores de la sociedad.

En este punto, vale remarcar dos cuestiones complementarias. Por un lado, Kirchner trató en todo momento de presentarse como un presidente con decisión, “un presidente fuerte” que aparecía como la contracara de De la Rúa, que pasaría a la historia como un presidente dubitativo, pero también respecto del mismo Duhalde, quien en su condición de provisional y de mandatario jaqueado por la movilización popular, había quedado a las puertas de definiciones trascendentes, más allá de la devaluación. En este sentido, Kirchner trató de presentar a su gobierno como un momento bisagra para “la democracia argentina”, en un momento en el que la legitimidad de esas instituciones estaba fuertemente cuestionada, de allí que la cuestión de “la impunidad”²² pasó a ser un eje importante para ganarse un respaldo que no le habían dado las urnas y recuperar el consentimiento más general en relación al sistema político. Por otro lado, apostó también a presentarse como el agente que daría previsibilidad ante la profundidad de una crisis que había sacudido todas las instancias de la vida social para las mayorías. De este modo, así como Menem se construyó como el presidente fuerte que logró domar a la inflación, Kirchner edificó una figura vinculándola con la salida del “infierno” que representaba la hecatombe social y económica vivida años atrás. Si Menem apareció en algún momento como

22 En este caso, nos referimos a la impunidad que los gobiernos de Alfonsín y de Menem habían instalado respecto del Terrorismo de Estado a partir de leyes y decretos específicos, pero también a la impunidad que un poder judicial adicto al propio menemismo había generado en cuanto a las conductas corruptas que se habían puesto de manifiesto durante la etapa menemista. Por ello la renovación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia tiene para nosotros un efecto simbólico comparable con otras iniciativas gubernamentales que involucraron a los organismos de derechos humanos más reconocidos.

el garante de cierta previsibilidad, Kirchner emergió como la contracara de una sensación de estar a la “intemperie”, experimentada por las mayorías populares en los momentos de mayores dificultades económicas.

Esto era a la vez coherente con una “política cultural” que se planteaba como “nacional y popular”. Recordemos los conciertos televisados desde el Salón Blanco de la casa de gobierno, donde desfilaron figuras del tango y de la música folclórica argentina como también otras pertenecientes al ámbito del rock vernáculo o los distintos recitales públicos organizados en fechas patrias como el 25 de mayo, el 9 de julio, que se proyectaba ya desde ese momento (digamos, compromiso con el MERCOSUR mediante) hacia un espectro más latinoamericano y “progresista” o de “izquierda”. Pero a este tipo de iniciativas “inclusivas” en lo artístico y en lo simbólico, también hay que sumarle, en este sentido, a ese mecanismo discursivo mediante el cual Kirchner y el kirchnerismo irían construyendo un “nosotros”, que identificado –según el caso– con “el pueblo”, el “Estado” o a veces simplemente con “los argentinos” irá construyendo un juego de oposiciones (“el FMI”, “los especuladores”, “los que nos llevaron al infierno”, “los monopolios”) en el que el propio Gobierno aparecerá como el defensor de los intereses colectivos.

Podríamos considerar que todo esto era también coherente con la incorporación del discurso del movimiento de derechos humanos (considerado en Argentina dentro de un espectro ideológico de izquierda) como “política de Estado”. Lo que indica que si bien dentro del espectro de la discursividad desplegada al interior del campo político la referencia sería hacia lo “nacional popular”, en el plano simbólico-cultural dicha referencia pareciera orientarse más hacia la izquierda. Una construcción posible dada la “autonomía relativa”²³ observada dentro del campo de

23 No es nuestra intención explayarnos sobre este problema sobre el que tanto se ha escrito y debatido. En el marco del presente trabajo, sólo queremos ratificar un enfoque que parte de la idea de que toda práctica social (incluyendo las específicamente significantes) está implicada en una trama de determinaciones. De modo más o menos general, en una sociedad de clases, toda forma simbólica es en sí misma un terreno de luchas, en el que se libra una disputa por imponer un sentido; mientras que toda producción signica implica diversas acentuaciones, los sectores dominantes pugnan por imponer un sentido único y eterno (Voloshinov; 1992: 49). Pero al mismo tiempo, esa producción de sentido asume lógicas, tiempos y tradiciones específicas, que responden a los diversos espacios de circulación, pero también al modo en que en las sociedades modernas la producción cultural ha sido crecientemente asumida por agentes e instituciones que fueron alcanzando niveles de autonomía, siempre relativos e históricamente determinados, respecto de los poderes e instituciones económicas y políticas (Bourdieu; 2002; Williams; 2000).

producción cultural, pero también dada la estrategia de incorporación de diferentes movimientos sociales a las prácticas del oficialismo kirchnerista y de una franja importante de intelectuales y artistas.

De alguna manera, el kirchnerismo se presenta como una “contracultura oficial”,²⁴ para referirse a un conjunto de prácticas, gestos y significados contruidos respecto del pasado y de la práctica política misma, que aunque no condicen cien por cien con las pautas impuestas por la acción cultural de la clase dominante a lo largo de la historia, tampoco establecen rupturas definitivas respecto de la cultura hegemónica. Lo que nos lleva a hablar de una hegemonía que para recomponerse se reconfigura y por ende se presenta de un modo menos homogéneo que en la década anterior.

Asimismo, podemos señalar que tanto en el campo “intelectual” o académico como en el periodístico, se puede observar –aún en el momento de mayor estabilidad, o sea hacia 2007– un espacio con voces disonantes respecto del proceso encabezado por el kirchnerismo, que no sólo provienen de agentes que expresan tradiciones más bien conservadoras. Es que lo que marca un elemento de distanciamiento respecto de lo que ocurrió en la década menemista, será el nivel de cuestionamiento que se percibe en relación a la orientación del proceso histórico proveniente de diversas voces que expresan a los sectores dominantes. Esto es más visible en el tándem que componen las entidades de la burguesía agraria, los intelectuales liberales y el diario *La Nación*. Si bien, a lo largo del período estudiado hay un aglutinamiento que respalda la salida que expresa la designación de Duhalde como forma de resguardar el orden institucional, ni bien pasen algunas semanas de su asunción, pueden observarse allí críticas que apuntan a advertir sobre cierto “intervencionismo” por parte del estado y acerca del peligro de un nuevo “populismo” para ejercer el poder político.²⁵

24 Tomamos esta expresión de María Esperanza Casullo (Revista Crisis N° 2, diciembre de 2010-enero de 2011).

25 Junto con otro conjunto de posibles mediaciones (que van desde elementos histórico políticos a culturales, como ser la reivindicación de cierta “autonomía regional” en una ciudad como Buenos Aires; o bien cierta tradición anti-peronista también presente en esa ciudad, por poner dos ejemplos) estos factores de algún modo explican el triunfo del Mauricio Macri en las elecciones de Jefe de Gobierno celebradas a mediados de 2007. A lo que habrá que sumar, por supuesto, el modo en que los gobiernos “progresistas” anteriores perdieron sustento luego de la “Masacre de Cromagnón” y todo el movimiento de lucha contra la impunidad que ésta generó.

En definitiva, si el discurso kirchnerista suponía una crítica del discurso neoconservador-neoliberal que se instaló como predominante durante los noventa, al mismo tiempo ese “nuevo” discurso implicó la “institucionalización” de los discursos críticos forjados al calor de las resistencias y las luchas sociales por los diferentes movimientos sociales (más o menos críticos del menemismo y de la tibieza aliancista). Esto quiere decir que este discurso kirchnerista es, a la vez, –en un sentido entre dialéctico y contradictorio– crítico del discurso de “los noventa” y contrario a lo que simbólicamente representó diciembre de 2001: un horizonte de sentido que niega los noventa y al mismo tiempo le dice no a la irrupción popular que se manifestó en esas jornadas del 19 y 20 de diciembre. Si de algún modo, este discurso funciona como una “contracultura” institucionalizada, esto explica por qué una vez que se “institucionalizan” esos movimientos de protesta y pierden presencia pública e iniciativa autónoma, la “política” vuelve a imponerse como una acción que ha de dirimirse al interior del sistema político, los partidos y las instancias legitimadas de representación. Aunque se trate de una hegemonía que sigue siendo más difusa que la que se desplegara una década atrás, (por citar un elemento, como pudimos observar en el análisis desde la misma clase dominante se pone énfasis en la debilidad de los partidos políticos y la legitimidad de la representación) no obstante la emergencia de un nuevo clima cultural que forma parte de esa recomposición se evidencia incluso en el surgimiento de una “nueva derecha” –cuyo paradigma pasará a ser Mauricio Macri y su gestión al frente de la Ciudad de Buenos Aires– que si bien cuestiona la impronta kirchnerista, tampoco volverá a asumir aquel discurso que forjó la hegemonía neoliberal tal como se dio en la sociedad argentina durante los años ‘90.

Bibliografía

AA.VV (2010), Anuario de Investigaciones, FISyP-Fundación Rosa Luxemburgo, Buenos Aires.

AA.VV (2008); Informe final del Proyecto Medios de comunicación, espacio público y control social, Departamento de Política y Sociedad del Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”, Buenos Aires.

Bonnet, Alberto (2008); La hegemonía menemista. El neoconservadurismo en Argentina, 1989-2001, Buenos Aires, Prometeo.

Boron, Atilio (2007); Reflexiones sobre el poder, el estado, y la revolución, Córdoba, Espartaco.

Bourdieu, Pierre (1999); Intelectuales, política y poder, Buenos Aires, EUDEBA.

Bourdieu, Pierre (2002); Campo de poder, campo intelectual, Buenos Aires, Montessor.

Gambina, Julio y Campione, Daniel (2002); Los años de Menem. Cirugía mayor, Buenos Aires, Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación.

Gómez, Rodolfo (2005); “La socialdemocracia que no fue. Un análisis de las políticas de comunicación de masas durante el período alfonsinista (1983-1989)”, Cuadernos Críticos de Comunicación y Cultura N°1, Buenos Aires.

Gramsci, Antonio (2008); El Risorgimento, Buenos Aires, Las Cuarenta.

Gramsci, Antonio (2009); Literatura y vida nacional, Buenos Aires, Las Cuarenta.

Grupo de Estudios sobre Protesta Social y Acción Colectiva-GEPSAC, Documento de Trabajo N°48 “Transformaciones de la Protesta Social en Argentina (1989-2003), Buenos Aires, Instituto de Investigaciones “Gino Germani”, Facultad de Ciencias Sociales (UBA), mayo de 2006.

Hall, Stuart (1981); “La cultura, los medios de comunicación y el «efecto ideológico»”, en Curran, James y otros (comp.) Sociedad y comunicación de masas, Fondo de Cultura Económica, México, 1981.

Hall, Stuart (1998); “El problema de la ideología: marxismo sin garantía”, DOXA, N° 18, Verano de 1998.

Landi, Oscar (1992); Devórame otra vez, Buenos Aires, Planeta.

MTD- Aníbal Verón (2003); Darío y Maxi, dignidad piquetera, Buenos Aires.

Pulleiro, Adrián (2011); Entusiastas, escépticos y preocupados. El papel de los intelectuales en la crisis argentina de 2001, Tesis de Maestría en Comunicación y Cultura, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, (mimeo).

Sarlo, Beatriz (2004); Escenas de la vida posmoderna, Buenos Aires,

Ariel.

Sartori, Giovanni (1998); *Homo videns*, Madrid, Taurus.

Thompson, John B. (1998); *Ideología y cultura moderna. Teoría crítica social en la era de la comunicación de masas*, México, UAM.

Thwaites Rey, Mabel (1994) “La noción gramsciana de hegemonía en el convulsionado fin de siglo. Acerca de las bases materiales del consenso”, en Logiudice, E., Ferreyra, L., Thwaites Rey, M. (Comps.), *Gramsci mirando al sur. Sobre la hegemonía en los noventa*, Buenos Aires, K&ai Editor.

Thwaites Rey, Mabel y López, Andrea (2004); *Entre Tecnócratas Globalizados y Politicos Clientelistas*, Buenos Aires, Prometeo.

Williams, Raymond (2000); *Marxismo y literatura*, Barcelona, Península.

Economía popular y autogestión
(investigación participativa)



Caminos de construcción contrahegemónica en el Siglo XXI: Experiencias de autogestión en organizaciones sociales

**Gabriela Roffinelli
Santiago Lizuáin
Vanessa Ciolli**

*Necesitamos este tiempo para parar y reflexionar...
volver a hablar de los sueños y de lo que queremos hacer*

Taller de reflexión grupal, agosto de 2010

1. Presentación

En el presente trabajo exponemos los resultados (siempre provisionales) de nuestra investigación acción participativa que durante el período 2009-2011 buscó explorar las estrategias de autogestión socioeconómica desarrolladas por movimientos sociales, tanto rurales como urbanos, en relación con sus proyectos sociopolíticos alternativos al actual sistema de dominación.

Nos propusimos:

- Identificar las distintas estrategias de autogestión desarrolladas por los movimientos y/o organizaciones sociales, que les permiten enfrentar en mejores condiciones las presiones del sistema imperante.
- Indagar los aportes de tales estrategias a la construcción de relaciones sociales de autonomía e integración con otros movimientos.

- Analizar la dimensión contra-hegemónica de las estrategias identificadas.

- Generar espacios democráticos de reflexión colectiva sobre las experiencias para afianzar los mecanismos de organización participativa y fortalecer la construcción de praxis contra-hegemónica como forma de lucha política.

De este último objetivo, se desprende el abordaje metodológico, que consistió en la investigación acción participativa (IAP).

Comenzamos la investigación acción participativa organizando un espacio de reflexión–objetivación entre la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP) y distintas organizaciones sociales que desarrollan emprendimientos socioproductivos, acerca de:

- Las problemáticas locales y nacionales que afectan directamente a las organizaciones.

- Las vinculaciones entre los problemas detectados y sus causas.

- Las alianzas y acciones necesarias para contrarrestar estas problemáticas.

- Los problemas específicos de los emprendimientos productivos y acciones necesarias para solucionarlos.

- La compleja relación entre las organizaciones sociales y el Estado.

- Durante 2009 y 2010 trabajamos bajo la modalidad de talleres de reflexión colectiva con militantes de las organizaciones en sus respectivos espacios. Posteriormente, avanzamos en su sistematización e identificamos tres ejes problemáticos para indagar:

- Los modos de organización y las relaciones sociales que se construyen al interior de las organizaciones, en tensión con el mercado.

- Las interacciones que se tejen entre las organizaciones y las instituciones oficiales (especialmente el Estado Nacional).

- Los vínculos de integración, alianzas y articulaciones que se establecen entre los movimientos u organizaciones populares.

- Dado el objetivo político-pedagógico de los mismos, consensuamos que las frases de los compañeros y compañeras que citamos en el conjunto del trabajo no especificarán nombres de personas ni de

organizaciones. Acordamos que este tipo de información es patrimonio de los participantes de los talleres.

2. Acerca de la investigación acción participativa

Como se ha mencionado, nuestro proyecto de investigación acción participativa tiene por objeto propiciar la reflexión colectiva acerca de las prácticas sociales desarrolladas en los procesos de organización popular. Es decir, se trata de avanzar colectivamente en la profundización de la relación dialéctica entre la capacidad de los sujetos populares de luchar y movilizarse por sus reivindicaciones y la capacidad de reflexionar sobre sus propias acciones y de extraer aprendizajes que permitan reconducir las futuras.

Esto se explica porque asumimos el trabajo intelectual como una práctica específica capaz de aportar herramientas a los procesos de construcción de poder popular: caracterizando los procesos actuales en perspectiva histórica; desnaturalizando lo instituido; identificando los límites y potencialidades de los proyectos superadores; sistematizando los aprendizajes colectivos para constituirlos en herramientas de consolidación y de lucha. Como expresó un compañero en los talleres: “Que salga una política nueva que pueda integrar a todos y que no sigamos con la tradición vieja”.

De este modo, entendemos que nuestra práctica intelectual no es independiente, sino que está situada y comprometida con diversas experiencias de organización social y política. Esto implica asumir una serie de tensiones y contradicciones que debemos resignificar como desafíos. Nuestra tradición y presente intelectual radica en la diversa tradición del pensamiento marxista y del pensamiento crítico latinoamericano, siendo conscientes de la necesidad de animar la discusión teórica y política para un pensamiento emancipador en este comienzo del Siglo XXI.

¿Por qué trabajamos a partir de la investigación acción participativa (IAP)?

La investigación acción participativa es una estrategia de investigación donde el proceso de problematización, indagación y reflexión sobre la realidad implica un compromiso mutuo entre los investigadores y

las organizaciones sociales, protagonistas de la situación problemática a investigar. De este modo, no interactuamos con las organizaciones sociales como si fueran nuestro objeto de estudio o informantes claves, sino como sujetos involucrados en un proceso reflexivo crítico acerca de la propia práctica.

Definimos a la investigación científica como una práctica social orientada a la producción de conocimientos. De modo que se encuentra anclada en un contexto socio-histórico e institucional particular (y, como tal, contingente) que condiciona su organización cognitiva –teorías, procedimientos metodológicos, objetos de investigación– es decir, *el qué, cómo, para qué/quienes y con qué/quienes se investiga*.

Los seres humanos tenemos una determinada capacidad cognitiva que nos permite desenvolvernó en la sociedad, desarrollar nuestras actividades cotidianas, proyectar nuestras acciones. En este proceso cognitivo teorizamos, ya que tomamos distancia de los objetos inmediatos, los comparamos, discriminamos y ordenamos. Esta teorización de la vida cotidiana, está orientada por el pensamiento del sentido común que se caracteriza por ser fragmentado, atomizado, disperso y a menudo, no cuestionador –aunque no es espontáneo, ya que está mediado por las significaciones construidas por discursos hegemónicos–. “Lo que diferencia ante todo a la producción teórica del mundo cotidiano y la producción de teoría en el ámbito de la investigación es que ésta debe confrontarse con el mundo empírico de modo sistemático, es decir, a través de procedimientos metodológicos que regulan el modo de operar” (Rigal y Sirvent, 2007: 9). Esto quiere decir que, no hay ninguna característica esencial u ontológica que diferencie al tipo de conocimiento del sentido común respecto del conocimiento científico, con lo cual el segundo no busca descalificar o negar al primero, sino superarlo. De este modo, la IAP encara el proceso de investigación como un diálogo intersubjetivo flexible y abierto entre sus distintos participantes.

El pedagogo Paulo Freire (2009) planteaba que el diálogo es el único modo de conocer, ya que el pensamiento tiene una doble función: cognitiva y comunicativa. Ello implica la construcción de un espacio simétrico de encuentro reflexivo entre sujetos autónomos, portadores de experiencias diversas.

Este diálogo, este conversar, existe bajo el concepto de praxis, entendida como la unidad de acción y reflexión. “La praxis es la forma au-

tentica del pensamiento. Pensarse a sí mismos y al mundo, simultáneamente, sin dicotomizar este pensar de la acción” (Rodríguez, 2003: 41).

Entonces, la IAP es una estrategia de investigación social que busca sistematizar este diálogo, teorizando metódicamente desde y en la praxis social, esta unidad contradictoria de acción y reflexión. El conocimiento científico así construido no viene a negar el conocimiento del sentido común, sino que lo *supera* conteniéndolo como contradicción. El conocimiento del sentido común que se presenta como contradictorio y fragmentado, entonces, no es obstáculo para el conocimiento científico, sino condición de posibilidad.

Desde el punto de vista epistemológico, lo atractivo de la propuesta de la IAP es, “[el intento por] desenmascarar la relación entre objetivismo, monopolio del saber y control social” (Scribano, 2008: 182), ya que se desconfía de la objetividad que puede brindar un proceso de indagación científica que no advierta que tanto investigadores como actores sociales: a) traen consigo un cúmulo de saberes y experiencias que condicionan su modo de abordar el proceso de investigación, b) tienen intencionalidades propias para involucrarse en el proceso de investigación, c) tienen la capacidad de preguntarse y preguntar, d) transforman su modo de percibir la realidad durante el transcurso de la investigación.

Asimismo, la IAP se orienta a la emancipación social, ya que el propio proceso de investigación es también un proceso de transformación de la realidad. Como hemos mencionado, el proceso de construcción colectiva de un pensamiento crítico y cuestionador es la superación –síntesis dialéctica de acción y reflexión– del sentido común¹, transformando a los propios sujetos que se involucran en él.

La cocina: amasando técnicas e ideas

La condición de posibilidad de este tipo de propuesta epistemológica, tiene una prueba crucial que pasar: ser *susceptible de llevar a la práctica*.

¹ Siguiendo la definición gramsciana de *sentido común*, éste no se restringe al plano del pensamiento sino que se materializa en discursos, sentimiento y prácticas cotidianas. Para un desarrollo del concepto ver: Gramsci, Antonio 2000 *El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce* (Buenos Aires: Nueva Visión). Y, Rozitchner, León 2002 *Freud y el problema del poder* (Buenos Aires: Losada).

En un primer momento, en el grupo de investigación discutimos y acordamos la propuesta. Pero, el primer obstáculo que encontramos es que la iniciativa de investigación no surgió de las propias organizaciones y nosotros no pertenecíamos orgánicamente a ellas. Esto implicó dificultades para construir el vínculo de confianza y de puesta en común de los intereses y expectativas de unos y otros. En este caso, los primeros pasos de la investigación no fueron participativos, ya que las organizaciones no participaron de la instancia de planteo de preguntas iniciales y de diseño del proyecto. Al establecer los primeros contactos con las organizaciones encontramos una afinidad entre las preguntas de investigación y la necesidad interna de *formación*. De esta manera, se acordaron una serie de encuentros y temáticas.

Los encuentros cobraron la forma de talleres de reflexión grupal, donde los integrantes de cada emprendimiento establecieron una relación de diálogo horizontal, donde se interconectaron puntos de vista acerca de su praxis y su entorno socio-histórico. El rol del equipo de investigación fue la coordinación del debate de tal manera de permitir la circulación de la palabra y su posterior sistematización. Se utilizaron distintas técnicas de trabajo grupal para estimular un debate crítico, donde los coordinadores también participamos.

De esta manera, llevamos a cabo un proceso de investigación, donde se logró complejizar la situación problemática que dio origen a la investigación y surgieron nuevos interrogantes. Tanto investigadores como organizaciones se vieron transformados por el propio proceso, fortaleciendo la praxis teórico-científica y la praxis organizativa de los emprendimientos autogestivos.

En suma, la IAP se presenta como una forma alternativa de construcción de conocimiento, lo que no significa que desecha las otras formas de investigación social. La elección de unas u otras depende tanto de los problemas de investigación planteados como de la concepción teórica y epistemológica de los investigadores. El planteo epistemológico, está relacionado con una determinada corriente teórica que postula la importancia de construir pensamiento crítico orientado a la emancipación de los sectores sociales subsumidos por las condiciones que establece el orden social vigente. Desde este lugar, reconoce y se apropia de manera particular de su capacidad de intervención sobre la realidad social.

3. Una revisión crítica de las diversas concepciones teórico-políticas de la economía social-solidaria-popular

Ahora bien si la producción cooperativa ha de ser algo más que una impostura y un engaño; si ha de sustituir al sistema capitalista; si las sociedades cooperativas unidas han de regular la producción nacional con arreglo a un plan común, tomándola bajo su control y poniendo fin a la constante anarquía y a las convulsiones periódicas, consecuencia inevitables de la producción capitalista, ¿qué será eso entonces, caballeros, más que comunismo, comunismo “realizable”?

Karl Marx, *La Guerra Civil en Francia*

En nuestra investigación-acción participativa trabajamos con organizaciones sociales que autogestionan sus emprendimientos económicos con el objetivo de garantizar la subsistencia cotidiana de sus miembros.

Habitualmente se plantea que este tipo de emprendimientos forman parte del campo de la economía social, solidaria o popular. Por lo tanto, para abordar en toda su complejidad el desarrollo de emprendimientos socio-productivos de carácter autogestivos y democráticos por parte de los sectores más perjudicados y desprotegidos (trabajadores precarizados, desocupados, campesinos pobres, pueblos originarios), necesitamos avanzar en la comprensión acerca de *¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de economía social, solidaria, popular o tercer sector? ¿Se trata de un tipo de economía distinto? ¿Son estos términos sinónimos o encierran diferencias sustanciales?*

En principio el concepto de economía social, solidaria, popular o tercer sector nos resulta impreciso dado que no encontramos un acuerdo general sobre su significado y utilización. Por esta razón en las páginas siguientes nos introducimos brevemente en algunas de las conceptualizaciones más significativas al respecto que nos pueden ayudar a pensar en toda su complejidad los procesos de autogestión de emprendimientos productivos.

Algunas definiciones

En América Latina la embestida neoliberal llevó a que numerosos sectores sociales quedaran fuera del mercado de trabajo, del acceso a la vivienda, a las tierras, al crédito, a la seguridad social, a la educación y a la

salud. Sin embargo, la creatividad popular posibilitó el surgimiento de variados emprendimientos asociativos orientados a satisfacer múltiples necesidades económicas, sociales y culturales, basados en la ayuda mutua y la solidaridad. Fenómeno, claro, que no fue exclusivo de Nuestra América.

Posteriormente, cuando la movilización popular llevó a la crisis del paradigma neoliberal, algunos gobiernos de la región implementaron políticas públicas orientadas al desarrollo de este tipo de emprendimientos asociativos como paliativo a la exclusión social, y hasta los organismos internacionales de crédito, como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) instauraron líneas de crédito especiales para la promoción de estas organizaciones productivas en los países clasificados como en “vías de desarrollo”.

En este contexto, ya desde los inicios de los años '80, algunos estudiosos del tema, desde marcos interpretativos que podríamos llamar subjetivistas, pusieron el énfasis en analizar la racionalidad interna, el sentido de las acciones y las potencialidades de los emprendimientos económicos generados por los sectores populares. A su vez, confrontaron las interpretaciones estructuralistas que los circunscribían al sector de la “economía informal” es decir como actividades de subsistencia en estructuras marginales de la economía, por el contrario, plantearon que en su totalidad estas asociaciones que se organizan en base a valores éticos y morales constituyen un espacio especial y distinto al que denominaron de economía social y solidaria.

Estas corrientes teóricas coinciden en que si bien toda economía es social porque es parte de la praxis humana, los diversos adjetivos calificativos que se utilizan, como de *social*, *solidaria*, *popular*, etc. establecen una diferencia sustancial entre una economía capitalista orientada a la producción de valor, a la maximización de las ganancias, al lucro y otra de carácter solidario orientada a la producción de valores de uso, es decir a la satisfacción de las necesidades humanas.

Entre las principales corrientes teóricas que abordan la problemática de esta *otra economía* se destacan las siguientes:

- **Tercer Sector “Non-profit organizations” (NPO) de origen anglosajón.**

La expresión de Tercer Sector se utiliza mayormente en el ámbito anglosajón para dar cuenta de un heterogéneo conjunto de organizacio-

nes, entidades o instituciones que desarrollan actividades en el campo social, cultural y político, y que conforman un sector distinto del privado comercial o empresario y del público estatal. Estas instituciones reciben denominaciones como: organizaciones no gubernamentales, organizaciones privadas sin fines de lucro, fundaciones, organizaciones de voluntariado, asociaciones civiles, etc. Presentan los siguientes rasgos comunes:

- Carácter no lucrativo.
- No distribuyen excedentes entre los asociados.
- El objetivo de la organización es de interés general, están orientada hacia el interés de la comunidad, de ayudar al Otro que más lo necesita, no exclusivamente de los asociados.
- No necesariamente guardan un carácter democrático de organización interna.
- La propiedad de la organización puede ser de carácter privado.

Esta caracterización excluye a las entidades de ayuda mutua que distribuyen una parte de los excedentes entre sus asociados, como las cooperativas.

El moderno concepto de Nonprofit Sector ha sido definido con mayor precisión y ampliamente difundido en todo el mundo a partir de un ambicioso proyecto de investigación internacional promovido por la Johns Hopkins University de Baltimore (Estados Unidos), iniciado a comienzos de la década de los '90 con el objetivo de descubrir y acotar su tamaño y estructura, así como de analizar sus perspectivas de desarrollo y de evaluar su impacto en la sociedad (Cháves, Monzón, 2005:30).

• **Economía Social de origen europeo (Francia, Bélgica, España, Alemania, Austria, Holanda).**

Esta corriente concibe la economía social como un *sector de contornos imprecisos* (Salminis, 2004) que nuclea a organizaciones y actividades que se desarrollan por fuera del ámbito específico de la economía capitalista tradicional y del sector público. Sin embargo, la economía social no es considerada como un subsistema o un sistema económico que representa una alternativa radical frente a las relaciones sociales capitalistas por el contrario se desarrolla en sus intersticios (Salminis, 2004).

Según Cháves y Monzón (2005) la economía social está al servicio del hombre y de la sociedad, armonizando las dimensiones social e individual, y pretende conectar los problemas económicos con el entorno natural-ecológico, ampliando la visión centrada en la problemática de la asignación de recursos de la economía ortodoxa hacia los conflictos relativos a la distribución, condiciones de producción, desempleo, pobreza y calidad de vida (Salminis, 2004: 61).

En el año 2002, la Carta de Principios de la Economía Social, promovida por la Conferencia Europea Permanente de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones reseñaba los siguientes rasgos comunes:

- Primacía de la persona y del objeto social sobre el capital
- Adhesión voluntaria y abierta
- Control democrático por sus miembros (excepto para las fundaciones, que no tienen socios)
- Conjunción de los intereses de los miembros usuarios y del interés general
- Defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad
- Autonomía de gestión e independencia respecto de los poderes públicos
- Destino de la mayoría de los excedentes a la consecución de objetivos a favor del desarrollo sostenible, del interés de los servicios a los miembros y del interés general.

Esta caracterización de la economía social –a diferencia de la anterior – no pone el acento en el carácter no lucrativo, sino en el objetivo de satisfacción de un interés general o interés mutuo de las organizaciones y en la gestión democrática.

• Economía Solidaria de origen francés

La economía solidaria nace del tronco común de la Economía Social. Sin embargo, apoyándose en los trabajos de Polanyi, Mauss y Leroux analizan las relaciones económicas desde parámetros diferentes. Consideran que históricamente las sociedades se han organizado en base a un híbrido entre economía mercantil, economía no mercantil

y economía no monetaria. Es decir cada sociedad es una hibridación entre 3 polos de la economía:

- La economía mercantil: la distribución de bienes y servicios se confía plenamente al mercado.

- La economía no mercantil: la distribución de bienes y servicios se confía prioritariamente a la tutela del Estado social.

- La economía no monetaria: la distribución de bienes y servicios se confía prioritariamente a la reciprocidad.

Las sociedades se diferencian entre sí a partir de dónde ha sido puesto el eje, es decir cuál de los tres polos ha sido hegemónico en el desarrollo específico de cada una. “En verdad la distribución entre los tres principios económicos que son el mercado, la redistribución y la reciprocidad varía constantemente en la historia. En la actualidad los tres principios económicos perduran, aunque su ponderación fluctúa” (Laville, 2004:10).

Contrariando los postulados de la economía clásica esta corriente sostiene que las relaciones entre individuos no están determinadas por el mero interés individual-egoísta que busca maximizar sus beneficios, sino que existe una pluralidad de lógicas involucradas en las relaciones sociales: la mercantil, la redistributiva y la reciprocidad.

La apuesta de la economía solidaria apunta a una articulación entre un híbrido de estos tres polos de la economía –con un predominio de las relaciones de reciprocidad– con un proyecto sociopolítico democrático, que permitirá aumentar las oportunidades de socialización democrática y de oferta de trabajo frente a la crisis de integración social a través del trabajo y de los lazos civiles y cívicos (Laville, 2004:10).

• La economía social y solidaria latinoamericana

Entre cuyos principales referentes teóricos podemos nombrar a José Luís Razeto, Pablo Guerra, José Luís Coraggio, Paul Singer, Euclides Mance, Orlando Núñez Soto y Marcos Arruda.

Todos ellos comparten la apuesta política de contraponer a la economía capitalista, la economía solidaria, social o popular como *Otra economía* cualitativamente diferente basada en relaciones sociales solidarias y de ayuda mutua, cuyo centro lo constituye la satisfacción de las necesidades humanas y no la producción de valor. Aunque los englo-

bamos en una misma corriente: *latinoamericana*, estos pensadores mantienen entre sí ciertas diferencias de conceptualización según la matriz teórica de la que nutren sus propuestas: la filosofía de la liberación, la doctrina social de la iglesia, la escuela durkhemiana/Maussiana, la teoría de la acción social o el revisionismo marxista.

- **El emprendedorismo**

Por otro lado, también los organismos de crédito internacional (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo) formulan programas de ayuda y líneas de crédito orientados a los emprendedores.

¿Pero quiénes son los emprendedores? Aquellos pobres “exitosos” que desarrollan su “capital humano y social” –con ayuda de estos programas– para insertarse en los intersticios de los circuitos mercantiles.

Sin embargo, el concepto de emprendedorismo hace referencia a la capacidad de los sujetos de asumir su responsabilidad *individual* para salir de una situación de vulnerabilidad, sin cuestionar el *statu quo*. Los orígenes de este concepto se vinculan con la construcción ideológica y subjetiva del empresario capitalista. El término se difundió a principios del siglo XX, ligado con los análisis del economista Joseph Shumpeter² acerca de las condiciones para lograr la prosperidad del capitalismo. Según sus estudios, el centro de un sistema económico son los emprendedores, cuyas iniciativas permiten el crecimiento del conjunto de la sociedad. La categoría *emprendedor* no refiere a la ubicación del sujeto en la estructura social, sino a un conjunto de características de personalidad y capacidades que cada persona pueden tener o no (de manera innata o aprendida). De este modo, se describe al emprendedor como innovador, flexible, dinámico, capaz de asumir riesgos, creativo y orientado al crecimiento.

Según esta interpretación a través del emprendedorismo, hombres y mujeres asumen la autorganización de su trabajo, ya sea individual o asociativamente. Buscan la independencia económica y el desarrollo humano a través de emprendimientos que permiten hacer uso de su fuerza de trabajo más allá del empleo asalariado. Por ello, se reivindica la *libertad* que implica desarrollar emprendimientos económicos por fuera de la concentración monopólica de grandes empresas estatales y privadas y su centralización administrativa y burocrática.

² Con su obra “The Theory of Economic Development” de 1911, Shumpeter se constituye en el fundador de los estudios sobre el emprendedorismo.

Para esta concepción político-ideológica, las relaciones sociales de producción (y explotación) aparecen como un pre-requisito, deshistorizado, es decir, fuera del alcance de los sujetos y, por lo tanto, irreversible. Por esta razón, el emprendedorismo reside en las capacidades y virtudes de las personas para superar de manera exitosa las problemáticas socioeconómica, adaptándose al medio. Esto implica resolver los problemas no desde sus causas sistémicas, sino desde sus consecuencias, las cuales se presentan fragmentadas.

La recuperación de este enfoque del *emprendedorismo* durante el capitalismo neoliberal, se orienta en dos direcciones:

- Desde aquellos enfoques que añoran la sociedad salarial y el Estado de Bienestar, se lo piensa como una repuesta de emergencia ante la pobreza, donde las formas de autoempleo constituyen un paliativo para hacer frente a la desocupación estructural.

- Desde los impulsores de la perspectiva neoliberal, constituye una herramienta para la precarización de las condiciones de trabajo y la naturalización de los principios *individualistas neoliberales* en la resolución de la vida de los sectores excluidos del mercado formal.

Asimismo, las políticas sociales de carácter socio-productivas que implementan algunos gobiernos latinoamericanos se nutren ideológicamente más desde la perspectiva del emprendedorismo neoliberal –que financian el BID y el BM– que desde las perspectivas de la economía social y solidaria de constituir Otra economía, aunque en la retórica oficial se las presente en pos de la inclusión social a través de fortalecer el ámbito de la economía social.

En resumen

En síntesis encontramos que las diversas interpretaciones: tercer sector, economía social, solidaria, popular tienen en común caracterizar y describir las formas de organización, de propiedad, de carácter del trabajo, de vínculos sociales, de sentidos de las acciones, de objetivos que asumen las asociaciones que la conforman. A su vez, entienden que expresa un ámbito de la economía propio, con una racionalidad especial que lo diferencia de la economía propiamente capitalista. En este aspecto se distancian de los estudios de estructura de social que ubican a estos fenómenos como parte del despliegue de micro estrate-

gias de subsistencia de los sectores excluidos o marginados que, a su vez, evidencian la emergencia de un heterogéneo sector informal en un contexto de crisis y regresión de los antiguos mecanismos tradicionales de movilidad social (Salvia: 2005).

Por otro lado –exceptuando las interpretaciones de tercer sector y de economía social de origen anglosajón y europeo respectivamente– con distintos matices encontramos una interpretación de la economía social y solidaria en el sentido de una *utopía de organización* alternativa a la economía capitalista. Es decir, esta matriz de organización económica encerraría el potencial de generar redes y alianzas económicas pero también políticas y culturales que devendrían en un instrumento de construcción de una alternativa social más inclusiva, más justa, más participativa, más democrática, más respetuosa de la naturaleza y el medio ambiente, en fin... más humana.

Sin embargo, como los cambios sociales no se desarrollan por meras formulaciones de deseo, sino a través de una praxis humana consciente de sus necesidades e intereses colectivos, que abona al desarrollo de un proceso de construcción histórica radicalmente transformador. Cabe preguntarse si estamos ante la formulación de construcciones utópicas del tipo owenianas o fourieristas –por parte de estas interpretaciones conceptuales– o asistimos a un proceso que se despliega silenciosa, solapada pero tenazmente marcando un sendero de transformación social en el seno de nuestras castigadas sociedades latinoamericanas. En otras palabras, ¿encierran la radicalidad transformadora que nos llevará a gritar “¡Bien has cavado viejo topo!

Teniendo en cuenta que estas organizaciones desempeñan el rol fundamental de proporcionar medios de subsistencia a los sectores sociales marginados por las necesidades de valorización del capital, nos preguntamos si estas interpretaciones (al centrar sus observaciones en los métodos de acción internos de las organizaciones basados en vínculos de reciprocidad, de solidaridad y de ayuda mutua desvinculados de la tensión que impone la lógica capitalista) no estarían atribuyéndoles además una misión histórica.

¿La proliferación de emprendimientos autogestivos está marcando como señala por ejemplo Orlando Núñez Soto un proceso de tránsito “evolucionario” (sic) hacia relaciones de producción alternativas a las relaciones capitalista? (Núñez Soto: 2009) ¿Constituyen estas expe-

riencias un subsistema o un modo de producción específico? ¿Se puede transformar desde la ética la lógica de acumulación de la sociedad capitalista?

Por otro lado, a través de las políticas públicas ¿se aporta a la construcción de un ámbito específico de la economía popular? ¿Se puede con créditos del Banco Mundial fortalecer a las organizaciones populares? ¿Las lógicas emprendedoristas-neoliberales de estas instituciones no se filtran junto con ese apoyo económico? Desde nuestra perspectiva no encontramos creíble que el desarrollo de la autogestión y la autonomía popular constituya un objetivo central de las políticas públicas de Estados o gobiernos cuyo verdadero objetivo consiste en garantizar las tranquilas reglas del juego del orden social capitalista.

Otra economía es posible

Desde nuestra perspectiva concebimos la autogestión popular de emprendimientos, de empresas recuperadas y organizaciones sociales como una matriz de configuración socialista. Desde la experiencia de La Comuna de París de 1871 y la consejita-sovietista de los años 20 en Alemania, Hungría, Italia y Rusia se reivindicó la praxis autogestionaria de los dominados y explotados de la sociedad capitalista. Ciolli y Rodríguez la definen como “el ensayo de formas de organización asociativas basadas en relaciones sociales sin explotación” (Ciolli y Rodríguez: 2011) e Iñaki Gil de San Vicente como “toda práctica conciente orientada a la emancipación e independización de todas aquellas estructuras opresoras que encadenan a las personas” (Gil de San Vicente, 2011:118).

Teniendo en cuenta las dos experiencias mencionadas, Gil de San Vicente distingue a la autogestión bajo dos sentidos interrelacionados. Un sentido estricto: como “la incorporación directa de los trabajadores a los órganos básicos que adoptan decisiones en las empresas individuales” en el marco de una sociedad capitalista; Y, un sentido amplio: “como la estructura básica de la sociedad socialista en el campo de la economía, de la política y de la cultura” en el marco de una sociedad que superando las barreras estructurales que impone el capitalismo avanza hacia el socialismo. La interrelación se expresa en que la autogestión generalizada se nutre de la acumulación previa de experiencias de autogestión restringida en el seno de la sociedad capitalista (Gil de San Vicente, 2011:119).

Desde esta perspectiva reivindicamos la autogestión como una experiencia de participación democrática y autónoma de los sectores populares en la organización y planificación de su praxis económica, cultural y política. Tal como señalaba Gramsci al analizar los consejos obreros de fábricas, en tanto espacios de “inapreciables conquistas de autonomía e iniciativa” (Gramsci, 1990: 111) que configuran la sociedad socialista: “El Estado socialista existe ya potencialmente en las instituciones de la vida social características de la clase obrera explotada” (Gramsci, 1992:59).

En nuestros días por América Latina se perfilan diversos proyectos políticos que apuntan a la construcción de nuevas formas de organización social y de integración latinoamericana. Los proyectos de integración que encarnan Venezuela, Bolivia, Cuba y Ecuador se inscriben con un fuerte contenido de justicia social. Suponen la recuperación del control público sobre los recursos naturales de la región, así como, de los grandes medios de producción, de crédito y de comercialización (Gambina y Roffinelli, 2011).

Coincidiendo con las formulaciones de Eric Toussaint, creemos que un verdadero proceso de emancipación debería apuntar a liberar la sociedad toda de la dominación capitalista apoyando “las formas de propiedad que tienen una función social: pequeña propiedad privada, propiedad pública, propiedad cooperativa, propiedad comunal y colectiva, etc. Así mismo, la integración latinoamericana implica dotarse de una arquitectura financiera, jurídica y política común” (Toussaint, 2008). Y de formas de propiedad asociativa, orientadas a la producción de valores de usos, que alteran radicalmente las determinaciones internas autocontradictorias del orden social dominante –que impone una ruda sumisión de las necesidades humanas a las necesidades alienantes de la expansión del capital– (Gambina y Roffinelli, 2011).

En este sentido, nosotros desde hace varios años abonamos la hipótesis que sostiene que entre los procesos de producción autogestionados democráticamente por los sectores populares y el ideario socialista tiene lugar lo que llamamos una *afinidad electiva* (Gambina, 2002; Roffinelli, 2002; Roffinelli y Racket, 2002). Entendida esta última en el sentido que le otorga el sociólogo Michael Löwy: “un tipo muy particular de relación dialéctica que se establece entre dos configuraciones sociales o culturales, que no es reducible a la determinación causal directa o a la «influencia» en sentido tradicional” (Löwy, 1997: 9). Es decir, que

entre el ideario socialista y la praxis de cooperación autónoma existe una relación dialéctica que ha resultado favorecida o desfavorecida según determinadas condiciones socio-históricas.

Tal es así, que esta relación dialéctica entre las propuestas cooperativas y la propuesta socialista no se configura de una vez y para siempre, no se constituye como una tendencia automática, ni necesaria, ni ineluctable. Únicamente cuando interviene una fuerza política cuya apuesta radical de transformación estructural pugne por subvertir el orden mercantil y a favorecer y desarrollar la cooperación social, sólo allí se tornaría posible superar el mercado capitalista, su irracionalidad y el tipo de subjetividad que origina y reproduce.

La explotación humana por siglos genera una cultura subordinada a la lógica del plusvalor, de la dominación capitalista y sus consecuentes asimetrías en la apropiación del producto social (material e inmaterial). El aliento a formas alternativas en el capitalismo, e incluso los intentos de construcción socialista, actúan como fuerzas que contrarrestan la dinámica de la iniciativa hegemónica del capital. El problema es transformar esa fuerza de la resistencia en vector principal de la construcción social cotidiana. Es un asunto material que se expresa en la formulación *Otra economía* y en sus nuevas relaciones sociales, pero especialmente en la conciencia de una parte importante de la sociedad de que se está construyendo otra sociedad, otra economía, otro sistema de relaciones sociales. Hay materialidad consciente en el proceso de transformación necesaria, con lo cuál aparece el desafío de construir las iniciativas o emprendimientos económicos a la par que se trabaja la conciencia de la práctica transformadora (Gambina, 2008).

La tendencia es a la repetición de conductas y hábitos que reproducen las prácticas hegemónicas. Esa es la razón en la insistencia de un proceso de construcción de subjetividades consientes en convergencia con los proyectos económicos, lo que denominamos con la categoría *materialidad consciente*. Por ausencia de recursos económicos y también de potencial humano, es usual una práctica de “hacer lo que se pueda y como se pueda”, privilegiando el hacer y en el camino evaluar, corregir y en ese tránsito de prueba y error construir lo nuevo. Sin perjuicio del aliento a la iniciativa popular tal y como es, nuestra reflexión apunta a la programación de la dimensión educativa o cultural para el éxito de iniciativas que a priori resultan proposiciones de transformación.

Desde esta perspectiva nuestra investigación participativa se inscribe en la reflexión colectiva que avanza en considerar la radicalidad transformadora de una *Otra economía* que esté a la altura de los acontecimientos sociales futuros.

4. Articulando un bosque de problemas

El punto de partida para los debates constituyó la construcción de un *árbol de problemas*. Técnica que consiste en identificar diversos problemas que afectan a la localidad, comunidad, región, etc., y a los emprendimientos económicos y al mismo tiempo, distinguir cuáles de esos problemas constituyen la raíz, el tronco y las ramas de ese árbol, es decir ordenar entre problemas estructurales y coyunturales.

Entre las problemáticas generales aparecieron:

- La concentración de la propiedad de las tierras.
- Los agronegocios.
- Escasez de agua para regadíos y animales.
- Contaminación medioambiental.
- Falta de acceso a servicios de salud.
- Falta de acceso a servicios básicos. Ej: caminos, electricidad, agua potable.
- Desempleo/ precarización de las condiciones laborales (tanto en la ciudad, como en el campo).
- Vivienda.
- Alcoholismo, drogadicción, etc.
- Analfabetismo.
- Desvalorización de los trabajadores, falta de autoestima.
- Falta de educación y capacitación.

Entre las problemáticas específicas de los emprendimientos:

- Fuerte competencia de los monopolios.
- Elevados costos de transporte.
- Falta de acceso a créditos blandos y subsidios.
- Poco acceso a los mercados formales.
- Elevados costos por la baja escala de producción.
- Poco acceso a la tecnología.
- Falta de capacitación en temas administrativos y comerciales.

El desarrollo del ordenamiento de los problemas entre estructurales y coyunturales (o subordinados a los primeros), constituyó un ejercicio movilizador de la discusión y el debate reflexivo.

Posteriormente se propuso plantear a partir de las problemáticas formuladas, posibles acciones en pos de comenzar a revertirlas. Surgieron las siguientes:

- Construir una herramienta política de base.
- Articulación entre organizaciones.
- Autogestión de emprendimientos económicos.

- Mayor capacitación y educación.
- Tener medios de comunicación alternativos.
- Avanzar en la construcción de consensos en la sociedad.
- Presionar por reformas jurídicas favorables.
- Resignificar las políticas públicas para afianzar los emprendimientos.
- La reforma agraria.
- Fortalecer las organizaciones sociales.

Revalorizamos que el *árbol de problemas* nos permitió avanzar en el diagnóstico colectivo acerca de la situación económica, social y política que atraviesan los sectores populares en Argentina, pero fundamentalmente, habilitó una mirada crítica de los modos de actuar-pensar-sentir al interior de las propias organizaciones y la reflexión conjunta acerca de *¿Qué hacer?*

En los primeros pasos de este recorrido, reparamos en que la mayoría de las problemáticas internas de las organizaciones tenían alguna relación con el *afuera*; es decir que pensarlos en nuestras prácticas organizativas, también significaba pensarlos como sujetos en una sociedad excluyente. De esta manera, se caracterizaron las prácticas como productos del contexto actual y de la resistencia al mismo. Por ello, se trata de procesos no lineales. Poner en cuestión las bases mismas sobre las que se asienta nuestra existencia material y subjetiva, nos enfrenta a lagunas y contradicciones.

¿Qué hacer? en tanto organizaciones sociales que persiguen transformar de raíz las relaciones sociales de producción de la vida. Es decir, indagar en la génesis de la desigualdad social y en la construcción de herramientas colectivas que fortalezcan un proceso de emancipación social. Pero también *¿Qué hacer?* como organizaciones que necesitan afianzar y desarrollar emprendimientos económicos-productivos que resuelvan las necesidades básicas urgentes de sus integrantes.

Se reconoció que consolidar los emprendimientos productivos era una actividad prioritaria porque permite en un contexto de falta de acceso al mercado de trabajo, precarización y tercerización laboral sostener a las familias, pero también que eso no es suficiente:

Si por ahí llegamos a ser exitosos en algún momento, digamos desde el punto de vista económico, llegamos a estar gran parte de los compañeros trabajando con un sueldo digno, haciendo lo que nos gusta... aún nos faltarían un montón de otras cosas que en la comunidad no están resueltas. Conocemos los problemas que tenemos: falta de una salita médica, de educación para nuestros hijos, de participación política y otros.

Por ahí tendríamos que empezar a mirarnos entre nosotros, mirar cuáles son nuestras necesidades e ir pensando cómo hacemos para darle la solución... tenemos que pensar también qué es la política, por qué pasan las cosas que pasan.

En instancias de talleres posteriores avanzamos en el ¿Qué hacer? con respecto a los procesos de autogestión. ¿Cómo se desarrollan los emprendimientos productivos? Es decir, cómo se organizan, cómo se toman las decisiones, cómo se dividen las tareas, qué tipo de relaciones sociales se establecen, qué problemáticas enfrentan, etc.

5. Autogestión

El proceso de gestión, independientemente del tipo de organización en que se despliegue, siempre conlleva una posición ideológica. En las unidades productivas capitalistas implica la organización de los recursos (incluyendo como tales a los trabajadores) en pos de la acumulación (Burkun y Spagnolo, 1985) y la maximización de las ganancias, que subordina a los trabajadores a ser una variable de ajuste a favor de estos objetivos.

Por otro lado la *autogestión* va mucho más allá de la autoorganización en función de la productividad y eficiencia del emprendimiento. Ésta se orienta con un sentido político y pretende intervenir en el interior de las estructuras económicas y sociales, hacia la reconstrucción (y generalización) de relaciones solidarias, equitativas y sin explotación sobre la base de la democracia directa (Lowy, 2007). Concebir al hombre y a la mujer en el centro, y sus necesidades como objetivos a alcanzar, implica incorporar otras variables a la hora de definir qué se produce, el modo, los tiempos de trabajo, los procesos toma de decisiones y todos los aspectos vinculados al desarrollo de un emprendimiento.

En este sentido podemos observar como de los talleres surgieron algunas características de los emprendimientos autogestivos, que las diferencian de las empresas capitalistas.

Una distribución más equitativa de lo producido:

El primer aspecto a destacar es el contexto en el que nos referimos a distribución. La misma se da a partir de un proceso de apropiación colectiva del producto social, a diferencia de la apropiación individual de las empresas capitalistas. En otras palabras, los trabajadores se apropian de lo producido y definen colectivamente los criterios de distribución.

Igualdad y equidad son dos términos que usualmente se los utiliza como sinónimos y que al mismo tiempo tienen distintas acepciones. Cuando nos referimos a que en estos emprendimientos se da una distribución más equitativa, hacemos referencia a que el criterio asumido surge de la construcción colectiva de los integrantes y que considera las diferencias existentes, o sea que iguala a partir de las diferencias. Esta se diferencia de la concepción liberal de equidad que se centra en la igualdad de oportunidades y justifica las desigualdades existentes (Lowy, 2011).

Independientemente que haya una variación entre los ingresos percibidos por cada uno de los integrantes, los criterios de distribución que existen se asientan en la equidad. El principal criterio utilizado es el tiempo de trabajo, complementado por el nivel de responsabilidad, y en algunas experiencias también por la antigüedad. Al respecto se relata:

En la cooperativa se reparte entre todos (cuando hay algo para repartir), todavía no hay excedentes; y si bien ganamos todos iguales también hay un reparto por responsabilidades, que no son diferencias enormes porque tratamos de nivelar un sueldo mínimo, un “adelanto de los retornos” –así se llama– para todos iguales. En cambio en el otro tipo de empresa donde los compañeros trabajaron, el dueño es el que se lleva las ganancias cuando las hay, y cuando se quedan sin trabajo no se cobra, se reparten las pérdidas entre los empleados. Y que la diferencia en el reparto de lo que ganan mensualmente también lo define el patrón.

De todas formas, en algunos casos existe un criterio de igualdad, no en términos de igualdad de posibilidades, como mencionábamos an-

teriormente, sino de igual monto de retiro, que a veces genera tensiones dentro de las organizaciones: “El problema es el cobro. ¿El que trabaja de 7 a 15 va a cobrar igual que el que trabaja de 7 a 17?”.

Independientemente del criterio asumido, el proceso de construcción de consensos en torno a estas diferencias puede fortalecer la práctica autogestiva y dotar a la experiencia de un ejercicio necesario para la construcción de otro tipo de relaciones sociales.

La división del trabajo:

La división del trabajo en el proceso productivo puede tener distintos orígenes. Uno de ellos proviene del proceso de producción social, que encuentra en esa división una interdependencia y complementariedad para generar los satisfactores necesarios (Hinkelamert y Mora, 2009). Otro de los orígenes proviene de la división de la sociedad en clases sociales, que además construye posiciones jerárquicas que facilitan la apropiación individual de producto social. Esta división básica es entre el trabajo manual e intelectual: “La división del trabajo solo se convierte en verdadera división a partir del momento en que se separan el trabajo físico y el intelectual” (Marx y Engels, 1985).

Entonces, la división entre trabajo intelectual y físico constituye una de las primeras dificultades que las experiencias enfrentan en su búsqueda por construir otro tipo de relaciones sociales. Esta dificultad se vincula con las dificultades en la participación en la toma de decisiones.

Sin embargo, en los emprendimientos productivos la división social y técnica del trabajo es menor que la existente en una empresa capitalista. Esto no es solo por una cuestión de escala (sabiendo que a menor tamaño menor división del trabajo), sino por un mayor compromiso con la organización o el emprendimiento productivo. Existe una valoración de la rotación de las tareas, como una búsqueda de tener una dimensión integral del proceso de trabajo. Estas prácticas podrían contribuir a fortalecer la autogestión como identidad de las organizaciones y de los sujetos involucrados. En las organizaciones se destaca la diferencia: “Lo que hablábamos con los compañeros es que la dirección y la división del trabajo es cooperativa, siempre y cuando mantenga el cooperativismo, todos aprenden a hacer todo. En las empresas las tareas son rutinarias, el jefe solo coordina las tareas de su empleado y se limita a que el empleado tenga un testeó si cumple con eso.”

Asimismo en los emprendimientos se distribuyen distintos tipos de tareas en relación a los intereses, las capacidades y los conocimientos específicos de cada uno.

Cada uno hace una tarea específica. Pero en el caso que tengamos un trabajo excepcional, fuera de lo normal, diferente, en ese caso sí se nos complica. Pero más o menos tenemos todo anotado los procedimientos, cómo realizar ciertas cosas. Porque tenemos que tener un poquito más de experiencia, y él ya la tiene. (...) Después con el tema de la administración de recursos, hay cosas que las sigue él.

Por lo tanto la opción por la rotación o la especialización de las tareas es un debate abierto, y está influenciado por la relación con el mercado.

El mercado impone un determinado nivel social de productividad del trabajo que en muchos casos exige necesariamente la especialización de tareas dentro de las unidades productivas: “Existe una división de la actividad, se busca el mejor rendimiento de cada individuo.”

Paradójicamente la forma de organización del trabajo, conocida como *toyotismo*, logró extraer mayor productividad del proceso de trabajo a partir de la conformación de círculos de trabajadores polivalentes (Neffa, 1999), pero esto nada tiene que ver con la rotación en el sentido que la autogestión le otorga.

La toma de decisiones:

La participación democrática es una de las características de estos emprendimientos. La forma específica que la misma adopta varía según cada experiencia, pero en términos generales la asamblea es considerada la principal instancia de toma de decisiones y discusión democrática. En algunos casos la misma tiene un funcionamiento permanente, con responsabilidades transitorias asumidas. Lo cual se expresa en varias oportunidades:

Bueno, en el caso de la cooperativa es entre todos: nos reunimos y decimos ‘Bueno, este es el trabajo que tenemos que hacer’, y ponemos un período. Las decisiones las tomamos entre todos, todos lo decidimos y entre todos lo hacemos.

Entre todos los compañeros elegimos al encargado.

(...) la información se comparte entre todos los integrantes de la cooperativa.

Sin embargo, ya sea por haber transitado por distintas experiencias políticas, laborales, gremiales y educativas observamos que en algunos casos se genera una cristalización de subgrupos (Consejo de administración/resto de los asociados; Administración y comercialización/Producción; Productores/técnicos) que dificultan reducir prácticas sociales jerárquicas, incluso más allá de la voluntad de los participantes. Esto se expresa como problemática a superar:

Es como que cada uno no se siente que pertenece a la cooperativa, porque la mayoría de los asociados no lo siente. Solo se deja al consejo, y que el consejo haga los tramites y maneje a la cooperativa.

Los compañeros más activos son los que tienen que organizar, porque con los compañeros nuevos a veces cuesta.

Es distinto, porque vos tenés que llevar 1 factura o 2, nosotros tenemos que hacer 1200 productos.

Nosotros hacemos negocios, quitamos y sacamos precios. Eso ellos no lo consideran como trabajo.

No obstante estas dificultades, las experiencias tienen un alto grado de participación. De hecho, el principal ámbito de intercambio y debate es la asamblea, reconocida como la instancia máxima de deliberación y toma de decisiones. De ésta emergen rasgos como la recuperación de la palabra, la reflexión conjunta para la acción, lazos de solidaridad interna y externa que sin duda son el saldo positivo y un salto cualitativo importante para la constitución de sujetos.

Por ahí cuando las personas, las familias no se conocen, piensan diferente, tienen otras ideas o quieren otras cosas, y por ahí cuesta mucho entenderse. Hasta que llega que todos pensemos de una forma y queramos las mismas cosas, esa parte costó mucho. Pero después, no se supera, uno se entiende.

La propiedad colectiva:

A sí como la propiedad privada de las empresas capitalistas es una de las formas para garantizar la apropiación individual del trabajo social, en las experiencias que trabajamos, se ha institucionalizado la propiedad colectiva de los medios de producción.

(...) si destruimos las herramientas no estamos perjudicando a nadie, nos estamos perjudicando entre nosotros. Y lo diferente a una empresa capitalista es que si rompemos las herramientas, el dueño viene y la repone; el que pierde es él. En la cooperativa perdemos todos.

La opción por este tipo de propiedad en las experiencias es lo que sustenta la distribución equitativa del producto. Asimismo se pudo observar que en algunos casos es tan importante la legalidad de esa propiedad colectiva, como la apropiación que los sujetos hacen de la experiencia.

Organización del trabajo autogestivo, dificultades económicas y mercado capitalista:

A demás de los rasgos distintivos antes mencionados, los emprendimientos están atravesados por un conjunto de tensiones vinculadas a la organización del trabajo y las exigencias del mercado capitalista. A la vez estas tensiones se encuentran amplificadas por dificultades económicas de los emprendimientos. Los participantes de los talleres identificaban estas dificultades económicas que las experiencias atraviesan:

Tenemos el problema de la producción para autoconsumo y para ventas.

No pudimos vender la producción de la colonia.

El problema son las ventas.

Nosotros no tenemos capitales.

También esta lo otro, que es más complejo, que son los insumos y la venta y el comercio.

Hay falta de financiación de créditos flexibles. Esa es una de las grandes dificultades que tenemos las cooperativas para insertarnos en el mercado.

La producción que se realiza es artesanal y que se compite de forma desigual con lo importado.

En general estas dificultades expresan las exigencias que enfrentan los emprendimientos a la hora de competir en el mercado. Esta competencia se encuentra en primera instancia regida por la ley del valor, y lo que dificulta alcanzar ese nivel de competitividad en función del nivel de desarrollo de las fuerzas productivas sociales, en esta sociedad capitalista "...significa estar desacoplado del futuro. (...) un gran muro separa a los rápidos de los lentos, y ese muro está creciendo cada día que pasa" (Hinkelamert y Mora, 2009: 221). La producción para el mercado significa la subordinación del proceso productivo a la ley del valor. Independientemente de la ausencia del patrón como personificación de la explotación, los emprendimientos autogestionados necesitan (para garantizar su subsistencia) realizar el valor producido a través del mercado. Pero bajo la presencia impersonal y omnipotente de la competencia mercantil se esconden relaciones de explotación. Como ya antes citamos el trabajador/a "...es despojado de sus excedentes (plusvalía) a través del intercambio (en el mercado) y no por un patrón directo (en la fábrica), el mismo mercado que transfiere dichos excedentes a otros sectores (comerciantes, industriales y banqueros)" (Núñez Soto, 2009).

Por este motivo entendemos que la intensificación del trabajo en las experiencias autogestivas no puede entenderse como *autoexplotación*, sino directamente como explotación (Ciolli, 2010). El capital se apropia del producto del trabajo social, en forma anónima e invisible a través del mercado y su *ley coactiva de la competencia*.

Según las opiniones de los trabajadores involucrados en los emprendimientos la eficiencia exigida por el mercado impone un límite concreto y podría empujar a las organizaciones a una competitividad que contradice sus lógicas y objetivos:

Eso nos impide el tema de la competitividad, donde a veces lo vemos como a un monstruo al que no podemos entrar porque tenemos que competir con empresas que están subsidiadas de alguna forma o que son de la empresa privada donde tiene como variable de ajuste el salario de la gente que está en relación de dependencia.

Es muy común encontrar, en las experiencias de la economía popular (y en los talleres emergió), el debate entre distintos miembros de una cooperativa por garantizar la eficiencia y la sustentabilidad económica, en tensión con los objetivos político-sociales del emprendimiento. Por ejemplo, en una cooperativa para cumplir con la entrega de un pedido grande de un cliente, se debate entre extender la jornada laboral sobre la base de un *compromiso* con la experiencia a partir de las exigencias del mercado, y la necesidad de contratar a personas para realizar las tareas sin incorporarla a la organización, reproduciendo la lógica de patrón-trabajador.

Acá si Cristian, Maria y Antonio tienen que entregar 1000 productos, tienen que hacer 320-340 por semana, pero los compañeros no se comprometen a terminar, entonces tienen que tomar gente de afuera para terminar o no lo termina.

Aquí también encontramos la tensión entre la exigencia del mercado por cumplir con una determinada entrega, con el compromiso de los trabajadores para con la organización.

Un ejemplo distinto a este es el de una cooperativa que incorporó asociados ante la posibilidad (finalmente fallida) de una venta de productos al exterior:

Ahora tenemos una cantidad de producción bárbara que no mandamos. Con ese compromiso tenemos una cantidad de compañeros que excede los ingresos que puede tener la cooperativa. Y ahora estamos con la decisión de si lo analizamos desde el punto de vista capitalista tendríamos que decirles “Hasta nuevo aviso”, y los mandamos a la calle. Y en realidad el desafío es ese, no decirle a nadie que tenga que abandonar.

En este caso encontramos, a pesar de los límites impuestos por el mercado, la posibilidad de desarrollar prácticas autogestionarias que refuerzan los lazos de solidaridad entre los miembros de la organización, al mismo tiempo que se identifican las características de la sociedad capitalista.

Compromiso organizacional y disciplina del trabajo:

Otra problemática que surgió en los debates de los talleres apunta a la heterogeneidad de formas de compromiso con la experiencia, en tanto emprendimiento productivo y organización político-social.

En el trabajo cotidiano, esto se manifiesta en la asunción de responsabilidades, o el cuidado de las herramientas de trabajo:

La responsabilidad en la cooperativa por ejemplo, yo creo que cada uno tiene que tener la responsabilidad de su trabajo. La responsabilidad de no faltar al trabajo, de cuidar las herramientas porque si destruimos las herramientas no estamos perjudicando a nadie, nos estamos perjudicando entre nosotros. Y lo diferente a una empresa capitalista es que si rompemos las herramientas, el dueño viene y la repone; el que pierde es él. En la cooperativa perdemos todos.

Esta persona enfatiza la responsabilidad en el uso de las herramientas. El cuidado de los instrumentos de trabajo, la seguridad e higiene del lugar, el ausentismo, el compromiso con la finalización de un trabajo, o la *disciplina* en el trabajo, son problemáticas recurrentes: “Es como que cada uno no se siente que pertenece a la cooperativa, porque la mayoría de los asociados no lo siente. Solo se deja al consejo, y que el consejo haga los tramites y maneje a la cooperativa.”

En muchas situaciones los trabajadores visualizan la necesidad de tener una *disciplina* de trabajo, entendida como el compromiso de todos con la tarea asumida que garantice alcanzar los objetivos del proceso productivo, así como también la solidaridad dentro del grupo, ya que el no-trabajo de unos implica la sobrecarga de trabajo de otros. La disciplina así entendida difiere de aquella de tipo represiva, impuesta por la propiedad privada:

Lo primero que encontramos es la falta de responsabilidad, eso se entiende como la responsabilidad cuando uno se encuentra con el grupo y que se determina que alguno va a ser una cosa, otros van a ser otras, que no se cumplen. Eso está ligado a la disciplina, que dentro de las organizaciones, está entendida no como una disciplina de una autoridad sobre alguien sino como la disciplina interna de todos.

De todas formas, y entendiendo a la explotación como una relación social, las imposiciones del mercado también condicionan un tipo de disciplina, ritmos y modos de trabajo para garantizar la eficiencia necesaria. En todo caso parece confusa qué tipo de disciplina es necesario asumir:

Ahí nosotros tenemos otro problema, un problema que nos trajo el menemismo, que creó un nuevo sujeto: miles y miles de desocupados que no están acostumbrado al trabajo, a la disciplina. Y para nosotros, que somos una cooperativa genuina, si es un problema.

Nosotros tenemos problemas de contexto: de organización, disciplina y ordenamiento. ¿Es necesario para que funcione la cooperativa? Si, es necesario tener un reglamento y hacerlo cumplir mínimamente, sino la cooperativa no puede sobrevivir en este sistema donde tenemos que competir con la propiedad privada, que tiene capitales. Nosotros no tenemos capitales, somos una cooperativa de trabajadores autogestionada. Tenemos que ser 100% eficientes, y para eso hay que cumplir el reglamento.

En realidad el patrón toma todas las medias para someternos, pues la regla es esa. (...) En la cooperativa es diferente (...) pero eso es escupirse para arriba, porque no puedes competir en el mercado: hay que cumplir con el cliente, hacer bien el trabajo. Hay que tener una disciplina, porque sino la durabilidad va a ser muy corta, si no cumplís con el tiempo se va a ir en contra.

A las distintas dificultades mencionadas anteriormente, se le suman algunas que tensionan aún más su desarrollo económico.

- **De tecnología:**

Las experiencias con las cuales trabajamos son mano de obra intensivas y tienen baja productividad en relación con el resto de las empresas de la rama. Están lejos de la frontera tecnológica de la rama, utilizando maquinaria (en los pocos casos que se utiliza) obsoleta para los estándares del mercado³.

(...) incorporar tecnología, y eso hablábamos desde el punto de vista de la organización productiva, tecnología para la

³ Tengamos en cuenta que la obsolescencia implica la existencia de otra tecnología que permite tener una mayor grado de productividad reduciendo el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir un bien o servicio (que a los efectos de la competencia en el mercado significa "la muerte"), pero que esto no anula la capacidad de esa tecnología para seguir produciendo satisfactores.

producción nos permitiría bajar los costos y por lo tanto ser más competitivos, por lo tanto comercializar mejor.”

- **De comercialización:**

El bajo volumen de producción muchas veces dificulta acceder a grandes clientes, o a los mercados de abasto en el caso de las experiencias de agropecuarias. La falta de logística, escasos canales de comercialización y la pequeña difusión de la oferta de productos ponen en riesgo la venta. Esta necesaria validación social de lo producido en el sistema capitalista es a través del mercado, constituyendo una de las principales barreras para poder desarrollar su actividad.

- **Financiera:**

La incapacidad de acceder a créditos del sistema financiero constituyen uno de las principales problemáticas para acceder a maquinas e infraestructura necesarias y también para tener el capital de trabajo para producir a la escala necesaria: “Falta de financiación de créditos flexibles. Esa es una de las grandes dificultades que tenemos las cooperativas para insertarnos en el mercado.

- **De formalización:**

La falta de conocimiento técnico y los escasos ingresos (producto de costos muy altos en relación con el precio de mercado) dificultan la posibilidad de lograr la formalización requerida por gran parte de los compradores y otras instituciones. Esto afecta a las ventas, al acceso al crédito y a otras operatorias que empresas capitalistas de mayor volumen logran. Ejemplos de esto van desde la inscripción de la cooperativa como persona jurídica, hasta el acceso a las certificaciones de bromatología, ISO o IRAM.

- No llegamos a la ISO y la IRAM

- Aparte eso es para cumplir una parte de las normas legales, pero son normas que han sido hechas por grandes empresario.

- Si, además te ponen trabas para vender, y no tenemos las IRAM, entonces no pasamos el control de calidad. Solo la tienen las grandes empresas.

- El entender eso (...) nos iba a permitir llegar a tener personería jurídica que era uno de los elementos que el sistema nos imponía para poder acceder al crédito o al financiamiento que nos permita incorporar tecnología.

Pese a estas dificultades, existen algunas características que permiten su supervivencia económica. Desde el compromiso con la organización, los lazos de solidaridad con organizaciones y la comunidad, la propia inventiva popular, y la lucha política, son algunos de los elementos que permiten sortear las dificultades mencionadas.

6. Interacciones entre las experiencias autogestionarias y el Estado

En la reflexión colectiva acerca del *¿Qué hacer?* con respecto al desarrollo de los emprendimientos asociativos surgió con fuerza la necesidad de acceder a subsidios y créditos y sus dificultades. Apareció entonces el Estado como la principal –cuando no la única– fuente de recursos económicos a través de las políticas sociales de orientación socio-productiva que se implementan desde el gobierno nacional.

En este apartado nos proponemos: a) Analizar las relaciones que las experiencias autogestionarias mantienen con el Estado a través de su participación en las políticas públicas-; b) Indagar la influencia de tales relaciones en sus prácticas cotidianas y sus estrategias sociopolíticas; y c) Problematizar las conceptualizaciones y reflexiones propiciadas por estas relaciones.

Para ello, antes de exponer la sistematización de las reflexiones colectivas construidas en los talleres en torno a la *propia práctica* vinculada a las instituciones oficiales, consideramos importante dar cuenta de la estrategia gubernamental en torno a los sectores sociales subalternos y las políticas específicas del Estado nacional orientadas al cooperativismo y a los emprendimientos asociativos.

El Estado en las sociedades modernas es el garante de la relación social capitalista, en tanto que configura la institucionalidad a partir de detentar la autoridad pública legítima. Ahora bien, para analizar la dimensión político-estatal de los procesos sociales debemos dar cuenta del Estado en *acción*, lo cual implica situarla en el entramado de acciones de los sujetos sociales involucrados. Para ello, abordaremos el análisis de las políticas estatales en el marco de la correlación de fuerzas en la sociedad, es decir, como proceso social tejido alrededor del surgimiento y tratamiento de cuestiones *social-*

mente problematizadas⁴ (Oszlak y O'Donnell, 1982). En torno a éstas, los distintos sujetos (colectivos) toman posición, disputando y construyendo sentidos en torno a cómo formular, describir, categorizar y definir a los problemas sociales –su alcance y sus límites– así como a los sujetos involucrados.

Los emprendimientos asociativos y el cooperativismo como instrumento de política estatal

Durante el período que trabajamos, en la Argentina, la relación entre los emprendimientos productivos y el Estado está atravesada por las políticas sociales de promoción y financiamiento de la *economía social*⁵. Aquí aparece un primer punto de partida para el análisis, ya que se trata de un *fenómeno novedoso*.

En términos históricos, la vinculación entre el cooperativismo y el Estado ha sido variada, pero ha predominado un tipo de relación orientada a su reglamentación legal, los controles y regulaciones impositivas. En épocas de expansión de la infraestructura de servicios públicos, las cooperativas asumieron su gestión en aquellas zonas donde el Estado no llegaba.

La atención especial del Estado hacia el cooperativismo y la economía social es algo nuevo. Así como también es reciente, la asociación (que hoy nos parece tan natural) entre cooperativismo y pobreza. Es decir, se ha naturalizado el papel de la economía social en la creación de alternativas de subsistencia para la población excluida del mercado de trabajo formal. Esto implicó una redefinición del sujeto social que la integra⁶, que actualmente se identifica con la población trabajadora desempleada (e, incluso, para los parámetros del mercado laboral y de los programas sociales, *inempleable y/o vulnerable*).

Visualizar este cambio, nos interroga acerca de los procesos sociales que lo propiciaron. En este sentido, entendemos a la movilización

4 Siguiendo a Oszlak y O'Donnell (1982), las cuestiones socialmente problematizadas no son todas las demandas y necesidades sociales, ni las más importantes, ni las que afectan a más gente. Son aquellas que cierto/s grupo/s social/es logran ubicarlas en la agenda pública, movilizándolo a otros actores (incluyendo al Estado) a tomar posiciones que afectan el futuro curso de acción.

5 Ver apartado 3.

6 En Argentina, el cooperativismo se desarrolló de la mano de los sectores medios.

popular de diciembre de 2001 como el punto de inflexión en la formulación de políticas públicas.

Durante finales de los '90 y con mayor énfasis entre el 2001 y el 2003, los procesos de resistencia y búsqueda de alternativas de subsistencia de los sectores subalternos habían nutrido la iniciativa, la creatividad y la organización popular, consolidándose en torno a su doble dimensión: lucha social en las calles y autogestión de emprendimientos. Entre estas últimas, el cooperativismo, la asociatividad, la autogestión y la recuperación de empresas por parte de los trabajadores, etc. habían comenzado a visibilizarse y a ganar la simpatía de la opinión pública. Ello estaba unido a la creciente deslegitimación de las mediaciones políticas características de las democracias representativas.

La actitud estatal frente a conflictividad social protagonizada por la clase trabajadora desocupada era predominantemente la represión, la indiferencia y el asistencialismo. Pero, el estallido social del 2001 y la masiva reacción popular ante la masacre del Puente Pueyrredón de 2002⁷ pusieron de manifiesto los límites políticos de tales estrategias para la *normalización institucional* o *governabilidad democrática* de un orden socioeconómico excluyente.

El gobierno de Néstor Kirchner asume dicha crisis, proponiendo una estrategia: a) de reconstrucción de la hegemonía capitalista y, b) de acumulación de poder, a través de la recuperación y resignificación de gran parte de las consignas, reivindicaciones y demandas de los distintos sujetos colectivos y las nuevas identidades emergentes. A partir de lo cual, logró acoplar nuevas estrategias de construcción política a las estructuras políticas tradicionales. Uno de los ejes que sobresalen en la estrategia de reconstrucción de la hegemonía del modelo de acumulación, es la reinstalación en la agenda pública y en el imaginario social, de las capacidades del Estado en torno a la regulación del mercado, garantía del interés general y promoción del bienestar social. Se ofrece entonces, la imagen de un Estado activo.

⁷ El 26 de junio de 2002, Dario Kosteki y Maximiliano Santillán –jóvenes militantes de Movimientos de Trabajadores Desocupados– fueron asesinados intencionalmente por la Policía Federal en ocasión de un piquete. Inmediatamente amplios sectores de la sociedad se manifestaron en repudio. A pocos días el entonces Presidente interino, Eduardo Duhalde adelanta el llamado a elecciones presidenciales.

Este fenómeno no es exclusivo de Argentina, sino que formó parte de un “clima de época global” que impregnó las reformulaciones acerca del papel del Estado en el desarrollo y en la gestión de los conflictos sociales: lejos de desentenderse de los problemas sociales (como ocurrió durante la etapa más ortodoxa del neoliberalismo), se involucra para reordenar la estabilidad de las relaciones sociales y, de este modo, generar círculos de retroalimentación virtuosos en el ciclo de acumulación. Entonces, Estado y mercado ya no son contrapuestos o dicotómicos sino que deben tender a la complementariedad.

Es en este marco, las cooperativas y los emprendimientos asociativos fueron interpelados por las políticas estatales específicas hacia el sector, en términos de normalización de la situación social, política y económica. En el siguiente cuadro se enumeran las principales políticas sociales, la descripción de la población destinataria y los objetivos explícitos.

En el cuadro puede observarse que desde el Estado se desarrollan una cantidad importante de políticas sociales orientadas a estimular el desarrollo del cooperativismo y de los emprendimientos asociativos entre la población catalogada como *vulnerable social*.

En la sociedad capitalista contemporánea, la visión hegemónica de las políticas sociales las presenta como un tipo específico de acción estatal orientada a garantizar la subsistencia del sector menos favorecido de la sociedad. Desde un enfoque asistencial las políticas sociales son aquellas ayudas de última instancia que los gobiernos brindan a la población más empobrecida a partir de consideraciones ético-políticas (Kliksberg, 2004). Para la *perspectiva de derechos*, las políticas sociales representan una forma de materializar los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Se considera que la asistencia y protección social son obligaciones del Estado frente a la ciudadanía, exigibles en virtud del cumplimiento de las garantías constitucionales (Abramovich, 2006). No obstante las significativas diferencias entre ellas, comparten un supuesto: que la política social funciona a partir de una lógica especialmente diferenciada –guiada por la satisfacción de las necesidades– respecto de la lógica general del modo de producción capitalista –guiada por la acumulación de capital–. Pensar a la política social como respuesta desmercantilizada a ciertas necesidades de la población menos favorecida, presenta algunos inconvenientes. En primer

PLANES Y PROGRAMAS DEL ESTADO NACIONAL HACIA EL COOPERATIVISMO Y/O LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA Período 2003 – 2011			Área del Estado donde radica el programa
Nombre del programa	Población sobre la que interviene el programa	Objetivos explícitos del programa	
Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social "Manos a la Obra"	Personas, familias y grupos en situación de pobreza, desocupación y/o vulnerabilidad social que estén involucrados en experiencias productivas y/o comunitarias.	Lograr un desarrollo social económicamente sustentable que permita generar empleo y mejorar la calidad de vida de las familias. Promover la inclusión social a través de la participación en espacios comunitarios. Promover el sector de la economía social o solidaria. Fortalecer a las organizaciones públicas y privadas, así como impulsar espacios asociativos y redes para mejorar los procesos de desarrollo local.	Ministerio de Desarrollo Social, Municipios, ONGs.
Programa Nacional de Microcréditos "Padre Cajade"	Emprendedores individuales o asociados, que necesitan dinero para adquirir insumos, maquinaria o para hacer crecer sus emprendimientos productivos pero que, debido a su situación patrimonial, no reúnen las condiciones para acceder a créditos bancarios tradicionales.	Financiar y promover emprendimientos productivos, comerciales o de servicios que se desarrollan en el marco de la Economía Social, mediante la implementación de microcréditos que brindan préstamos a un interés muy bajo o sin interés.	Ministerio de Desarrollo Social, Comisión Nacional de Microcrédito, Organizaciones sociales.
Marca Colectiva	Productores o prestadores de servicios que se encuentren desarrollando un emprendimiento asociativo de la Economía Social.	Crear un signo distintivo común para identificar productos elaborados y/o servicios prestados por agrupamientos de emprendedores de la Economía Social. Representa los valores del trabajo asociativo, identidades locales, métodos productivos comunes y estándares compartidos para cada uno de los productos. Fortalecer la producción y la comercialización de los emprendimientos otorgándoles valor agregado y mayor visibilidad, además de garantizar su calidad. Promover el compromiso social, fomentando el comercio justo y el consumo responsable.	Ministerio de Desarrollo Social.

Plan Integral de empleo: "Mas y Mejor Trabajo".	Desocupados.	Generación de las calificaciones requeridas por regiones y ramas de actividad, fortaleciendo el entramado productivo a nivel local. Ejecución de acciones orientadas hacia la inclusión social y laboral de los trabajadores, afectados por el desempleo y la precarización laboral, mediante el desarrollo de sus capacidades y competencias para mejorar sus condiciones de empleabilidad. Promoción del Diálogo Social, como fundamento de la acción pública, a través de la integración de la Nación, las provincias, los municipios, las comunas y juntas de gobierno, junto a la participación de todos los actores.	Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Empresas.
Programa "Argentina Trabaja". (Engloba otros que se desarrollaron con cooperativas de trabajo desde el 2003).	Personas sin ingresos en el grupo familiar, ni prestaciones de pensiones, jubilaciones nacionales, ni planes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social o provinciales.	Constitución de cooperativas de trabajo que realizarán diversas obras de Infraestructura local y / o saneamiento.	Ministerio de Desarrollo Social, INAES, municipios, provincias, organizaciones sociales.
CIC: Centro Integrador Comunitario.	Personas sin ingresos en el grupo familiar, ni prestaciones de pensiones, jubilaciones nacionales, ni planes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social o provinciales.	Constitución de cooperativas de trabajo para la construcción de espacios públicos de integración comunitaria y obras de mejoramiento barrial.	
Cambio Rural	Pequeños y medianos empresarios agropecuarios).	Encontrar alternativas que permitan incrementar sus ingresos, elevar su nivel de vida. Generar nuevas fuentes de empleo, retomar el proceso de inversión y posicionarse mejor en los mercados.	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Proyecto Minifundio	Productores Minifundistas	- Propiciar acciones para mejorar los ingresos y la calidad de vida de los minifundistas. Problemas tales como la tenencia precaria de la tierra, la baja remuneración de la mano de obra familiar, la falta de tecnología y la dificultad de acceso al crédito.	

Programa Productores Familiares (PROFAM)	Productores familiares con deficiencias estructurales, carencia de organización, falta de acceso al crédito y bajos ingresos	Mejorar sus habilidades productivas, de gestión y comercialización, elevando su nivel de ingresos para acceder a mejores condiciones de vida. Los grupos de productores generan e implementan proyectos participativos en sus establecimientos, acompañados por instituciones que les brindan capacitación permanente y asistencia técnica, conjuntamente con el INTA.	INTA, Instituciones privadas.
Programa Social Agropecuario	Pequeños productores minifundistas	Superar las restricciones financieras, productivas y sociales y a lograr, a través de una estrategia organizativa grupal, una inserción social más plena y equitativa de los beneficiarios.	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
Proyecto de Desarrollo para Pequeños Productores Agropecuarios (Ampliación de las acciones implementadas por el Programa Social Agropecuario desde 1993)	Pobladores rurales e indígenas de nordeste argentino.	Mejorar las condiciones de vida de 40.000 pequeños productores agropecuarios pobres a través del aumento de sus ingresos en forma sostenible y el incremento de su organización y participación. Fortalecer la capacidad institucional a nivel nacional, provincial y local para la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas de desarrollo rural.	
Programa para el Desarrollo Rural de las Provincias del Nordeste Argentino (PRODERNEA)		Contribuir a superar las condiciones que genera la pobreza rural, a través del aumento sostenible del ingreso y de la capacidad de autogestión de pobladores rurales e indígenas de nordeste argentino. Implementado en las Provincias de Formosa, Corrientes, Chaco y Misiones.	
Pro – Huerta	Población en situación de pobreza estructural, con necesidades básicas insatisfechas.	Promover prestaciones básicas (insumos biológicos, asistencia técnica, capacitación) para que familias y grupos o entidades de la comunidad generen sus propios alimentos frescos de huertas y granjas, para su consumo o conservación y procesado doméstico, hecho que permite la posterior participación en ferias francas, redes de trueque y microemprendimientos.	INTA.

Fuente: Elaboración propia en base a la información publicada por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales: <http://www.politicassociales.gov.ar/> y Ministerio de Desarrollo Social de la Nación: <http://www.desarrollosocial.gov.ar/>.

lugar, reproducen la fragmentación (fetichizada) entre las esferas del Estado y del mercado, entre lo político y lo económico, cuya relación tendría un carácter de externalidad. En segundo lugar, personifica en el Estado al sujeto del proceso social, como aquel que cuenta con cierta capacidad para hacer, más allá de los sujetos sociales. Desde una visión crítica se sostiene que “el Estado y el mercado son ambas formas lógicas e históricamente diferenciadas de unas mismas relaciones sociales de producción, atravesadas ambas por el antagonismo entre capital y trabajo inherente a dichas relaciones.” (Bonnet, 2007:306). Compartiendo la idea de que las políticas sociales forman parte de la reproducción de las condiciones para la acumulación capitalista, existen distintas miradas acerca de su especificidad: Por un lado, están aquellos que las definen como la gestión estatal de la reproducción de la fuerza de trabajo en tanto mercancía (Offe, 1990); Por otro lado, son interpretadas como el producto de las correlaciones de fuerza entre capital y trabajo, enfatizando en la capacidad de presión de los sectores trabajadores (Korpi y Palme, 2003); Otros análisis, se focalizan en la capacidad de iniciativa de los sectores dominantes, a partir de las estrategias de construcción hegemónica materializadas en el Estado (Ezcurra, 1998). Por último, se pueden incluir las perspectivas foucaultianas que las estudian como uno de los mecanismos de control social destinados a evitar los peligros de una sociedad desigual y fragmentada (Murillo, 2006).

Las políticas sociales post-2001 en Argentina asumieron el objetivo explícito de la *inclusión social* y la reconfiguración de los lazos sociales –aparentemente perdidos por los cambios en las modalidades de empleo y los altos niveles de desempleo–. Ello implicó un crecimiento cuantitativo de los beneficiarios de este tipo de asistencia (alcanzó gran masividad, pero se evitó la universalización que implica el reconocimiento de derechos) y la creación de mecanismos de contraprestación en actividades comunitarias.

Especialmente a partir del año 2003 las políticas sociales nacionales expresan un giro productivista, incentivando la generación de autoempleo a través de la llamada *economía social y solidaria* y el cooperativismo. Lo que supone la inclusión social pero sin salir de la precariedad.

Debatir en el terreno de las políticas sociales no es una situación cómoda, ya que lo que está en juego es la posibilidad de subsistencia de mujeres y hombres. Lo cual nos acerca los horizontes temporales

al límite de la inmediatez y todo debate de fondo parece ser una pura abstracción. No obstante, no debemos caer en la trampa: reconocer la urgencia de los problemas sociales y su necesario de tratamiento inmediato, no implica resignar la posibilidad de encarar una crítica a aquellas prácticas funcionales a sus causas estructurales.

Bajo el objetivo legitimado de reconstruir la cultura del trabajo –observamos que– este tipo de programas contribuyen a la fragmentación de los sectores populares, a través de las cuales los *pobres buenos* y *exitosos* se contraponen a los *pobres peligrosos o perezosos* y criminalizan aquellas acciones que se inscriban en una lucha social de mayor conflictividad.

Oportunidades y estrategias en la construcción de poder popular

En las organizaciones sociales con las que trabajamos, esta caracterización se hizo muy visible. La mediación del trabajo (en su sentido de esfuerzo, de dignidad) hace que este tipo de subsidios sea asumido como algo diferente al clientelismo político que tienen una connotación negativa:

La falta de trabajo genuino, contribuye al sometimiento del poder político estatal. El asistencialismo genera algo que también es cultural: el conformismo. El gobierno ofrece algo a cambio del voto y esto produce un círculo de conformismo. Entonces, no se puede pensar en otra cosa, en una transformación radical.

No somos afines a este gobierno, pero tenemos coincidencias con algunos de los funcionarios del Ministerio, no todos, en cuanto a la recuperación de la cultura del trabajo, de querer incorporar más gente a trabajar y de poder hacer de este proyecto un proyecto sustentable.

En distintas oportunidades del diálogo se manifiesta la principal tensión que las prácticas autogestionarias enfrentan en su dinámica cotidiana:

- Por un lado, significan, para muchas iniciativas populares, la posibilidad de contar con recursos para garantizar el funcionamiento de los emprendimientos, y con ello, la subsistencia de sus integrantes. Así como también, sostener materialmente los procesos organizativos

que se construyen en la perspectiva del poder popular. Para algunos, también significa asumir la lucha por la redistribución estatal de la riqueza social. La inquietud está presente en los distintos grupos: “¿Cómo hacemos para que no se nos caiga lo que construimos pero tampoco convertimos contra lo que luchamos?”. También se expresó: “Pensamos que podemos utilizar las herramientas que el gobierno ofrece con su sistema para poder generar trabajo. Porque si no podemos sostenernos, difícilmente vamos a poder pensar en contruir otra alternativa política.

- Por el otro lado, se expresa la preocupación por el intento de subordinar las prácticas sociales dentro de los carriles del orden social capitalista. Con los objetivos de: a) desalentar la lucha callejera, b) introducir parámetros de organización y desempeño en los emprendimientos asociativos, y de c) reinsertar a la población a los flujos de producción y consumo dominantes, en condiciones de precariedad extrema. Al respecto un compañero afirmó: “En este tiempo, desde el Estado, desde el gobierno, nos han institucionalizado. Esto de armar cooperativas para acceder a determinadas cosas, sin saber qué significa realmente armar una cooperativa, sus valores...”. En otra oportunidad, se expresó que: “La plata que vino del Estado destruyó las relaciones humanas dentro de muchos grupos.

La acción estatal hacia la promoción de la economía social, contribuyó a una asimilación entre la *autogestión* y el *emprendedorismo*, significantes que históricamente correspondieron a prácticas y perspectivas políticas no solo diferentes sino también, antagónicas. (Rodríguez y Ciolli, 2011). La tradición de la autogestión se reconoce como parte de la lucha de la clase obrera, en vistas de la construcción de prácticas socio-productivas anticapitalistas y con la perspectiva de superación del orden social vigente. Desde esta perspectiva, las experiencias autogestionarias aportan a la construcción de poder popular. En ese sentido se opinó: “¿Para que lo hacemos? Para que el compañero tenga un trabajo, y un trabajo que tenga un retorno los viernes. Pero no solo eso, es también para que el día de mañana se pueda bancar un corte de ruta, ir a la ruta. Porque en realidad esta cooperativa tiene que ser luchar por otra sociedad.

Estas tipo de políticas sociales socioproductivas funcionan como un poderoso articulador entre las necesidad de reconstrucción de la hegemonía capitalista (a partir de los elementos *normalizadores* men-

cionados) y la estrategia de acumulación de poder político. Esta última no solo se sustenta en el plano discursivo sino que tiene una dimensión material en la generación de su base política a través de organizaciones sociales a nivel territorial.

En este sentido, en términos de construcción de poder político, el kirchnerismo desarrolló un importante aprendizaje al reconocer como interlocutores a las organizaciones sociales que no se alineaban a su proyecto político. El Estado reconoce que los movimientos sociales tenían un saldo organizativo acumulado que aseguraba (dentro de ciertos márgenes) la viabilidad y sustentabilidad de los proyectos asociativos financiados por los programas sociales. Hay un reconocimiento del proceso de construcción de poder popular, expresado en su legitimidad como actor relevante del proceso. La reformulación, entonces, apuntó a capitalizar su conocimiento del territorio, los liderazgos comunitarios y sus lazos sociales para la gestión de la política estatal. Las cooperativas reconocen esta dinámica: “[Los técnicos del Ministerio de Desarrollo Social] estuvieron dos años para hacer una investigación del territorio y para ver cómo podían armar una comercializadora, dieron vueltas y vueltas. (...) Aprovecharon ese cúmulo de organizaciones para armar el proyecto de microcrédito.”

De esta manera, fueron ampliando los espacios de participación de los movimientos y las organizaciones sociales en un proceso que fue desde instancias de decisión acerca de la asignación de recursos hasta constituirse (en algunos casos) en una extensión operativa del gobierno en el territorio. Esta situación dio origen a diversas formas de interacción/demanda/conflictividad y de grados diferentes de autonomía/subordinación, que dependen en gran medida de las perspectivas políticas de las organizaciones. A esto se refiere Zibechi (2010) cuando habla de la segunda generación de políticas sociales del siglo XXI en América Latina.

A partir de ello, se avanzó en la institucionalización de las redes de organizaciones sociales. Ello llega a su máxima expresión con la conformación de órganos locales de gestión de los fondos (como los previstos por las políticas de microcréditos), donde el Estado se desliga de la tarea

de asignar dinero y traslada esa disputa al territorio. Allí se generan disputas entre las organizaciones por el manejo de los fondos, la captación de recursos materiales y de cargos rentados, generando conflictos entre los distintos actores a nivel local. Ante ese conflicto, el Estado vuelve a posicionarse como un aparente mediador. No obstante, conserva sus líneas de subsidios más fuertes a las organizaciones que construyen políticamente su base social. Algunos relatos de la experiencia lo expresan: “Nosotros integrábamos el Comité [Comité de Microcrédito] junto con otras organizaciones de la zona, pero nos quisieron echar. Entre un grupito hicieron un acta donde realmente nos castigaron. Querían que solamente fuéramos a pagar las boletas, pero no podíamos tener ni voz ni voto en la asamblea, sólo escuchar, no podíamos ejercer ningún cargo de nada de nada.” Más tarde continuó con su relato: “Ahí [en el Comité de Microcrédito] cada organización empezó a presentar su ideología y tuvimos muchas discusiones, porque nosotros apuntamos a no continuar con la política vieja, sino que apuntamos a construir otra forma de hacer política. Por eso, desde el comienzo dejamos muy claro que no vamos a permitir el trabajo de punteros políticos dentro de nuestras organizaciones.”

De este modo, las políticas sociales demostraron que la fuerza de la iniciativa popular ya no pudo ser desconocida, ninguneada o reprimida, sino que el poder necesitó de herramientas y acciones más complejas de ordenamiento social, resignificando buena parte de las demandas y reivindicaciones. Sobre esto se dijo: “Creo que de alguna manera nos hemos convertido en un referente, no por el clientelismo, sino porque recuperamos una actividad productiva acá donde no había quedado nada de nada. Acá casi todos dependían del asistencialismo y ahora generamos fuentes de trabajo genuinas y producimos algo.” Esto significa cierto riesgo para los proyectos de transformación social anti-capitalistas, pero resulta importante no perder de vista que evidencian la potencialidad transformadora de las estrategias de construcción de poder popular. “Si incomodamos, vamos por el buen camino”...

En los casos en los que trabajamos, era particularmente claro, que esta política contribuyó a la disputa del gobierno nacional por el poder territorial frente a gobernadores e intendentes que le eran adversos. Para todos era evidente que es el Estado nacional el que financia los emprendimientos y se esmeran en sostener esta vinculación, más allá de las reacciones conflictivas con los políticos locales: “Parece raro

pero con el Ministerio [de Desarrollo Social] de Nación es más fácil relacionarnos que con el intendente de acá que no quiere saber nada con nosotros. Del Ministerio vinieron y conocieron la planta, tuvimos varias reuniones, etc. Pero los de acá ni se nos acercan, somos bichos raros.” “Para que nos atiendan los de la Provincia, tenemos que ir y llamar varias veces. En Nación es complicado, pero con la Provincia es 20 veces más complicado.”

Por otro lado, existe una recuperación del territorio, que fue una identidad construida desde la iniciativa popular desde fines de la década de los '90 a través del piquete.

Todo lo mencionado, evidencia un cambio fundamental en la forma de plantear las políticas sociales respecto de la visión predominante del neoliberalismo que tendían a la fragmentación de los sujetos sociales. Desde este punto de vista, es positiva la capacidad del Estado para materializar los aprendizajes y mejorar los mecanismos de asignación de recursos a los sectores sociales más desfavorecidos. La enorme cantidad de proyectos sociales y comunitarios concretados a partir del financiamiento estatal es un dato altamente valorable. Pero debemos advertir que se relaciona con las estrategias de construcción hegemónica y de acumulación política.

Ahora bien, la realidad es mucho más dinámica y compleja. Las cooperativas u organizaciones sociales con las que trabajamos no son sujetos pasivos de dichas estrategias.

Este contexto de expansión de la legitimidad y los recursos hacia los emprendimientos asociativos constituyen un marco habilitante para el despliegue de las iniciativas populares autónomas, para consolidar *praxis* sociales alternativas, para situar su lucha desde experiencias de construcción social cotidianas. En suma, para crecer organizativa y reflexivamente. Desde este lugar, las distintas experiencias asumen estrategias distintas para que los recursos públicos queden en función de sus propios objetivos sociales y políticos: “Una de las propuestas era enfrentarse con las propias armas, tomar los planes, tomar los proyectos, pero ir formando la ideología propia”. O, planteado de otro modo: “Si hablamos de los desafíos, me parece que tenemos que afianzarnos en nuestros principios. Hicimos un montón de cosas sin tener que dar votos a cambio o decir que estamos con el gobierno. Bueno esa es la idea de cómo tenemos que seguir.”

La mayor parte de las experiencias de autogestión con las que trabajamos han recibido o aún reciben fondos a través de dichas políticas socio-productivas, aunque ninguna de estas experiencias se origina a partir de tales políticas. Lejos de ello, su origen se encuentra en la lucha social y política, donde confluyen militantes de diversos espacios gremiales, partidarios y estudiantiles, con quienes están transitando por primera vez por una organización social:

Nosotros empezamos con nuestro sacrificio porque en ese momento las cosas eran complicadas, no estábamos tan organizados, estábamos más solos. Entonces teníamos que demostrar algo si queríamos recibir ayuda. Después vino el subsidio.

Cuando uno se suma a una cooperativa lo hace porque intenta insertarse a la sociedad (...). Pero para algunos, la cooperativa es una herramienta de cambio, pero depende, no pensamos todos lo mismo.” En los talleres se definió al Estado como responsable de sostener y promover un modelo productivo excluyente, extractivista y que beneficia a los sectores que concentran el poder económico, ya sean nacionales o transnacionales. Hubo acuerdo ante el señalamiento que “El Estado está promocionando este modelo productivo, el de los agronegocios”. Y, también han expresado: “Esto habla del Estado. Una parte dice el estado somos todos. Sí, que se yo si somos todos... En realidad está al servicio de un poder económico. A veces nos hacen creer que si ganamos las elecciones vamos a ganar todo, y hasta ahí nomás, tenés que tener otra cosa más allá de ganar las elecciones. Pero aparte por eso el Estado, representa a un poder económico, esto no significa que no haya que pelear. Pero tener claro en el fondo para quien está jugando el estado.

Cuando se abordaron las problemáticas sociales y económicas, establecieron la responsabilidad histórica y actual del Estado en la configuración y permanencia de las actividades lucrativas. En ese sentido son muy críticos y su participación en las políticas estatales no impide que desarrollen esta visión y visualicen su perspectiva de lucha en el horizonte de una organización económica diferente.

Dadas las experiencias de lucha y movilización callejera, también se relaciona al Estado con el aparato represivo: “La represión es un elemento de adoctrinamiento a cualquier rebeldía.”

No obstante, algunas organizaciones consideran que el acceso a recursos públicos para el fortalecimiento de los emprendimientos

es parte de la disputa por lo público. Por ello, desarrollan proyectos para obtener financiamiento.

Tenemos derecho a pedirlo [subsidios y beneficios impositivos], igual que hacíamos con los cortes de ruta. Pero si estás solo no tenés derecho, solo lo logramos cuando tenemos fuerza para exigir.

Los ejemplos concretos vinculados a su emprendimiento ayudan a plantear las tensiones:

Yo tengo un caso muy claro: A una empresa que se dedica a la explotación minera que invierte millones y millones de dólares y genera 200 puestos de trabajo, el Estado le saca impuestos, justamente porque dicen, 'bueno, van a invertir en la Puna, una zona muy pobre', entonces no pagan impuestos. Pero La Brava genera 12 puestos de trabajo y lo chiquito y lo único que te dan es un pequeño subsidio para comprar una maquinita y que puedas seguir, que puedas tener una producción mínima, que sigas como estas, te dan algo para que te entretengas y que no rompas las bolas....

Entre sus tareas cotidianas suele estar presente la búsqueda de financiamiento para concretar las ideas, los proyectos y por que no, los sueños que el trabajo cotidiano despierta. Visitan ministerios, secretarías y tejen todo una serie de contactos con funcionarios cruzados para obtener fuentes de subsidios. Al respecto comentan:

Todo esto nos permitió conocer otras realidades, aprender a esquivarle a la burocracia... lo que no podemos lograr con ellos [los funcionarios] es justamente que abandonen estas cuestiones burocráticas que a veces tienen, que inclusive son incoherentes.

Nos relacionamos con algunas partes del Estado Provincial la Secretaría de Producción, Secretaría de Desarrollo Social, Legislatura, con alguna gente de la legislatura, digamos ministros... ¿Para qué nos relacionamos? Para conseguir financiamiento y recursos a través de compras de ellos, de lo que necesitamos, digamos... subsidios. ¿Qué formas de articulación establecimos? Visitas periódicas, los llamamos por teléfono varias veces al mes para que nos atiendan. ¿Hemos logrado articular acciones con ellos? Algunas, ¿cuáles? Bueno, las compras y producción, eventos que nos han

invitados, algunos aportes en planta que han hecho. ¿Qué desafíos presenta? Afianzarnos en nuestros principios, que nunca claudicamos, digamos es como que hicimos un montón de cosas sin tener que a cambio dar votos ni dar cosas de ese estilo, o decir que estamos con el gobierno.

No obstante, los subsidios son asumidos como una etapa embrionaria de las experiencias, con la perspectiva de poder consolidarse para autosustentarse y dejar de depender del Estado: “Nosotros logramos tener un crédito una vez y logramos que el trabajo funcione con un buen control de los participantes de la organización. Pero debemos lograr que ya no tengamos que pedir más crédito sino auto sustentarnos. O sea no estar pidiendo constantemente crédito ni subsidio y no estar dependiendo del estado ni de... Si se produce nuestros propios alimentos, nuestros propios medios de sustento no necesariamente tenemos que estar dependiendo de los microcréditos, que eso soluciona en parte pero no te da una solución de fondo. Entonces por eso pusimos sustentarnos o auto sustentarnos.”

Los talleres permitieron visualizar casos concretos en los que el financiamiento estatal intervino en la desarticulación de proyectos e iniciativas propios que venían gestándose junto a otras organizaciones, para derivarlos hacia otro tipo de proyectos con el formato de la política pública y bajo el liderazgo de organizaciones más afines al gobierno.

No obstante, las organizaciones buscan reutilizar los recursos obtenidos a través de los programas estatales en función de los objetivos propios, ya sea la subsistencia de los participantes como el fortalecimiento de los emprendimientos.

En el ámbito rural, la generación de proyectos productivos es una forma de acercamiento entre las familias que desarrollan actividades aisladamente: “Nosotros pusimos que los proyectos productivos dan respuesta al consumo hogareño, pero no solucionan el problema de las tierras. Para eso se necesita organización, apoyo, lucha continua e igualdad de oportunidades.”

No obstante, está presente siempre la perspectiva de aceptar los préstamos y subsidios estatales como algo transitorio: “Desprenderse del gobierno y los planes sociales y trabajar en serio”. La pregunta que queda abierta es hacia dónde sería esa transición: ¿Hacia la consolidación económica del emprendimiento dentro del marco del mercado ca-

pitalista o hacia la construcción de una organización social y económica basada en la satisfacción de las necesidades humanas? Y, la pregunta que continúa sería ¿Cómo se refleja ese horizonte en la práctica cotidiana?

Entonces, retomando las tensiones planteadas, podemos sintetizarlas en dos frases que surgieron en los talleres: “¿Cómo hacer para que nuestras propias herramientas no se nos vuelvan en contra?” y “¿Cómo aprovechar el momento político para construir lo que realmente queremos?”

A su vez nos preguntamos ¿qué otros factores intervienen en la articulación entre actores sociales y político-gubernamentales que nos permitan interpretarla como una pérdida de autonomía o como el reconocimiento –aunque no sea inocente– de las capacidades organizativas y políticas de los sujetos sociales colectivos?

7. De alianzas y articulaciones

En talleres siguientes se centraron los debates en la caracterización de las articulaciones entre organizaciones sociales que se plantearon como una estrategia necesaria para contrarrestar las múltiples problemáticas que afectan, por un lado, a los emprendimientos asociativos y, por el otro, a la sociedad en su conjunto.

Los grupos de trabajo establecieron aquellas posibles alianzas y acciones necesarias para emprender las diversas acciones propuestas.

1. Se plantearon articulaciones en un plano económico-comercial:

- Nos relacionamos... sobre todo cuando uno quiere sacar un proyecto. Por ejemplo nosotros hoy queremos, con el tema del mejoramiento de la cooperativa... para que pueda ayudar.

- Nos relacionamos con la cooperativa Cauqueva por el tema del microcrédito y de una comercializadora que fracasó (...) y con la Embajada de Finlandia que nos va a financiar un proyecto

- Estamos trabajando con una gente del INTA para poner una alfalfa que anda bien en suelos arenosos.

- Con el gobierno local no tenemos ninguna relación (risas) con el gobierno más fuerte nunca nos podemos relacionar o nunca hay un

acuerdo, nunca se llama a ninguna opinión. Nosotros no podemos... por ahí estamos muy de afuera.

- Con el Estado Nacional por el financiamiento.

- Nos relacionamos por cuestiones laborales, de gestión, fortalecimiento institucional, de cooperación, de capacitación e información.

- El GAL Tumbaya, que es el grupo de acción local que forma distintas instituciones, comunidades, municipios, y otros más. Estamos reunidos para también tener proyectos en común, nos reunimos una vez al mes en distintos lugares, en Purmamarca, en Volcán o acá en Tumbaya. Ese proyecto salió para hacer la entrega de gas.

- El GAL es un grupo de acción local, es una réplica de lo que en España, entonces los españoles hicieron intervención comunitaria desde España, trasladando su experiencia acá. Son grupos en donde participan sectores de la economía social, participan empresarios, participa la iglesia, la iglesia cristiana y participa el municipio.

- Estamos pensando en cómo asociamos a otras organizaciones para poder tener puntos de venta en los diferentes lugares de la provincia, por ejemplo, para tener los productos que cada sector de la economía social genera y entre todos darnos una mano para venderlos en diferentes lugares.

- Nos relacionamos por cuestiones laborales, de gestión, de fortalecimiento institucional, de cooperación, de capacitación e información.

2. Se expresaron articulaciones de carácter socio-político:

- Nos estamos reuniendo una vez por semana con un grupo de jóvenes del pueblo, estamos pensando algunos proyectos juntos, como crear una biblioteca y distribuir una copa de leche...

- Con otras organizaciones populares tenemos relaciones de tipo sociocultural.

- Desde el 2004 participamos de ANTA-CTA «Agrupación Nacional de Trabajadores Autogestionados» allí abordamos las problemáticas que tenemos los trabajadores autogestionados como tener una obra social, el pago del monotributo y la necesidad de una ley para cooperativas de trabajo.

- Participamos de talleres y reuniones para conocer otras organizaciones que tienen las mismas problemáticas en distintos lugares del país, que no es sólo lo que pasa acá en Jujuy sino que las mismas problemáticas atraviesan todo el país.

- Y a partir de ahí llevar adelante acciones para por un lado concientizar, y por otro plantear a la Municipalidad, permanecer en la chacra, una serie de acciones que tienen que ver con momentos de movilización. Dentro de la organización hay momentos de organización de emprendimientos productivos, organización de la cuestión de la subsistencia, organización que requiere en determinado momento reclamar cuestiones puntuales en términos de conjunto, unidos, organizados, etc. Esa es una síntesis de lo que se dijo acá.

- También hemos participado en la aprobación de la Nueva Ley de Medios. Tuvimos un debate en julio en la Facultad, donde participó la cooperativa ahí en ese ámbito. Después también cuando se participó en la recolección de firmas para poder sacarla.

De fragmentaciones

El debate colectivo derivó en el análisis de las dificultades que obstaculizan la articulación y unidad de las organizaciones sociales en pos de sus demandas económicas, sociales y políticas. Dificultades que van desde cuestiones de personalismos, relaciones de poder, dinámicas organizacionales, etc. hasta lecturas socio-políticas distintas que entorpecen la posibilidad de confluir en el armado de una estrategia política común.

Como se expresó en los talleres:

- De acá a poco tiempo nos van a dejar sin agua, de acá a poco tiempo nos van a dejar –que se yo– sin un aire puro, de acá a poco tiempo nos van a dejar sin alimentación... están haciendo pelota el planeta, ese es el futuro que nos esperará a nosotros. ¿Y qué hacemos? más allá que formemos cooperativas, formemos asociaciones, formemos organizaciones sociales, pero todos tenemos que apuntar a Goliat, que es el monstruo de la concentración de poder.

- Nosotros al no tener conciencia común, la disputa que estamos dando no es la que pueda llegar a ser un contrapeso y pueda cambiar el sistema, queda solamente en lo reivindicativo, y no está pensada la lucha por el poder real.

- Yo creo que la derrota cultural nos llevó a quedarnos en una lucha por la sobrevivencia.

- La derrota ideológica del campo popular es lo que más fuerte pesa hoy. No tenemos esa perspectiva de cambio, ni de transformación, de sentirnos protagonistas nosotros mismos.

- (...) A veces no somos capaces de reconocernos entre nosotros mismos y ver las posibilidades que tenemos como pueblo, como comunidad. Si mucha gente se da cuenta que hay uno solo que está viviendo por sobre todos nosotros cambia la historieta digamos ¿no? ...Si nosotros nos damos cuenta de nuestro poder colectivo, que tenemos más poder que unos pocos....

Se manifestó, entonces, que la multiplicidad de organizaciones sociales con sus demandas específicas no encuentra canales de confluencia en una estrategia local, regional o nacional de construcción de poder popular. Se aleja, de esta forma, el horizonte de transformación radical del orden social vigente, que las organizaciones comparten.

La pregunta que sobrevoló los talleres fue: ¿qué hacemos entonces? Colectivamente se identificaron los problemas y la necesidad de articular con Otros, hasta se propusieron algunas acciones, pero ante las dificultades observadas ¿cómo avanzamos en la práctica en un proceso de articulación?

La complejidad social que reviste este desafío obviamente sobrepasa los límites del trabajo de reflexión en taller, sin embargo la dinámica habilitó la relación dialéctica –que mencionamos al principio– entre la capacidad de los sujetos de autorganizarse por sus reivindicaciones y su capacidad de reflexionar sobre sus propias acciones y de extraer los aprendizajes necesarios que les permitan avanzar.

8. Reflexiones finales

En nuestra investigación participativa trabajamos con organizaciones sociales que autogestionan emprendimientos productivos destinados a la satisfacción de sus necesidades. Abordamos diferentes dimensiones de los procesos de autogestión, como por ejemplo: las relaciones de organización interna, los vínculos con otras organizaciones y con el Estado, etc. siempre en tensión con la apuesta política de una construcción contrahegémica, cuestionadora radical de la visión del mundo,

los modos de vivir y de pensar hoy imperantes en nuestra sociedades; que asumen estas organizaciones sociales y políticas.

Partir de las problemáticas cotidianas y articular con las perspectivas de transformación permitió hacer explícitos los intensos desafíos que asumen las organizaciones populares, así como los pequeños y grandes logros conseguidos hasta el presente en la perspectiva de construcción de poder popular.

No existe una naturaleza o esencia de clase o de sectores de la sociedad que pueda otorgar un determinado perfil emancipador a las organizaciones y movimientos sociales que autogestionan sus actividades productivas; por el contrario este perfil transformador debe buscarse en cómo se insertan en los conflictos sociales. Es decir, la intervención con un carácter de transformación progresista, con métodos democráticos de gestión social y con respeto por la autonomía en la integración con otros movimientos y/o frente a los intereses de los gobiernos o poderes (incluso los progresistas) (Amin, 2007: 43). Por lo tanto, en los talleres avanzamos conjuntamente en pensar la sociedad en la que vivimos, las relaciones que se establecen entre las diferentes organizaciones y, a su vez, con los gobiernos locales y nacionales y, fundamentalmente, las relaciones que se establecen al interior de las propias organizaciones –lo cual propició la profundización de la (auto) reflexión conceptual, política, ideológica sobre sus propias prácticas–. O sea, las organizaciones sociales se ejercitaron en una crítica radical, donde aparecieron tensiones, contradicciones, pero también ideas o caminos superadores.

Todas las organizaciones sociales que participaron de la investigación-acción surgieron con la aspiración política de aportar a la lucha social por una transformación profunda de la sociedad en un contexto de auge del modelo neoliberal. La modalidad de lucha encontrada incluyó los cortes de rutas y calles, las tomas y ocupaciones de empresas que amenazaban con cerrar sus puertas, la ocupación de tierras y la puesta en marcha de variados proyectos productivos asociativos.

En todos los casos se expresó que cada una de las acciones desarrolladas están atravesadas por la aspiración conciente de construir y consolidar relaciones sociales profundamente democráticas, solidarias, participativas, responsables y respetuosas de las diferencias, basadas en la ayuda mutua, en la igualdad de derechos, etc. Propósito que no ha resultado fácil de plasmar por las tensiones que impone la cultura domi-

nante –individualista, jerárquica y egoísta– y el modelo de acumulación de capital –basado en la explotación del trabajo humano, las relaciones humanas y los bienes de la naturaleza–.

Por un lado, la autogestión solidaria y democrática de los emprendimientos productivos se encuentra tensionada por las exigencias del mercado capitalista: la competencia, los costos, los precios, los ritmos y volúmenes de producción. Pese a los novedosos avances que estas experiencias muestran en torno a la toma de decisiones participativa, a la baja división del trabajo o la no separación entre el trabajo intelectual y manual estas exigencias operan y atenta contra el sentido solidario de las mismas. No obstante, en los talleres se explicitó que las prácticas de autogestión, acompañadas de un esfuerzo conciente de sus miembros, aportan a la construcción de una subjetividad más autónoma y democrática en el sentido que visibilizan que se puede decidir y construir el propio futuro.

Al mismo tiempo, la organización colectiva de los emprendimientos les ha dado mejores condiciones para enfrentarse al orden vigente. Los emprendimientos autogestionados garantizan una relativa autonomía económica a los trabajadores, que de lo contrario posiblemente estarían desocupados. Cuando el debate en los diferentes talleres terminaba poniendo en duda la utilidad última de estas experiencias, por la cantidad de dificultades que tienen (económicas, políticas, e incluso personales entre los miembros), en defensa de las mismas se valoraba la posibilidad de contrarrestar el desempleo y las mejores condiciones para enfrentarse a problemáticas estructurales, como por ejemplo la lucha por la tierra o la vivienda.

Luchas más amplias que, a su vez, necesitan de la articulación con otras organizaciones sociales hermanas, pero que al igual que los procesos de autogestión se obstaculizan porque muchas veces –más allá de las expresiones de deseo– se construye sobre dinámicas poco o nada democráticas y participativas y hasta por mezquinas disputas personales de poder más que por la existencia de verdaderos proyectos socio-políticos antagónicos.

Por otro lado, la necesidad de recursos económicos y de determinados beneficios que les faciliten el desarrollo de los emprendimientos productivos deviene en entrecruzar una relación compleja con el Estado. Si bien, las organizaciones se esfuerzan por resignificar los recur-

sos obtenidos –a través de los programas oficiales– en función de sus propios objetivos económicos y políticos, la tensión de esta relación con el poder político los atraviesa.

La reflexión acerca de las diversas dificultades que atraviesan estos procesos de organización autónoma derivó en la necesidad palpable de repensar una fórmula política, sustentada en una praxis democrática y participativa, que contenga una estrategia alternativa de construcción social. En el sentido planteado por Mészáros de “instituir un orden socioeconómico y cultural no antagónico, racional y humanamente dirigido, plenamente consciente del significado fundamental de “economía”, como economización verdaderamente seria de los recursos, en interés de la satisfacción humana sostenible, dentro del marco de una planificación global dirigida activamente por todos los individuos” (Mészáros, 2005: 16). Una sociedad donde las grandes mayorías tomen las decisiones de cuánto y qué se produce con el objetivo de satisfacer las necesidades del conjunto de la población.

Se trata de una discusión que está planteada en América Latina desde que las grandes movilizaciones populares de comienzos de siglo XXI pusieron en cuestión la hegemonía de que gozaba la ortodoxia neoliberal. Rebeliones populares en Ecuador 2000, en Argentina 2001, en Bolivia 2003 estallaron en repudio de la aplicación a ultranza de las políticas neoliberales y acumularon fuerzas suficientes para destituir gobiernos y modificar el clima ideológico neoliberal imperante.

Cuando a fines del 2004 el presidente venezolano Hugo Chávez Frías planteó que el proyecto Venezolano era “El Socialismo del Siglo XXI” quedó de manifiesto que estaba abierto el debate acerca de la posibilidad de la emancipación social en perspectiva socialista para América Latina y el Caribe.

No obstante, el proceso de cambio que se abre en la región podrá avanzar por un camino de transformación radical sólo si sus pueblos confluyen en una lucha común de perspectivas anticapitalista. En la actualidad, no todos los proyectos políticos que se perfilan apuntan a la construcción de formas emancipadoras de organización social y de integración latinoamericana; sino a reconstrucciones hegemónicas capitalistas lideradas por las burguesías locales, cuyos intereses de clases están profundamente enlazados con los intereses de los sectores más concentrados del capital internacional. El derrotero del siglo XX nos de-

mostró que constituye un profundo error histórico apoyar dichos proyectos políticos-ideológicos liderados por el gran capital con la ilusión de encontrarles algún contenido emancipador.

A su vez, “en este momento de crisis, de crisis del capitalismo, que nos va a golpear a todos, son ilusos aquellos que dicen que hay regiones que se van a salvar porque tenemos altas reservas o porque tenemos una situación macroeconómica estable. No, compañeros, la crisis está en el corazón del sistema mundial, en el imperialismo norteamericano y nos va a golpear a todos salvo que los pueblos desarrollemos una perspectiva cultural emancipadora y quizás en esta afinidad electiva entre cooperativismo y socialismo, entre emprendimientos de economía popular y socialismo podamos encontrar una respuesta civilizatoria acorde para la época” (Gambina).

Por lo tanto, el potencial transformador que encierran las prácticas económicas no lucrativas e incluso no mercantiles de la *Otra economía* sólo podrá desplegarse a partir de la lucha conciente de los sujetos sociales populares de América Latina por un proyecto político contrahegemónico que haga realizable la consigna de que *Otro mundo es posible*.

Bibliografía

Abramovich, Víctor (2006), “Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de desarrollo”, en *Revista de la CEPAL* N° 88, abril de 2006, (Buenos Aires: CEPAL).

Amin, Samir (2007), *Por la quinta internacional*, España, Viejo Topo.

Andrenacci, Luciano (2006), *Problemas de política social en la Argentina contemporánea*, Buenos Aires, Prometeo.

Antunes, Ricardo (2003), *¿Adiós al trabajo? Ensayos sobre las metamorfosis y el rol central del mundo del trabajo*, Buenos Aires, Herramienta.

Bachelard, Gastón (1976) *La formación del espíritu científico*, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, Cap.1.

Burkún, Mario y Spagnolo, Alberto (1985) *Nociones de Economía Política*, Buenos Aires, Zavalía.

Banco Mundial (1997), *World Development Report: The state in a changing world*. www.bancomundial.org, acceso febrero de 2009, Washington DC, BM.

Borón, Atilio (2003), *Estado, capitalismo y democracia en América Latina*, Buenos Aires, CLACSO.

Borón, Atilio; Gambina, Julio; Minsburg, Naum. (comp.) (2005), *Tiempos Violentos. Neoliberalismo, globalización y desigualdad en América Latina*, Buenos Aires, CLACSO.

Bourdieu, Pierre y Wacquant, Loic (1995), *Respuestas: Por una antropología reflexiva*, México, Grijalbo.

Ciolli, Karina, Ciolli, Vanesa, Cornes, Luciana y Dominguez Font, Paula (2005), “Subjetividad y Praxis Cooperativa. Una experiencia con movimientos sociales”, en <http://www.centrocultural.coop/uploads/subjetividadypraxiscooperativa.pdf>, acceso julio de 2007.

Ciolli, Vanesa Paola (2009a), “La autogestión ayer y hoy: una mirada desde el pensamiento de Antonio Gramsci”, en Ruggeri, Andrés (coord.), *La economía de los trabajadores: autogestión y distribución de la riqueza*, Buenos Aires, Ediciones de la Cooperativa Chilavert.

Ciolli, Vanesa Paola (2009b), “Estado y lucha de clases: una aproximación desde la política social en la Argentina neoliberal”, en *Revista Herramienta* N° 42, Octubre de 2009, Buenos Aires, Herramienta.

Ciolli, Vanesa (2010), “Acerca de las implicancias del término ‘autoexplotación’”, ponencia presentada en II Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos “Movimientos sociales, procesos políticos y conflicto social: escenarios en disputa”, Ciudad de Córdoba, Argentina, noviembre.

Ciolli, Vanesa y Roffinelli, Gabriela (2009), “Aproximaciones al cooperativismo de trabajo del siglo XXI. Límites y desafíos” en *Revista Periferias*, Año 13, N° 18, segundo semestre de 2009, Buenos Aires, FISyP.

Danani, Claudia (2004), “El alfiler en la silla: sentidos, proyectos y alternativas en el debate de las Políticas Sociales y de la Economía Social” en: Danani, C. (org.), *Política Social y Economía Social: debates fundamentales*, Buenos Aires, UNGS/Editorial Altamira/Fundación OSDE.

Ezcurra, Ana María (1998), *¿Qué es el neoliberalismo? Evolución y límites de un modelo excluyente*, Buenos Aires, IDEAS - Lugar Editorial.

Freire, Paulo (1969, 2009), *La educación como práctica para la libertad*, Buenos Aires, Siglo XXI.

Gambina, Julio (2008), “Los cambios políticos y las perspectivas de otra economía para los pueblos”, ponencia presentada al X Encuentro sobre Globalización y Problemas de Desarrollo, La Habana, del 3 a al 7 de marzo de 2008.

Gambina, Julio (2003), “Empresas recuperadas en Argentina” en *Revista del Instituto de la Cooperación*, Año 30, N° 146, Mayo 2003, Buenos Aires, IDELCOOP.

Gambina Julio (Comp.) (2002), *La globalización económico financiera. Su impacto en América Latina*, ediciones CLACSO, Buenos Aires.

Gambina, Julio y Roffinelli, Gabriela (2011), “La construcción de alternativas más allá del capital”, en Piñeiro Harnecker, Camila (comp.), *Cooperativas y socialismo. Una mirada desde Cuba*, La Habana, Editorial Caminos.

Gambina, Julio (2002) “Cooperativismo y poder popular” en *Revista del Instituto de la Cooperación*, año 29, N° 142, noviembre 2002, Buenos Aires, IDELCOOP.

Gambina, Julio; Rajland, Beatriz; Campione, Daniel. (comp.) (2005), *Pensamiento y acción por el socialismo. América Latina en el siglo XXI*, Buenos Aires, FISyP, RLS y CLACSO.

Gambina, Julio; Estay, Jaime (comp.) (2007), *¿Hacia dónde va el sistema mundial? Impactos y alternativas para América Latina y El Caribe*, Buenos Aires, FISyP, RLS, REDEM y CLACSO.

Gambina, Julio; Echaide, Javier, Roffinelli, Gabriela y Racket, Mario (2006), “Las resistencias Latinoamericanas del Siglo XXI: Empresas Recuperadas en Argentina”, en Ceceña, Ana Esther (coord.), *Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado*, Buenos Aires, CLACSO.

Gil de San Vicente, Iñaki (2011), “Cooperativismo socialista y emancipación humana. El legado de Lenin”, en Piñeiro Harnecker, Camila (comp.), *Cooperativas y socialismo. Una mirada desde Cuba*, La Habana,

Editorial Caminos y Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación.

Gramsci, Antonio (2000), *El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce*, Buenos Aires, Nueva Visión.

Gramsci, Antonio (2001), *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno* Buenos Aires, Nueva Visión.

Gramsci, Antonio (1992), *Antología*, México D. C., Siglo XXI.

Gramsci, Antonio (1990), *Escritos políticos. (1917-1933)*, México D. C., Siglo XXI.

Hinkelammert, Franz y Mora, Henry (2009), *Economía, Sociedad y Vida Humana. Preludio a una segunda crítica de la economía política*, Buenos Aires, UNGS/ALTAMIRA.

Hintze, Susana (2007), *Políticas sociales argentinas en el cambio de siglo. Conjeturas sobre lo posible*, Buenos Aires, Espacio.

Korpi, Walter y Palmi, Joakin (2003), "New Politics and Class Politics in the Context of Austerity and Globalization. Welfare State Regress in 18 Countries (1975-95)", en *The American Political Science Review*, American Political Science Association, Vol. 97, N° 3, EEUU.

Leville, Jean-Louis (2004), *Economía social y solidaria: una visión europea*, Buenos Aires, Fundación OSDE - Universidad Nacional de General Sarmiento - Editorial Altamira.

Löwy, Michael (1997), *Redención y Utopía. El judaísmo libertario en Europa Central*, Buenos Aires, Ediciones El Cielo por Asalto.

Lowy, Michael (2007), "Ecosocialismo, democracia y planificación" en *Revista Viento Sur*, México D.F., en <<http://www.vientosur.info/>>, acceso 24 de junio de 2007.

Lowy, Michael (2011), "Por una ética Ecosocialista", en <<http://autonomiayemancipacion.org/Debate/B3/Lowy,%20Por%20una%20%C3%A9tica%20ecosocialista.pdf>>, acceso 3 de Junio de 2011.

Marx, Karl y Engels, Friedrich (1985), *La ideología alemana*, Trad. de Wenceslao Roces, Buenos Aires, Ediciones Pueblos Unidos.

Marx, Karl (2002), *El Capital: El proceso de producción del capital*, Tomo I, Libro Primero, Buenos Aires, Siglo XXI.

Marx, Karl (1959), “Sobre la cuestión judía”, en Marx, Karl y Engels Federic, *La Sagrada Familia y otros escritos filosóficos de la primera época*, México D. F., Grijalbo).

Mészáros, István 2005 *Socialismo o Barbarie. La alternativa al orden social del capital*. (México D.F., Paradigmas y Utopías).

Neffa, Julio César (1999), “Los paradigmas productivos Tayloristas y Fordistas y su crisis”, en *Realidad Económica* N° 160/161, Buenos Aires, IADE.

Núñez Soto, Orlando (2009), “Un nuevo modelo para el agro latinoamericano”, en *América Latina en Movimiento*, Quito, en <<http://alainet.org/active/29587%E2%8C%A9=es>>, acceso 10 de junio de 2011.

Murillo, Susana (Coord.) (2006), *Banco Mundial. Estado, mercado y sujetos en las nuevas estrategias frente a la cuestión social*, Buenos Aires, Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación.

Oszlak, Oscar y O’Donnel, Guillermo (1982), “Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación”, en *Documento G.E.*, Centro de Estudios de Estado y Sociedad - CLACSO N° 4, Buenos Aires, CLACSO.

Rigal, Luis y Sirvent, María Teresa (2007), “Metodología de la investigación social y educativa: diferentes caminos de producción de conocimiento”, Cuadernos de Cátedra, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, UBA.

Rodríguez, Lidia Mercedes (2003), “Producción del conocimiento en Freire” en Gadotti, M, Gomez, M. y Freire, L., *Lecciones de Paulo Freire, cruzando fronteras: experiencias que se completan*, en <<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/freire/rodriguez.pdf>>.

Rodríguez, María Carla (2009), *Autogestión, políticas de hábitat y transformación social*, Buenos Aires, Espacio.

Rodríguez, María Carla y Ciolli, Vanesa (2011), “Tensiones entre el emprendedorismo y la autogestión. El papel de las políticas públicas en este recorrido”, en *Revista ORG&DEMO*. Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista Vol.12, N° 1, San Pablo.

Roffinelli, Gabriela y Racket, Mario (coord) (2002), *Movimiento de Trabajadores Desocupados de La Matanza; Movimiento de Ocupantes e In-*

quilinos. *La cooperación y los movimientos sociales: consideraciones sobre el papel del cooperativismo en dos movimientos sociales*, en Cuaderno de Trabajo, Centro Cultural de la Cooperación, N° 4, Octubre 2002, Buenos Aires, Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación.

Roffinelli, Gabrielam (2004), “Socialismo y cooperativismo: una mutua elección” en: *Revista del Instituto de la Cooperación*, Año 31, N° 159, diciembre 2004, Buenos Aires, IDELCOOP.

Rozitchner, León (2002), *Freud y el problema del poder*, Buenos Aires, Losada.

Salminis, Javier Alejandro (2004), “Significados, alcances y perspectivas del sector de la economía social”, en Elgue, Mario C. (selección y compilación), 1er. Encuentro del Foro Federal de Investigadores y Docentes en Economía Social, Ed. de la Secretaria de Políticas Sociales (UCAFI) del Ministerio de Desarrollo Social, Buenos Aires.

Salvia, Agustín (2005), “Segregación y nueva marginalidad en tiempos de cambio social en la Argentina”, Edit. 7° Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, ASET, Buenos Aires.

Scribano, Adrián Oscar (2008), *El proceso de investigación social cualitativo*, Buenos Aires, Prometeo.

Sirvent, María Teresa (1999), *Cultura popular y participación social*, Buenos Aires, Miño y Dávila.

Toussaint, Éric (2008), “Debemos aprender las lecciones del siglo XX para aplicarlas al comienzo del siglo XXI”, en www.cadtm.org/spip.php?article3771.

Thwaites Rey, Mabel (2004), *La autonomía como búsqueda, el Estado como contradicción*, Buenos Aires, Prometeo.

Thwaites Rey, Mabel (comp.) (2008), *Estado y marxismo: Un siglo y medio de debates*, Buenos Aires, Prometeo.

Thwaites Rey, Mabel (2010), “Después de la globalización neoliberal: ¿Qué Estado para América Latina?”, en *Revista OSAL* Año XI, N° 27, abril de 2010, Buenos Aires, CLACSO.

Zibechi, Raúl (2010), “Políticas sociales, gobiernos progresistas y movimientos antisistémicos”, en *Revista Otra economía*, Vol. IV, N° 6, 1° semestre de 2010, Buenos Aires: RILESS.



Autores

Allevi, Carolina. Estudiante avanzada de Ciencias de la Comunicación (UBA), Investigadora de la FISYP.

Barrera, Marcelo. Licenciado y profesor en Sociología (Universidad de Buenos Aires), master en Sociología (École des Hautes Études en Sciences Sociales, EHESS) y master en Investigación en Ciencias Sociales (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, UBA).

Campione, Daniel. Abogado (UBA). Magister en Ciencia Política. Doctorando en Ciencias Sociales. Administrador gubernamental. Profesor en la Universidad de La Plata y la Universidad de Buenos Aires. Investigador. Secretario de la FISYP.

Cioli, Vanesa. Licenciada en Ciencia Política y doctoranda en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Docente e Investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) y en la FISYP. Desde el 2000 se dedica al apoyo técnico-pedagógico y al estudio del cooperativismo y la autogestión en movimientos sociales. En los últimos años, dicha tarea se articula con la investigación de políticas públicas y financiamiento de organismos internacionales .

Cortés, Martín. Licenciado en Ciencia Política y Magister en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Doctorando en Ciencias Sociales y Filosofía, en co-tutela entre la Universidad de Buenos Aires y la Université Paris 8. Docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Investigador del Instituto de Estudios de América Latina (UBA), del Centro Cultural Cooperación y de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISYP). Ha publicado diversos artículos sobre Teoría del Estado y Pensamiento Crítico Latinoamericano.

Gambina, Alejandro. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA), Experto Universitario en Entornos Virtuales de Aprendizaje (OEI y Virtual Educa Cono Sur). Funcionario de CLACSO en el Espacio de Formación a Distancia de la Red CLACSO de Estudios de Posgrado, Becario del Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”, Investigador de la FISYP.

Gambina, Julio C. Doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, UBA. Profesor Titular de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, UNR. Profesor de posgrados en Universidades Públicas de Argentina, Brasil, Colombia, Chile. Miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.

Gómez Cárdenas, Carlos Wladimir. Politólogo Colombiano. Especialista en Administración Pública y Magister en Políticas Públicas. Candidato a Doctor en Ciencia Política por la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de General San Martín. Becario de Investigación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y miembro del equipo de investigación de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas de la Argentina (FISYP).

Gómez, Rodolfo. Magister en Investigación en Ciencias Sociales (UBA), Docente e Investigador de las Carreras de Ciencias de la Comunicación y de Ciencia Política (FSOC-UBA) y de FECS-USAL. Asistente Académico del Programa de Grupos de Trabajo de CLACSO. Becario del Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”, Investigador de la FISYP.

Rajland, Beatriz. Doctora en Derecho Político de la Universidad Nacional de Buenos Aires, UBA. Profesora Consulta Titular de Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, UBA. Profesora de posgrados en Universidades de Mar del Plata, Santa Fe, Tucumán (Argentina), y de Brasil. Investigadora de la Universidad de Buenos Aires, UBA. Evaluadora de las Universidades Nacionales de todo el país. Vicepresidenta de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Miembro del Grupo de Trabajo sobre Estado de CLACSO.

Roffinelli, Gabriela. Lic. en Sociología, docente de la Facultad de Ciencias Sociales, investigadora del Instituto Gino Germani y de la FISyP. Doctoranda de la Facultad de Ciencias Sociales.

Ronconi, Micaela. Licenciada en Ciencia Política (UBA), Coordinadora académica y técnica del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina (CEFJA), Investigadora de la FISYP.

Pinazo, Germán. Licenciado en Ciencia Política (UBA), Especialista en Economía Política (FLACSO) y Doctorando en Ciencias Sociales (UBA). Investigador-Docente en el Área de Economía Política de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) e Investigador de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP).

Puello-Socarrás, José Francisco. Politólogo (Universidad Nacional de Colombia), Magister en Administración Pública y doctorando en Ciencia Política (Universidad Nacional de San Martín, Argentina). Becario CONICET. Miembro investigador del Grupo Interdisciplinario de Estudios Políticos y Sociales, Theseus (Universidad Nacional de Colombia); la Corporación para el Desarrollo de la Investigación Social y la Formación Política, ConCiencia Política (Colombia); la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP (Argentina). Docente carrera de Ciencia Política (Universidad Nacional de Colombia) y asesor asuntos políticos y económicos en Senado de la República de Colombia. Docente asistente en Universidad Nacional de San Martín (Argentina).

Pulleiro, Adrián. Magister en Comunicación y Cultura (UBA), Docente de la Carrera de Ciencias de la Comunicación (FCS-UBA), Becario del CONICET, Investigador de la FISYP.

Varesi, Gastón. Sociólogo, Universidad Nacional de La Plata. Becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) dirigido por Ana Castellani y co-dirigido por Aníbal Viguera en el IdIHCS (UNLP). Coordinador del equipo de investigación sobre Estructura de clase, modelo de acumulación y políticas económicas de la FISyP. Prof. del seminario sobre “Hegemonía, intelectuales y clases sociales”, Facultad de Trabajo Social-UNLP. Miembro del GT sobre Economía Mundial, Economías Nacionales y Crisis Capitalista de CLACSO.